Señores
JUZGADO (52) CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
E. S. D.

Referencia: Proceso de nulidad de actos societarios y abuso del derecho de voto iniciado por Ítaca Ltda. – en liquidación (en adelante "Ítaca") en contra de Servicios Técnicos Ómicron Ltda. – en liquidación (en adelante "STO") y otros.

Radicado: 110013103003-2021-00091-00.

Asunto: Incidente de nulidad procesal por indebida notificación. – Art. 133 del CGP.

FELIPE ANDRÉS DÍAZ ALARCÓN, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mí firma, obrando en mi condición de apoderado especial sustituto de: (i) **INGETEC INGENIERÍA Y DISEÑO S.A.S.**, sociedad comercial, domiciliada en Bogotá D.C., identificada con NIT 900.206.480-2, representada legalmente por el Sr. Andrés Marulanda Escobar, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C. identificado con C.C. No. 79.779.202, y (ii) **INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S.** sociedad comercial identificada con NIT 860.001.986-1, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por el Sr. Alberto María Marulanda Posada, identificado con la C.C. No. 19.063.997, conforme al poder especial a mi otorgado y el certificado de existencia y representación legal que aporto me dirijo respetuosamente a su Despacho, para elevar **SOLICITUD DE NULIDAD PROCESAL** en los términos del artículo 133 del Código General del Proceso, ante la indebida notificación por parte del apoderado de la sociedad actora, conforme las siguientes:

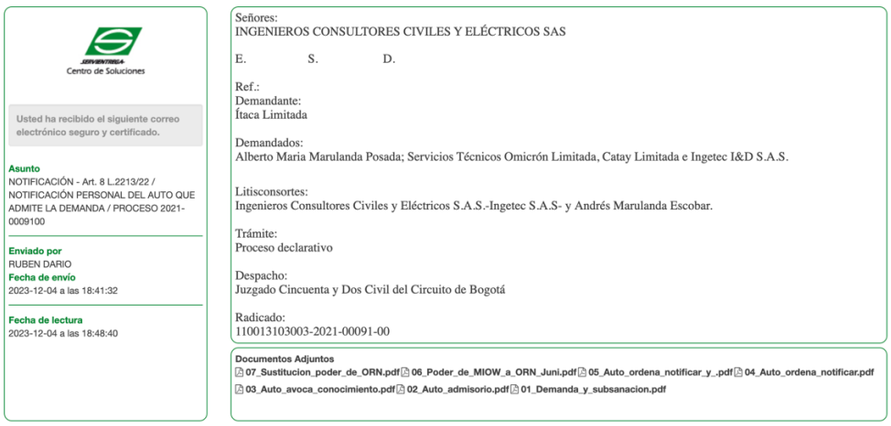
I. CONSIDERACIONES.

El inciso 1 del artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, dispone: "*Las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio. (…)*" (subrayado fuera de texto).

El inciso 2 del artículo 91 del Código General del Proceso dispone: "*El traslado se surtirá mediante la entrega, en medio físico o como mensaje de datos, de copia de la demanda y sus anexos al demandado, a su representante o apoderado, o al curador ad litem. (…)*".

El 4 de diciembre de 2023, el demandante remitió el siguiente mensaje de datos:

(i) Respecto a INGETEC:


Centro de Soluciones

Usted ha recibido el siguiente correo electrónico seguro y certificado.

Asunto
NOTIFICACIÓN - Art. 8 L.2213/22 / NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA / PROCESO 2021-0009100

Enviado por
RUBEN DARIO
Fecha de envío
2023-12-04 a las 18:41:32

Fecha de lectura
2023-12-04 a las 18:48:40

Señores:
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS SAS

E. S. D.

Ref.:
Demandante:
Ítaca Limitada

Demandados:
Alberto Maria Marulanda Posada; Servicios Técnicos Omicrón Limitada, Catay Limitada e Ingetec I&D S.A.S.

Litisconsortes:
Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A.S.-Ingetec S.A.S- y Andrés Marulanda Escobar.

Trámite:
Proceso declarativo

Despacho:
Juzgado Cincuenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá

Radicado:
110013103003-2021-00091-00

Documentos Adjuntos
07_Sustitucion_poder_de_ORN.pdf 06_Poder_de_MIOW_a_ORN_Juni.pdf 05_Auto_ordena_notificar_y_.pdf 04_Auto_ordena_notificar.pdf
03_Auto_avoca_conocimiento.pdf 02_Auto_admisorio.pdf 01_Demanda_y_subsanacion.pdf

SEALMAIL

(i) Respecto a INGETEC I&D:


Que es e-entrega | Terminos y Condiciones | Politica de privacidad

Centro de Soluciones

Usted ha recibido el siguiente correo electrónico seguro y certificado.

Asunto
NOTIFICACIÓN - Art. 8 L.2213/22 / NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA / PROCESO 2021-0009100

Enviado por
RUBEN DARIO
Fecha de envío
2023-12-04 a las 18:47:40

Fecha de lectura
2023-12-04 a las 18:48:49

Señores:
INGETEC INGENIERÍA & DISEÑO SAS -INGETEC I&D S.A.S.

E. S. D.

Ref.:
Demandante:
Ítaca Limitada

Demandados:
Alberto Maria Marulanda Posada; Servicios Técnicos Omicrón Limitada, Catay Limitada e Ingetec I&D S.A.S.

Litisconsortes:
Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A.S.-Ingetec S.A.S- y Andrés Marulanda Escobar.

Trámite:
Proceso declarativo

Despacho:
Juzgado Cincuenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá

Radicado:
110013103003-2021-00091-00

Documentos Adjuntos
07_Sustitucion_poder_de_ORN.pdf 06_Poder_de_MIOW_a_ORN_Juni.pdf 05_Auto_ordena_notificar_y_.pdf 04_Auto_ordena_notificar.pdf
03_Auto_avoca_conocimiento.pdf 02_Auto_admisorio.pdf 01_Demanda_y_subsanacion.pdf

SEALMAIL

Cómo se puede apreciar el traslado no se encuentra completo pues no se incluyó la totalidad de los anexos que compone el traslado. Ni la notificación hecha a INGETEC, ni la notificación hecha a INGETEC I&D incluyó la totalidad de los anexos que según el artículo 91 del CGP corresponden a un traslado.

Es preciso manifestar que en tanto en la demanda se solicitaron medidas cautelares el demandante no remitió copia al momento de la radicación conforme lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2213 de 2022 o del Decreto Ley 806 de 2020 (vigente al momento de la radicación de la demanda).

En este sentido, siguiendo la doctrina en la materia del profesor Henry Sanabria Santos que indica: "*si por alguna razón con anterioridad no se habían remitido los anexos, deberán enviarse, entonces, al momento de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago mediante mensaje de datos*"[1]

Si bien se remitieron algunas pruebas documentales, las mismas no están completas, situación que por demás invalida la notificación personal y el respectivo enteramiento de la providencia.

[1] Sanabria, Santos. Henry. Derecho Procesal Civil General. Universidad Externado de Colombia. Pág. 1007.

II. ANEXOS.

Solicito en los términos del artículo 133 del Código General del Proceso sean tenidos como pruebas del incidente de nulidad procesal, la constancia de notificación enviada por el demandante a INGETEC e INGETEC I&D, así:

1. Copia simple del correo electrónico del apoderado de la convocante citando la Ley 2213 de 2022 enviado a INGETEC con sus documentos adjuntos.

2. Copia simple del correo electrónico del apoderado de la convocante citando la Ley 2213 de 2022 enviado a INGETEC I&D con sus documentos adjuntos.

Disponibles en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1OR7uSiZqFN_s9lgPnDO2htF9q_7NNGJe?usp=sharing

III. SOLICITUD.

En este sentido, solicito al Despacho que se sirva:

DECLARAR la nulidad de todo lo actuado conforme lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso.

Del Despacho,



Felipe Andrés Díaz Alarcón.
C.C. No. 1.020.777.058 de Bogotá D.C.
T.P. No. 277.796 del C. S. de la J.

2021-0091-00. NULIDAD PROCESAL POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN INGETEC e INGETEC I&D.

Felipe Andrés Díaz <fadiaz@gclegal.co>

Vie 26/01/2024 13:34

Para:Juzgado 52 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j52cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC:Daniel García <dgarcia@gclegal.co>;Juan Ignacio Gamboa <jigamboa@gclegal.co>;Pedro Hernán Montaño <pmontano@gclegal.co>;David Esteban Arce Pinto <darce@gclegal.co>;Oscar Rosales Nieto <orosales@dlapipermb.com>

8 archivos adjuntos (2 MB)

2021-0091-00 Nulidad Procesal INGETEC e INGETEC I&D.pdf; -URG- PODER[92][100].eml; Sustitución INGETEC I&D[24].pdf; Poder Ingetec.pdf; PODER Ingetec.pdf; SUSTITUCION INGETEC SAS.pdf; SA2410489425EF2.pdf; SA2410489448298.pdf;

Señores
JUZGADO (52) CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
E. S. D.

Referencia: Proceso de nulidad de actos societarios y abuso del derecho de voto iniciado por Ítaca Ltda. – en liquidación (en adelante "Ítaca") en contra de Servicios Técnicos Ómicron Ltda. – en liquidación (en adelante "STO") y otros.

Radicado: 110013103003-2021-00091-00.

Asunto: Incidente de nulidad procesal por indebida notificación. – Art. 133 del CGP.

FELIPE ANDRÉS DÍAZ ALARCÓN, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mí firma, obrando en mi condición de apoderado especial sustituto de: (i) **INGETEC INGENIERÍA Y DISEÑO S.A.S.**, sociedad comercial, domiciliada en Bogotá D.C., identificada con NIT 900.206.480-2, representada legalmente por el Sr. Andrés Marulanda Escobar, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C. identificado con C.C. No. 79.779.202, y (ii) **INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S.** sociedad comercial identificada con NIT 860.001.986-1, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por el Sr. Alberto María Marulanda Posada, identificado con la C.C. No. 19.063.997, conforme al poder especial a mi otorgado y el certificado de existencia y representación legal que aporto me dirijo respetuosamente a su Despacho, para elevar **SOLICITUD DE NULIDAD PROCESAL** en los términos del artículo 133 del Código General del Proceso, ante la indebida notificación por parte del apoderado de la sociedad actora, conforme memorial adjunto.

Copiamos al apoderado reconocido de la contraparte.

Saludos,

Felipe Andrés Díaz Alarcón
Asociado Senior – Senior Associate
fadiaz@gclegal.co

+57 (601) 390 2217
Carrera 9 No. 80-45 Piso 4
Bogotá, D.C. - Colombia
www.gclegal.co

Este mensaje o sus anexos pueden contener información confidencial.
This message and any attachments may contain confidential information.

GAMBOA, GARCÍA & CARDONA
—ABOGADOS—

Ranked Firm:

IFLR1000 LEADERS LEAGUE The LEGAL 500

Centro de Soluciones

Usted ha recibido el siguiente correo electrónico seguro y certificado.

Asunto
NOTIFICACIÓN - Art. 8 L.2213/22 / NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA / PROCESO 2021-0009100

Enviado por
RUBEN DARIO

Fecha de envío
2023-12-04 a las 18:47:40

Fecha de lectura
2023-12-04 a las 18:48:49

Señores:
INGETEC INGENIERÍA & DISEÑO SAS -INGETEC I&D S.A.S.

E. S. D.

Ref.:
Demandante:
Ítaca Limitada

Demandados:
Alberto Maria Marulanda Posada; Servicios Técnicos Omicrón Limitada, Catay Limitada e Ingetec I&D S.A.S.

Litisconsortes:
Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A.S.-Ingetec S.A.S- y Andrés Marulanda Escobar.

Trámite:
Proceso declarativo

Despacho:
Juzgado Cincuenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá

Radicado:
110013103003-2021-00091-00

Documentos Adjuntos
07_Sustitucion_poder_de_ORN.pdf 06_Poder_de_MIOW_a_ORN_Juni.pdf 05_Auto_ordena_notificar_y_.pdf 04_Auto_ordena_notificar.pdf
03_Auto_avoca_conocimiento.pdf 02_Auto_admisorio.pdf 01_Demanda_y_subsanacion.pdf

SEALMAIL

Exp. 2021-091 | Dte. Ítaca Ltda. | Ddo. Alberto Marulanda Posada y otros | Subsanación de la demanda

Estudios <estudios@palacioslleras.com>

Jue 13/10/2022 3:21 PM

Para: Juzgado 03 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j03cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Juzgado 03 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j03cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: hpalacios@palacioslleras.com <hpalacios@palacioslleras.com>;Luis Falla <lfalla@palacioslleras.com>;Daniela Devia Romero <ddevia@palacioslleras.com>

Doctora
LILIANA CORREDOR MARTÍNEZ
JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
E. S. D.

Referencia:	Proceso verbal de acción de responsabilidad contra administrador
Radicado:	11001-31-03-003-**2021-00091**-00
Demandante:	Ítaca Limitada
Demandados:	Alberto María Marulanda Posada y otros.
Asunto:	Subsanación de la demanda y texto de la demanda subsanada

Cordial saludo,

Por instrucciones del doctor **HUGO PALACIOS MEJÍA,** apoderado de la sociedad **ÍTACA LIMITADA,** según poder que obra en el expediente de la referencia, me permito radicar memorial de subsanación de la demanda, texto de la demanda subsanada, y 3 anexos.

Agradezco acusar recibo del correo y los documentos adjuntos.

Atentamente,

Daniela Devia
Abogada
Estudios Palacios Lleras

Bogotá, D.C., 13 de octubre de 2022

Doctora
LILIANA CORREDOR MARTÍNEZ
JUEZ TERCERA CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Ciudad

Demandante:	**ÍTACA LIMITADA**
Demandados:	**ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA; SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LIMITADA, CATAY LIMITADA e INGETEC I&D S.A.S.**
Asunto:	Subsanación de la demanda
Radicado:	110013103003-**2021**-**00091**-00

Yo, **HUGO PALACIOS MEJÍA**, abogado, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado de la sociedad **ÍTACA LIMITADA** (en adelante "ÍTACA"), según poder que obra en el expediente y que he aceptado, presento una **EXPLICACIÓN SOBRE LA SUBSANACIÓN DE LA DEMANDA** y la **DEMANDA SUBSANADA** para atender las cuatro observaciones que el Despacho dispuso para la admisión de la demanda, mediante auto del 6 de octubre de 2022.

Para efectos de la subsanación se han hecho aclaraciones en este memorial, y cambios en el texto de la demanda inicial, en particular, en relación con la primera orden de APORTAR, en las páginas 2 a 5. En relación con la primera orden de ADECUAR, en la página 7. En relación con la segunda orden de ADECUAR, en las páginas 31 y 32. Y en relación con la ORDEN DE ACREDITAR, en las páginas 118 y 119.

Ruego, en consecuencia, al Despacho, proceder a dictar auto admisorio de la demanda.

En este escrito sobre la subsanación de la demanda he seguido el orden del auto de inadmisión para explicar los cambios que he hecho en la DEMANDA SUBSANADA adjunta, atendiendo el orden de los cuatro párrafos de instrucciones que el auto contiene, precedidos por los verbos rectores "APORTAR", "ADECUAR", "ADECUAR" y "ACREDITAR".

I.- OPORTUNIDAD

Según el artículo 90 del Código General del Proceso (CGP) y de acuerdo con el término de cinco (5) días otorgado para subsanar la demanda en el auto del 6 de octubre de 2022, notificado por estado del 7 de octubre de 2022, me encuentro dentro de la oportunidad procesal para presentar escrito de subsanación de la demanda.

II.- PUNTOS POR SUBSANAR

A continuación, desarrollo individualmente cada uno de los puntos a subsanar, solicitados por su despacho, con el propósito de atenderlos y corregirlos íntegramente:

1. "APORTAR" el poder conferido con ciertas formalidades

Solicitó el despacho que, para efectos de la subsanación, se aportara el poder dentro de ciertos cánones.

Para tal efecto, indicó:

> 1° APORTAR el poder conferido en la forma consagrada en el artículo 5° de la ley 2213 de 2022 o en el canon 74 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta la dirección inscrita del profesional del derecho en el Registro Nacional de Abogados, en razón a que el poder allegado no está inserto en el mensaje de datos, el apoderado judicial no aceptó de forma expresa la labor encomendado (sic) y tampoco se determinó e identificó claramente el asunto al ser este un poder especial, aunado a lo anterior, deberá dirigirse al Juzgado.

Así las cosas, doy cumplimiento a la orden de "APORTAR el poder conferido" en los precisos términos indicados por el Despacho en este numeral.

Para tal efecto, me permito acompañar al presente escrito el mismo poder que presenté como Anexo 2 de la demanda, el cual cumple a cabalidad tanto con el artículo 5º de la ley 2213 de 2022[1] como con el artículo 74 del CGP[2].

En efecto, y en los mismos términos del numeral 1º de la providencia del auto del 6 de octubre de 2022:

a. **Dirección inscrita en Registro Nacional de Abogados:** el poder que se me otorgó, y que aporté con la demanda, y que aporto de nuevo, *tiene en cuenta* la dirección inscrita en el Registro Nacional de Abogados y así la indica expresamente: hpalacios@palacioslleras.com.

   En los términos de la norma aplicable, el escrito de poder indica dicha dirección de correo electrónico y la misma coincide con la que aparece registrada en el Registro Nacional de Abogados.

b. **Inserción del poder en el mensaje de datos:** acompaño al presente el mensaje de datos del 24 de febrero de 2021, en formato Outlook y PDF, en el cual se advierte que el remitente (jgarcia@wiesnerasociados.com) adjuntó al mensaje de datos el escrito de poder en formato.pdf, con el nombre de archivo "Poder de MIOW-Itaca Ltd a HPM Feb.24-21.pdf".

   El envío del escrito de poder como archivo adjunto, cumple con la especificación que le exige el Despacho a Ítaca, de *insertar* el poder en el mensaje de datos.

---

11 [Ley 2213 de 2022] Artículo 5°- Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.
En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.
Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales.

2 [Código General del Proceso] ARTÍCULO 74.- Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados.
El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas.
Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 251.
Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado de una persona.
Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital.
Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio.

En los términos de la norma aplicable, el escrito de poder fue *remitido* a través de mensaje de datos, por memorial dirigido al juez de conocimiento.

Según indiqué arriba, en el poder consta mi correo electrónico como apoderado, que coincide con el inscrito en el Registro Nacional de Abogados, y es hpalacios@palacioslleras.com

Por ende, para efectos de la subsanación, me permito acompañar a este escrito el correo electrónico por medio del cual se me otorgó poder, en formato Outlook, con lo cual se acredita que el poder se encuentra "inserto" en el respectivo mensaje de datos, como archivo adjunto.

Me permito advertir que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 527 de 1999, en el propio Código General del Proceso y en el artículo 2.8.2.7.2 del Decreto 1080 de 2015, existe una diferencia entre el concepto de "mensaje de datos" y "mensaje de correo electrónico". El primero se refiere a *"Los documentos generados y gestionados a través de sistemas electrónicos"*[3], como bien lo puede ser un documento generado en formato "PDF".

Respecto al segundo concepto, un "mensaje de correo electrónico", se refiere, en el contexto de la Ley 2213, al canal de remisión, mediante el cual las personas inscritas en el registro mercantil deben remitir los poderes otorgados. Por lo que con el reenvío que hago del poder, queda subsanado lo relativo a que el poder relativo se encuentre inserto en el mensaje de datos.

c. **El apoderado judicial no aceptó de forma expresa la labor:** Es cierto que el poder no contiene la aceptación "expresa" del apoderado.

En todo caso, con la presentación del presente memorial de subsanación, aunado a la presentación de los memoriales del 13 de mayo de 2021, 16 de julio de 2021 y del 22 de octubre de 2021, ejerzo el poder que me fue conferido por la sociedad ÍTACA y en tal sentido **lo acepto.**

Vale señalar que, según el inciso final del artículo 74 del CGP "Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio".

En los términos de la norma aplicable, me acojo a la potestad que me confiere la Ley para aceptar el poder a mí conferido "por su ejercicio".

Desde que presenté la demanda, y ahora de nuevo, me he acogido a la facultad que me confiere el artículo 74 del CGP para aceptar el poder de ÍTACA "por su ejercicio".

Es así como, en el encabezamiento de la demanda anuncié que tenía poder de ÍTACA LIMITADA y que obraba como apoderada de ella para presentar la demanda. De modo que, en forma inequívoca, que consta en la demanda, acepté el poder por su ejercicio.

Después, en nombre de la misma sociedad, y en ejercicio de mi derecho de postulación, promoví actuaciones que ya fueron resueltas por el propio Despacho y por su superior jerárquico.

d. **No se determinó e identificó claramente el asunto del poder especial**: el poder que aporto cumple a cabalidad con el artículo 74 del CGP, en cuanto a la determinación e identificación, con claridad, de los "asuntos" a los que se refiere.

---

[3] Artículo 2.8.2.7.2. del Decreto 1080 de 2015.

El poder no permite iniciar o atender varios procesos de **ÍTACA**, sino que se otorgó para "una demanda", contra las personas que en él se mencionan.

El poder enumera siete asuntos perfectamente determinados y numerados, para obtener declaraciones relacionadas con ellos, y una condena que permita una indemnización a favor de ÍTACA.

El poder precisó los "asuntos" a los que él se refiere, con más detalles de los usuales en este tipo de poderes.

Por supuesto, las pretensiones de la demanda se redactaron teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas sustantivas y procesales, en la forma que, a juicio del apoderado, y según la discreción que autoriza el poder, puedan resolver mejor la controversia sobre tales "asuntos". Así lo autoriza el artículo 77 del CGP cuando dice: "El apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime conveniente para beneficio del poderdante".

e. **Deber de dirigir el poder especial al juzgado**: el **escrito** de poder que aporto, para la presentación de la demanda, está dirigido a JUECES CIVILES DE BOGOTÁ (REPARTO), y, de ese modo, cumple con la designación del despacho judicial de conocimiento.

El CGP tiene en cuenta que, al presentar la demanda, los trámites del reparto no permiten al actor conocer a cuál despacho le será asignado el conocimiento de la demanda y del proceso. Y de acuerdo con el principio de "economía procesal" que es parte del derecho fundamental al "debido proceso" (Art. 29 de la Constitución) y al que se refiere el numeral 1 del artículo 42 del CGP, entiendo que la orden de subsanación, que acato, no exige que ÍTACA me confiera ahora un nuevo poder que se dirija específicamente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá.

Es de anotar que, para efectos de la competencia funcional, la Ley no distingue entre despachos judiciales dentro de la misma jurisdicción y con el mismo nivel de jerarquía.

2. "ADECUAR" el acápite de las pretensiones

Solicitó el despacho que, para efectos de la subsanación, se adecuara el acápite de las pretensiones en relación con el **tipo de proceso** que se va a adelantar.

Para tal efecto, indicó:

> 2° ADECUAR el acápite de las pretensiones indicando el tipo de proceso que se pretende adelantar, porque si es un proceso de Impugnación de Actos de Asambleas, Juntas Directivas o de Socios, deberá aportar los acuerdo o actos sujetos a registro demandados con la constancia de la fecha de la inscripción adecuando el escrito de demanda y excluyendo las condenas y perjuicios pretendidos por no ser propias de la naturaleza del trámite especial contenido en el artículo 382 del C.G.P.

Para acatar la orden de subsanación, señalo, en primer término, que el tipo de proceso que pretendo adelantar corresponde a un **proceso verbal,** de acuerdo con el artículo 368 del CGP y las normas concordantes, tales como el literal "e" del numeral 5 del artículo 24 del CGP, y de su precedente en el artículo 43 de la Ley 1258 de 2008, que, por disposición del Parágrafo 1 del numeral 6 del mismo artículo 24, lleva la competencia hacia el numeral 4 del artículo 20 del CGP y los jueces civiles del circuito en primera instancia.

En segundo lugar, y para referirme a la hipótesis que planteó la orden de subsanación, aclaro que el proceso al que se refiere la demanda **no es el del 382 del Código GPP**, sino el del literal "e" del numeral 5, del artículo 24 del mismo Código que, por disposición del Parágrafo 1 del numeral 6 del mismo artículo corresponde al Juez del Circuito, en los términos del numeral 4 del artículo 20 del mismo Código. El literal "e", aludido, es la norma procesal que corresponde a la acción que se deriva del articulo 830 del Código de Comercio y que tiene como precedente histórico el artículo 43 de la Ley 1258.

Tanto en el artículo 20 del CGP, como en el artículo 24 del mismo, se advierte la diferencia entre los procesos que tienen por objeto la "impugnación de actos de asambleas…" y aquellos que surjan de "Todas las controversias que surjan con ocasión del contrato de sociedad" y los de "nulidad absoluta de la **determinación** adoptada en abuso del derecho por ilicitud del objeto y la de indemnización de perjuicios en los casos de abuso de mayoría como en los de minoría y paridad, cuando los accionistas no ejerzan su **derecho a voto** en interés de la compañía…."

Por lo demás, con la demanda se aportaron copias de las actas de las sociedades a las que se refiere la demanda, en especial: 1 acta de la Asamblea de la sociedad Marulesco SAS; 1 acta de Marulanda Escobar SAS; actas de Ingetec SAS; acta de Ingetec I&D SAS; 2 actas de Ingetec G&S SAS; 4 actas de Junta de Socios de STO; 2 actas de Juntas de Socios de CATAY SAS; grabación en video y transcripción de una Junta de Socios de STO.

No estando, pues, la demanda, en la hipótesis del artículo 382 del CGP a la que se refiere el auto, y por lo que sí es posible pedir en la demanda condenas y perjuicios, sólo es del caso aportar con este escrito el Acta No. 79 de la Junta de Socios de STO, celebrada el 2 de septiembre de 2020 de manera virtual.

3. "ADECUAR" los hechos de la demanda y las pretensiones

Solicitó el despacho que, para efectos de la subsanación, se adecuaran los hechos de la demanda, en consonancia con el acápite de pretensiones.

Para tal efecto, indicó:

> 3° ADECUAR los hechos de la demanda, en consonancia con el numeral anterior, haciendo un relato claro, preciso y sucinto que fundamente las pretensiones, las cuales deberán expresarse también con precisión y claridad, de conformidad con el artículo 82 del C.G.P.

Puesto que, como se advirtió atrás, el proceso que se busca debe ceñirse a las reglas del "**proceso verbal**", y no a las del proceso especial al que se refiere el artículo 382 del CGP (Impugnación de Actos de Asambleas, Juntas Directivas o de Socios) no es preciso adecuar los hechos de la demanda ni las pretensiones de la misma.

Los hechos de la demanda contienen una relato claro, preciso y sucinto adecuados a la naturaleza de las pretensiones, que acumulan -como se expresó en la demanda- peticiones de nulidad de **votos en reuniones societarias** y de ciertas **determinaciones en reuniones societarias** fundadas en las causales especiales de "abuso del derecho" que derivan hoy de los artículos 830 del Código de Comercio y del literal "e" del numeral 5 del artículo 24 del CGP, sobre el cual el Parágrafo 1 del numeral 6 del mismo artículo conduce a la competencia de los jueces de circuito en primera instancia, por el numeral 4 del artículo 20 del CGP. El precedente de esta acción es el artículo 43 de la Ley 1258. Así lo han entendido también la Superintendencia de Sociedades [4] y tribunales arbitrales.

[4] Superintendencia de Sociedades; Proceso 2012-801-052, Sentencia del 19 de diciembre de 2013,

De otra parte, el auto del 6 de octubre no contiene ninguna glosa precisa en cuanto a la redacción de los **hechos de la demanda,** y entiendo que solo han debido modificarse en la hipótesis de que el tipo de proceso que solicita la demanda fuera la del articulo 382 del CGP, lo cual, como expliqué, no es el caso.

De la misma manera, el auto del 6 de octubre no contiene ninguna glosa precisa a la redacción de las **pretensiones de la demanda**, y entiendo que solo han debido modificarse en la hipótesis de que el tipo de proceso que solicita la demanda fuera la del artículo 382 del CGP, lo cual, como expliqué, no es el caso.

4. "ACREDITAR" la forma como obtuvo direcciones de notificación

Solicitó el despacho que, para efectos de la subsanación, se acreditara la forma como obtuvimos las direcciones de notificación de las personas que componen la parte demandada.

Para tal efecto, indicó:

> 4° ACREDITAR la forma como obtuvo las direcciones de notificación de las personas que componen la parte demandada, conforme a lo dispuesto en la Ley 2213 en razón a que la evidencia relacionada en el numeral 1.3 del acápite de las pruebas documentales no guarda relación con las direcciones indicadas en el acápite de notificaciones.

De acuerdo con lo anterior, **ACREDITO** que las direcciones de notificación se obtuvieron de la siguiente manera:

1. Las direcciones de notificación de SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA, las cuales corresponden a la carrera 6 No. 30A-30 en Bogotá D.C., y al correo electrónico registrado: conta@ingetec.com.co , las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA, aportado como anexo 5 de la demanda.

2. Las direcciones de notificación de ALBERTO MARULANDA POSADA, la que corresponde a la calle 30A No. 6-22 Of 1301 en Bogotá D.C. y su correo electrónico son amarulapos@ingetec.com.co , las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de MARULESCO SAS, sociedad en de la que el señor Marulanda es representante legal, aportado como anexo 9 de la demanda.

3. Las direcciones de notificación de CATAY LIMITADA las cuales corresponden a la carrera 6 No. 30A-30 en Bogotá D.C., y el correo electrónico registrado: conta@ingetec.com.co, las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de CATAY LIMITADA, aportado como anexo 4 de la demanda.

4. Las direcciones de notificación de INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. – INGETEC SAS las cuales corresponden a la carrera 6 No. 30A – 3 en Bogotá D.C. y el correo electrónico registrado: conta-ing@ingetec.com.co, las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de INGETEC SAS, aportado como anexo 6 de la demanda.

5. Las direcciones de notificación de INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS -INGETEC I&D SAS las cuales corresponden a la carrera 30 No. 6-22 Of 601 en Bogotá D.C. y el correo electrónico registrado: conta-iyd@ingetec.com.co, las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de INGETEC I&D SAS, aportado como anexo 7 de la demanda.

6. Las direcciones de notificación de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR las cuales corresponden a la carrera 30 No. 6-22 Of 601 en Bogotá D.C. y los correos

electrónicos andresmarulandae@gmail.com y andres@ingetec.com.co, las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de INGETEC I&D SAS, aportado como anexo 7 de la demanda, sociedad de la que el señor Marulanda ostenta la calidad de representante legal para asunto laborales.

Asimismo, estas direcciones de correo electrónico constan en las comunicaciones habituales del señor Marulanda con ÍTACA, tal y como consta de los anexos 34 a 39 de la demanda.

III.- ANEXOS PARA LA SUBSANACIÓN

Me permito adjuntar los siguientes documentos para completar la subsanación:

1. (Anexo 2) Copia del Poder que me fue otorgado por ÍTACA
2. Copia del mensaje de datos con el cual se remitió el poder en formato Outlook
3. Copia del Acta No. 79 de la Junta de Socios de STO, celebrada el 2 de septiembre de 2020 de manera virtual

Para mayor facilidad en el trámite del proceso y por razones de economía procesal acompaño este escrito con el texto de la demanda subsanada en un solo documento integrado con la demanda inicial, que solicito que, para los efectos del curso del proceso, se tenga como el escrito de demanda con el cual habrá de trabarse el debate procesal.

Manifiesto, en todo caso, que las modificaciones hechas al texto inicial de la demanda cumplen con los requisitos previstos en el artículo 82 del CGP, comoquiera que solo se corrigió lo ordenado por el despacho; y que estas modificaciones no corresponden a una "corrección" de la demanda (Artículo 93 del CGP), en cuanto se hacen en acatamiento a una orden judicial y no por la simple voluntad del demandante.

De la señora Juez, con el debido respeto,



HUGO PALACIOS MEJÍA
C.C. 17.064.471 de Bogotá D.C.
T.P. 4.003 del C.S.J.

DEMANDA SUBSANADA-13 OCTUBRE 2022.

ÍTACA LTDA.

VS.

ALBERTO MARULANDA POSADA, CATAY LTDA.

e INGETEC I&D SAS.

TABLA DE CONTENIDO

1. **DESIGNACIÓN DE LAS PARTES** 5
2. **PRETENSIONES** 7
3. **COMPETENCIA DEL JUEZ DEL CIRCUITO; ACUMULACIÓN; PROCEDIMIENTO.** 14
4. **MEDIDAS CAUTELARES** 23
5. **HECHOS QUE SUSTENTAN LA DEMANDA** 31
6. **FUNDAMENTOS DE DERECHO.** 75
7. **JURAMENTO ESTIMATORIO Y CUANTÍA** 110
8. **PRUEBAS** 113
9. **ANEXOS** 117
10. **NOTIFICACIONES** 117

Bogotá, D.C., marzo 2 de 2021
Subsanada el 13 de octubre de 2022

Señor
JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO
(REPARTO)
BOGOTÁ
Vía https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/demandaenlinea

Demandante:	ÍTACA LIMITADA
Demandados:	ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA; SERVICIOS TECNICOS OMICRON LIMITADA, CATAY LIMITADA e INGETEC I&D S.A.S.
Asunto:	Proceso verbal, pretensiones acumuladas. Demanda de responsabilidad vs administrador; y contra MARULANDA POSADA, STO y otros por nulidad abuso de paridad en votos y determinaciones de asamblea. Medidas cautelares.

Yo, **HUGO PALACIOS MEJÍA** abogado, residente y con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado de la sociedad **ÍTACA LIMITADA,** en liquidación, identificada con el NIT 860.048.865-1, condición que acredito con el poder y el certificado de existencia y representación que adjunto (Anexos 1, 2 y 3), presento demanda contra **ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA**, contra **CATAY LIMITADA**, contra **SERVICIOS TECNICOS OMICRON LIMITADA** en liquidación, y contra **INGETEC INGENIERÍA & DISEÑO SAS -INGETEC I&D S.A.S.**, todos identificados adelante.

1. NOTAS PRELIMINARES SOBRE EL PODER A MÍ CONFERIDO

a. **Dirección inscrita en Registro Nacional de Abogados:** el poder que se me otorgó, y que aporté con la demanda inicial como anexo 2, y que aporté nuevamente con el escrito de subsanación, *tiene en cuenta* la dirección inscrita en el Registro Nacional de Abogados y así la indica expresamente: hpalacios@palacioslleras.com.

En los términos de la norma aplicable, el escrito de poder indica dicha dirección de correo electrónico y la misma coincide con la que aparece registrada en el Registro Nacional de Abogados.

b. **Inserción del poder en el mensaje de datos:** acompaño al presente el mensaje de datos del 24 de febrero de 2021, en formato Outlook y PDF, en el cual se advierte que el remitente (jgarcia@wiesnerasociados.com) adjuntó al mensaje de datos el escrito de poder en formato.pdf, con el nombre de archivo "Poder de MIOW-Itaca Ltd a HPM Feb.24-21.pdf".

   El envío del escrito de poder como archivo adjunto, cumple con la especificación que le exige el Despacho a Ítaca, de *insertar* el poder en el mensaje de datos.

   En los términos de la norma aplicable, el escrito de poder fue *remitido* a través de mensaje de datos, por memorial dirigido al juez de conocimiento.

   Según indiqué arriba, en el poder consta mi correo electrónico como apoderado, que coincide con el inscrito en el Registro Nacional de Abogados, y es hpalacios@palacioslleras.com

   Por ende, para efectos de la subsanación, acompañé al escrito de subsanación el correo electrónico por medio del cual se me otorgó poder, en formato Outlook, con lo cual se acredita que el poder se encuentra "inserto" en el respectivo mensaje de datos, como archivo adjunto.

   Me permito advertir que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 527 de 1999, en el propio Código General del Proceso y en el artículo 2.8.2.7.2 del Decreto 1080 de 2015, existe una diferencia entre el concepto de "mensaje de datos" y "mensaje de correo electrónico". El primero se refiere a *"Los documentos generados y gestionados a través de sistemas electrónicos"*[3], como bien lo puede ser un documento generado en formato "PDF".

   Respecto al segundo concepto, un "mensaje de correo electrónico", se refiere, en el contexto de la Ley 2213, al canal de remisión, mediante el cual las personas inscritas en el registro mercantil deben remitir los poderes otorgados. Por lo que con el reenvío que hago del poder, queda subsanado lo relativo a que el poder relativo se encuentre inserto en el mensaje de datos.

c. <u>El apoderado judicial no aceptó de forma expresa la labor:</u> Es cierto que el poder no contiene la aceptación "expresa" del apoderado.

En todo caso, con la presentación del presente memorial de subsanación, aunado a la presentación de los memoriales del 13 de mayo de 2021, 16 de julio de 2021 y del 22 de octubre de 2021, ejerzo el poder que me fue conferido por la sociedad ÍTACA y en tal sentido **lo acepto.**

Vale señalar que, según el inciso final del artículo 74 del CGP <u>"Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio"</u>.

En los términos de la norma aplicable, me acojo a la potestad que me confiere la Ley para aceptar el poder a mí conferido "por su ejercicio".

Desde que presenté la demanda, y ahora de nuevo, me he acogido a la facultad que me confiere el artículo 74 del CGP para aceptar el poder de ÍTACA "por su ejercicio".

Es así como, en el encabezamiento de la demanda anuncié que tenía poder de ÍTACA LIMITADA y que <u>obraba como apoderada de ella para presentar la demanda</u>. De modo que, en forma inequívoca, que consta en la demanda, <u>acepté el poder por su ejercicio.</u>

Después, en nombre de la misma sociedad, y en ejercicio de mi derecho de postulación, <u>promoví actuaciones que ya fueron resueltas por el propio Despacho y por su superior jerárquico.</u>

d. <u>No se determinó e identificó claramente el asunto del poder especial</u>: el poder que aporto cumple a cabalidad con el artículo 74 del CGP, en cuanto a la determinación e identificación, con claridad, de los "asuntos" a los que se refiere.

El poder no permite iniciar o atender varios procesos de **ÍTACA**, sino que se otorgó para "<u>una demanda"</u>, contra las personas que en él se mencionan.

El poder enumera <u>siete asuntos perfectamente determinados y numerados,</u> para obtener declaraciones relacionadas con ellos, y una condena que permita una indemnización a favor de ÍTACA.

El poder precisó los "asuntos" a los que él se refiere, con <u>más detalles</u> de los usuales en este tipo de poderes.

Por supuesto, las pretensiones de la demanda se redactaron teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas sustantivas y procesales, en la forma que, a juicio del apoderado, y según la discreción que autoriza el poder, puedan resolver mejor la controversia sobre tales "asuntos". Así lo autoriza el artículo 77 del CGP cuando dice: "El apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime conveniente para beneficio del poderdante"

Ruego se me reconozca personería.

2. DESIGNACIÓN DE LAS PARTES

1.1. Convocante

ÍTACA LIMITADA, en liquidación, (en adelante **ÍTACA)** sociedad comercial constituida por escritura pública No. 2346 del 16 de agosto de 1976, otorgada en la Notaría 2 de Bogotá. Su domicilio está en la ciudad de Bogotá, en la carrera 9 No. 80-15, oficina 602. Su matrícula mercantil es 00078267 del 27 de agosto de 1976 y su NIT es 860.048.865-1. Está representada por la señora **MARÍA ISABEL JUANA OSPINA DE WIESNER**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.713.072, quien figura como gerente en el certificado de existencia y representación legal (Anexo 1).

1.2. Convocados

1.2.1. **ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá e identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.063.997. En esta demanda, por gracia de la brevedad, nos referiremos a él, también, como **ALBERTO MARULANDA POSADA**. Se lo podrá notificar en la carrera 9 No. 84C – 40 en Bogotá D.C., y en los correos: amarulapos@ingetec.com.com y amarulapos3@gmail.com

1.2.2. **CATAY LIMITADA,** (en adelante también **CATAY**) sociedad comercial constituida por escritura pública No. 2246 de la Notaría 2 de Bogotá el 9 de agosto de 1976, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá. Su matrícula mercantil es 00077936 del 19 de agosto de 1976 y su NIT es 860.048.866-9. Esta sociedad está representada por GUSTAVO MERINO CARRASCO, identificado con la cédula # 19.111.772, a quien podrá notificarse en la carrera 6 No. 30A-30 en Bogotá D.C., y al correo electrónico registrado conta@ingetec.com.co. (Anexo 4)

1.2.3. **SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LIMITADA (**en adelante también **STO**), en liquidación, sociedad comercial constituida por escritura pública No. 5985 del 21 de diciembre de 1969, otorgada en la

Notaría 7 de Bogotá. Su domicilio está en la ciudad de Bogotá, en la carrera 6 No. 30A - 30. Su matrícula mercantil es 00021524 del 22 de mayo de 1972 y su NIT es 860.009.936-1. Esta sociedad ha estado representada por el demandado ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA. (Anexo 5).

1.2.4. **INGETEC INGENIERÍA & DISEÑO SAS -INGETEC I&D S.A.S.,** (en adelante también INGETEC I&D) sociedad comercial constituida mediante escritura pública No. 755 del 6 de marzo de 2008 otorgada en la Notaría 31 de Bogotá. Su domicilio está en la ciudad de Bogotá, en la carrera 30 No. 6-22 Of 601, y se la puede notificar allí o en el correo electrónico info@ingetec.com.co. Su matrícula mercantil es 01784158 del 13 de marzo de 2008 y su NIT es 900206480-2. Esta sociedad está representada hoy por el señor ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá e identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.779.202 y como aparece en su certificado de existencia y representación legal. (Anexo 7).

1.3. Litisconsortes cuasi necesarios.

Aunque no considero que las siguientes personas deban ser partes en el proceso, porque la demanda no contiene ninguna pretensión contra ellas, la decisión que recaiga sobre esta demanda podría tener, eventualmente, algún efecto indirecto sobre ellas. Por eso, si el Sr. Juez considera necesario citarlas para integrar el litisconsorcio como litisconsortes cuasinecesarios, las identifico aquí plenamente. Estas personas son:

1.3.1. **INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. – INGETEC SAS**, (en adelante también INGETEC) sociedad comercial constituida mediante escritura pública No. 311 del 18 de febrero de 1957 otorgada en la Notaría Primera de Bogotá. Su domicilio está en la ciudad de Bogotá, en la carrera 6 No. 30A – 30. Su matrícula mercantil es 00023592 del 22 de junio de 1972 y su NIT es 860001986-1. Esta sociedad está representada por el señor ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá e identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.063.997, y como aparece en su certificado de existencia y representación legal (Anexo 6).

1.3.2. **ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR,** mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, e identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.779.202, quien podrá notificarse en la carrera 30 No. 6-22 Of 601 en Bogotá D.C. y en los correos electrónicos andresmarulandae@gmail.com y andres@ingetec.com.co

3. PRETENSIONES

Las pretensiones de esta demanda **no** se relacionan con las que darían lugar al tipo especial de proceso al que se refiere el artículo 382 del CGP.

Con base en los hechos y normas a los que me referiré adelante en esta demanda, solicito que, en un **PROCESO VERBAL**, se atiendan las siguientes pretensiones acumuladas, derivadas de la acción a la que se refiere el artículo 25, inciso final, de la Ley 222 de 1995, y de la de "nulidad/abuso", creada en los artículos 830 del Código de Comercio y en el artículo 43 de la Ley 1258, regulada hoy en el literal "e" del numeral 5 del artículo 24 del CGP y sobre la cual tienen competencia los jueces civiles del circuito, en primera instancia, en virtud del Parágrafo 1 del numeral 6 del mismo artículo 24, y por el numeral 4 del artículo 20 del CGP.

Primera: Que se declare, contra ALBERTO MARULANDA POSADA, que, en el año 2016 y en los siguientes hasta la presentación de esta demanda:

(a) Tuvo y tiene control y poder de decisión sobre la Sociedad CATAY LIMITADA por lo que esta sociedad ha sido y es subordinada suya;

(b) Tuvo y tiene control y poder de decisión sobre la sociedad INGETEC SAS, por lo que esta sociedad ha sido y es subordinada suya;

(c) Tuvo y tiene control y poder de decisión sobre la sociedad INGETEC I&D SAS, por lo que esta sociedad ha sido y es subordinada suya;

(d) Tuvo y tiene control y poder de decisión sobre la sociedad MARULESCO SAS, por lo que esta sociedad ha sido y es subordinada suya;

(e) Tuvo y tiene control y poder de decisión sobre la sociedad MARULANDA ESCOBAR SAS, por lo que esta sociedad ha sido y es subordinada suya;

Segunda: Que se declare contra CATAY, STO, y ALBERTO MARULANDA POSADA:

Que fueron nulos, de nulidad absoluta, **los votos** de la sociedad CATAY, en la Junta de Socios de la sociedad STO que se reunió virtualmente el 2 de septiembre de 2020, por objeto ilícito y por abusar del derecho de voto en paridad, en perjuicio de ÍTACA, cuando:

a.- El apoderado de CATAY, sociedad subordinada de ALBERTO MARULANDA POSADA, participó en el voto de la proposición de ÍTACA, que ordenaba iniciar una acción de responsabilidad social contra MARULANDA;

b.- El apoderado de CATAY, sociedad subordinada de ALBERTO MARULANDA POSADA, impidió con su voto que se aprobara la proposición de iniciar un juicio de responsabilidad social contra el administrador de STO, ALBERTO MARULANDA POSADA;

c.- El apoderado de CATAY, sociedad subordinada de ALBERTO MARULANDA POSADA, impidió con su voto que se aprobara la proposición de elegir a la señora MARÍA ISABEL O. DE WIESNER como nueva representante legal principal y al señor ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA como representante suplente.

Tercera: Que se declare contra ALBERTO MARULANDA POSADA, STO y CATAY:

Que fueron nulas, de nulidad absoluta, por abuso de CATAY del derecho de voto en paridad y por objeto ilícito, las siguientes **determinaciones** que, según relata el Acta 79, se tomaron en la Junta de Socios de STO que se reunió virtualmente el 2 de septiembre de 2020, en cuanto:

a.-Al final del desarrollo del punto 8 del orden del día, cuando, según el Acta, "no hubo aprobación de la propuesta sobre representación legal";

b.-En el desarrollo del punto 10 del orden del día, cuando, según el Acta, no se aprobó la propuesta de ÍTACA de adelantar una acción de responsabilidad social de STO contra ALBERTO MARULANDA POSADA.

Cuarta: Que, como consecuencia de la prosperidad de cualquiera de las declaraciones de nulidad a las que se refieren las pretensiones segunda y tercera, se declare contra ALBERTO MARULANDA POSADA, STO y CATAY:

a.-Que, sin perjuicio de que se hayan declarado las nulidades pedidas, ÍTACA puede,

(i) reclamar a ALBERTO MARULANDA POSADA los daños y perjuicios indirectos que recaen sobre ÍTACA por los daños y perjuicios causados por ALBERTO MARULANDA POSADA a STO;

(ii) reclamar a ALBERTO MARULANDA POSADA los daños y perjuicios directos causados a ÍTACA por actos de ALBERTO

MARULANDA POSADA y/o las sociedades que él controla, cuando tales actos no causaron perjuicios directos a STO.

b.-Que, como consecuencia de cualquiera de las nulidades a las que se refieren las pretensiones segunda y tercera, debe entenderse ahora que la acción de responsabilidad social de STO contra ALBERTO MARULANDA POSADA fue aprobada.

c.-Que, como consecuencia de cualquiera de las nulidades a las que se refieren las pretensiones segunda y tercera, debe entenderse ahora que la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER fue electa en la Junta de STO del 2 de septiembre de 2020 como representante legal principal de STO, y el señor ALBERTO MARULANDA POSADA como suplente.

Quinta: Que se declare, contra ALBERTO MARULANDA POSADA, que:

a.-ALBERTO MARULANDA POSADA dio motivos a ÍTACA para que creyera que su hijo, el señor ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, estaba facultado para celebrar con ÍTACA un negocio para adquirir, a través de sociedades subordinadas de ALBERTO MARULANDA POSADA, los derechos sociales de ÍTACA en STO.

b.-Y que, en consecuencia, ALBERTO MARULANDA POSADA está obligado ante ÍTACA, a responder por el curso y el resultado de las negociaciones que hizo su representante aparente ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda con él a INGETEC I&D, a la que se refieren la pretensión OCTAVA y las consecuenciales.

Sexta: Que se declare contra ALBERTO MARULANDA POSADA e INGETEC I&D, que:

a.- INGETEC I&D, representada por ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, y en desarrollo de la autorización dada por ALBERTO MARULANDA POSADA, negoció y acordó con ÍTACA, todos los elementos esenciales de un contrato para que INGETEC I&D fuera cesionaria de todas las cuotas sociales de ITACA en STO;

b.-Que la celebración de ese contrato entre ÍTACA y INGETEC I&D, estaba sujeta, únicamente, a dos condiciones de origen legal, a saber: (i) la condición de que CATAY no hiciera uso de su derecho de preferencia para adquirir tales cuotas, y (ii) a la aprobación final de la Junta de STO.

Séptima: Que se declare contra ALBERTO MARULANDA POSADA, que, siendo representante legal de STO, y, al mismo tiempo controlador de CATAY, violó

los deberes de buena fe y lealtad a los que estaba sujeto en STO, y las reglas sobre conflictos de interés, cuando:

a.-Directamente y/o por medio de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, trató de impedir que los socios minoritarios de CATAY conocieran la opción que ÍTACA debía dar a CATAY, según las reglas sobre "derecho de preferencia", para poder ceder eventualmente a INGETEC I&D las cuotas de interés social de ÍTACA en STO.

b.- Se negó a transmitir a CATAY la oferta que hizo ÍTACA a CATAY para la cesión de las cuotas sociales de ÍTACA en STO.

c.-Hizo saber a ÍTACA, directamente y/o por medio de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, que las negociaciones para la eventual compra de sus cuotas sociales en STO a través de INGETEC I&D, no seguirían adelante, por falta de financiación bancaria, condición ésta que nunca se incorporó en los documentos acordados.

Octava. Que se declare contra ALBERTO MARULANDA POSADA e INGETEC I&D SAS, que:

a.- Cuando ALBERTO MARULANDA POSADA, incurrió en las conductas a las que se refieren los literales "a", "b" y "c" de la pretensión **séptima**, causó daños y perjuicios directos a ÍTACA,

b.-Cuando INGETEC I&D, a través de su representante legal ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR y representante aparente de ALBERTO MARULANDA POSADA, comunicó a ÍTACA su decisión de no continuar con el procedimiento necesario para que INGETEC I&D adquiriera las cuota de interés social de ÍTACA en STO, causó daños y perjuicios directos a ÍTACA LTDA.

c.-Que el valor de esos daños y perjuicios, ocasionados por ALBERTO MARULANDA y por INGETEC I&D a ÍTACA, equivale, por lo menos, a $7.375 millones, del 14 de agosto de 2020 y a lo que se demuestre en el proceso.

Novena. -Que se declare, contra ALBERTO MARULANDA POSADA e INGETEC I&D, que

a.-Cuando ALBERTO MARULANDA POSADA se negó a dar traslado a CATAY de la oferta de cuotas de interés social de ITACA en STO, violó la ley e hizo imposible el cumplimiento de las dos condiciones de las cuales pendía la celebración del contrato entre ÍTACA, como cedente de cuotas de interés social en STO, e INGETEC I&D como cesionaria.

b.- Y que, en consecuencia, esas condiciones se deben entender cumplidas (según los principios de los artículos 1537, 1538 y 1542 del Código Civil), y corresponde a ALBERTO MARULANDA POSADA usar su control y poder de decisión en INGETEC I&D y CATAY para que se celebre y cumpla el contrato de cesión acordado en lo esencial entre ÍTACA e INGETEC I&D.

c.-Y que cuando INGETEC I&D, por medio de su representante legal ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, terminó abrupta y unilateralmente las negociaciones con ÍTACA, para adquirir las cuotas de interés social de ÍTACA en STO, violó la ley y, en particular, su deber de obrar de buena fe.

d.-Y que, en consecuencia, se condene a INGETEC I&D, por sí misma, o por instrucciones y con el apoyo de su controlador ALBERTO MARULANDA POSADA, a celebrar los actos necesarios y el contrato acordado en lo esencial con ÍTACA, con actualizaciones e intereses de mora, para reparar así los daños que ellos causaron a ÍTACA según la pretensión octava.

Décima.- Que, en subsidio de los literales "a", "b" y "d" de la pretensión **novena**, y como consecuencia de las declaraciones que recaigan contra ALBERTO MARULANDA POSADA y contra INGETEC I&D en las pretensiones quinta, sexta, séptima, octava, y novena, literal "c", se condene a ALBERTO MARULANDA POSADA a dar traslado inmediato a CATAY de la oferta de cesión de sus cuotas de interés social en STO que hizo ÍTACA el 24 de julio de 2020, y que,

a.-Si CATAY acepta la oferta dentro del término legal, que ALBERTO MARULANDA POSADA e INGETEC I&D, solidariamente, paguen a ÍTACA, en adición al precio que pague CATAY, la actualización de ese precio y los intereses de mora, a partir del 14 de agosto de 2020; y que los costos y gastos que ocasionen la cesión y la reforma de estatutos de STO sean por cuenta de ALBERTO MARULANDA POSADA e INGETEC I&D;

b.-Si CATAY rechaza la oferta o no la responde dentro del término legal, que se condene a ALBERTO MARULANDA POSADA y a INGETEC I&D, solidariamente, a indemnizar a ÍTACA los daños y perjuicios directos que le causaron a ella, así:

(i) Ordenando a ALBERTO MARULANDA POSADA usar su control y poder de decisión en INGETEC I&D, para que esta sociedad celebre con ITACA, el contrato cuyos elementos esenciales se habían

convenido entre ellas para la cesión de las cuotas de ÍTACA en STO; y para que CATAY facilite en la Junta de STO la cesión.

(ii) Ordenando a INGETEC I&D celebrar el contrato cuyos elementos esenciales se habían acordado con ÍTACA, para adquirir como cesionaria las cuotas de interés social de ÍTACA en STO.

(iii) Ordenando que el texto del contrato de cesión entre ÍTACA e INGETEC I&D incluya todas las coincidencias esenciales y accidentales entre el texto que envió ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR a ITACA el 26 de marzo de 2020, y el texto que, a su vez, ofreció ITACA a CATAY el 24 de julio de 2020,

(iv) Ordenando que INGETEC I&D añada al texto resultante según los literales (i) (ii) y (iii) anteriores de esta pretensión los elementos **accidentales** necesarios para dar eficacia a la sentencia que recaiga sobre esos literales.

(v) Ordenando que ALBERTO MARULANDA POSADA o INGETEC I&D, entreguen el precio de la cesión a ÍTACA, actualizado y con intereses de mora, a partir del 14 de agosto de 2020; y que los costos y gastos que ocasionen la cesión y la reforma de estatutos de STO sean por cuenta de ALBERTO MARULANDA POSADA e INGETEC I&D.

(vi) Y que, de no cumplirse, en el término que señale la sentencia, las órdenes a las que se refieren los literales anteriores de esta pretensión, se condene en forma solidaria a ALBERTO MARULANDA POSADA y a INGETEC I&D a:

> (vi-a) Pagar a ÍTACA la suma convenida para la cesión a INGETEC I&D de sus cuotas de interés social en STO, más la actualización de valor e intereses de mora a partir del 14 de agosto de 2020, más cualesquiera otros valores que se demuestren en el proceso, actualizados y con intereses.
>
> (vi-b) Sin perjuicio de que, después de haber hecho el pago al que se refiere el literal (vi-a), ALBERTO MARULANDA POSADA, o INGETEC I&D, puedan solicitar a ÍTACA la colaboración necesaria para que, en cuanto de ella dependa, se cumplan todos los trámites de ley para que INGETEC I&D, entre formalmente a ser socia de STO. En este último evento, los costos y gastos que ocasionen la cesión y la reforma de estatutos serán por cuenta de ALBERTO MARULANDA POSADA e INGETEC I&D.

Undécima: que se declare, contra ALBERTO MARULANDA POSADA, que siendo representante legal principal de STO, violó los deberes de buena fe y lealtad, y los demás deberes que le imponen los artículos 22, 23 y concordantes de la Ley 222 de 1995, incluyendo los relativos al conflicto de intereses, cuando:

a. Suscribió con INGETEC S.A., en nombre de STO, el contrato de arrendamiento del 30 de septiembre de 2016 sobre las partes del edificio San Martín, que STO posee en común y proindiviso con INGETEC I&D,

b. Suscribió el Otrosí No.1 del 21 de marzo de 2017 al mismo contrato, y lo renovó de la misma manera, en los años 2017, 2018 y 2019, pese a las críticas expresas de ÍTACA.

c. Toleró que las sociedades arrendatarias se atrasaran en el pago de los arrendamientos, sin aplicarles las sanciones previstas en la ley y en el contrato.

d. A partir de la negativa de la Junta de STO a las prórrogas del contrato, siguió permitiendo que sociedades controladas por él ocuparan los bienes arrendados, sin hacer gestión alguna para modificar los acuerdos existentes en forma que recibieran aceptación expresa de la Junta, o para buscar otros arrendatarios, o para obtener el desalojo de los espacios alquilados.

Duodécima: Que se declare contra ALBERTO MARULANDA POSADA, que:

a.- ALBERTO MARULANDA POSADA, siendo representante legal de STO, causó perjuicios y daños indirectos a ÍTACA, en cuanto socia de STO, al violar las normas sobre conflicto de interés, en relación con la celebración y administración de los contratos de arrendamiento aludidos en la pretensión anterior.

b.-Que tales perjuicios a ÍTACA corresponden al 50% de:

b1.-La diferencia entre los cánones pagados a STO y los que se habrían causado si los cánones hubiesen sido acordados con base en un avalúo independiente comercial de los inmuebles, y si los cánones hubiesen sido iguales o similares a los que se pagaban en el mercado por oficinas del mismo valor;

b2.-Los intereses de mora que STO debió recibir, y no recibió, por razón de las demoras de los arrendatarios en el pago.

Décima tercera: Que se **condene** a ALBERTO MARULANDA POSADA, a indemnizar el perjuicio y daño indirectos ocasionados a ÍTACA, y descritos en la pretensión duodécima, en los valores que se demuestren en este proceso, con las actualizaciones de valor e intereses a que haya lugar según la ley.

Décima cuarta: Que, contra ALBERTO MARULANDA POSADA, en consecuencia del éxito eventual de algunas o todas las pretensiones anteriores que se dirigen contra él,

a.-Se ordene la remoción de ALBERTO MARULANDA POSADA como representante legal de STO; y

b.-Se informe a la Cámara de Comercio de Bogotá para que registre lo que la sentencia judicial disponga sobre la eventual remoción y sus motivos.

Décima quinta: Que, en los términos del artículo 5 del Decreto 1925 de 2009, incorporado hoy en el Decreto 1074 del 2015, se sancione a ALBERTO MARULANDA POSADA con inhabilidad para ejercer el comercio.

Décima sexta: Que se condena a los demandados a pagar todas las costas y gastos del proceso si se oponen a las pretensiones de esta demanda.

4. COMPETENCIA DEL JUEZ DEL CIRCUITO; ACUMULACIÓN; PROCEDIMIENTO.

El señor Juez del Circuito de Bogotá es competente para conocer de todas las pretensiones acumuladas en esta demanda, por las razones que paso a exponer.

3.1.-Competencia: Interpretación de acuerdo con la Constitución.

El artículo 116 de la Constitución dispone:

> ARTÍCULO 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y **los Jueces, administran Justicia**. También lo hace la Justicia Penal Militar.
>
> El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.
>
> **Excepcionalmente** la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. (He añadido las negrillas).

De acuerdo con la Constitución es claro, entonces, que, **por regla general**, la administración de justicia corresponde a las diversas clases de **jueces.** Y que, **solo por excepción**, la ley puede atribuir función jurisdiccional **en materias precisas** a determinadas autoridades administrativas.

El artículo 116 de la Constitución no significa que el solo hecho de atribuir función jurisdiccional en materias precisas a ciertas autoridades administrativas, implique, sin más, que los jueces queden privados del ejercicio de su función judicial en las mismas materias. Se requería un mandato más explícito para llegar a esa conclusión. La función jurisdiccional admite competencias concurrentes o a prevención.

En el derecho colombiano se acepta en forma pacífica, que las normas excepcionales se aplican en **forma restrictiva**, esto es, solo en la manera precisa en la que las redacta el legislador, sin que puedan interpretarse o aplicarse en forma extensiva.

Ahora bien; el artículo 20 del CGP dispone, en el numeral 4 que:

> **Artículo 20. Competencia de los jueces civiles del circuito en primera instancia.** Los jueces civiles del circuito conocen en primera instancia de los siguientes asuntos:
>
> ……
> 4. De **todas** las controversias que surjan con ocasión del contrato de sociedad, o por la aplicación de las normas que gobiernan las demás personas jurídicas de derecho privado, así como de los de nulidad, disolución y liquidación de tales personas, salvo norma en contrario.

"**Todas**" son "todas". De acuerdo, pues, con el artículo 116 de la Constitución, y el numeral 4 del artículo 20 del CGP, los jueces civiles del circuito conocen, en primera instancia, de **todas** las controversias que surjan **con ocasión del contrato de sociedad**, salvo **norma en contrario.**

¿Qué debe entenderse por una "**norma en contrario**" de la regla general del numeral 4 del artículo 20 del CGP?.

En primer término, cuando el numeral 4 del artículo 20 advierte que la regla de competencia que él contiene opera "salvo norma en contrario", debe entenderse que se refiere al evento de una norma contraria en materia de **competencia de los jueces,** puesto que el numeral 4 se refiere a competencia "de los jueces civiles del circuito", y no a los casos excepcionales de competencia judicial de las autoridades administrativas. Estos casos excepcionales no son "norma en contrario", sino "normas complementarias".

En todo caso, son normas "contrarias" solo aquellas que indiquen que, determinadas controversias que surjan con ocasión del contrato de sociedad, no son de competencia **de los jueces civiles del circuito en primera instancia.**

No son "norma en contrario" las que, simplemente, se limitan a atribuir competencia a autoridades **administrativas** en materias iguales o similares a las que son de competencia de los jueces civiles del circuito, porque:

> a.-Debe preferirse la interpretación que mejor se ajuste a la Constitución. Ésta, como hemos visto, atribuye a los jueces por regla general la función de administrar justicia. Y está más acorde con esa regla constitucional general una interpretación según la cual la simple atribución de competencias a autoridades administrativas lleva a competencias concurrentes o complementarias entre los jueces y tales autoridades, que la interpretación que prescinde de la competencia de los jueces sin que la atribución de competencias a las autoridades administrativas, en las mismas materias, sea claramente **incompatible** con la primera.
>
> b.-Debe preferirse la interpretación que garantice en forma más amplia el derecho fundamental de "acceso a la justicia"
>
> c.-En nuestro derecho procesal es un fenómeno común que haya facultades que se ejercen a prevención.

3.2.-El origen de las controversias a las que se refiere esta demanda es el contrato social de STO, en cuanto regula las funciones de su representante legal, y el desarrollo y facultades de la Junta de socios. La condición de ALBERTO MARULANDA POSADA, como administrador de STO, y, controlador, al mismo tiempo, de CATAY, una de las dos sociedades socias de STO, es el origen de la controversia sobre el "derecho de preferencia" a la que se refiere una parte sustancial de esta demanda. Aunque los estatutos de STO no se refieren directamente al "derecho de preferencia" para la cesión de cuotas de interés social a terceros, los estatutos de STO (Escritura 3765 de 1976, Anexo 65) sí disponen, en el artículo octavo, literal "g", que corresponden a la Junta de socios las funciones que determine la ley. Entre éstas, según el artículo 360 del Código de Comercio, consta la de aprobar reformas a los estatutos sociales, y el artículo 362 del Código dispone que la cesión de cuotas de interés social debe hacerse mediante reforma estatutaria. Además, corresponde a la Junta de socios, según el artículo 365 del Código de Comercio, autorizar el ingreso de un extraño a la sociedad. De modo que las reglas sobre cesión de cuotas de interés social, y "derecho de preferencia" en STO es un asunto que "surge con ocasión del contrato social".

Todas las pretensiones de la demanda tienen origen en un contrato social, a saber, los estatutos de la sociedad SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA (STO), cuya versión más reciente consta en la escritura 3765 de 26 de noviembre de 1976, de la Notaría segunda del Círculo de Bogotá (Anexo 65).

La sociedad STO ha tenido y tiene como representante legal inscrito al señor ALBERTO MARULANDA POSADA, contra quien se dirigen **todas** las pretensiones de la demanda, sin perjuicio de que algunas de ellas se dirijan también contra STO -la sociedad que él representa- o contra CATAY e INGETEC I&D, sociedades que él controla. La sociedad STO está compuesta por dos socios, las sociedades ÍTACA, actora en este proceso, y la sociedad CATAY, subordinada de ALBERTO MARULANDA POSADA, una de las otras demandadas en este proceso.

Todas las pretensiones tienen origen en el contrato social de STO, porque se dirigen a resolver:

a.-Controversias entre ÍTACA y ALBERTO MARULANDA POSADA relativas a

(i) las negociaciones sobre cuotas de interés social de ÍTACA en STO, que se adelantaron con **INGETEC I&D,** sociedad subordinada a ALBERTO MARULANDA POSADA. En estas negociaciones se imputa responsabilidad al administrador, bien por (i) omitir su deber de dar traslado inmediato a CATAY de una oferta de cesión de cuotas de interés social en STO, que le hizo ÍTACA; (ii) bien por haber frustrado una negociación de cuotas sociales en STO entre ÍTACA e INGETEC I&D -sociedad controlada por él- que el mismo había orientado a través de su hijo ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, representante legal, a la vez, de INGETEC I&D.

(ii) la celebración de contratos de arrendamiento de los bienes de STO a sociedades tales como INGETEC S.A. -controlada por él- en condiciones de conflicto de interés;

b.-Controversias entre ÍTACA e **INGETEC I&D,** sociedad subordinada a ALBERTO MARULANDA POSADA, por la negociación de cuotas de interés social de ÍTACA en STO.

c.-Controversias entre ÍTACA, CATAY y STO, relacionadas con la forma en la que CATAY actuó en una junta de socios de STO, celebrada el 2 de septiembre de 2020.

3.3.- Acumulación de pretensiones en esta demanda. La acumulación de acciones que se hace en esta demanda cumple todos los requisitos del artículo 88 del CGP, como explicamos en seguida.

Esta demanda incluye varias clases de pretensiones, por lo que es útil explicar por qué la acumulación cumple los requisitos del artículo 88 del CGP.

3.3.1.-Competencia del Juez del Circuito.

El numeral 4 del artículo 20 del CGP indica que el Juez del Circuito es competente para conocer de "**todas** las controversias que surjan con ocasión del contrato de sociedad" sin reparar en cuáles sean las acciones que dan lugar a esas controversias o que permitan resolverlas". "**Todas**" significa "todas".

El numeral 4 del artículo 20 del CGP solo limita en dos formas la competencia universal sobre controversias societarias que otorga al Juez del Circuito, a saber:

> a.-Que las controversias "surjan con ocasión del contrato de sociedad" esto es, que tales controversias no podrían existir sin la existencia previa de un contrato societario relacionado con todas ellas.
>
> b.- Que no haya "**norma en contrario",** esto es, una norma que indique que determinada controversia **no es de competencia del Juez del circuito**. No basta que otra norma se limite a atribuir competencia complementaria o a prevención sobre una controversia igual o similar a otra autoridad, sino que se requiere que **excluya** la posibilidad de **competencia compartida** o a prevención entre esa otra autoridad y la del Juez del circuito, porque resulte **incompatible** con ésta.

No hay norma alguna que indique que las controversias a las que se refiere esta demanda no son de competencia del Juez del Circuito, aunque, **sin duda**, algunas de esas controversias podrían ser de competencia, a prevención, de la Superintendencia de Sociedades.

> En esta demanda, las pretensiones **segunda, tercera y cuarta**, piden la nulidad de votos y decisiones de una junta de socios de STO, por "objeto ilícito" y "abuso del derecho de paridad". Tales votos y decisiones surgen de la ley y del contrato social de STO, en particular de su artículo Décimo Primero (sic), según el cual:
>
> > ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. -QUORUM Y DECISIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS. La junta de socios deliberará con un número plural de socios. Las decisiones se tomarán por un **número plural de socios** que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que

> se halle dividido el capital social de la compañía. Las reformas estatutarias se adoptarán con el voto favorable de un número plural de socios que represente, cuando menos, el setenta por ciento (70%) de las cuotas en que se halle dividido el capital social. (He añadido las negrillas).

En Colombia existen ciertos regímenes sociales que permiten que las juntas o asambleas tomen decisiones con los votos de un solo socio. No es el caso del que se ocupa esta demanda. El artículo "Décimo Primero" de los estatutos de STO exige que las decisiones en las juntas se STO se tomen por un número **plural** de socios y es por ello que las pretensiones **segunda, tercera y cuarta**, relacionadas con el **"abuso de paridad**", surgen del contrato social.

Ya el Código de Comercio indica, en el artículo 830, que

> ARTÍCULO 830. El que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause.

Pero, además, desde la aprobación por el Congreso del artículo 43 de la Ley 1258, en el derecho societario colombiano se hace un desarrollo especial del artículo 830 del Código de Comercio, y se califican de **ilícitas** -esto es, de **generadoras de nulidad**- las conductas de accionistas que usan el voto para causar daño a la sociedad o a otros accionistas, o para obtener para sí o para terceras personas ventajas injustificadas; o cuyo voto pueda ocasionar un perjuicio a la compañía o a otros accionistas. La misma norma censura los abusos de mayoría, minoría y paridad.

El artículo 43 de la Ley 1258 dice:

> **Artículo 43. Abuso del derecho**. Los accionistas deberán ejercer el derecho de voto en el interés de la compañía. Se considerará abusivo el voto ejercido con el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para una tercera ventaja injustificada, así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas. Quien abuse de sus derechos de accionista en las determinaciones adoptadas en la asamblea, responderá por los daños que ocasione, sin perjuicio que la Superintendencia de Sociedades pueda declarar la nulidad absoluta de la determinación adoptada, por la ilicitud del objeto.
>
> La acción de nulidad absoluta y la de indemnización de perjuicios de la determinación respectiva podrán ejercerse tanto en los casos de

> abuso de mayoría, como en los de minoría y de paridad. El trámite correspondiente se adelantará ante la Superintendencia de Sociedades mediante el proceso verbal sumario.

Así las cosas, debe tenerse en cuenta que el artículo 43 de la Ley 1208 es una norma de carácter **excepcional**, y, por lo tanto, de interpretación restrictiva, pues, consiste, nada menos, que en atribuir una competencia judicial a una autoridad administrativa. Se trata de una excepción al inciso tercero del artículo 116 constitucional según el cual,

> **Excepcionalmente** la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas (He añadido la negrilla)

Y el artículo 43 de la Ley 1258, atribuye una competencia a la Superintendencia de Sociedades, pero no indica que los jueces del circuito no puedan resolver también las controversias a las que se refiere el artículo 43, como parte de la regla general constitucional que atribuye a los jueces la función de "administrar justicia". De modo que el artículo 43 de la Ley 1258 debe interpretarse y aplicarse en forma que sea conforme con la **regla general** del artículo 116 de la Constitución, y no como si fuera incompatible con ella.

Es así como resulta de especial importancia en este caso el Parágrafo 1 del artículo 24 del CGP, que se refiere a las funciones judiciales de la Superintendencia de Sociedades, y dispone:

> Parágrafo 1°. Las funciones jurisdiccionales a que se refiere este artículo, **generan competencia a prevención** y, por ende, no excluyen la competencia otorgada por la ley a las autoridades judiciales y a las autoridades administrativas en estos determinados asuntos. (He añadido las negrillas).

En síntesis: aun teniendo en cuenta el artículo 43 de la Ley 1258, el Juez del Circuito es competente para decidir las controversias a las que se refieren las pretensiones **segunda, tercera y cuarta** de esta demanda, con base en el artículo 116 de la Constitución, en el artículo 830 del Código de Comercio, en el numeral 4 del artículo 20 del CGP, y en el Parágrafo 1 del artículo 24 del CGP.

3.3.2.-La cláusula arbitral no se aplica a las pretensiones de esta demanda.

El texto del artículo DÉCIMO OCTAVO de los estatutos sociales de STO es el siguiente:

> DIFERENCIAS. Las diferencias que surjan entre los socios o entre estos y la sociedad con motivo del contrato social, **y diferentes de aquellas que deben decidirse por votación en la Junta de Socios**, se someterán a la decisión de tres árbitros que designará la Cámara de Comercio de Bogotá. Dichos árbitros operarán en Bogotá y deberán fallar en conciencia, pudiendo conciliar las pretensiones opuestas. (La negrilla es mía) (Anexo 65)

No es del caso aplicar el artículo DÉCIMO OCTAVO de los estatutos sociales de STO, puesto que **todas** las pretensiones que contiene la demanda atañen a controversias entre la sociedad ÍTACA y el administrador de STO, ALBERTO MARULANDA POSADA, **que no es socio** de STO. Estas pretensiones se enderezan a señalarle responsabilidades y deberes a él, como persona natural.

Otras pretensiones se dirigen contra la sociedad **INGETEC INGENIERÍA & DISEÑO SAS -INGETEC I&D** que tampoco es socia de STO.

De otra parte, las pretensiones **segunda, tercera y cuarta** que se refieren a controversias entre ITACA y CATAY, socios de STO, o de ÍTACA contra STO, versan, **precisamente**, sobre asuntos que deben decidirse por votación en la Junta de Socios, como son:

> a.- Las votaciones realizadas en la junta de socios de STO celebrada el 2 de septiembre de 2020, y en donde los votos de CATAY implicaron abuso del derecho.
>
> b.- La aprobación del ingreso de un nuevo socio, por cesión de cuotas de interés social, según el artículo 365 del Código de Comercio, incorporado a los estatutos sociales de STO por la remisión que el artículo OCTAVO de los estatutos sociales hace a las normas legales sobre funciones de la Junta de Socios.

Y cuando en la pretensión **décima** se pide una condena contra CATAY es, exclusivamente, por los perjuicios ocasionados por sus votos en la Junta de Socios de STO del 2 de septiembre de 2020.

3.3.3.-Todas las pretensiones pueden tramitarse por el proceso verbal.

El numeral 4 del artículo 20 del CGP encarga al Juez del Circuito de definir, **en primera instancia,** "**todas** las controversias que surjan con ocasión del contrato de sociedad".

Ahora bien, si la competencia de los jueces civiles del circuito para conocer de todas las controversias que surjan con ocasión del contrato de sociedad es para conocerlas **en primera instancia**, resulta obvio que el procedimiento que deben seguir para resolver esas controversias no puede ser el del "proceso verbal sumario", pues éste, según el Parágrafo Primero del artículo 390 del CGP, es de **única instancia.**

El artículo 233 de la Ley 222 de 1995 disponía:

> REMISIÓN AL PROCESO VERBAL SUMARIO. Los conflictos que tengan origen en el contrato social o en la ley que lo rige, cuando no se hayan sometido a pacto arbitral o amigable composición, se sujetarán al trámite del proceso verbal sumario, salvo disposición legal en contrario.

El numeral 4 del artículo 20 del CGP, por la razón anotada, es "disposición legal en contrario" al artículo 233, por lo que éste no es aplicable a la presente controversia.

Sin duda, el artículo 390 del CGP dice que se tramitarán por la vía del proceso "verbal sumario"

> 9. Los que en leyes especiales se ordene tramitar por el proceso verbal sumario.

pero esta regla no implica que las autoridades judiciales deban tramitar por el proceso "verbal sumario" las controversias que se refieran a la nulidad de votos y decisiones que se toman en juntas de socios con abuso del derecho de paridad, pues el artículo 43 de la Ley 1258 **solo se refería a los procesos que se siguieran ante la Superintendencia de Sociedades**.

Más aún, debe tenerse en cuenta el Parágrafo 3 del artículo 24 del CGP, relativo a las facultades judiciales de la Superintendencia de Sociedades, y según el cual,

> Las autoridades administrativas tramitarán los procesos a través de **las mismas vías procesales** previstas en la ley para los jueces.

Como se observa, el Parágrafo 3 del artículo 24 del CGP **impone** a las autoridades administrativas que asuman funciones judiciales, el uso de <u>las vías procesales **propias de los jueces**, y no las que se hubiesen creado para las autoridades administrativas.</u>

No se puede, pues, imponer a un juez el trámite, por la vía del "proceso verbal sumario", de las controversias relativas a nulidades en votos y decisiones de juntas

de socios, por abuso del derecho de paridad, pues **tal restricción surgió únicamente para las autoridades administrativas,** y en una situación excepcional, esto es, cuando fueran a ejercer funciones judiciales. Hoy el Parágrafo 3 del artículo 24 del CGP impone a las autoridades administrativas el deber de adoptar las vías procesales que el CGP señala a los jueces, y no las que pudieron ser propias de su excepcional ejercicio judicial.

Finalmente, es de notar que cuando el artículo 24, numeral 5, literal "e" del CGP faculta a la Superintendencia de Sociedades para tramitar este tipo de pretensiones, suprimió la regla original de la ley 1258 que le exigía tramitar este proceso por la vía del "proceso verbal sumario".

De modo que el Parágrafo 3 del artículo 24, arriba citado, no obliga a los jueces a tramitar estas controversias por la vía del "proceso verbal sumario" sino que, **al revés,** la Superintendencia debe tramitar los procesos de anulación de decisiones de juntas o asambleas por objeto ilícito y abuso del derecho por la vía del "proceso verbal" y no por la vía del "proceso verbal sumario".

Por las razones dichas, las pretensiones **segunda, tercera y cuarta** de esta demanda deben tramitarse, como todas las demás, por el "proceso verbal", y no por el "proceso verbal sumario", razón por la cual se cumplen, en este caso, todos los requisitos para la acumulación de acciones.

3.3.4.-Las pretensiones contra varios demandados son acumulables porque provienen de la misma causa, se hallan en relación de dependencia entre sí, y se sirven de las mismas pruebas.

Las pretensiones **segunda, tercera, cuarta** se dirigen contra varios demandados, porque provienen de la misma causa (Junta de socios de STO el 2 de septiembre de 2020) y deben servirse de las mismas pruebas: acta y grabaciones de esa Junta, certificados en los que consta la subordinación de INGETEC I&D SAS y CATAY a ALBERTO MARULANDA POSADA y documentos provenientes de ALBERTO MARULANDA POSADA y ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR.

Las pretensiones **sexta, octava, novena y décima**, se dirigen contra varios demandados, porque provienen de la misma causa (terminación unilateral de las negociaciones para la cesión de cuotas de interés social de ÍTACA en STO) y deben servirse de las mismas pruebas: certificados en los que consta la subordinación de INGETEC I&D SAS, y documentos de ALBERTO MARULANDA POSADA y de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR acta y grabaciones de esa Junta, y de CATAY a ALBERTO MARULANDA POSADA.

5. MEDIDAS CAUTELARES

Con todo respeto, y con fundamento en el artículo 590 del Código General del Proceso, solicito del señor Juez que se decreten y practiquen las medidas cautelares que enumerará adelante.

Además, ruego al Sr. Juez, tener en cuenta que ÍTACA se encuentra en liquidación, y que estas medidas no recaen ni limitan derechos patrimoniales o económicos de los demandados, por lo que el Sr. Juez podría ejercer la facultad que le otorga el numeral 2 del artículo 590 del CGP y liberar a ÍTACA del deber de prestar una caución, o fijar ésta en una suma mínima.

Las medidas cautelares que se solicitan, son las siguientes:

> **Primera-**Que se ordene a ALBERTO MARULANDA POSADA abstenerse de votar con sus votos y con los de MARULESCO SAS (sociedad que controla y que él representa), en las Juntas de CATAY, cuando los asuntos que se discutan en ellas se refieran a contratos entre (i) STO y él; o entre (ii) STO y las sociedades que MARULANDA representa o en cuyas juntas o asambleas tenga, directamente o con otras sociedades y/o con su esposa o hijos, más del 50% del poder de voto.
>
> **Segunda. -**Que se ordene a ALBERTO MARULANDA POSADA conseguir que se convoque una Junta de socios de CATAY (sociedad que él controla), de asistir a ella, y de presentar y votar en favor de una proposición según la cual, cuando la sociedad CATAY asista a las Juntas de Socios de STO, quien la represente allí debe abstenerse de presentar o apoyar cualquier propuesta que permita a ALBERTO MARULANDA POSADA, mientras sea representante legal de STO,
>
> > (i) hacer contratos en nombre de STO con cualquier sociedad en la que él o las sociedades que él controla en forma directa o indirecta, o en las que su esposa o sus hijos sean socios, o
> >
> > (ii) impedir que se transmitan a la Junta de Socios de CATAY propuestas de cesión de cuotas sociales en STO,
>
> salvo que tal o tales propuestas provengan o tengan aceptación de quien represente a ITACA en la Junta de STO.
>
> **Tercera.-** Que, para obtener el cumplimiento de los artículos 164 y 442 del Código de Comercio, en la forma en la que fueron declarados constitucionales en el numeral 11 de la Sentencia C-621 de 2003, se ordene a quienes aparezcan en el registro mercantil como representante legal o como revisor fiscal de STO, convocar una Junta Extraordinaria de Socios para que, según sea procedente,

(i) designen o ratifiquen al representante legal y al revisor fiscal de la sociedad;

(ii) inicien y culminen un procedimiento, en colaboración con el liquidador de la sociedad, para designar una persona o personas que busquen arrendadores o compradores para los espacios que STO ha tenido arrendados, para que esa persona o personas celebren los contratos de arrendamiento que los socios de STO aprueben, o para que promuevan la venta de tales espacios, previa aprobación de los socios.

Fundo esta solicitud de medidas cautelares en los hechos y razones de derecho que explico en seguida.

En este caso se cumplen las condiciones que exige el artículo 590 de la ley 1564 de 2012 para que proceda el otorgamiento de medidas cautelares, así:

a.-Legitimación o interés de las partes: los hechos de esta demanda relatan diversos actos de ALBERTO MARULANDA POSADA, en los cuáles él falta a sus deberes de administrador y viola el régimen de conflictos de interés:

-Negándose a transmitir la oferta que ÍTACA formuló a CATAY para cederle sus cuotas de interés social en STO, oferta indispensable, según el régimen de "derecho de preferencia", para que ÍTACA pudiera continuar con el negocio acordado condicionalmente de cesión de esas cuotas a INGETEC I&D -sociedad que controla ALBERTO MARULANDA POSADA. ALBERTO MARULANDA POSADA quería impedir que los socios minoritarios de CATAY conocieran las condiciones en las cuáles él -a través de INGETEC I&D -estaba comprando las cuotas de interés social de ÍTACA en STO.

-Celebrando contratos sobre bienes de STO con sociedades que él controla, sin autorización de la Junta de STO; e

ITACA, es socia de STO, sociedad en liquidación, y tiene, según los estatutos de la sociedad, y la ley, derecho a que los administradores de la sociedad obren en interés de la sociedad, de buena fe, sin abuso del derecho, sin conflictos de intereses, y cumpliendo las obligaciones que les imponen el artículo 363 del Código de Comercio y el artículo 23 de la Ley 222 de 1905, y normas concordantes.

Por ese motivo, diversas normas y, entre otras, los artículos 200 y 363 del Código de Comercio, 22, 23 y 25 de la Ley 222 de 1905 y 24 del Código General del Proceso,

confieren a ITACA legitimación para pedir estas medidas cautelares, cuando el cumplimiento de los deberes respectivos del administrador haya puesto o ponga en peligro el interés de la sociedad o los derechos de los socios. Así mismo, los artículos 1742 y 1746 del Código Civil reconocen el interés de ITACA en exigir responsabilidad a los administradores, incluyendo las pretensiones declarativas y de condena que contiene la demanda, en relación con los actos realizados u omitidos por el representante legal de STO, ALBERTO MARULANDA POSADA.

La "primera" y "segunda" medida cautelar que ITACA pide, buscan solo que ALBERTO MARULANDA POSADA respete en forma efectiva, aún en el seno de CATAY, sociedad que él controla con sus propios votos y los de MARULESCO SAS, y que es socia de STO, el régimen de conflictos de interés que impone la ley cuando ALBERTO MARULANDA POSADA haya de actuar como representante legal de STO. Ese régimen, en este caso, se construye a partir del hecho de que ALBERTO MARULANDA POSADA es representante legal de STO, calidad que no pierde por el hecho de asistir a la junta de una sociedad como CATAY, si el tema de su actuación es uno de los que cae dentro del régimen de conflictos de interés en STO.

En el caso de la "segunda" medida cautelar, la orden que se pide no es contra CATAY, sino contra su socio controlante ALBERTO MARULANDA POSADA, para que éste no permita que el voto de CATAY sirva para facilitar la violación del régimen de conflictos de interés de ALBERTO MARULANDA POSADA en STO.

ITACA está legitimada para pedir la "tercera" medida cautelar por cuanto, en la Junta de Socios de STO del 2 de septiembre de 2020, ni ALBERTO MARULANDA POSADA ni el Revisor Fiscal YIVHER ANDRÉS GONZÁLEZ VELANDIA fueron "confirmados ni reelegidos", por lo que no conviene a los intereses de STO que, en el registro comercial, continúen apareciendo como representante legal y revisor fiscal de la sociedad, personas que fueron objeto de censuras en la Junta y que no lograron recibir el apoyo estatutario suficiente para continuar en sus cargos.

La grabación que se hizo de la reunión de la Junta, y que, con su trascripción se acompaña a la demanda (pues solo el 29 de noviembre se pudo obtener copia del Acta, pedida con más de un mes de anticipación), comprueba estos hechos. Los artículos 164 y 442 del Código de Comercio, en la forma en la que fueron declarados constitucionales en el numeral 11 de la Sentencia C-621 de 2003, y en la parte resolutiva de la misma (Anexo 59), disponen que, si no se produce una reelección o ratificación de un representante legal, o de un revisor fiscal, debe hacerse en forma pronta una Junta de Socios para elegir las personas que ocupen esos cargos. La actual situación de "bloqueo" que CATAY ejerce en este momento en la junta de STO, en interés de ALBERTO MARULANDA POSADA su socio controlante y no de STO, acredita el derecho de ITACA a pedir esta medida.

Además, según los artículos 372 y 460 del Código de Comercio, durante la liquidación, los socios serán convocados en las épocas, forma y términos prescritos para las reuniones de la Junta de Socios. Y en tales reuniones, se observarán las reglas establecidas en el contrato social o, en su defecto, las que se prevén en este código para el funcionamiento y decisiones de la asamblea general, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 248 (249)[1].

ITACA Ltda., está, pues, legitimada para pedir todas estas medidas cautelares.

b.-Vulneración del derecho. ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, vulneró el derecho de ITACA a negociar sus cuotas sociales cuando se negó a transmitir a CATAY la oferta que ITACA hizo a CATAY para cederle SUS cuotas sociales en STO. (Artículos 362 y 363 del Código de Comercio) y cuando, habiendo hecho imposible la aceptación de CATAY a la oferta de ÍTACA, se negó a concluir el negocio que, con su autorización, su hijo ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR había orientado hacia INGETEC I&D, -sociedad controlada por ALBERTO MARULANDA POSADA- y que había convenido con ÍTACA para el evento de que CATAY no aceptara la oferta.

Además, ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, había vulnerado las normas que le imponen obligaciones respecto a conflictos de intereses. En efecto, como puede verificarse "*prima faciæ*" en las actas y documentos anexos a esta demanda, ALBERTO MARULANDA POSADA procedió a celebrar los contratos de alquiler de bienes sociales con sociedades que él controla, sin haber reconocido ante la Junta la situación de conflicto de interés en la que se encontraba, y sin haber recibido dispensa. Él tiene un interés directo en las sociedades que fueron arrendatarias, y en particular en INGETEC S.A, bien como representante legal, como controlante de ellas, o como socio, o por varias de estas razones. Las pruebas obran como anexos a la demanda.

Y cuando la vigencia de los contratos de arrendamiento terminó, porque la Junta de STO no obtuvo mayoría que permitiera renovarlos, ALBERTO MARULANDA POSADA violó el artículo 23 de la ley 222, pues fue negligente en buscar otros inquilinos o en buscar la aprobación de la Junta para contratar con los mismos, y, en general, para evitar que la relación jurídica existente entre quienes tenían esos bienes y la sociedad STO se desarrollara en una situación de informalidad, o para buscar otros inquilinos.

Estas vulneraciones del derecho de ITACA han sido posibles porque ALBERTO MARULANDA POSADA no solo actúa como representante legal de STO, sino que, además, tiene el control sobre CATAY, gracias a sus aportes personales al capital de la sociedad, y a los de la sociedad MARULESCO SAS, que él representa y que también controla. Gracias al control de ALBERTO MARULANDA POSADA sobre CATAY, esta

[1] Se ha entendido que la referencia legal debió ser al artículo 248 del Código.

sociedad tolera en las Juntas de socios de STO las conductas irregulares de ALBERTO MARULANDA POSADA, o bloquea la posibilidad de que las Juntas lleguen a decisiones contrarias a los intereses de ALBERTO MARULANDA POSADA, aunque estos sean contrarios a la ley, a los intereses de STO y a los derechos de ITACA.

La "primera" y la "segunda" medida cautelar que se solicitan son necesarias para evitar que ALBERTO MARULANDA POSADA, desde CATAY o con su apoyo, continúe usando su calidad de representante legal de STO para crear las condiciones en las cuáles él viola el régimen de conflictos de interés en perjuicio de STO y de ITACA.

Las medidas cautelares que se piden no imponen obligación ninguna patrimonial a CATAY, pero impiden que ALBERTO MARULANDA POSADA incida en aquellas decisiones de CATAY que permitirían que él siguiera violando la ley en STO.

Se trata, pues, con estas respetuosas solicitudes de "medidas cautelares", de "evitar las consecuencias" de la vulneración de los derechos objeto del litigio, de hacer cesar las consecuencias ya causadas, y de asegurar la efectividad de las pretensiones de la demanda, como autoriza el artículo 590 de la ley 1564 de 2012.

c.-Apariencia de buen derecho.- ALBERTO MARULANDA POSADA, a través de su control sobre CATAY, ha bloqueado la Junta de STO para que ésta sociedad no pueda exigirle responsabilidad por su administración; y para que, en las Juntas de STO, CATAY condone los contratos de arrendamiento que ALBERTO MARULANDA POSADA, sin aprobación de la Junta de STO, ha celebrado con sociedades que él controla. Su control sobre CATAY dificultad, igualmente, la posibilidad de que ITACA encuentre un comprador para sus cuotas de interés social en STO. Por esto son necesarias las medidas cautelares pedidas, y para ello aportamos con la demanda abundantes pruebas documentales en las que consta que:

> (i) ALBERTO MARULANDA POSADA, siendo representante legal, al mismo tiempo, de STO, de INGETEC SAS y de INGETEC I&D, por escrito, autorizó a su hijo ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, que luego fue representante legal de INGETEC I&D para adelantar con ITACA negociaciones relacionadas con la eventual cesión de las cuotas de interés social de ITACA en STO;
>
> (ii) ALBERTO MARULANDA POSADA es socio de CATAY con un porcentaje del 55%, y que, además, otra sociedad, MARULESCO SAS, que ALBERTO MARULANDA POSADA controla, es socia de CATAY con un porcentaje del 8,2%;
>
> (iii) de parte de ITACA, las negociaciones se adelantaron exigiendo que fueran comunicadas a CATAY para que esta sociedad, si lo deseaba, adquiriera esas cuotas;

(iv) ALBERTO MARULANDA POSADA procuró que la decisión de CATAY quedara al arbitrio del representante legal de CATAY y no de la Junta de Socios de CATAY, con lo cual los socios minoritarios de esta sociedad no podrían conocer qué valor se estaba dando a las cuotas sociales en STO;

(v) ALBERTO MARULANDA POSADA se negó a dar traslado de la oferta de ITACA a CATAY, con el argumento de que la oferta no debía revelar la negociación eventual que se haría con la sociedad escogida por él para recibir las cuotas sociales de ITACA si CATAY no decidía adquirirlas; y que

(vi) habiendo hecho imposible que CATAY se pronunciara sobre la oferta que ÍTACA quiso hacerle, se negó también a permitir que se celebrara el contrato que, bajo condición, había autorizado celebrar entre ÍTACA e INGETEC I&D.

Está probado, también, que, en el momento en el que ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, reclamó para sí la facultad de decidir cómo debería ÍTACA hacer a CATAY las ofertas de cesiones de sus cuotas en STO, eliminó de hecho la facultad legal de ÍTACA de ceder sus cuotas ofreciéndolas como consideraba legal y conveniente ofrecerlas; impidió que CATAY se pronunciara sobre la oferta de ÍTACA y, de esa manera, hizo fallar, por su voluntad, la condición de la cual pendía el negocio entre ÍTACA e INGETEC I&D.

En este caso, también, obran en el expediente actas y otras pruebas documentales que, *prima faciæ,* revelan en forma objetiva que ALBERTO MARULANDA POSADA era representante legal de STO cuando celebró contratos de arrendamiento sobre bienes de STO con sociedades vinculadas a él y, en particular, con INGETEC S.A; que las arrendatarias eran unas sociedades con las cuales él tenía relación como socio, socio de socios, y administrador; que se abstuvo de plantear en la Junta de STO una situación de conflicto de interés al celebrar esos contratos de arrendamiento; que toleró atrasos en los pagos de los arriendos debidos por las arrendatarias controladas por él; y que la Junta nunca aprobó los contratos en referencia sino que, por el contrario, ITACA los censuró en diversas ocasiones.

De este modo, la amplia prueba documental que hemos aportado con esta demanda, demuestra, *prima faciæ,* (i) la violación de los artículos 23 de la Ley 222 en cuanto al régimen de "conflictos de interés"; (ii) la de los artículos 362 y 363 del Código de Comercio, que otorgan a los socios la facultad de negociar sus cuotas de interés social, y que obligan a los administradores de las sociedades a transmitir inmediatamente, las ofertas de cesiones de cuotas de interés social que unos socios hagan a otros; y (iii) la de los artículos 1538 y 1542 del Código Civil que obligan, a quien hace imposible de cumplir la condición de la cual depende el nacimiento de sus obligaciones, a asumir tales obligaciones, en vez de repudiarlas con razones no

demostrables. Demuestran también, sin necesidad de mayor exégesis, la violación de la norma que surge al concordar los artículos 372 y 404 del Código de Comercio pues esta última norma impedía ocultar de la Junta de socios de CATAY la negociación que se estaba haciendo, condicionalmente, entre ITACA e INGETEC I&D y que tenía que culminar con una aprobación de la Junta de STO.

De modo que, estando acreditado el carácter de administrador de STO que tenía ALBERTO MARULANDA POSADA cuando incurrió en las conductas a las que se refiere el párrafo anterior al frustrar la cesión de cuotas sociales de ÍTACA en STO; y cuando celebró los contratos de arrendamiento con INGETEC S.A. y otras sociedades dentro de su órbita de control, debe reconocerse a ITACA actora en este proceso, al menos la "apariencia de buen derecho" para sostener las pretensiones de la demanda y esta petición de "medidas cautelares", sin perjuicio, por supuesto, de lo que se alegue y pruebe en el proceso, y de lo que el Sr. Juez, finalmente, decida en relación con las pretensiones.

d.-Necesidad y proporcionalidad de las medidas. Las "medidas cautelares" impetradas **no tienen carácter económico alguno**, ni tienden a limitar a ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA o a CATAY el uso de sus derechos patrimoniales.

La "primera" y la "segunda" medida cautelar no implican órdenes de ninguna clase a CATAY; implican sí órdenes a ALBERTO MARULANDA POSADA, que él puede cumplir en CATAY gracias al control que ejerce sobre esa sociedad. Las medidas que se piden se enfocan, de modo explícito, a conseguir que, temporalmente, mientras dura el proceso, el control que ALBERTO MARULANDA POSADA tiene sobre CATAY Ltda no se use en las Juntas de STO para facilitar a ALBERTO MARULANDA POSADA realizar actos o incurrir en omisiones con bienes de STO, o con las facultades que tiene como representante legal de STO, violando el régimen de conflicto de intereses, en perjuicio de STO o de ITACA.

En vista de la disolución de STO, por expiración del término de vigencia pactado, es también urgente la "tercera" medida cautelar que se pide y que tiende a conseguir que la sociedad STO disponga de administrador y revisor fiscal que representen la voluntad y el interés común de los socios ITACA y CATAY y no, solamente, la inercia ilegal de quienes continúan ocupando los dos primeros cargos gracias al abuso que CATAY -controlada por ALBERTO MARULANDA POSADA- hace de su capacidad de bloquear en la Junta de STO otras alternativas.

Para precaver que se tomen las decisiones ilegales y abusivas, y para impedir que se hagan ilusorios los derechos procesales de ITACA, las medidas provisionales que ella solicita guardan proporcionalidad con el perjuicio que se quiere evitar. Las medidas se limitan a conseguir que el administrador ALBERTO MARULANDA POSADA no pueda ejercer sus derechos sociales cuando tenga propósitos claramente

ilegítimos, es decir, bloqueando desde CATAY los instrumentos de los que ITACA debería disponer para proteger sus derechos contra la celebración de contratos por ALBERTO MARULANDA POSADA en conflicto de interés, y contra la frustración de contratos que no se ajusten a los intereses de ALBERTO MARULANDA POSADA, y contra el bloqueo a decisiones de STO tendientes a exigir a ALBERTO MARULANDA POSADA responsabilidad por sus actos como administrador de STO..

Por supuesto, la "primera" y la "segunda" medida cautelar pedidas buscan, finalmente, como la "tercera", facilitar un acuerdo en la Junta de STO para designar una persona, distinta de ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA como representante legal de STO. Pero ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA nunca ha tenido derecho a perpetuarse en el cargo de representante legal de STO contra la voluntad de un socio que representa el 50% del capital social. No puede, pues, alegar que las medidas cautelares que tienen ese propósito le resultan gravosas o desproporcionadas.

Finalmente, en relación con la "tercera" medida cautelar que se impetra, si no se remueve al señor ALBERTO MARULANDA POSADA como representante legal de STO, su continuidad en el cargo resultaría ser un riesgo para los intereses de STO y sus socios, dadas las experiencias y las razones que se exponen en la demanda.

Sin estas medidas cautelares, el administrador ALBERTO MARULANDA POSADA puede obtener, con sus cuotas de interés social y las de sus hijos y las sociedades que controla, por lo menos el 51% de los votos en las Juntas de CATAY, para dar instrucciones al representante legal de CATAY y bloquear de esa manera las decisiones que serían necesarias en las Juntas de socios de STO para impedir que ALBERTO MARULANDA POSADA continúe violando el régimen de conflictos de interés y para conseguir que la sociedad STO tenga administradores que representen el interés común de los socios.

Si el señor Juez no ampara el derecho de ITACA en este proceso se producirá una situación de parálisis en STO y CATAY, multiplicando litigios en forma innecesaria, y poniendo en riesgo el valor de los bienes de STO y de sus socios. Uno de los objetivos de este proceso, y de las medidas cautelares que se impetran, es que, ante la inminente liquidación de STO, se logren garantías para todos los socios, y se impida la inevitable desvalorización de sus bienes que resultaría como consecuencia de una cascada de litigios.

6. HECHOS QUE SUSTENTAN LA DEMANDA

A continuación, presento los hechos que sustentan las pretensiones de esta demanda, separados por subcapítulos. El relato de los hechos se orienta, en el **primer capítulo (5.1)**, a sustentar declaraciones según las cuales ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante de STO, sociedad en la cual ÍTACA es

socia, tiene control sobre varias sociedades que, o bien ocupan bienes en los cuales ÍTACA es también propietario, o bien están en condiciones de paridad con ÍTACA en otras sociedades, o bien tuvieron acuerdos de adquisición de acciones de ÍTACA, lo cual creó las condiciones de hecho para que él violara sus deberes como administrador de STO, y creara las condiciones en las cuales ÍTACA puede pedir que se declare su responsabilidad como administrador en los términos del último inciso del artículo 25 de la Ley 222.

En el **segundo capítulo (5.2)** los hechos relatan ciertas conductas de ALBERTO MARULANDA, relacionadas con contratos en los que tiene conflictos de interés, y que dan sustento a la pretensión de responsabilidad contra él, como administrador de la sociedad STO, en la cual ÍTACA es socia, en los términos del último inciso del artículo 25 de la Ley 222.

En el **tercer capítulo (5.3)** los hechos relatan otras conductas de ALBERTO MARULANDA, relacionadas con conductas suyas orientadas a impedir la celebración de un contrato de venta de acciones de ÍTACA, que él consideraba contrario a sus intereses. De nuevo, estas otras conductas también fundamentan la petición de declaración de responsabilidad contra él, fundada en el último inciso del artículo 25 de la Ley 222.

El **cuarto capítulo (5.4)** de los hechos tiene el propósito de mostrar como la Sociedad Catay abusó de su derecho en una votación de Junta de Socios en la que participaba ÍTACA, y de ese modo lesionó los derechos de ésta. Las pretensiones de nulidad a las que sirven de sustento estos hechos **no** se relacionan entonces con el proceso especial que regula el artículo 382 del CGP y que se refiere a la "Impugnación de actos de Asambleas, juntas directivas o de socios". En cambio, los hechos del cuarto capítulo **sí** tienen el propósito de sustentar las pretensiones de nulidad de **votos y determinaciones por abuso del derecho**, que contiene la demanda, y que se fundan en la acción derivada del artículo 830 del Código de Comercio 830 y del literal "e" del numeral 5 del artículo 24 del CGP que, por disposición del Parágrafo 1 del numeral 6 del mismo artículo, corresponde también, a prevención, al juez civil del Circuito, según el artículo 20, numeral 4, del CGP. El precedente remoto de esta acción es el artículo 43 de la Ley 1258.

5.1. STO; Y LA SUBORDINACIÓN DE CATAY Y OTRAS EMPRESAS A LA VOLUNTAD DE ALBERTO MARULANDA POSADA.

5.1.1. La sociedad SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA (STO), hoy en liquidación, se creó en el año 1965 como SERVICIOS TÉCNICOS INGETEC LIMITADA, mediante escritura pública No. 5985 del 21 de diciembre de 1965, otorgada en la Notaría Séptima de Bogotá, y registrada el 29 de diciembre de 1969. (Anexo 5). Sus actuales

estatutos constan, principalmente, en la escritura 3765 de 26 de noviembre de 1976, pasada ante el Notario 2 del Circuito de Bogotá; tienen 5 reformas posteriores relacionadas solo con el plazo de existencia de la sociedad, el nombre de la sociedad y asuntos que no tienen incidencia en las pretensiones de la demanda. (Anexo 65)

5.1.2. El término de duración de STO expiró el 31 de diciembre de 2020, según consta en el Acta No. 67 de la Junta de Socios, protocolizada mediante la escritura No. 1906 del 28 de mayo del 2008, otorgada en la Notaría Treinta y Uno de Bogotá. (Anexo 5)

5.1.3. Según el certificado de existencia y representación, actualmente, el capital de STO está compuesto así: (Anexo 5)

Socios	Valor	Cuotas	Porcentaje
ÍTACA LIMITADA	$320.000	3.200	50%
CATAY LTDA	$320.000	3.200	50%
Total	$640.000	6.400	100%

5.1.4. El señor ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA es representante legal de STO desde el 8 de mayo de 1987, a partir del nombramiento de la Junta de Socios consignado en el Acta No. 39 del 27 de abril del mismo año. (Anexo 5)

5.1.5. ÍTACA LIMITADA, socia de STO, también en liquidación, es una sociedad domiciliada en Bogotá, representada por la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER, cuyo objeto social principal es comprar y vender bienes inmuebles y hacer inversiones en los mismos. (Anexo 1)

5.1.6. CATAY LIMITADA, socia de STO, es una sociedad domiciliada en Bogotá, cuyo objeto principal es comprar y vender bienes inmuebles y hacer inversiones en los mismos, y actualmente está representada por GUSTAVO CARRASCO MERINO en el cargo de Gerente; su suplente es el señor FABIO ANÍBAL AMAYA REY. (Anexo 4) ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, hijo de ALBERTO MARULANDA POSADA, fue representante legal de CATAY LIMITADA desde el 30 de mayo de 2013 hasta el 5 de abril de 2019. (Anexo 8)

5.1.7. ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA, en términos del artículo 359 del Código de Comercio, ha tenido y tiene poder de decisión y control de la Junta de Socios de CATAY LIMITADA, según se observa en las votaciones en la asamblea, gracias a su propio aporte de capital (55.5%), y al aporte de MARULESCO SAS (8.2%) en la que también es

socio con capacidad mayoritaria de voto y decisión. Según el certificado de existencia y representación legal (anexo 4) la composición del capital de CATAY es la siguiente:

Socios	Cuotas	Porcentaje
CARLOS SEBASTIÁN OSPINA DELGADO	446	6,37%
DILIA MARGARITA CAMACHO GARCÍA	496	7%
FRANCISCO JOSE CAMACHO GARCIA	497	7,1%
FABIO ANÍBAL AMAYA REY	597	8,5%
ALBERTO MARULANDA POSADA	3.890	55,5%
DILIA GARCIA DE CAMACHO	497	7,1%
MARULESCO SAS	577	8,2

5.1.8. Actualmente, la sociedad MARULESCO S.A.S. tiene como representante legal al señor ALBERTO MARULANDA POSADA, y como representante legal suplente a la señora MARÍA CLAUDIA ESCOBAR DE MARULANDA. (Anexo 9). ALBERTO MARULANDA POSADA es el esposo de la señora MARÍA CLAUDIA ESCOBAR DE MARULANDA, y ambos son padres de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR y de CAMILO MARULANDA ESCOBAR.

5.1.9. La señora MARIA CLAUDIA ESCOBAR DE MARULANDA tiene, con su esposo, el 55% de los votos de la sociedad MARULANDA ESCOBAR SAS, en la que sus hijos ANDRÉS y CAMILO, tienen el 45% restante del derecho a voto. (Anexo 11)

5.1.10. En CATAY LIMITADA, ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA cuenta, usualmente, además de sus votos y los de MARULESCO SAS, con el voto del señor FABIO ANÍBAL AMAYA REY; y, por el contrario, usualmente votan en forma distinta a la suya cuatro **socios minoritarios**, a saber: los 2 socios Camacho García, la señora García de Camacho y el vocero de la sucesión de CARLOS SEBASTIÁN OSPINA DELGADO (q.e.p.d.). Esto se evidenció, por ejemplo, en las últimas dos juntas de socios, celebradas el 23 de marzo de 2018 y el 7 de marzo de 2019, y en las Actas No. 58 y 59 respectivas. (Anexos 26 y 27)

5.1.11. En el Acta No. 58 de la Junta de Socios de CATAY celebrada 23 de marzo de 2018, se observan las diferencias entre los socios mayoritarios (ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA, AMAYA REY y MARULESCO SAS) y los minoritarios. Allí, la representante de la sucesión de CARLOS SEBASTIÁN OSPINA DELGADO (q.e.p.d.) y el señor FRANCISCO CAMACHO GARCÍA, en representación de los demás socios CAMACHO, manifestaron que no estaban de acuerdo en aumentar la vigencia de la sociedad, puesto que el interés común bajo el cual se participaba en la sociedad había dejó de existir. (Anexo 26)

5.1.12. Por su parte, FABIO ANÍBAL AMAYA REY, socio de CATAY, ha tenido una constante y cercana relación con las empresas INGETEC y con ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA. En INGETEC I&D ha tenido diferentes cargos, como administrador desde su constitución en 2008, y a la fecha es el segundo suplente del gerente (en reemplazo de ALBERTO MARULANDA POSADA); en INGETEC SAS actualmente ocupa el cargo de primer suplente del gerente; y en INGETEC G&S es el segundo suplente del gerente. Además, su hijo, ANDRÉS AMAYA VILLANEDA, es accionista de las sociedades INGETEC SAS, INGETEC G&S e INGETEC I&D.

5.1.13. La sociedad MARULESCO S.A.S. con NIT 900.501.556-8, es una sociedad comercial, fue constituida mediante Escritura Publica No. 3634 de la Notaría 23 de Bogotá D.C., el 19 de diciembre de 2011, e inscrita el 18 de enero de 2012. La sociedad se constituyó como sociedad en comandita, y en diciembre de 2017 se transformó en SAS. Actualmente, la sociedad MARULESCO S.A.S. tiene como representante legal al señor ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA, y como representante legal suplente a su esposa, la señora MARÍA CLAUDIA ESCOBAR DE MARULANDA. (Anexo 9)

5.1.14. A diciembre de 2019, la sociedad MARULESCO S.A.S. tenía la siguiente composición accionaria:

ACCIONISTA	ACCIONES	TIPO DE ACCIÓN	% ACCIONES	% DERECHO A VOTO
ALBERTO MARULANDA POSADA	15	A	1,5%	55%
MARÍA CLAUDIA ESCOBAR DE MARULANDA	15	A	1,5%	
ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR	135	B	13,5%	45%
CAMILO MARULANDA ESCOBAR	135	B	13,5%	
MARULANDA ESCOBAR SAS	700	B	70%	

De la composición accionaria de esta sociedad debe resaltarse que existen dos tipos de acciones (tipo A y B), las cuales otorgan diferentes derechos de voto. Por ello, a pesar de que el señor ALBERTO MARULANDA POSADA y su esposa poseen solo el 3% de la participación accionaría, al tener acciones tipo A, estas les otorgan el 55% de derechos de voto. (Anexo 10 y 11). En sus asambleas

ALBERTO MARULANDA POSADA ha tenido poder de decisión, con el concurso de los demás socios.

5.1.15. Además, la sociedad MARULANDA ESCOBAR S.A.S., con NIT 860.041.952-2, que tiene la mayor participación accionaria en MARULESCO SAS, tiene la siguiente composición accionaría:

ACCIONISTA	ACCIONES	TIPO DE ACCIÓN	% ACCIONES	% DERECHO A VOTO
ALBERTO MARULANDA POSADA	5	A	5%	55%
MARÍA CLAUDIA ESCOBAR DE MARULANDA	5	A	5%	
ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR	45	B	45%	45%
CAMILO MARULANDA ESCOBAR	45	B	45%	

En esta sociedad, ALBERTO MARULANDA POSADA y su esposa también tienen una participación accionaria muy pequeña, pero al poseer acciones tipo A, poseen el 55% de los derechos de voto. (Anexo 12). Por lo anterior, él, con el concurso de su esposa y de sus hijos, ha tenido el poder decisorio en las asambleas sociales.

5.1.16. El señor ALBERTO MARULANDA POSADA es representante legal de la sociedad MARULESCO S.A.S., posee junto a su esposa más de la mitad de los derechos de voto, pues cada uno tiene el 27,5% de dichos derechos; también posee junto a su esposa la mayor cantidad de votos en la asamblea de accionistas de la sociedad MARULANDA ESCOBAR S.AS., el mayor accionista de MARULESCO S.A.S. Todo lo anterior le ha dado la capacidad de controlar las decisiones de MARULESCO S.A.S. con el concurso de los demás accionistas; y las de CATAY LTDA.

5.1.17. La sociedad INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS SAS (sigla INGETEC SAS), con NIT 860.001.986-1 es una sociedad comercial, cuyo gerente principal y representante legal es también ALBERTO MARULANDA POSADA. (El 26 de diciembre de 2018 se transformó de sociedad anónima a SAS) (Anexo 6)

5.1.18. La sociedad INGETEC SAS tenía, a diciembre de 2019, la siguiente composición accionaria:

ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE
MARULESCO SAS	240.000	56%
ANJUNI SAS	78.800	19,7%
ACP3 SAS	19.200	4,8%
HORCAS SAS	19.200	4,8%
Daniel Rebolledo D.	16.000	4,0%
LAURASIA SAS	19.400	4,85%
FEJAGAL SAS	19.400	4,85%
Andrés Amaya Villaneda	4.000	1%

De este modo, la sociedad MARULESCO S.A.S., representada por el señor ALBERTO MARULANDA POSADA, tiene el 56% de las acciones de INGETEC SAS. Así se observa en el Acta No. 45 de la Asamblea de Accionistas del 23 de enero de 2020. (Anexo 13). Por el control sobre MARULESCO, ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA ha tenido control y poder decisorio en las asambleas de INGETEC SAS.

5.1.19. La sociedad INGETEC INGENIERÍA & DISEÑO S.A.S. (sigla INGETEC I&D S.A.S), con NIT 900.206.480-2, (el 26 de diciembre de 2018 se transformó de sociedad anónima a SAS), tiene como gerente general y representante legal al señor ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, hijo de ALBERTO MARULANDA POSADA (Anexo 6)

5.1.20. La sociedad INGETEC I&D tenía, a diciembre de 2019, la siguiente composición accionaria:

ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE
MARULESCO SAS	4.478	56%
ANJUNI SAS	1.580	19,8%
ACP3 SAS	384	4,8%
HORCAS SAS	384	4,8%
DANIEL REBOLLEDO D.	321	4,0%
LAURASIA SAS	384	4,8%
FEJAGAL SAS	384	4,8%
ANDRÉS AMAYA VILLANEDA	80	1%

Po lo anterior, se observa que la composición accionaria de INGETEC S.A.S es igual a la de INGETEC I&D, ya que ambas tienen los mismos accionistas con el mismo porcentaje de participación. Por ello, la

sociedad MARULESCO S.A.S., representada por ALBERTO MARULANDA POSADA, también tiene la mayoría accionaria en INGETEC SAS, con el del 56% de acciones. Así se observa en el Acta No. 256 de la Asamblea de Accionistas celebrada el 12 de diciembre de 2019. (Anexo 15). Por su control sobre MARULESCO, ALBERTO MARULANDA POSADA ha tenido control y poder decisorio en las asambleas de INGETEC I&D SAS.

5.1.21. Desde la constitución de INGETEC I&D SA (ahora INGETEC I&D SAS) hasta diciembre de 2019, ALBERTO MARULANDA POSADA fue administrador de esta sociedad. En efecto, fue gerente principal de INGETEC I&D desde el año 2008 hasta diciembre de 2010, cuando fue nombrado en ese cargo su hijo, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR. Y luego, desde diciembre de 2010 hasta el diciembre de 2019, tuvo el cargo de segundo suplente del gerente. (Anexo 15)

5.1.22. La sociedad INGETEC GERENCIA Y SUPERVISIÓN S.A.S (sigla INGETEC G&S) con NIT 900.206.483, tiene como gerente general y representante legal al señor CAMILO MARULANDA ESCOBAR, hijo de ALBERTO MARULANDA POSADA. (Anexo 16)

5.1.23. La sociedad INGETEC G&S SAS tenía a diciembre de 2019 la siguiente composición accionaría

ACCIONISTA	**ACCIONES**	**PORCENTAJE**
INGETEC SAS	4.157	52%
MARULESCO SAS	2.159	27%
ANJUNI SAS	759	9,5%
ACP3 SAS	200	2,5%
HORCAS SAS	200	2,5%
DANIEL REBOLLEDO D.	160	2%
LAURASIA SAS	161	2%
FEJAGAL SAS	161	2%
ANDRÉS AMAYA VILLANEDA	38	0,5%

En INGETEC G&S las sociedades INGETEC S.A.S. y MARULESCO S.A.S., ambas representadas por ALBERTO MARULANDA POSADA, tienen una participación del 52% y 27% respectivamente. Así se observa en el Acta No. 45 de la Asamblea de Accionistas del 21 de enero de 2020. (Anexo 17). Por su control sobre INGETEC SAS y sobre MARULESCO SAS, ALBERTO MARULANDA POSADA ha tenido control y poder decisorio en las asambleas de INGETEC G&S SAS.

5.1.24. En síntesis, a partir de los hechos descritos atrás, ALBERTO MARULANDA POSADA, ha tenido y tiene control y poder de decisión sobre CATAY LIMITADA, INGETEC S.A.S., INGETEC I&D e INGETEC G&S, con los votos que le confieren sus propias acciones o los de las acciones de la sociedad MARULESCO S.A.S., de la cual es representante legal sin limitaciones. Y con el concurso de su esposa y de sus dos hijos ha tenido mayorías superiores al 50% para tomar las decisiones de las asambleas de las sociedades MARULESCO SAS y MARULANDA ESCOBAR SAS.

5.2. ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA, POR RAZÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRIENDO CELEBRADOS EN CONDICIONES DE CONFLICTO DE INTERÉS SOBRE UN EDIFICIO QUE TIENE EN COMÚN CON STO, HA LLEVADO A QUE ÍTACA NO TENGA INTERÉS EN CONSERVAR SU INVERSIÓN EN STO.

5.2.1. Desde 1988, la sociedad STO es propietaria del 66.667%, en común y proindiviso con INGETEC I&D, de un edificio ("Edificio San Martin"), situado en la calle 30 con carrera 6 de Bogotá. El edificio está compuesto por tres partes, físicamente interconectadas y difíciles de separar (Anexo 27), que se identifican por medio de tres folios de matrículas inmobiliarias, a saber, 50C-1236643, 50C-255233 y 50C-255232, y se describen así:

a) El inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. **50C-1236643**, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Calle 30ª No. 6-10 (Calle 30ª No. 5-20) del edificio San Martín, Bloque C, Unidad Privativa No. 2. (Anexo 18)

b) El inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. **50C-255233,** ubicado en la ciudad de Bogotá, en la calle 30ª No. 6-22, local 305. Este inmueble hace parte del edificio San Martín, Bloque B. (Anexo 18)

c) El inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria **No. 50C-255232,** ubicado en la ciudad de Bogotá, en la calle 30ª No. 6-22, garaje 205. (Anexo 20)

5.2.2. INGETEC I&D S.A.S posee el 33% del edificio San Martín, a través de un patrimonio autónomo denominado PARQUEO INGETEC.

5.2.3. Desde julio de 2008, STO ha suscrito diferentes contratos de arrendamiento sobre su parte en el edificio "San Martín", con la sociedad INGETEC I&D y con la sociedad INGETEC G&S, representadas también por ALBERTO MARULANDA POSADA o por CAMILO MARULANDA ESCOBAR (hijo de ALBERTO MARULANDA POSADA).

Hasta junio de 2020 las varias empresas INGETEC tenían buena parte de sus oficinas en el edificio "San Martin".

5.2.4. Los contratos se han renovado en varias ocasiones; y a veces con autorización de la Junta, hasta antes de septiembre de 2016.

5.2.5. El 30 de septiembre de 2016, ALBERTO MARULANDA POSADA, tanto en calidad de representante legal de la sociedad STO (arrendador) como de representante legal de la sociedad INGETEC S.A. (ahora INGETEC SAS) (arrendatario), suscribió un contrato de arrendamiento de las 2/3 partes de la Unidad Privativa No. 2 del Edificio San Martín, Bloque C.

5.2.6. No hubo información ni consulta previa a la Junta para obtener la autorización necesaria para celebrar el contrato al que se refiere el hecho anterior, a pesar del conflicto de intereses. Según los estados financieros de STO, las arrendatarias, vinculadas a ALBERTO MARULANDA POSADA, no pagaban a tiempo los cánones y él, como representante legal de STO, permitía la demora, sin consultar con la Junta, con un pago de intereses. (Anexo 21)

5.2.7. En la reunión de la Junta de Socios de STO del 21 de marzo de 2017, que consta en el Acta No. 76, la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER, en representación de ÍTACA LTDA, conoció por primera vez las condiciones del contrato de arrendamiento, y puso de presente la existencia de un conflicto de intereses por parte del representante legal de STO. El representante de CATAY, ANDRES MARULANDA ESCOBAR, en la Junta, no hizo observación alguna. El acta dice:

> "La señora María Isabel Ospina de Wiesner preguntó por las razones por las cuales el representante legal hizo dicho cambio, dado que ese era un ejemplo del conflicto de interés que existe entre el representante legal y los arrendatarios del único activo de la sociedad." (Anexo 22)

5.2.8. Puesto que ni el representante legal de STO, ALBERTO MARULANDA POSADA, ni el presidente de la Junta, ANDRES MARULANDA ESCOBAR, representante de CATAY en la Junta, ni la abogada de INGETEC S.A., ANA MILENA LOPERA ROZO, que estaba presente, informaron a la Junta los requisitos especiales requeridos para superar una situación de conflicto de interés, la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER, que no es abogada, se limitó a sugerir unos ajustes en el contrato que, tras discusión, fueron aprobados. Con la misma fecha de la Junta, STO e INGETEC S.A. (ahora INGETEC SAS) celebraron el Otrosí No. 1 de fecha

21 de marzo de 2017, al contrato de arrendamiento suscrito el 30 de septiembre de 2016. (Anexo 23)

5.2.9. El contrato de arrendamiento suscrito el 30 de septiembre de 2016 por el señor ALBERTO MARULANDA POSADA, representando ambas partes sin la autorización de la junta de STO, ha sido renovado automáticamente por ALBERTO MARULANDA POSADA hasta la fecha de presentación de esta demanda. Así consta en los informes de gestión del representante legal de los años 2018 y 2019 que se encuentran en las actas de las juntas de socios No. 78 y 79.

5.2.10. En la Junta de Socios de STO celebrada el 23 de marzo de 2018, la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER, como representante de ÍTACA, manifestó su desacuerdo con la gestión de ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA como Gerente de STO y la existencia del conflicto de intereses en el contrato de arrendamiento que se ejecuta. Como ejemplo se refirió a la tolerancia en los retrasos de los cánones y a las bajas tasas de interés que pagaba el arrendatario al retrasarse en los pagos. Es por ello que en el Acta No. 77 quedó la siguiente constancia:

> "La Señora María Isabel O. de Wiesner manifestó su desacuerdo con la gestión del señor (…). En su opinión el señor Marulanda Posada no defiende los intereses de la sociedad y toma decisiones que reflejan un conflicto de interés entre sus obligaciones y responsabilidades como representante legal de STO limitada y sus obligaciones y responsabilidades como empleado, gerente, socio o ex socio (no conozco con certeza la relación que tiene) [original del acta] de Ingetec S.A. Un análisis anual de su gestión y de los estados financieros de STO Limitada muestran como a través de los años las decisiones tomadas han beneficiado a Ingetec S.A. y a sus socios. Como ejemplo, ha pagado anualmente los arriendos pagando una tasa de interés ajustada muy distinta a lo que un banco cobraría por un préstamo de dichas características." (Anexo 24)

5.2.11. Igualmente, la señora MARÍA ISABEL O. WIESNER, actuando en representación de ÍTACA LIMITADA, manifestó en la Junta Ordinaria de Socios de STO del 23 de marzo de 2018 que

> "se han pagado anualmente los arriendos pagando una tasa de interés ajustada muy distinta a lo que un banco cobraría por un préstamo de dichas características." Con

base en esto, señaló que "el representante legal de STO debe exigir el pago a los arrendatarios de los $844 millones dentro de 3 meses y que la tasa de interés a cobrarle a los arrendatarios debe ser una tasa comercial". (Acta No. 77 STO – Anexo 24)

5.2.12. Por su parte, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, actuando como representante de CATAY LIMITADA en la Junta Ordinaria de Socios del 23 de marzo de 2018, simplemente manifestó que la administración siempre ha estado presta a atender cualquier inquietud y que está abierta a que se planteen medidas para la tranquilidad de los socios. (Anexo 24)

5.2.13. Después, en la Junta Ordinaria de Socios de STO del 19 de marzo de 2019, el señor ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR informó sobre una renovación "automática" del contrato. La señora MARIA ISABEL O. de WIESNER, como representante de ÍTACA, manifestó la existencia del conflicto de intereses en el contrato de arrendamiento que se ejecuta y su objeción al mismo. Por eso quedó la siguiente constancia en el Acta No. 78 de dicha Junta:

"La señora María Isabel O. de Wiesner manifestó que no está de acuerdo y tiene objeciones al informe de gestión presentado por el señor Alberto Marulanda Posada, en razón al conflicto de interés con el cual él ha venido administrando la sociedad STO.

A. Inmuebles

Objeto por ilegal la renovación automática que hizo Alberto Marulanda Posada del contrato de arrendamiento suscrito con INGETEC S.A.S. a partir del 1 de Mayo de 2018, por cuanto el representante legal de STO, estando en clara situación de conflicto de interés según lo define el numeral 7 del artículo 23 de la ley 222 de 1995, no pidió autorización expresa a la Junta de Socios para la celebración de dicho contrato. De la misma manera pongo de presente que los contratos de arrendamiento que celebró el señor Alberto Marulanda Posada en calidad de arrendador y arrendatario para los años 2017-2'18, 2016-2017, 2015-2016 y 2014-2015 sobre el inmueble de STO, no contaron con aprobación de la junta de socios, causaron perjuicio a la sociedad, y son nulos. Además, manifiesto que no estoy de acuerdo con que Alberto

> Marulanda Posada pueda prorrogar el contrato de arrendamiento con INGETEC S.A.S. para el periodo mayo 2019 a mayo 2020.
>
> (…)
>
> María Isabel O. de Wiesner manifiesta que de acuerdo con el numeral 7 del artículo 23 de la ley 222 de 1995, sí es necesario tener la autorización expresa de los socios para poder celebrar esos contratos de arrendamiento y no se solicitó." (Anexo 25)

5.2.14. En la misma Junta Ordinaria de Socios de STO del 19 de marzo de 2019, MARÍA ISABEL O. de WIESNER señaló que la voluntad del socio ÍTACA es no prorrogar el contrato de arrendamiento en el mes de mayo de 2019. Así consta en la última página del Acta 78. (Anexo 25)

5.2.15. Por su parte, en la misma Junta Ordinaria de Socios de STO, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, actuando como representante legal de CATAY, defendió la gestión de su padre ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, y manifestó expresamente que no existió conflicto de interés. (página 4 del Acta 78, anexo 25)

5.2.16. Es importante resaltar que MARÍA ISABEL O. de WIESNER, en representación de CARLOS SEBASTIÁN OSPINA DELGADO (QEPD), en la Junta Ordinaria de Socios de CATAY LIMITADA, celebrada el 7 de marzo de 2019, manifestó que considera que existe un conflicto de interés en los contratos celebrados entre STO e INGETEC y que favorecen a esta última sociedad. Así consta en el Acta 59 de la Junta de Socios de CATAY. ANA MILENA LOPERA ROZO, quien aparece como directora jurídica de las sociedades INGETEC, actuó como representante de los socios ALBERTO MARULANDA POSADA y MARULESCO S.A.S. y no hizo observación alguna al respecto. (Anexo 26)

5.2.17. Dada la negativa de ÍTACA a autorizar la prórroga del contrato de arrendamiento al que nos hemos referido atrás, éste terminó su existencia conforme a derecho. Sin embargo, ALBERTO MARULANDA POSADA y la sociedad INGETEC S.A.S. siguieron ocupando la parte del inmueble que les había sido arrendada sin que ALBERTO MARULANDA POSADA hiciera alguna gestión adicional para presentar a la Junta un nuevo contrato y conseguir su aprobación, o para

conseguir un nuevo arrendatario, o para que las sociedades que ocupaban el inmueble lo desocuparan.

5.2.18. Hasta la fecha de presentación de esta demanda, ALBERTO MARULANDA POSADA y las sociedades que él controla han seguido ocupando las áreas del edificio San Martin en Bogotá que les habían sido arrendadas por STO, pese a que, por lo menos desde el año 2016, dada la posición de ÍTACA, es claro que la Junta no tuvo oportunidad formal para pronunciarse y votar sobre un conflicto de intereses explicado por el administrador como obliga la ley, ni autorizó, con la clara información requerida, la celebración de los contratos, y mucho menos su extensión, es decir, pese a la terminación del contrato según derecho.

5.2.19. ALBERTO MARULANDA POSADA, desde el año 2016, y salvo la información incompleta que dio a la Junta en 2017, no hizo alguna gestión adicional para formalizar con aprobación de la Junta un nuevo contrato, o para conseguir un nuevo arrendatario, o para que las sociedades que ocupaban el inmueble lo desocuparan. Ha habido conversaciones informales sobre este contrato entre MARÍA ISABEL O. de WIESNER y ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, pero ninguna decisión nueva de la Junta de socios de STO.

5.2.20. ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, había citado la Junta ordinaria de socios para el 31 de marzo de 2020, pero fue aplazada en forma indefinida, aunque, para esa fecha, ya existía autorización oficial para emplear medios virtuales. Finalmente, luego de varias solicitudes por parte de ÍTACA, entre esas una comunicación del 17 de junio de 2020, se programó la reunión ordinaria, pero en forma virtual, para el 2 de septiembre de 2020. (Anexos 28 y 29)

5.2.21. Al revisar los estados financieros de STO desde 2015 y hasta 2018, se comprueba que, al cierre de cada año fiscal existían cuentas por cobrar a terceros, a favor de STO, por valores que representaban casi el ingreso total anual de la sociedad, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:

AÑO	**ACTIVO CORRIENTE-CLIENTES**
2015	$423.628.158
2016	$667.627.839
2017	$884.644.999

Teniendo en cuenta que el único ingreso de STO proviene de los contratos de arrendamiento, y que del 2015 al 2017 existían cuentas por cobrar por montos entre cuatrocientos y ochocientos millones de pesos, al final de cada año fiscal, se comprueba que los arrendatarios no pagaban los arrendamientos cada mes. Por lo tanto, STO financiaba a las empresas INGETEC -controladas por ALBERTO MARULANDA POSADA- con el valor del canon mensual de arrendamiento, que debería haber ingresado **a la caja** de STO para facilitar allí otras inversiones o lograr intereses. ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA, representante legal de STO, dirigía o toleraba estaba situación irregular en favor de sus empresas arrendatarias, sin urgir el pago, sin cobrar intereses moratorios, y sin obtener garantías.

5.2.22. En relación con la cuenta por cobrar del ejercicio fiscal del 2017, por valor de $844.644.999, mediante comunicación del 8 de marzo de 2018, la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER, como representante legal de ITACA, preguntó a ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante de STO, si existían contratos de préstamos con las sociedades INGETEC G&S e INGETEC SA, ya que habían sido reportadas como las deudoras de dicho monto. Mediante comunicación del 22 de marzo de 2018, ALBERTO MARULANDA POSADA respondió que la cuenta por cobrar correspondía a deudas por concepto de los arrendamientos de los contratos de arrendamientos entre STO y dichas sociedades, por lo que no existían otro tipo de contratos o garantías sobre dichas deudas. Además, manifestó que, en la ejecución de los contratos, se conservan las políticas de manejo implantadas en STO por los representantes legales anteriores, y que ese tipo de manejo ha conducido a que se paguen intereses a la sociedad. (Anexos 63 y 64)

5.3. LA NEGOCIACIÓN DE CESIÓN DE CUOTAS DE INTERÉS SOCIAL DE ÍTACA EN STO; Y LOS OBSTÁCULOS PARA QUE LOS SOCIOS MINORITARIOS DE CATAY SE ENTERARAN DE LAS CONDICIONES DE LA CESIÓN. OBSTÁCULOS PARA IMPEDIR LA CESIÓN DE CUOTAS

5.3.1. Se resumen en este numeral los hechos que se presentarán separados y con detalles en los hechos siguientes.

Por las irregularidades en el arrendamiento de las partes de STO en el edificio SAN MARTÍN, ÍTACA decidió ceder sus cuotas en STO. ALBERTO MARULANDA POSADA, por intermedio de su hijo ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, negoció un precio para comprarlas; y luego ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR indicó que se había designado como

eventual comprador a INGETEC I&D, si CATAY no aceptaba la oferta que debería recibir según las reglas sobre "derecho de preferencia". ALBERTO MARULANDA POSADA y ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR procuraron que solo el representante legal de CATAY conociera y decidiera sobre la oferta, sin que los socios minoritarios de CATAY tuvieran noticia de ella, lo que generó diferencias con ÍTACA, que afirma que la oferta debe ser conocida por la Junta de CATAY, y no solo por el representante legal de esta sociedad. Finalmente, ALBERTO MARULANDA POSADA, obrando como representante legal de STO, y con el argumento de que la oferta de cesión de cuotas a CATAY no debería incluir el contrato condicional acordado con INGETEC I&D, se opone a dar traslado a CATAY de la oferta de ÍTACA, dejando sin aplicar la orden de traslado "inmediato" que contiene el artículo 363 del Código de Comercio. ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, su vocero en la negociación, se negó a seguir con el negocio pactado en lo esencial, alegando, en contravía del artículo 863 del Código de Comercio, que el negocio estaba condicionado a conseguir financiación bancaria.

5.3.2. A inicios del 2019, por sugerencia del señor ALBERTO MARULANDA POSADA, cuando era representante legal tanto de STO como de INGETEC SAS y de INGETEC I&D, la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER, en vista de que sus objeciones más importantes a los contratos de arrendamiento no eran atendidas, y de que ALBERTO MARULANDA POSADA controla a CATAY, no tuvo alternativa a la de iniciar conversaciones con ALBERTO MARULANDA POSADA, en nombre de ÍTACA y en interés de la sucesión de CARLOS S. OSPINA DELGADO (QEPD), para ceder las cuotas de interés social que ÍTACA posee en STO, y las que la sucesión de CARLOS S. OSPINA DELGADO (QEPD) posee en CATAY.

5.3.3. ALBERTO MARULANDA POSADA, en conversaciones entre él y su hijo, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, con MARÍA ISABEL O. de WIESNER, le indicó a ella que el eventual precio para la compra de los derechos sociales de ÍTACA en STO debería ser similar al precio acordado unos años antes para adquirir los derechos de DIEGO LLORENTE MARTÍNEZ; y que el precio debería tener en cuenta varios problemas del edificio. Por eso, aludiendo a esas conversaciones, en carta del 28 de marzo de 2019 MARÍA ISABEL O. de WIESNER pidió a ALBERTO MARULANDA POSADA una oferta. Le informó, además, que, de otra parte, para tener un avalúo independiente y profesional, había contratado la firma Avalúos Nacionales, para cuyo avaluador, DIEGO BOTERO, pedía planos y una indicación de los problemas constructivos y legales que pudieran demeritar el valor del edificio (Anexo 67).

5.3.4. ALBERTO MARULANDA POSADA, expertísimo hombre de empresa, delegó en su hijo, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, empresario igualmente avezado, adelantar negociaciones que permitieran al arrendatario INGETEC I&D comprar las cuotas de interés social de ÍTACA en STO. Esto consta en la carta que envió ALBERTO MARULANDA POSADA, firmando como representante de STO, a ÍTACA el 29 de marzo de 2019, en la que señaló

> La propuesta de compra sobre el porcentaje de copropiedad que posee Servicios Técnicos Omicron Ltda. en los bienes raíces que componen su inversión es tema que ha sido delegado por el arrendatario INGETEC al señor Andrés Marulanda Escobar. (Anexo 30)

5.3.5. Según la había anunciado, y teniendo en cuenta que el único bien de STO es su porcentaje de propiedad en el Edificio San Martín, ÍTACA contrató la firma Avalúos Nacionales S.A. (DIEGO BOTERO), para valorar dicho Edificio, con el fin de obtener el valor de su participación en STO. CATAY, el otro socio de STO, controlado por ALBERTO MARULANDA POSADA, se había negado a colaborar con ÍTACA para realizar un avalúo comercial independiente actualizado del Edificio SAN MARTÍN, tal como consta en las Actas de Junta de Socios 76 y 77 de STO. (Anexos 22 y 24)

5.3.6. El Avalúo Comercial No. 19163/19 de 27 de mayo de 2019, elaborado por Avalúos Nacionales S.A, (Dr. DIEGO BOTERO), estableció un valor de $27,128,808,730.00 por la totalidad del edificio San Martín. Ello implica que el porcentaje de 66.667%. que posee STO tiene un valor de $ $18.085.962.916 (Anexo 31). Y que el 50% que posee ÍTACA en STO debería tener, para el negocio con INGETEC I&D SAS, un valor de $9.042.845.814:

PROPIETARIO	PORCENTAJE DE PROPIEDAD	VALOR
STO	66,667%	$18.085.962.916
ÍTACA	33,333%	$9.042.845.814
TOTAL	100%	$27.128.808.730

5.3.7. ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR no aceptó la invitación de MARÍA ISABEL O. de WIESNER a hacer un avalúo del edificio, alegando que su padre no creía en los avalúos comerciales y que el que aparecía en los estados financieros era un avalúo. Cuando conoció el avalúo, hecho

por decisión de MARÍA ISABEL O. de WIESNER, no expresó objeción alguna y dijo que lo estudiaría. La señora lo invitó a compartir los costos del avalúo y él se negó. El 5 de julio de 2019, en correo de las 4.55 pm. a MARÍA ISABEL O. de WIESNER, en el que hace referencia no explicada a sus métodos de avalúo, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR dice que el valor del 33% del edificio es $6.703´483.703. (Anexo 66)

5.3.8. MARÍA ISABEL O. de WIESNER, en respuesta del 11 de julio de 2019 a la 1:27 pm, al mensaje de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, reitera que él había considerado bien hecho el avalúo de DIEGO BOTERO; y explica que el precio no se puede definir con base en índices generales, por lo que ella había considerado necesario un avalúo hecho con datos concretos y la situación del mercado, como el de BOTERO. Añadió que si tienen necesidades de liquidez se pueden estudiar propuestas sobre plazos para facilitarles la operación. (Anexo 66)

5.3.9. Y luego ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, en mensaje del 24 de julio de 2019 a MARÍA ISABEL O. de WIESNER, dijo que el avalúo no contemplaba la realidad de las adecuaciones que habría que hacer al edificio ni las alternativas que tiene INGETEC en el sector, ni la experiencia que se obtuvo al comprar sus cuotas en STO a DIEGO LLORENTE, experto en construcción. Añadió que, para pagar el precio ofrecido requerirían acudir a endeudamiento, y que si ÍTACA podía vender a un tercero sus cuotas al precio del avalúo no se opondrían, ni a la entrega de una parte física del inmueble. Añadió que no pagaría más de lo ofrecido. (Anexo 66)

5.3.10. La señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER y ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, ambas personas familiarizadas con las prácticas empresariales, y teniendo como antecedente la autorización dada por ALBERTO MARULANDA POSADA a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, tuvieron varias reuniones de negocios, en el Gun Club de Bogotá. Es así como el 9 de octubre de 2019 acordaron que, previa aplicación de las normas sobre derecho de preferencia en interés de CATAY, si había un rechazo de CATAY, un comprador designado por los señores MARULANDA, y no identificado todavía, pagaría $7.600.000.000 por la totalidad de la participación de ÍTACA en STO. El pago de $7.600.000.000 acordado, se haría en cuatro (4) cuotas de $1.900.000.000 pagaderas cada 2.5 meses.

5.3.11. Como se observa, el precio convenido por las cuotas de ÍTACA en STO, era inferior en $1.442´981.458 a los $9.042´981.458 que correspondería al 50% de ÍTACA, según el avalúo de DIEGO BOTERO.

La diferencia entre el precio del avalúo y el precio negociado revela el poder de ALBERTO MARULANDA POSADA en la estructura societaria, pues, siendo él representante legal de STO y controlador de CATAY, sin aprobación de ALBERTO MARULANDA POSADA y CATAY resultaba muy difícil a ÍTACA conseguir un cesionario, como se comprobó más tarde.

5.3.12. Entre MARÍA ISABEL O. de WIESNER y ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR se acordó, también, entre otro precio, para ceder las cuotas de CARLOS SEBASTIÁN OSPINA DELGADO (QEPD) en CATAY. Después se encontró que habría dificultades legales para negociar los derechos de CARLOS SEBASTIÁN OSPINA DELGADO (QEPD) en CATAY, por lo que esa parte del negocio no tuvo desarrollo posterior.

5.3.13. El 10 de octubre de 2019 MARÍA ISABEL O. de WIESNER le envió a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR un correo electrónico aceptando la oferta y las condiciones de pago que se habían negociado el 9 de octubre de 2019. (Anexo 32). Aunque ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR había dicho, para negociar, que tendrían que buscar financiamiento para pagar el precio, MARÍA ISABEL O. de WIESNER le había ofrecido plazos, en tal forma que ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR los aceptó en el acuerdo del 9 de octubre de 2019, en el que no puso como condición que hubiese una financiación bancaria para la adquisición de las cuotas de ÍTACA en STO.

5.3.14. Luego del acuerdo, MARÍA ISABEL O. de WIESNER y ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR intercambiaron una serie de correos electrónicos y mensajes, y tuvieron reuniones en las que precisaron varios elementos no esenciales del negocio. En particular:

a.-Mensaje de WhatsApp del 25 de octubre de 2019, en el que ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR indica que la sociedad cesionaria de las cuotas sería INGETEC I&D SAS, como beneficiario de un fideicomiso (Anexo 33)

b.-Correo electrónico del 17 de noviembre de 2019, en el que la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER le envió a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR un borrador de contrato de cesión de cuotas y el borrador del acta de Junta de socios de STO para autorizar dicha cesión. (Anexo 34, el cual contiene el correo y los anexos) .

c.-Correo del 25 de noviembre de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR a MARÍA ISABEL O. de WIESNER, con comentarios sobre aspectos procedimentales que aparecían en los borradores de contratos que

ella le había enviado para la cesión de cuotas en CATAY y en STO.(Anexo 35)

c.-Correo del 4 de diciembre de 2019, con el cual ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, en dos archivos, devuelve los borradores de cesión de derechos en CATAY e ÍTACA, incorporando en ellos, con el apoyo de "Ana", los cambios a los que se refiere su correo del 25 de noviembre de 2019. (Anexo 35, el cual contiene el correo y los anexos)

d.-Reunión del 18 de diciembre de 2019, con ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, en la que MARÍA ISABEL O. de WIESNER pidió que, como el pago se haría a plazos, y pensando en las vigencias 2019 y 2020, el 50% de las utilidades obtenidas por STO en el tiempo trascurrido entre uno y otro de los pagos a que daría lugar la cesión de cuotas, correspondiera proporcionalmente a ÍTACA; y que también la transferencia del poder de voto de las cuotas cedidas se hiciera en la medida en que se fueran recibiendo los pagos.

e.- ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR respondió en esa reunión que, por las solicitudes de la señora MARÍA ISABEL O. DE WIESNER, y porque ella pedía, además, que se diera aviso del negocio a la Junta de CATAY, la señora MARÍA ISABEL O. DE WIESNER creaba problemas. Y que, para evitar el asunto de los plazos, como le habían aprobado un préstamo bancario, podría hacer un pago de contado, pero que el precio se reduciría a $7.300 millones, esto es, que ÍTACA debería asumir $150 millones, la mitad de los intereses que cobraría el banco. MARÍA ISABEL O. de WIESNER señaló que el préstamo no era asunto suyo y que la propuesta de compartir intereses no era justa. Y, finalmente, cuando ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR aceptó asumir $75 millones de los intereses, el precio de la cesión se redujo de $7.600 millones a $7.375 millones, que se pagarían en un solo contado.

f.-Correo del 22 de enero de 2020, en el que ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR adjuntó el borrador del contrato que se usaría para la cesión de cuotas de ÍTACA LIMITADA a INGETEC I&D en STO. En el borrador no aparece la condición de que el negocio quedaba condicionado a que hubiese un préstamo de un Banco (Anexo 36).

g.-Correo del 3 de febrero de 2020, en el que MARÍA ISABEL O. de WIESNER recordó a su destinatario, refiriéndose al borrador recibido, que era indispensable que se diera una oferta previa por parte de ÍTACA a CATAY, la cual debía quedar mencionada en el

acuerdo de cesión, entre otros aspectos de la transacción. (Anexo 37)

5.3.15. Los Estatutos Sociales de STO no contienen ninguna estipulación específica respecto al ejercicio del derecho de preferencia, pero el literal "g" de su artículo octavo atribuye a la Junta de Socios las funciones que la ley misma dispone para ese órgano social; por lo tanto, incorpora de ese modo a los estatutos las reglas de los artículos 362, 363, 364, 365 y 366 y 367 del Código de Comercio, relativas a la reforma estatutaria que debe hacer la Junta para que los socios puedan ceder sus cuotas de interés social a terceros. (Anexo 65)

5.3.16. El 7 de febrero de 2020, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR envió correo electrónico a MARÍA ISABEL O. de WIESNER, y en respuesta a la comunicación del 3 de febrero dijo:

> "En cuanto a la necesidad previa de una oferta por parte de ÍTACA a Catay, suponemos que se refieren a la de agotar el derecho de preferencia antes de la cesión que ÍTACA pudiera hacer de sus cuotas a un tercero. Sobre este requerimiento, aun cuando no está contemplado en los estatutos de STO para la cesión de cuotas, no tenemos inconveniente. No obstante, consideramos que no es necesario incluir el agotamiento de ese requisito en el contrato de cesión entre ÍTACA e INGETEC I&D." (Anexo 38)

5.3.17. Mediante correo electrónico del 3 de marzo del 2020, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR envió a MARIA ISABEL O. de WIESNER seis documentos en formato Word, en respuesta al correo del 3 de febrero de 2020, uno de los cuales contenía el texto acordado del contrato; los otros se referían a los trámites que deberían cumplirse para satisfacer requisitos legales. La señora ANA MILENA LOPERA ROZO, que actuaba como directora jurídica de las sociedades INGETEC, (quien también redacta documentos que serían firmados por el representante legal de CATAY LIMITADA), preparó, o envió los documentos (Anexo 39). Estos eran:

a. Borrador de la oferta o carta de ofrecimiento de las cuotas parte de ÍTACA con destino al representante legal de STO. (anexo 39.1)

b. Borrador de la carta a través de la cual el representante legal de STO remite a GUSTAVO CARRASCO MERINO, representante legal

de CATAY LIMITADA, la oferta de cesión de ÍTACA LIMITADA. (Anexo 39.2)

c. Borrador de la carta a través de la cual GUSTAVO CARRASCO MERINO, como representante legal de CATAY LIMITADA, informa que esa sociedad no ejercerá su derecho de preferencia sobre las cuotas partes ofrecidas. La carta no indica que la oferta habría sido llevada a la Junta de socios de CATAY. (Anexo 39.3)

d. Borrador del proyecto de acta de junta de socios de STO en la cual se acepta y formaliza la cesión, se aprueba la reforma estatutaria derivada de dicha cesión, y se nombra representante legal suplente pues, hecha la cesión, no había razón para que MARIA ISABEL O. DE WIESNER conservara dicho cargo en STO. (anexo 39.4)

e. Borrador de la carta, para ser suscrita por GUSTAVO CARRASCO MERINO, representante legal de CATAY LTDA, en la que se ratifica que CATAY no ejercerá su derecho de preferencia para adquirir las cuotas que ofrezca ÍTACA. En el borrador de la carta no se indica que la decisión haya sido aprobada por la Junta de Socios de CATAY. (Anexo 39.5)

f. Texto del eventual contrato de cesión de cuotas que se celebraría entre ÍTACA LIMITADA e INGETEC I&D S.A.S, en el cual no se menciona nada relacionado con el derecho de preferencia de CATAY LTDA, o con la condición de un financiamiento bancario. (Anexo 39.6).

5.3.18. El 9 de marzo de 2020, el señor EDUARDO A. WIESNER ACERO, en representación de su esposa MARÍA ISABEL O. de WIESNER, remitió correo electrónico a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR con tres (3) documentos preparados por el Dr. PALACIOS MEJÍA, con observaciones del Dr. PALACIOS a los seis (6) documentos que ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR había enviado por correo electrónico a MARÍA ISABEL O. DE WIESNER el 3 de marzo de 2020. (Anexo 40, el cual contiene el correo y los anexos).

5.3.19. Uno de los 3 documentos enviados a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR el 9 de marzo, tiene fecha del 6 de marzo, y es un concepto del Dr. PALACIOS MEJÍA sobre los documentos recibidos de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR. En el numeral 3 de ese concepto, relativo a la carta propuesta por ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR para que el Dr. GUSTAVO CARRASCO, representante legal de CATAY LTDA., manifieste que esta sociedad no tiene interés en adquirir las cuotas

ofrecidas, el Dr. PALACIOS MEJÍA indica que es necesario que el Dr. GUSTAVO CARRASCO consulte a la Junta de socios de CATAY LTDA, e informe que la Junta rechazó la oferta, si ese es el resultado. El Dr. PALACIOS MEJÍA advirtió que el certificado de existencia y representación legal de CATAY LIMITADA contenía una limitación a las facultades del representante legal, según la cual, para los actos cuya cuantía excediera de $500.000.000, el representante legal debería obtener autorización de la Junta de Socios; y que, por cuanto la oferta de cuotas que haría ÍTACA excede ese valor, debería ser llevada a la Junta de Socios de CATAY sin que el representante legal de esta sociedad tuviera autorización para aceptarla o rechazarla sin contar con la Junta. (El Anexo 40, contiene el correo y los anexos; y el certificado de existencia y representación legal de CATAY se allega como anexo 4)

5.3.20. Como respuesta a las observaciones del Dr. PALACIOS MEJÍA, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, en correo electrónico del 26 de marzo del 2020, remitió el concepto del abogado Dr. DANIEL GARCÍA PIÑEROS, preparado para las sociedades INGETEC. Allí, el abogado afirma que podría considerarse que el rechazo de la oferta de cesión de cuotas hace parte del ejercicio del derecho de preferencia, por lo que este acto podría calificarse como un acto "sin cuantía", y, por ende, para la cesión de cuotas no se aplicaría dicha limitación. Aclaró el Dr. GARCÍA PIÑEROS que, frente a este tema, no existe una posición categórica o legal, y que, en consecuencia, habría de atenerse a la interpretación que se quiera dar al asunto. Es importante resaltar que la abogada ANA MILENA LOPERA ROZO había indicado que el rechazo a la oferta era un acto "sin valor". (Anexo 41, el cual contiene el correo y los anexos)

5.3.21. En el correo del 26 de marzo de 2020, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR también incluyó un texto para el contrato y para los documentos enviados el 3 de marzo de 2020, ajustados por ANA MILENA LOPERA ROZO, directora jurídica de INGETEC, a algunas de las observaciones del doctor PALACIOS MEJÍA. En el correo del 26 de marzo ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR informó que se eliminaba el documento No. 5, que correspondía a la carta rechazo de la oferta de parte de CATAY LIMITADA, "teniendo en cuenta que con la manifestación efectuada de forma previa a la celebración de la junta de socios de STO es suficiente."

5.3.22. Ni en estos documentos, ni en ninguno anterior, la adquisición de las cuotas de interés social de ÍTACA en STO aparecía condicionada al financiamiento de los bancos.

5.3.23. Puesto que, en la Junta de socios de CATAY, ALBERTO MARULANDA POSADA tenía sobrada capacidad decisoria, ÍTACA consideró extraño que el correo del 26 de marzo de 2020 no explicara por qué se quería prescindir de una constancia formal del rechazo de CATAY a la oferta, para adelantar este negocio.

5.3.24. Al eliminar el documento 5, como informó ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR en el correo del 26 de marzo de 2020, era claro que la propuesta de cesión de cuotas no llegaría a la Junta de socios de CATAY, en la cual, como se relató arriba, había un grupo de socios minoritarios, usualmente opuestos a las propuestas de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR y ALBERTO MARULANDA POSADA.

5.3.25. De esta manera, con el texto del contrato que envió ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR el 26 de marzo, las partes quedaron de acuerdo en cuanto a los elementos esenciales -objeto, precio, plazo- (artículos 363 y 845 del Código de Comercio) del contrato de cesión que, eventualmente, ÍTACA e INGETEC I&D celebrarían, cuando se hubiera cumplido con el deber de ofrecer el negocio a CATAY y ésta lo hubiera rechazado. (Anexo 41.1)

5.3.26. ÍTACA aceptó los elementos esenciales -objeto, precio, plazo- (artículos 363 y 845 del Código de Comercio) del documento que envió ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR con el texto del contrato eventual, y los incorporó en la oferta que luego hizo a CATAY, el 24 de julio del 2020, con variaciones formales o sobre asuntos accidentales, como se verá adelante.

5.3.27. Ante el concepto del 26 de marzo, del Dr. GARCIA PIÑEROS, en el sentido de que no era necesario conseguir que la Junta de CATAY LTDA. se pronunciara sobre la oferta de cuotas en STO que le dirigiría ÍTACA, el 6 de abril del 2020, la señora MARIA ISABEL O. de WIESNER envió un correo a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, diciéndole que había recibido un concepto muy largo de Dr. PALACIOS MEJÍA, que expresaba su desacuerdo con los abogados ANA MILENA LOPERA y DIEGO GARCÍA PIÑEROS, y ofreció enviarlo si ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR lo pedía. Añadió, como propuesta para solucionar el impasse, que se incluyeran en el contrato unas cláusulas para indemnizar a ÍTACA, en caso de que, luego de celebrado el contrato, alguna autoridad tomara una decisión que pudiera perjudicar a ÍTACA si el representante legal de CATAY se abstenía de consultar la oferta con su Junta, en la que, como se relató

atrás, hay socios minoritarios opuestos usualmente a las propuestas de los MARULANDA. (Anexo 43).

5.3.28. ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR pidió el concepto del Dr. PALACIOS MEJÍA, en mensaje del 7 de abril, a las 10:47 A.M. El mismo 7 de abril del 2020, a través de correo electrónico, MARÍA ISABEL O. de WIESNER, respondió: "envío lo solicitado", esto es, el concepto de PALACIOS MEJÍA. En ese concepto, fechado el 3 de abril de 2020, PALACIOS MEJÍA, asesor de ÍTACA, explicó, que, según la ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado, y la enseñanza de profesores de finanzas, el derecho de CATAY LIMITADA a recibir una oferta de cesión de cuotas sociales, constituye una "opción", cuyo valor es determinable, y que, en este caso concreto, sería superior a $500 millones de pesos. Y que, por ello, para que el representante legal de CATAY pudiera manifestar un rechazo a la oferta, debería haber recibido instrucciones de la Junta de Socios, sin que pudiera decidir el asunto por sí solo. (Anexo 42)

5.3.29. Hubo silencio de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, por lo que el 17 de abril de 2020, en mensaje enviado a la 1:53 p.m. MARÍA ISABEL O. de WIESNER le preguntó a MARULANDA ESCOBAR cómo iban con el tema. Y el 21 de abril de 2020 ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR envió un mensaje al teléfono celular de MARÍA ISABEL O. de WIESNER -no a su correo electrónico- pidiendo una cita para conversar. Al responder MARÍA ISABEL O. de WIESNER, quedó acordada una cita telefónica para el miércoles 22 de abril de 2020, a las 4:30 pm.

5.3.30. Relata MARÍA ISABEL O. de WIESNER que el 22 de abril de 2020, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR y MARÍA ISABEL O. de WIESNER conversaron, y MARULANDA ESCOBAR manifestó que la preocupación del doctor PALACIOS MEJÍA era válida, por lo que proponía un acuerdo interno para transformar a STO en una SAS y no tener que acogerse al "derecho de preferencia"; y que también creía que se podía convocar a una junta de socios de CATAY LIMITADA, en la cual su padre y FABIO AMAYA (socio de CATAY) ratificarían lo decidido por GUSTAVO CARRASCO MERINO, representante legal de CATAY LIMITADA. MARÍA ISABEL O. de WIESNER le ofreció consultar con el Dr. PALACIOS MEJÍA, ante lo cual ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR aceptó.

5.3.31. El mismo 22 de abril MARÍA ISABEL O. de WIESNER y EDUARDO ALBERTO WIESNER consultan por teléfono a PALACIOS MEJÍA, quien informa que la transformación sería legal, pero que podría ser

interpretada como fraudulenta porque tendría como propósito no informar, a los socios de CATAY LTDA, de los detalles del negocio. MARÍA ISABEL O. de WIESNER le preguntó, a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, en correo electrónico, por el estado del asunto, y el 4 de mayo éste le respondió que la transformación se podría hacer en ese momento en la Cámara de Comercio de Bogotá, con un acta firmada y un pago con tarjeta de crédito. MARÍA ISABEL O. DE WIESNER le contesta el mismo día, a las 9:42, "Listo., hazlo". (Anexo 68)

5.3.32. El 14 de mayo de 2020, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR y MARIA ISABEL O. de WIESNER volvieron a hablar por teléfono. Ese mismo día MARIA ISABEL O. de WIESNER le envió a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR un correo electrónico deseándole que pudiera definir pronto la gestión que él había iniciado con un banco, sin expresar que ello fuera una condición para celebrar el negocio, y tratando otros asuntos, así: (Anexo 44)

> "Me parece importante resumir las conclusiones de nuestra conversación de hace un rato.
>
> 1. Dada la situación actual, el banco te está solicitando una mayor garantía real de parte de Ustedes para desembolsar el préstamo que ya les había aprobado. Espero puedas llegar a un acuerdo con ellos lo antes posible.
>
> 2. Transformación de la sociedad STO de limitada a SAS- Tu propusiste esto como solución al tema legal que encontró Hugo Palacios Mejía. Sugiero seguir adelante con esto pues hay que tener todo listo para lograr la transformación de la sociedad de manera que podamos hacer el negocio apenas se logre tu tema con el banco.
>
> Por otro lado, te quisiera pedir nos anticipes las utilidades del año 2019". (Se hace referencia a las utilidades de ÍTACA EN STO)

5.3.33. El mismo 14 de mayo de 2020, el doctor PALACIOS MEJÍA envió un correo a EDUARDO A. WIESNER ACERO (esposo de MARÍA ISABEL O. DE WIESNER), en respuesta formal a la consulta de ella sobre la propuesta de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR de transformar STO a una sociedad por acciones simplificada. El doctor PALACIOS MEJÍA, que ya antes había expresado reservas sobre la propuesta, manifestó que la estrategia de transformar a STO en SAS permitiría prescindir

del derecho de preferencia de CATAY, pero que dicha transformación podría mirarse como fraudulenta, pues su propósito era privar a CATAY de un derecho que actualmente tenía. Y que, por lo tanto, recomendaba insistir en que se diera traslado a la Junta de CATAY, en donde ALBERTO MARULANDA POSADA tenía suficientes votos para que se adoptara la decisión que él quisiera adoptar, pero todo el procedimiento sería más sencillo y transparente. Recomendó, en todo caso, enviar la oferta a CATAY para adquirir la posibilidad de negociar con cualquiera si ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR no quisiera hacer el negocio. (Anexo 45)

Luego, no se volvió a hablar de la transformación de STO en otro tipo de sociedad.

5.3.34. Mediante comunicación del 17 de junio de 2020, MARÍA ISABEL O. de WIESNER, como representante de ÍTACA LIMITADA, dirigida a ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante de STO, manifestó la necesidad de tener la Junta ordinaria de STO, aplazada, como se informó atrás. Se refirió a varios de los asuntos propuestos por ALBERTO MARULANDA POSADA a comienzo de año para la agenda de la frustrada Junta ordinaria de marzo de 2020, y entre ellas, a la propuesta de extender la vida de STO, que ALBERTO MARULANDA POSADA había hecho en el informe de gestión enviado, desde entonces, a los socios. Indicó la representante de ÍTACA que, aunque no aprobaría esa propuesta de reforma de estatutos en una junta ordinaria de STO, sí estaría dispuesta a aprobarla en una junta extraordinaria, que se había planteado para culminar la cesión de derechos sociales, y que estaba demorada por la renuencia de algunas personas a adoptar las medidas legales necesarias para ello, aludiendo a las diversas alternativas que se relataron arriba, respecto a los trámites para cumplir con el "derecho de preferencia" de CATAY. La representante de ÍTACA añade que, para no interferir con una pronta reunión de la Junta ordinaria que había sido aplazada, la reforma estatutaria propuesta por ALBERTO MARULANDA POSADA se podría hacer luego. Ella no hizo mención alguna a otras condiciones, o a diferencias en cuanto al acuerdo mismo de cesión (Anexo 47).

5.3.35. Mediante correo electrónico de la abogada del grupo INGETEC, ANA MILENA LOPERA ROZO, a MARÍA ISABEL O. de WIESNER, llegó una carta fechada el 19 de junio de 2020 de ALBERTO MARULANDA POSADA a MARÍA ISABEL O. de WIESNER, en la que aquel responde la comunicación del 17 de junio de 2020 (Anexo 47), y, entre otras cosas, le dice a la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER que:

> "Por otro lado, con relación a lo manifestado en su carta sobre: "...el asunto se haya demorado por la renuncia (sic) de algunas personas a adoptar las medidas legales necesarias para culminar la cesión de derechos que deseamos hacer.", manifestamos que a la fecha no cursa en la sociedad STO una oferta de cesión de cuotas partes de interés por parte de la sociedad ÍTACA Ltda." (Anexo 46)

5.3.36. En vista de que ALBERTO MARULANDA POSADA atribuyó las demoras en la negociación a la falta de una oferta de cesión de cuotas -**y no a otros asuntos ni a la necesidad de obtener créditos bancarios**- el 24 de julio de 2020, MARÍA ISABEL O. de WIESNER, como representante legal de ÍTACA LTDA, envió al señor ALBERTO MARULANDA POSADA, en su calidad de representante legal de STO, la oferta de cesión de la totalidad de la participación de ÍTACA LTDA en STO, y pidió que se diera traslado a CATAY LIMITADA. (Anexo 48).

5.3.37. En dicha carta se solicitó expresamente poner en conocimiento de CATAY la totalidad del negocio, con todos los detalles y aspectos esenciales -objeto, precio, plazo- (artículos 363 y 845 del Código de Comercio) del proyecto de contrato de cesión de cuotas que se había negociado con INGETEC I&D, y que aparecía en los documentos que ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR envió a MARÍA ISABEL O. de WIESNER el 26 de abril de 2020. Y se señaló que, si CATAY manifestaba no querer ejercer su derecho de preferencia, se sometería en seguida a la Junta de socios de STO la decisión de ofrecer las cuotas a INGETEC I&D SAS como tercero.

5.3.38. La propuesta de cesión de cuotas que hacía parte de los documentos que ÍTACA remitió a ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante de STO, no difería en los **elementos esenciales** -objeto, precio, plazo- de la que ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR había enviado a ÍTACA en el correo del 26 de marzo. Pero sí contenía unas pocas diferencias formales y accidentales.

5.3.39. Las principales diferencias entre el borrador que envió ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR el 26 de marzo y el proyecto de contrato que ÍTACA envió como oferta a CATAY el 24 de julio de 2020, consisten en que la oferta de contrato de ÍTACA:

(i) pedía, en el considerando tercero, que se dejara constancia de que CATAY (no mencionada por su nombre) había rechazado previamente la oferta;

(ii) en la oferta de ITACA a CATAY no se incluyó una frase propuesta por MARULANDA ESCOBAR para el numeral 2.2 del contrato y relativa a un descuento que se haría, antes de firmar la escritura, de un 50% de los costos estimados de notaría y registro;

(iii) en la cláusula 2.3 de la oferta de ITACA a CATAY el cesionario autorizaba a STO para pagar al cedente no solo las utilidades de STO que correspondieran a las cuotas que adquiriera y que se hubieran causado en el año 2019 sino las que, proporcionalmente, se hubieren causado también en el año 2020; y

(iv) en la cláusula 2.4, la oferta de ÍTACA a CATAY, en concordancia con su propuesta para el considerando tercero del contrato, contemplaba una indemnidad para ÍTACA si alguna autoridad competente llegara a determinar que los procedimientos de la cesión no se ciñeron a las normas legales o estatutarias.

5.3.40. Como se observa, los puntos (i) y (iv) de la oferta de ÍTACA a CATAY del 24 de julio tenían el simple propósito de dar certidumbre jurídica al negocio, en el evento de demandas de los socios minoritarios de CATAY si acaso el procedimiento escogido por ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, con la autorización de ALBERTO MARULANDA POSADA y el concepto del abogado GARCÍA PIÑEROS y la Gerente del Departamento Jurídico de INGETEC SAS, ANA MILENA LOPERA ROZO, consistiera en prescindir de la Junta de CATAY y atenerse a una simple carta de su representante legal en la que se rechazara la oferta.

5.3.41. En respuesta a la solicitud de trasladar a CATAY la oferta de cesión de ÍTACA, que esta sociedad hizo a ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, el 29 de julio de 2020, ALBERTO MARULANDA POSADA envió comunicación a ÍTACA LTDA afirmando que tenía ciertas observaciones a la cesión, las cuales deberían ser superadas antes de poner en conocimiento de CATAY LTDA la oferta de cesión de cuotas. (Anexo 49)

5.3.42. Las observaciones de MARULANDA POSADA, representante legal de STO, para no transmitir a CATAY la oferta de ÍTACA, tal como ésta la había enviado, eran las siguientes:

1) que como los estatutos sociales de STO no contemplan estipulaciones relacionadas con el derecho de preferencia, se

deben cumplir los artículos 363 y siguientes del Código de Comercio, así como el artículo 845 en relación con la oferta;

2) **que la oferta debe contener como mínimo los elementos esenciales del negocio, y que al respecto no tiene ninguna observación**;

3) que la Superintendencia de Sociedades ha indicado que se deben agotar los requisitos del artículo 363 del Código de Comercio antes de ofrecer las cuotas sociales a un tercero, siempre y cuando se haya verificado que ningún otro socio se encuentra interesado en adquirir las cuotas ofrecidas;

4) que se entiende que el ofrecimiento de cuotas a socios y a terceros son dos momentos diferentes, y que la cesión de cuotas a terceros solo se puede dar cuando se constate que ninguno de los socios desea ejercer el derecho de preferencia;

5) que en la comunicación se evidencia que ya se dio una intención de adquisición de las cuotas por parte de un tercero, con lo que podría entenderse que ya existe un acuerdo con ese tercero, sin haberse agotado lo establecido en el artículo 363 del Código de Comercio, lo que podría llegar a implicar un desconocimiento del derecho de preferencia de CATAY; y

6) que al representante legal le corresponde verificar que la comunicación y el procedimiento de cesión de cuotas se ajusten a la ley, y que no es posible por el momento dar traslado a la comunicación, ya que la misma no se ajusta a las normas citadas y no reúne los requisitos para surtir el derecho de preferencia, lo que podría llevar a "un tema de nulidades".

5.3.43. Es de notar que las negociaciones previas entre ÍTACA e INGETEC I&D, que ALBERTO MARULANDA POSADA quería que ÍTACA ocultara ahora, habían sido conocidas y autorizadas por él, por escrito, desde marzo de 2019. En su respuesta del 29 de junio, ALBERTO MARULANDA POSADA no hizo reparo alguno al texto del contrato propuesto, ni manifestó que no correspondiera a lo que se había previsto, condicionalmente, con INGETEC I&D SAS; ni hizo mención alguna a que el contrato con esta sociedad estuviese condicionado a un financiamiento bancario.

5.3.44. El 5 de agosto de 2020, la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER contestó la carta del 29 de julio de 2020, y manifestó que no podía

aceptar los argumentos del señor ALBERTO MARULANDA POSADA. Explicó que, por supuesto, la negociación con un tercero no podría hacerse mientras no se hubiese recibido la respuesta de CATAY, pero que sí podía hacerse tal negociación, como se había hecho, bajo la condición de que, habiendo hecho la propuesta a CATAY, la respuesta de ésta fuera negativa. Añadió que, en la comunicación en la que pidió el traslado de la oferta, incluyó como parte de ella el proyecto de contrato negociado con ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, como representante legal de INGETEC I&D, ya que ésta era la forma más transparente de cumplir con el requisito del artículo 363 del Código de Comercio, y de facilitar la etapa final del negocio que incluía la aceptación de la Junta de STO al socio que remplazaría a ÍTACA. Además, manifestó que, con ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, se había acordado que ese mismo texto se usaría con CATAY para contratar, si CATAY aceptara la oferta. (Anexo 50)

5.3.45. En la comunicación del 5 de agosto de 2020, la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER también incluyó las razones jurídicas que el asesor HUGO PALACIOS dio respecto a los argumentos que usó ALBERTO MARULANDA POSADA para negarse a dar traslado de la oferta a CATAY. Tales razones se pueden resumir así:

1) que el artículo 363 del Código de Comercio ordena al representante legal "*dar traslado inmediatamente*" de la oferta, lo que significa que él no tiene facultad legal para negarse, y que las partes de la cesión son quienes deben responder por la legalidad del negocio, y que el representante legal de la sociedad cuyas cuotas se negocian no adquiere derecho ni obligaciones en el negocio;

2) que el concepto de la Superintendencia de Sociedades (Oficio 93125 del 2012), que se citó en la respuesta de ALBERTO MARULANDA POSADA, no se refiere al artículo 363, sino al 365, que regula un eventual evento posterior a la oferta relacionado con el hecho de que ningún socio haya aceptado la oferta y no se haya obtenido autorización para el ingreso de un tercero;

3) que el Oficio 220-133177 del 1 de julio de 2016 de la Superintendencia de Sociedades, que se refiere al artículo 365 del Código, señala que no es indispensable que la oferta de cesión de cuotas en las sociedades de responsabilidad limitada se acompañe con la presentación de un tercero a la junta de socios, lo que significa que "*esa presentación, aunque no es indispensable como algunos afirmaban, puede hacerse desde la*

formulación de la oferta, pues no solo ninguna norma lo prohíbe, sino que, como explicó el Consejo de Estado en la sentencia que cita el Oficio 220-133177 de 2016, la presentación temprana del tercero puede ser muy útil para evitar llegar a las dificultades a las que puede dar lugar el artículo 365 del Código de Comercio."

5.3.46. Finalmente, en la comunicación del 5 de agosto de 2020 (Anexo 50), la señora MARIA ISABEL O. de WIESNER solicitó a ALBERTO MARULANDA POSADA:

a.- Le ruego transmitir <u>inmediatamente</u> a Catay Ltda. nuestra carta de oferta, con el proyecto de contrato que acompañamos y que hace parte integral de tal oferta; lo liberamos de cualquier responsabilidad que pudiera surgir del simple hecho de hacer esa transmisión inmediata e íntegra, esto es, de la carta y del proyecto de contrato. Y saldremos en su defensa si un tercero procura imputarte responsabilidad por ese simple hecho.

b.- Por el contrario, si se abstiene, con cualquier motivo, de hacer la transmisión <u>inmediata</u> que pedimos, le haremos responsable de los perjuicios que ello nos ocasione, y apoyaremos a cualquier tercero que resulte perjudicado por su omisión.

c.- Catay Ltda. decidirá si acepta o no la oferta que le hacemos, tal como la hacemos. Si acepta la oferta, haremos el negocio con Catay Ltda. Si no la acepta, <u>por cualquier motivo</u>, estaremos listos a hacer el negocio acordado condicionalmente con INGETEC I&D S.A.S.

5.3.47. El 6 de agosto de 2020, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR escribió a MARÍA ISABEL O. de WIESNER, informando sobre problemas derivadas de la dificultad de conseguir financiación de los bancos, e invitando a buscar alternativas. (Anexo 51).

5.3.48. En los estados financieros de INGETEC I&D del año 2019, aprobados y certificados por su representante legal y revisor fiscal, se puede observar que la sociedad tiene unos activos totales de más de $34 mil millones de pesos frente a un pasivo total de $13 mil millones, y unos ingresos ordinarios de $35 mil millones de pesos, con una ganancia neta de $9 mil millones de pesos. La utilidad habría sido suficiente, por sí sola, para pagar el precio convenido con ÍTACA.

Todo demuestra una sólida situación financiera de INGETEC I&D, y su capacidad para seguir adelante con el negocio acordado con ÍTACA, con o sin el apoyo de un banco determinado. (Los estados financieros de INGETEC I&D se pueden verificar en el Anexo 52)

5.3.49. Al revisar los estados financieros de INGETEC SAS del año 2019, también se puede encontrar una sólida situación financiera con activos de $63 mil millones de pesos frente a pasivos de $43 mil millones y una ganancia neta de casi $3 mil millones de pesos. (Los estados financieros de INGETEC SAS se pueden verificar en el Anexo 53). Dados los vínculos entre las diversas sociedades INGETEC, los estados financieros de esta sociedad ponen de presente que podría colaborar con INGETEC I&D para financiar el negocio con ITACA, si INGETEC I&D lo requiriera.

5.3.50. MARÍA ISABEL O. de WIESNER contestó a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR el 11 de agosto de 2020, manifestando su voluntad de diálogo y reiterando que, aunque ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR había informado sobre una negociación con los bancos, la cesión de cuotas nunca estuvo condicionado a la aprobación de tal financiación, y que ÍTACA seguía dispuesta a hacer el negocio como se había planteado. Y el 13 de agosto de 2020 MARÍA ISABEL O. de WIESNER envió un mensaje a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR indicándole oportunidades para dialogar. (Anexo 54)

5.3.51. El 11 de agosto de 2020, ALBERTO MARULANDA POSADA, actuando como representante legal de STO, dio respuesta a la comunicación que le había enviado la señora MARIA ISABEL O. de WIESNER el 5 de agosto, reiterando los argumentos expuestos en su carta del 29 de julio de 2020, y manifestando que no daría trámite a la oferta a CATAY. Respecto al Oficio 220-133177 de la Superintendencia de Sociedades, el señor MARULANDA POSADA manifestó que tiene una interpretación diferente, y que ÍTACA LTDA no ha cumplido con los términos del artículo 363 del Código de Comercio. Finalmente, en esta comunicación se afirma que, si bien la negociación de las cuotas sociales se adelantó con ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, a quien llama "familiar" en la carta, ellos deben actuar como administradores de sociedades diferentes. (Anexo 55)

5.3.52. El 14 de agosto de 2020 ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, quien había actuado por recomendación escrita de ALBERTO MARULANDA POSADA en la negociación que derivó hacia INGETEC I&D S.A.S., se dirige a MARÍA ISABEL O. de WIESNER, **finalmente,** y le indica que el negocio para la eventual compra de sus derechos sociales estaba

condicionado a obtener financiación de los bancos. Concluye diciendo:

> "En consecuencia, además de los reparos manifestados a las condiciones contractuales solicitas (sic) por ustedes, sin una fuente de financiación en firme, mal haría en seguir adelante en estas circunstancias." (Anexo 56).

5.3.53. Cuando ALBERTO MARULANDA POSADA se negó a transmitir a CATAY la oferta de cesión de cuotas sociales de ÍTACA en STO, siendo representante legal de STO, y teniendo poder de decisión en CATAY, causó daños y perjuicios a ÍTACA, patrimoniales y extrapatrimoniales, porque:

(i) Dañó a ÍTACA al impedir que ésta pudiera concluir, como estaba acordada, la cesión de sus cuotas sociales en STO, y recibir **$ 7.375 millones, que era el precio pactado**; y estableció un precedente que dificulta aún más la cesión de tales cuotas a un tercero, reduciendo sustancialmente su valor. Y dañó a ÍTACA, por cuando el precedente hace difícil que terceros independientes encuentren interés en adquirir cuotas de interés social en STO.

(ii) Dañó a ÍTACA al impedir que ésta obtuviera en el mercado los rendimientos que habría percibido al invertir **$ 7.375 millones, que era el precio pactado** para la cesión. Y dañó a ÍTACA, por cuando el precedente hace difícil que terceros independientes encuentren interés en adquirir cuotas de interés social en STO.

(iii) Dañó a ÍTACA, al impedir a ÍTACA el ejercicio del derecho que concede a todos los socios de STO el artículo 362 del Código de Comercio a ceder su participación en la sociedad STO, y el que le concede a todos los socios el artículo 363 del mismo Código a que sus ofertas de cesión se transmitan inmediatamente a su destinario. Y el precedente hace difícil que terceros independientes encuentren interés en adquirir cuotas de interés social en STO.

(iv) Dañó a ÍTACA cuando, como representante legal de la sociedad STO, se abrogó el derecho que no tenía de

transmitir o no las ofertas de cesión que hicieran los socios. Y dañó a ÍTACA, pues ese precedente hace difícil que terceros independientes encuentren interés en adquirir cuotas de interés social en STO.

(v) Dañó a ÍTACA, en cuanto impidió que se conociera con transparencia la valoración que MARULANDA POSADA, INGETEC I&D e ÍTACA hacían de las cuotas de interés social de STO. Y dañó a ÍTACA pues el precedente hace difícil que terceros independientes encuentren interés en adquirir cuotas de interés social en STO.

(vi) Dañó a ÍTACA en cuanto la reticencia a permitir que los socios minoritarios de CATAY conocieran las condiciones de la negociación, hace difícil que sociedades independientes con socios minoritarios encuentren interés en adquirir cuotas de interés social en STO.

(vii) Dañó a ÍTACA, en cuanto el propósito de evitar que los socios minoritarios de CATAY conocieran la negociación crearía un riesgo de inseguridad jurídica ante eventuales oposiciones judiciales de ellos a la negociación.

5.3.54. Cuando el representante legal de INGETEC I&D, ANDRÉS MARULANDA POSADA, informó a ÍTACA que no podía seguir con el negocio por falta de financiamiento bancario, en lugar de reconocer que ello era el efecto de la conducta de ALBERTO MARULANDA POSADA, causó daños y perjuicios a ÍTACA, por tratar de ocultar la responsabilidad de éste en su decisión.

5.4. CATAY bloqueó de manera injustificada y abusiva la aprobación de la acción social de responsabilidad, en la junta ordinaria de socios de STO celebrada el 2 de septiembre del 2020.

5.4.1. El 2 de septiembre de 2020, se celebró la Junta Ordinaria de Socios de STO de manera virtual. En dicha reunión ÍTACA estuvo representada por el apoderado doctor JOSE MIGUEL MENDOZA DAZA, y CATAY estuvo representada por el doctor DANIEL GARCIA PIÑEROS, también como apoderado. Además, participaron el señor ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, el señor YIVHER ANDRÉS GONZÁLEZ VELANDIA, como revisor fiscal de STO, y la señora ANA MARÍA LOPERA ROZO, quien asistió como invitada de ALBERTO MARULANDA POSADA y fue nombrada secretaria de la

reunión. La reunión fue grabada. (Se anexa la grabación y trascripción de la Junta mediante Anexos 57 y 58)

5.4.2. Si bien la secretaria de la Junta, la Dra. LOPERA ROZO, envió varios días después el borrador del acta de la reunión de la Junta de STO del 2 de septiembre (Acta No. 79), y el Dr. MENDOZA DAZA la aprobó y firmó unas semanas luego, el señor ALBERTO MARULANDA POSADA se tomó un tiempo adicional considerable para firmarla. Y pese a las instancias verbales de ÍTACA para poder conseguir una copia del acta firmada por MARULANDA POSADA, ella no se obtuvo. Por eso, el 29 de octubre de 2020, MARÍA ISABEL O. de WIESNER se vio obligada a enviar por correo electrónico una carta pidiendo una copia formal (Anexo 59) que solo se recibió, con la firma de todos quienes debían firmarla, el 25 de noviembre de 2020, casi tres meses después de celebrada la reunión. (Anexo 60).

5.4.3. Teniendo en cuenta que el señor MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, no había entregado oportunamente copia del acta, firmada por él, de la reunión del 2 de septiembre del 2020, ÍTACA contrató a la empresa ATmedios para realizar la transcripción de la grabación de la Junta de Socios. ATmedios cuenta con una amplia experiencia en el tema, y transcribió en forma exacta todo lo dicho en la Junta. (Anexos 55 y 56).

5.4.4. Tal como consta en el Acta 79 y en la trascripción, durante la Junta Ordinaria de STO del 2 de septiembre de 2020 el Dr. MENDOZA DAZA expuso las faltas en las que ha incurrido el señor MARULANDA POSADA como representante legal de STO, y que se relatan atrás en los hechos de esta demanda.

5.4.5. En la Junta de STO del 2 de septiembre de 2020, en la etapa de lectura y aprobación del informe de gestión del señor MARULANDA POSADA como representante legal de STO en el 2019, el Dr. MENDOZA DAZA votó en contra de la aprobación del informe y dejó constancia por escrito de las razones de dicho voto. (Páginas 4 del Acta No.79 y 5 y 6 de la trascripción; y 00:07:46 minutos de la grabación). De dicha constancia se resalta lo siguiente:

> Desde hace ya varios años, el representante legal principal de STO Ltda., Alberto Marulanda Posada, ha venido participando en actos y operaciones que le han representado clarísimos conflictos de interés. Tales conflictos se han presentado respecto de los contratos por cuya virtud STO Ltda. le ha arrendado su único activo

a Ingetec S.A., una compañía con la cual el señor Marulanda y sus familiares mantienen vínculos de diversa índole.

A pesar de haber estado incurso en los referidos conflictos de interés, el señor Marulanda no surtió el procedimiento de autorización regulado en el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 2995. Esta omisión representó al señor Marulanda una violación manifiesta de sus deberes como administrador de STO Ltda., a la luz de los pronunciamientos que sobre el particular han emitido las autoridades colombianas, incluida la Superintendencia de Sociedades. Lo anterior es tanto más grave cuanto que, en los contratos de arrendamiento suscritos por el señor Marulanda, se pactaron condiciones económicas beneficiosas para Ingetec S.A., en detrimento de los intereses de STO Ltda.

(…)

A pesar de la gravedad de las actuaciones descritas en esta constancia, en el informe sometido a consideración de la junta de socios no se ha hecho referencia alguna a los conflictos de interés en cuestión, ni a los perjuicios que ha sufrido STO Ltda. Por virtud de los arrendamientos antes mencionados. En esa medida, ÍTACA Ltda. vota en contra de la aprobación del informe de gestión sometido a consideración de la junta de socios de STO Ltda. No está de más advertir que el informe referido sí debe presentarse para su aprobación o improbación por parte de los asociados, tal y como lo ordena expresamente el artículo 46 de la Ley 222 de 1995.
Como consecuencia de lo anterior, debe advertirse que el señor Alberto Marulanda Posada no podrá ejercer el cargo de liquidador de STO Limitada en caso de que la compañía se disuelva el 31 de diciembre de 2020.

Ello obedece a que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 230 del Código de Comercio: ‘Quien administre bienes de la sociedad y sea designado liquidador no podrá ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea o Junta de Socios.

> En esa medida, como el informe de gestión del señor Marulanda no fue aprobado por la Junta de Socios de STO Limitada, tras el voto negativo de mi poderdante, es claro que no se cumple con el requisito exigido por el citado Artículo 230 para que el representante legal pueda ocupar el cargo de liquidador".

5.4.6. Por su parte, el Dr. GARCÍA PIÑEROS manifestó que CATAY LIMITADA sí aprobaba el informe de gestión del representante legal, y dejó una constancia señalando que la postura de ÍTACA era alejada de la realidad. Sobre esto, primero, manifestó que la señora MARÍA ISABEL O. DE WIESNER había participado en todas las juntas de socios y había tenido conocimiento de los estados financieros, de los informes de gestión de ALBERTO MARULANDA POSADA, y que ha tenido detalles de absolutamente todos los movimientos de la sociedad. Luego, afirmó que, en relación con un conflicto de interés, ella nunca ha hecho mención en relación con la terminación del contrato de arrendamiento y que nunca ha pedido una revisión detallada como consecuencia de la terminación. Finalmente, manifestó que el contrato de arrendamiento se ha venido desarrollando durante muchos años, se ha obtenido el pago de forma cumplida, y que a pesar de la situación de Covid, se ha mantenido el canon. (Página 5 del Acta No. 79 y 00:11:10 minutos de la grabación)

5.4.7. Pese a las afirmaciones del abogado GARCÍA PIÑEROS, ÍTACA afirmó en la Junta de STO del 2 de septiembre de 2020, que no es cierto que la señora MARÍA ISABEL O. DE WIESNER, como apoderada de ÍTACA LIMITADA, no se haya opuesto a la continuación del contrato de arrendamiento. Tal como se señaló atrás en esta demanda, en la Junta de Socios del 19 de marzo de 2019, que quedó consignada en el Acta No. 78, ella expresamente manifestó que la voluntad de ÍTACA LIMITADA era que no se prorrogara el contrato de arrendamiento que se vencía el mes de mayo de 2019. Además, desde que el representante legal de STO firmó los contratos de arrendamiento con conflicto de interés, ÍTACA LIMITADA ha manifestado reiteradamente en todas las juntas (Actas No. 77 y 78) la existencia del conflicto de interés y la necesidad de realizar un avalúo comercial al inmueble para determinar el canon de arrendamiento justo, a las condiciones del mercado.

5.4.8. También, en la Junta de STO del 2 de septiembre de 2020, durante la aprobación del informe del revisor fiscal, el Dr. MENDOZA DAZA le

preguntó al señor YIVHER ANDRÉS GONZÁLEZ VELANDIA si había revisado el problema del conflicto de interés del representante legal de STO. El revisor fiscal respondió que, en su opinión, no ha visto conflicto de interés ya que se ha venido cumpliendo el contrato de arrendamiento, se ha venido subiendo su canon y se ha venido pagando mensualmente. Además, afirmó que si el contrato sigue vigente y no se ha dado una terminación o directriz por parte de algún socio, es porque no se ha detectado ese conflicto de interés al que se hace mención. Y finalizó diciendo que, si el contrato lo firma la misma persona en las dos empresas, eso no implica que se presente un conflicto, porque no se ha cambiado ninguna condición favorable que se pudiera evidenciar. (Páginas 7, 8 y 9 del Acta No. 79 y 00:28:10 minutos de la grabación)

5.4.9. En la Junta de STO del 2 de septiembre de 2020, en la parte del orden del día relativa a la ratificación o elección del representante legal de la Junta Ordinaria, el Dr. MENDOZA DAZA, representante de ÍTACA, propuso que, en vista de las censuras hechas a la administración de ALBERTO MARULANDA POSADA, la señora MARÍA ISABEL O. DE WIESNER asuma la representación legal principal y el señor MARULANDA POSADA la representación legal suplente. El representante de CATAY manifestó que votaba en contra de la propuesta de ÍTACA, y que, por su parte, proponía que se mantuviera la representación legal del doctor ALBERTO MARULANDA POSADA, y mantener el suplente. (Páginas 10 y 11 del Acta No. 79, 18 y 19 de la transcripción; y 00:43:22 minutos de la grabación)

5.4.10. El representante de CATAY, entonces, manifestó:

> De todas formas, lo que vemos es que aquí, pues, no nos estamos poniendo de acuerdo, sin embargo, el doctor Marulanda fue, conforme los estatutos, nombrado, y el periodo podría mantenerse en la medida en que los estatutos establecen que puede mantener en el cargo hasta que se acabe el periodo que establece, que tengo claro que se vence el próximo año.
>
> Entonces, pues, yo propondría que deje en el acta reflejada, pues, que no hubo una votación y se continúe con el siguiente punto del revisor fiscal. (Página 19 de la transcripción y 00:45:40 minutos de la grabación)

5.4.11. Ante la propuesta de dejar en el acta la afirmación falsa de que no había habido una votación, el Dr. MENDOZA DAZA, a su turno, manifestó:

> "Presidente, no. Es que yo creo que en el acta debería quedar reflejado, primero, que nosotros propusimos un cambio, una alternancia en la representación legal y que eso fue votado en contra por usted y votado a favor por nosotros, entonces, no se aprobó, y ustedes propusieron que siguiera el señor Marulanda, ante lo cual nosotros, por supuesto, votamos en contra por las razones ya expuestas, y eso tampoco se aprobó, con los efectos que tenga la ley, pero que quede claro que nosotros hicimos una propuesta que fue votada en contra y ustedes hicieron otra con la que ocurrió lo mismo." (Página 19 de la transcripción y 00:46:18 minutos de la grabación)

5.4.12. En vista de las palabras del Dr. MENDOZA DAZA, el presidente GARCÍA PIÑEROS, representante de CATAY, aceptó y pidió a la secretaria registrar lo dicho. Quedó, claro, pues, que en la Junta de STO del 2 de septiembre de 2020, en el punto de la ratificación o elección de representante legal, hubo una votación y que por razón del voto de CATAY, cuya legalidad se disputa en esta demanda, no hubo acuerdo en elegir o ratificar un representante legal de STO. (Página 11 del Acta No. 79 y 00:46:52 minutos de la grabación).

5.4.13. Se pasó luego a la elección del revisor fiscal, con un resultado similar al que hubo al tratar la representación legal. (Páginas 11 a la 13 del Acta No. 79 y 00:47:17 minutos de la grabación)

5.4.14. En la Junta de STO del 2 de septiembre de 2020, en etapa de proposiciones y varios, el Dr. MENDOZA DAZA propuso a la Junta de Socios la aprobación de una acción social de responsabilidad en contra del representante legal principal, el señor ALBERTO MARULANDA POSADA, y sustentó su proposición en varios ejemplos de la violación de sus deberes como administrador. (Páginas 14 del Acta No. 79 y 23 de la transcripción; y 00:55:30 minutos de la grabación)

5.4.15. El Dr. MENDOZA DAZA envió y leyó durante la junta la propuesta de acción social de responsabilidad, en los siguientes términos:

> El suscrito, actuando como apoderado especial de Ítaca Limitada, se permite someter a consideración de la Junta de Socios de STO la aprobación de una acción social de

responsabilidad en contra del representante legal principal, señor Alberto Marulanda Posada, por la violación de sus deberes como administrador. La referida acción social encuentra como fundamento en primer lugar la violación de las reglas que rigen el derecho de preferencia en las sociedades de responsabilidad limitada. En verdad, el representante legal de la compañía se rehusó injustificadamente a transmitirle a la sociedad Catay Limitada la oferta que Ítaca Limitada envió en cumplimiento del trámite del derecho de preferencia en la negociación de cuotas.

En segundo lugar, la acción social propuesta tiene como fundamento la violación por parte del señor Marulanda del régimen de conflictos de interés previsto en el numeral 7 del Artículo 23 de la Ley 222 del 95. Durante su gestión como representante legal de STO Limitada, el señor Marulanda Posada ha celebrado operaciones viciadas por conflicto de interés con Ingetec S. A., una compañía con la cual, tanto él como sus familiares, tienen vínculos de diversa índole. Las operaciones antes mencionadas fueron celebradas sin contar con la autorización de la Junta de Socios de STO Limitada en los términos que exige el numeral 7 del Artículo 23. Además, como queda claro tras una simple revisión de las condiciones económicas aceptadas por el representante legal de STO, los contratos en cuestión no le han sido favorables a la compañía.

Las anteriores circunstancias constituyen una violación patente de los deberes legales que el ordenamiento societario colombiano le atribuye a los administradores de sociedades en Colombia, y, en consecuencia, le propongo a la Junta de Socios que, a la luz de lo previsto en el Artículo 25 de la Ley 222, apruebe una acción social de responsabilidad en contra del señor Marulanda para que STO Limitada pueda reclamar judicialmente los perjuicios que ha sufrido la compañía con ocasión de las conductas desplegadas por su actual representante legal principal. (Página 14 del Acta No. 79)

5.4.16. En la Junta de STO del 2 de septiembre de 2020, al votar la proposición de la acción social de responsabilidad contra el administrador MARULANDA POSADA, ÍTACA votó a favor y CATAY votó

en contra. Al explicar su voto, cuya legalidad se controvierte en esta demanda, el Dr. GARCIA PIÑEROS no se refirió a los precisos argumentos legales invocados por el Dr. MENDOZA en su proposición, y se limitó a reiterar los méritos que CATAY encuentra en la gestión de MARULANDA POSADA, agradeció su gestión con STO, y manifestó que considera que la remuneración y la forma como se ha venido desarrollando el contrato ha sido más que satisfactoria. (Página 20 de la transcripción y 00:57:53 minutos de la grabación)

5.4.17. Ante dicha votación, en la Junta de STO del 2 de septiembre de 2020, el Dr. MENDOZA, representante de ÍTACA, dejó la siguiente constancia:

> La decisión de Catay Limitada de bloquear injustificadamente la aprobación de una acción social de responsabilidad fue una determinación abusiva en los términos del Artículo 43 de la Ley 1258 del 2008 a cuyo tenor: 'Quien abuse de sus derechos de accionista en las determinaciones adoptadas en la asamblea responderá por los daños que ocasione', eso se debe a que el veto ejercido por Catay Limitada perjudicará gravemente los intereses de STO Limitada en la medida en que hará imposible recobrar los perjuicios que con su conducta el señor Marulanda le ha causado a la compañía. En ese sentido, la Superintendencia de Sociedades ha expresado por vía de jurisprudencia que: 'Cuando se hubiere negado la posibilidad de iniciar una acción social de responsabilidad para encubrir las actuaciones irregulares de un administrador o proteger la desviación de recursos sociales, la decisión de rechazar la acción social corresponde a una finalidad que no es tolerada por el ordenamiento colombiano' --hasta ahí la cita-- En cuanto a las consecuencias derivadas de ese bloqueo abusivo, la misma Superintendencia ha manifestado que una de ellas es la indemnización de los perjuicios sufridos por el demandante en el respectivo proceso. Esa alternativa encuentra consagración expresa en el Artículo 43 de la Ley 1258 de 2008 que, aunque regula las sociedades por acciones simplificadas, se le ha hecho extensivo en su aplicación a las sociedades de responsabilidad limitada también por virtud de la Ley 1450 de 2011 y el Código General del Proceso. Así las cosas, se deja expresa constancia de que el bloqueo injustificado que ha hecho Catay Limitada de la acción social le ha causado importantes perjuicios a Ítaca.

> Y, por supuesto, no me voy a referir a los perjuicios que ha sufrido Catay por el hecho de que no le transmitieron la oferta que oportunamente le hicimos llegar al señor Marulanda, porque eso no es del resorte de nuestra competencia, sino, por supuesto, de Catay." (Página 24 de la transcripción)

5.4.18. Después de una breve interrupción, ocasionada por dificultades con la grabación, el Dr. GARCÍA, apoderado de CATAY, se expresó así:

> …como lo dije, me encuentro sorprendido por la posición que está teniendo Ítaca. Celebro y aplaudo la labor del doctor Marulanda, quien, a pesar de ser el representante legal y gerente de esta sociedad, ha ejecutado esta gestión sin recibir remuneración alguna, no comprendo y no entiendo cómo, a nivel de socios, estamos en estas acusaciones y en estas insinuaciones.
>
> No comparto la posición, no la respaldo, me siento que tenemos que agradecerle la labor al doctor Marulanda y que dejamos la constancia por instrucciones de María Isabel y por instrucciones de Ítaca, pero, en realidad, nos apartamos radicalmente de lo que se ha dicho.
>
> Creemos y nunca le hemos violado ni vulnerado o impedido la posibilidad a Ítaca de ejercer las acciones legales o de expresar sus inconformidades, pero ya, pues, estamos llegando a un punto en el que, francamente, me encuentro sorprendido y no las acepto y no las comparto.
>
> Yo pido que en el acta quede esta constancia, al igual que el doctor Mendoza ha hecho una serie de constancias muy estructuradas y muy elaboradas, pido que se deje esta constancia. Propongo que se proceda a compartir las grabaciones y se circule el acta para que el doctor Mendoza y yo aprobemos el acta y la firme la secretaria y el doctor Marulanda, como representante legal." (Página 24 de la transcripción).

5.4.19. A la fecha de presentación de esta demanda, la Junta de Socios de STO no ha nombrado nuevos representante legal y revisor fiscal.

El voto de CATAY en la Junta de socios de STO, el 2 de septiembre de 2020, en cuanto a las propuestas de iniciar una acción social de responsabilidad contra ALBERTO MARULANDA POSADA, y a la de nombrar a MARÍA ISABEL O. DE WIESNER como representante legal de la sociedad STO, perjudicó a STO y a sus socios, entre otras razones, así:

(i) en cuanto impidió un examen y decisión imparcial, por una autoridad judicial, de las críticas hechas a MARULANDA POSADA en su gestión social;

(ii) en cuanto sentó un precedente negativo respecto de la posibilidad de conseguir un control judicial sobre los actos de MARULANDA, disminuyendo, en esa medida, el valor de la sociedad; y

(iii) en cuanto creó incertidumbre jurídica en lo relativo a la representación legal de STO en la etapa crítica de su liquidación.

En cuanto la naturaleza de estos perjuicios sea susceptible de estimación económica, su monto será el que se pruebe en el proceso o el que determine el señor Juez al aplicar el principio de "reparación integral y equidad".

5.4.20. ÍTACA ha pedido a la Superintendencia de Sociedades (Delegatura de Inspección, vigilancia y control), desde el 1 de septiembre de 2020, que utilice las facultades que le confiere el artículo 85, numerales 4 y 5 de la Ley 222 de 1995 para tomar varias medidas en relación con el señor ALBERTO MARULANDA POSADA, representante legal de STO, por razón de algunos de los mismos hechos a los que se refiere esta demanda. Entre tales medidas se ha pedida que, con **las facultades administrativas** de que dispone la Superintendencia, se remueva del cargo de representante legal de STO a MARULANDA POSADA y se lo inhabilite para ejercer el comercio. Ese ejercicio de facultades administrativas no se opone, por su misma naturaleza, al ejercicio de **funciones judiciales** que pedimos en esta demanda. Hasta el momento, pese a las varias peticiones de impulso que hemos hecho, no se conoce ningún resultado de las medidas impetradas a la Superintendencia (Delegatura de Inspección, vigilancia y control).

5.4.21. ÍTACA acaba de pedir a la Superintendencia de Sociedades (Delegatura de Procedimientos Mercantiles), que designe un liquidador para STO, y que declara que ALBERTO MARULANDA POSADA no puede ser liquidador.

7. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

A partir de los hechos narrados, presentaré las normas y razones para explicar por qué ÍTACA espera que el Sr. Juez, luego de adelantar el proceso según la ley, resuelva las pretensiones en la forma que solicita la demanda.

6.1.-PRETENSIÓN PRIMERA. - ALBERTO MARULANDA POSADA, Y SU CONTROL SOBRE CATAY, Y SOBRE LOS SOCIOS DE CATAY.

La pretensión primera se funda en los artículos 260, 261 y concordantes del Código de Comercio (C.Co.), tomados de la Ley 222 de 1995.

Se funda, también, en los hechos 5.1.1 a 5.1.24 de esta demanda.

El texto de los artículos 260 y 261 es el siguiente:

> ARTÍCULO 260. <SUBORDINACIÓN>. <Artículo subrogado por el artículo 26 de la Ley 222 de 1995, diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria.
>
> ARTÍCULO 261. <PRESUNCIONES DE SUBORDINACIÓN>. <Artículo subrogado por el artículo 27 de la Ley 222 de 1995.> Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos:
>
> 1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.
>
> 2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de votos necesario para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere.

3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad.

PARÁGRAFO 1o. Igualmente habrá subordinación, para todos los efectos legales, cuando el control conforme a los supuestos previstos en el presente artículo, sea ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas de naturaleza no societaria, bien sea directamente o por intermedio o con el concurso de entidades en las cuales éstas posean más del cincuenta por ciento (50%) del capital o configure la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o toma de decisiones de la entidad.

PARÁGRAFO 2o. Así mismo, una sociedad se considera subordinada cuando el control sea ejercido por otra sociedad, por intermedio o con el concurso de alguna o algunas de las entidades mencionadas en el parágrafo anterior.

La **pretensión primera** se encamina a que se declare, contra ALBERTO MARULANDA POSADA, que él tiene y ha tenido poder de decisión sobre las sociedades CATAY, INGETEC SAS, e INGETEC I&D SAS, MARULESCO SAS, Y MARULANDA ESCOBAR SAS.

Para sustentar <u>el literal "a" de la pretensión primera</u>, en relación con CATAY LTDA., socia de STO, debe aplicarse el Parágrafo 1 del artículo 261 del CdC. y las normas concordantes del mismo artículo, teniendo en cuenta los hechos de esta demanda, y los anexos en los que se sustentan, según los cuales ALBERTO MARULANDA POSADA puede emitir en las Juntas de socios de CATAY:

a.-Con solo sus propias cuotas de interés social, emite el 55.5% de los votos;

b.-Además, con los votos de MARULESCO SAS, de la cual es representante legal, emite en las Juntas de CATAY el 8.5% de los votos;

c.-En las asambleas de MARULESCO SAS, ALBERTO MARULANDA POSADA puede emitir el 100% de los votos, con el concurso de su esposa e hijos y con los votos de MARULANDA ESCOBAR SAS;

d.-En las asambleas de MARULANDA ESCOBAR SAS, ALBERTO MARULANDA POSADA controla el 100% de los votos con acciones propias y con el concurso de su esposa y sus hijos.

Para sustentar el <u>literal "b" de la pretensión primera</u>, en relación con INGETEC SAS, arrendataria de bienes de STO, deben aplicarse el Parágrafo 1 del artículo 261 del CdC. y las normas concordantes del mismo artículo, teniendo en cuenta los hechos de esta demanda, y los anexos en los que se sustentan, según los cuales ALBERTO MARULANDA POSADA, además de ser representante legal de INGETEC SAS,

a.- Puede emitir en las Asambleas de socios de INGETEC SAS el 56% de los votos, correspondientes a MARULESCO SAS, de la cual también es representante legal;

b.-Y porque, en las asambleas de MARULESCO SAS, él puede lograr la emisión del 100% de los votos, bien como titular de acciones propias, bien con el concurso de su esposa y de sus hijos (Hecho 4.1.14).

Para sustentar el <u>literal "c" de la pretensión primera</u>, en relación con INGETEC I&D SAS, eventual comprador de cuotas de interés social de ÍTACA en STO, deben aplicarse el Parágrafo 1 del artículo 261 del CdC. y las normas concordantes del mismo artículo, teniendo en cuenta los hechos de esta demanda y los anexos en los que se sustentan, según los cuales ALBERTO MARULANDA POSADA, además de haber sido su representante legal hasta finales de 2019,

a.- Puede emitir en las asambleas de socios de INGETEC I&D SAS el 56% de los votos, correspondientes a MARULESCO SAS, de la cual es representante legal;

b.-Y porque, en las asambleas de MARULESCO SAS, él puede lograr la emisión del 100% de los votos, como titular de acciones propias, y con el concurso de su esposa, de sus hijos y de la sociedad MARULANDA ESCOBAR, de la cual es también socio y representante legal (Hecho 4.1.14).

Para sustentar el <u>literal "d" de la pretensión primera</u>, en relación con MARULESCO SAS, socia de CATAY, deben aplicarse el Parágrafo 1 del artículo 261 del C.Co. y las normas concordantes del mismo artículo, teniendo en cuenta los hechos de esta demanda y los anexos en los que se sustentan, según los cuales ALBERTO MARULANDA POSADA, además de ser su representante legal ,

Puede emitir en las asambleas de MARULESCO SAS, con el concurso de su esposa, el 55% de los votos; y, con el concurso de sus hijos y de la sociedad MARULANDA ESCOBAR SAS, de la cual es representante legal, puede emitir el 45% restante de los votos.

Para sustentar el <u>literal "e" de la pretensión primera</u>, en relación con MARULANDA ESCOBAR SAS, socia de MARULESCO, deben aplicarse el Parágrafo

1 del artículo 261 del C.Co. y las normas concordantes del mismo artículo, teniendo en cuenta los hechos de esta demanda y los anexos en los que se sustenta, según los cuales ALBERTO MARULANDA POSADA, además de ser su representante legal ,

> Puede emitir en las asambleas de MARULANDA ESCOBAR SAS, con el concurso de su esposa, el 55% de los votos; y, con el concurso de sus dos hijos, el 45% restante de los votos.

6.2.-PRETENSIONES SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA: NULIDAD DE VOTOS Y DETERMINACIONES EN LA JUNTA DE SOCIOS DE STO DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR ABUSO DEL DERECHO DE VOTO EN PARIDAD Y OBJETO ILÍCITO EN BLOQUEO SOCIAL.

6.2.1.-LA PRETENSIÓN SEGUNDA, dirigida contra ALBERTO MARULANDA POSADA, CATAY y STO, se funda en los artículos 95, numeral 1, de la Constitución Política; 189, 192, 200 y 830 del Código de Comercio; 23, 24 y 25 de la Ley 222, 42 y 43 de la Ley 1258 de 2008 y concordantes; 252 de la ley 1450 de 2011; 1746 del Código Civil; y 20 del CGP, numeral 4.

Estas pretensiones se fundan en los hechos 5.4.1 a 5.4.21 de esta demanda.

Naturaleza de la acción.- La acción que se invoca en este caso no es la de "nulidad/impugnación", regulada por el artículo 190 del Código de Comercio, sino la de "nulidad/abuso", creada en los artículos 830 del Código de Comercio y en el artículo 43 de la Ley 1258, extendida a todas las sociedades en el artículo 252 de la Ley 1450, e incorporada a la competencia general de los jueces civiles del circuito en asuntos societarios, por el numeral 4 del artículo 20 del CGP. Así lo han entendido también la Superintendencia de Sociedades [2] y tribunales arbitrales.

La pretensión segunda se orienta a conseguir la nulidad **de los votos** de CATAY en la Junta del 2 de septiembre de 2020, respecto de las proposiciones de (i) iniciar acción de responsabilidad social contra MARULANDA, y la de (ii) elegir representante legal principal de STO a la señora MARIA ISABEL O. de WIESNER.

La razón de la nulidad de esos votos es que ellos se emitieron con objeto ilícito y abuso del derecho de paridad.

La proposición relativa al uso por STO de la **acción de responsabilidad social** contra MARULANDA, censuraba las actuaciones de éste al incurrir en conflictos de interés,

[2] Superintendencia de Sociedades; Proceso 2012-801-052, Sentencia del 19 de diciembre de 2013,

(i) en materia de contratos sobre los bienes de STO con las compañías que él controla, y

(ii) en cuanto a su interferencia ilegal como administrador en el negocio de cesión de cuotas de interés social de ÍTACA en STO.

La razón de la nulidad de los votos de CATAY en la Junta del 2 de septiembre de 2020, en cuanto a (i) la proposición de iniciar una acción de responsabilidad social contra ALBERTO MARULANDA POSADA, y en cuanto a (ii) la elección de MARIA ISABEL O. de WIESNER como representante legal principal de STO, consiste en que ellos se emitieron con objeto ilícito y abuso del derecho de paridad.

La pretensión segunda se dirige no solo contra CATAY, por su voto respecto de las proposiciones aludidas, sino también contra ALBERTO MARULANDA POSADA, porque el voto de CATAY puede atribuirse también a él como controlador de esa sociedad. Y se dirige contra STO, en cuanto los votos de CATAY, mientras no sean anulados, permiten sostener que las decisiones adoptadas con ellos son decisiones de la sociedad, esto es, de STO.

En la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, la Corte explica que comete "abuso del derecho", "el titular de un derecho que hace un uso inapropiado e irrazonable a la luz de su contenido esencial y de sus fines". Añadió la Corte que "Para que se configure el fraude a la ley y el abuso del derecho no se requiere la existencia de una intención o culpa, basta que se produzca un resultado manifiestamente desproporcionado contrario a las finalidades previstas por el ordenamiento para una disposición o institución jurídica".

En primer término, CATAY ha debido de **abstenerse de votar** las proposiciones relativas a la acción de responsabilidad social contra ALBERTO MARULANDA POSADA, y la de elección de un representante legal principal distinto de él. Ha debido poner de presente que se abstenía por cuanto MARULANDA POSADA es su controlador, lo que creaba para CATAY un conflicto de interés. CATAY representaba en la Junta directamente los intereses de su controlante MARULANDA POSADA -un tercero en la Junta de STO-, y, por lo tanto, estaba en un **conflicto de interés** para votar.

Según el inciso tercero del artículo 23 de la Ley 222 MARULANDA POSADA estaba en el deber de promover esa abstención, y el representante de CATAY, aún sin la intervención de MARULANDA POSADA, tenía el deber de abstenerse en la votación. Como CATAY no se abstuvo, su voto adoleció de nulidad por objeto ilícito.

En segundo lugar, puede observarse que el voto de CATAY respecto de las dos proposiciones **fue abusivo**, porque el apoderado de CATAY, al explicarlo, no entró en detalle alguno respecto de la motivación alegada por el apoderado de ÍTACA, sino que se limitó a hacer observaciones generales para elogiar la gestión de

ALBERTO MARULANDA POSADA. No hubo, pues, una objeción sustentada a la propuesta de ÍTACA.

En efecto, el representante de CATAY, en la Junta del 2 de septiembre de 2020, no hizo refutación concreta alguna de:

> (i) las razones o los hechos por los cuales ALBERTO MARULANDA POSADA se negó a dar a CATAY el traslado de la oferta que le hizo ÍTACA de cesión de cuotas de interés social en STO, o
>
> (ii) de los hechos o las razones por las cuales ALBERTO MARULANDA POSADA podía contratar en nombre de STO con sociedades en las que él tenía un interés directo, sin obtener previamente dispensa de la Junta de Socios y, más aún, en contra de las repetidas objeciones de la representante de ÍTACA en las Juntas de STO.

Sin embargo, como STO solo tiene dos socios, cada uno con igualdad de partes en el capital social, el representante de CATAY en la Junta **bloqueó** con su voto la aprobación de la propuesta de iniciar acción de responsabilidad social contra MARULANDA POSADA, y la de remplazarlo en la representación legal de STO, sin dar explicaciones distintas a las de su admiración, reconocimiento y gratitud por la supuesta buena gestión de MARULANDA POSADA en STO. En otras palabras, CATAY, controlada por MARULANDA POSADA, abusó del "derecho de paridad".

En tercer lugar, CATAY, controlada por ALBERTO MARULANDA POSADA, tenía el deber de votar en interés de STO, y sin perjudicar a otros socios. Así lo dispone el artículo 43 de la Ley 1258 -aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada por obra del artículo 252 de la Ley 1450 de 2011, y justiciable por el Juez Civil del Circuito según el numeral 4 del artículo 20 del CGP.

Sin embargo, el voto inmotivado de CATAY perjudicó a STO, porque tiende a evitar el control judicial sobre los actos de los terceros administradores de STO. Por lo tanto, establece un precedente nocivo en cuanto a la eficacia de los instrumentos legales disponibles para asegurar ese control. E invita a que los actos de los administradores, cuando son contrarios a los mandatos legales, queden impunes. El voto de CATAY, en este respecto, por ser contrario al interés de STO, tenía un objeto ilícito.

CATAY debió votar teniendo en cuenta el interés de STO, y no el de un tercero. Pero el resultado directo de su voto fue favorecer el interés de una persona que, frente a STO era y es un tercero: el representante legal de STO. El voto de CATAY confirió una "ventaja injustificada" a un tercero en STO, ALBERTO MARULANDA POSADA, pues no se observa cómo, librar a ese tercero de un juicio de responsabilidad social, o favorecer la permanencia en su cargo de representante

legal principal de STO, pudiera resultar ventajoso para alguien distinto de MARULANDA POSADA mismo, en primer término. Desde esta perspectiva, también el voto de CATAY tenía objeto ilícito.

Por su participación indebida, y por la escasez de respuestas o razones concretas en los votos y decisiones de CATAY, no se observa que tales votos hayan tenido el objetivo de obtener provecho alguno para STO. Se observa, en cambio, que el voto de CATAY tenía un efecto directo, inmediato y doloso, en relación con otro objetivo, de interés exclusivo del accionista ALBERTO MARULANDA POSADA, controlador de CATAY: conseguir que MARULANDA POSADA no tuviera que justificar ante la justicia los actos que realizó como administrador de STO, relativos a la violación del régimen de **conflicto de interés**, en los asuntos de arrendamientos y de la negociación de las cuotas de interés social de ÍTACA en CATAY.

Se observa también que el voto de CATAY en la Junta de STO tenía el propósito de lograr que MARULANDA pudiera **seguir administrando como representante legal principal la sociedad STO**, pese a las críticas de ÍTACA, que representa el 50% del capital de la sociedad y el 50% de los votos en sus Juntas.

Además, el voto de CATAY perjudica a ÍTACA, porque tiende a rodear de impunidad la conducta del administrador que, al negarse a dar traslado a CATAY de la oferta de ÍTACA para la cesión de sus cuotas sociales en STO, puso un obstáculo ilegal al derecho de ÍTACA a enajenar sus cuotas de interés social (artículo 362 del Código de Comercio). De nuevo, desde esta perspectiva, el voto de CATAY tenía objeto ilícito.

Por estas razones, se ruega al señor Juez del Circuito acceder a las pretensiones segunda, tercera y cuarta de la demanda.

6.2.2.-LA PRETENSIÓN TERCERA se funda en las mismas normas y hechos que la pretensión segunda.

Esta pretensión parte del supuesto de que, si los votos que obtiene una proposición en una Junta de socios son nulos, **las decisiones** aprobadas o logradas con esos votos son igualmente nulas.

Por eso la pretensión tercera solicita que, por razón de la nulidad de los votos de CATAY, en cuanto a (i) la proposición de adelantar un juicio de responsabilidad social contra el administrador ALBERTO MARULANDA POSADA, y en cuanto a (ii) la proposición de elegir a la señora MARÍA ISABEL OSPINA DE WIESNER como representante legal principal de la sociedad STO, y a ALBERTO MARULANDA POSADA como suplente, se declare la nulidad de las proposiciones que se aprobaron gracias a la emisión de los votos nulos.

En el caso concreto, la petición de nulidad se dirige contra la decisión de negar el uso de la acción de responsabilidad social y la de negar la elección de los representantes propuestos por ÍTACA.

6.2.3.-LA PRETENSIÓN CUARTA de la demanda se funda en las mismas normas de la pretensión segunda y en los artículos 1610 y concordantes del Código Civil; y en los mismos hechos de las pretensiones segunda y tercera.

Esta pretensión tiene tres objetivos, a saber: declarar que la negativa de la proposición de iniciar una acción de responsabilidad social contra el administrador de STO, una vez anulada (i) no impide a ÍTACA, exigir responsabilidad a MARULANDA por los **perjuicios patrimoniales indirectos** que ALBERTO MARULANDA POSADA le causó, como socia de STO, al dañar a STO; ni (ii) impide a ÍTACA exigir responsabilidad a MARULANDA POSADA por los **perjuicios directos** que les causó, sin que ello hubiese representado un daño patrimonial a STO.

Los perjuicios indirectos que ALBERTO MARULANDA POSADA causó a ÍTACA, son, en esta demanda, los que sufrió ÍTACA, en cuanto socia de STO, por razón de los contratos de arrendamiento que MARULANDA POSADA celebró con las sociedades subordinadas suyas respecto de los derechos de STO en el edificio San Martin.

Los perjuicios directos que ALBERTO MARULANDA POSADA causó a ÍTACA son, en esta demanda, los que sufrió ÍTACA por la frustración del negocio de enajenación de sus derechos sociales en STO a INGETEC I&D o, eventualmente, a CATAY.

Busca la **pretensión cuarta** que se declare que, siendo nulo el voto de CATAY, y válido el voto de ÍTACA respecto de la proposición de adelantar una acción de responsabilidad social contra ALBERTO MARULANDA POSADA, esta proposición fue aprobada. La asamblea de STO debe determinar, luego, la forma de hacer efectiva esa proposición, pues esta demanda, en ese respecto, se refiere solo a la indemnización de los perjuicios indirectos ocasionados por ALBERTO MARULANDA POSADA a ÍTACA.

Busca también la pretensión cuarta que, ante la nulidad del voto de CATAY en lo relativo a la elección de representantes legales principal y suplentes de STO en la Junta del 2 de septiembre de 2020, se declare que la señora MARÍA ISABEL O. DE WIESNER, y ALBERTO MARULANDA POSADA fueron elegidos representantes legales principal y suplente, respectivamente, de STO.

a.-El derecho de los socios a reclamar perjuicios patrimoniales indirectos al administrador.

La posibilidad de que los socios reclamen perjuicios patrimoniales indirectos a los administradores de una sociedad, por razón de los que estos hayan ocasionado a la sociedad, ha sido objeto de controversia en Colombia. En particular, la Superintendencia de Sociedades se ha pronunciado en varias oportunidades contra esa posibilidad, fundándose, ante todo, en razones de derecho comparado.

Sin embargo, hay razones mejores que las de la Superintendencia para sostener que, en el derecho colombiano, no existen las limitaciones que se encuentran en el derecho español o europeo para negar a los socios la posibilidad de reclamar los perjuicios que les ocasiona una administración ilegal del representante de la sociedad. Esta posibilidad es más clara cuando el administrador se vale de una situación de control para frustrar la aprobación de la acción de responsabilidad social contra él; pero existe aún si el Juez anula la decisión de negar la aprobación de la acción de responsabilidad.

Es así cómo, si el administrador impide por algún medio indebido que la sociedad lo obligue a indemnizar los perjuicios ocasionados a ella -indemnización que favorecería, de modo indirecto, a todos los accionistas- no sería equitativo que estos perdieran también el derecho a ser indemnizados por los perjuicios que el administrador les ocasionó a ellos en forma indirecta, al disminuir las utilidades de la sociedad o al desvalorizar las acciones o derechos sociales en la misma.

Ni sería equitativo que, para recuperar los perjuicios indirectos sufridos, cada accionista tuviera que esperar a que la sociedad demandara al administrador que haya incurrido en responsabilidad. Ese límite no existe en la ley colombiana.

En efecto, el artículo 25 de la Ley 222 dispone:

> La acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde a la compañía, previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios, que podrá ser adoptada, aunque no conste en el orden del día. En este caso, la convocatoria podrá realizarse por un número de socios que represente por lo menos el veinte por ciento de las acciones, cuotas o partes de interés en que se halle dividido el capital social.
>
> La decisión se tomará por la mitad más una de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión e implicará la remoción del administrador.
>
> Sin embargo, cuando adoptada la decisión por la asamblea o junta de socios, no se inicie la acción social de responsabilidad dentro de los tres meses siguientes, ésta podrá ser ejercida por cualquier administrador, el revisor fiscal o por cualquiera de los socios en interés de la sociedad. En este caso los acreedores que representen por lo menos el cincuenta por

ciento del pasivo externo de la sociedad, podrán ejercer la acción social siempre y cuando el patrimonio de la sociedad no sea suficiente para satisfacer sus créditos.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos individuales que correspondan a los socios y a terceros. (He añadido la subraya).

El inciso final del artículo 25 debe interpretarse en forma que pueda producir efectos, esto es, que produzca un "efecto útil". De modo que no puede significar, simplemente, como ha enseñado desde siempre el derecho, que el socio a quien un administrador ocasiona un daño directo puede exigirle responsabilidad por él. El inciso final del artículo 25 debe interpretarse y aplicarse dentro del contexto de ese artículo, esto es, dentro del contexto de los daños que el administrador ocasiona **a la sociedad** por su conducta irregular y que, en forma indirecta, perjudican a cada uno de los socios.

Dentro de ese contexto, el artículo 25 revela que, para efecto de exigir responsabilidad a los administradores sociales por los daños a la sociedad hay **dos tipos de derechos**, así: derechos **de la sociedad**, que actúa por medio de su asamblea o junta, y que busca que el daño completo se indemnice a la sociedad. Y derechos **individuales indirectos** de los socios y de terceros. Estos últimos tienen la función de obtener indemnización por aquella parte de los daños que los socios padecen como reflejo de los daños que el administrador ocasiona a la sociedad.

Ahora bien: es claro que cada uno de los socios no puede exigir que se le paguen a él todos los perjuicios que el administrador haya causado a la sociedad, de modo que el inciso final implica que puede pedir que se reparen a él los que el administrador le haya causado, **en cuanto miembro de la sociedad**, es decir, los **perjuicios patrimoniales indirectos.**

Tales perjuicios son aquellos que disminuyen de alguna manera el valor de la acción o derecho de interés social que posee el socio, bien porque (a) ésta o estos terminan produciendo **menos dividendos** de los que habría producido si el administrador no hubiese actuado en la forma ilegal o culposa en la que actuó, de otra manera, o (b) el valor patrimonial de la acción o derecho de interés social disminuye por cualquiera otra causa, derivada de la conducta irregular del administrador, lesiva en forma directa para la sociedad.

El inciso final del artículo 25 indica que, cualquiera que sea la suerte de la acción social de responsabilidad, que permite **a la sociedad** recuperar el valor de los perjuicios que el socio le haya ocasionado a ella, esto no afecta los derechos individuales de los socios que permiten a **cada uno de ellos** recuperar los perjuicios

indirectos que el administrador les haya ocasionado al causar perjuicios a la sociedad. Tal es uno de los alcances de la pretensión cuarta de la demanda.

Frente al claro texto legal no se ve razón para buscar interpretaciones traídas del derecho extranjero y, menos aún, restricciones al derecho individual de cada accionista, sin sustento en el derecho positivo colombiano.

En esta demanda, por eso, acogemos las razones de un laudo de abril de 2017, de un Tribunal de Arbitramento[3] (Anexo 61), organizado con las reglas de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuando explicó, con base en un análisis de doctrina y legislación nacional y extranjera, y en la comparación con los textos de los artículos 24 y 25 de la Ley 222, que,

> En criterio de este Tribunal, la responsabilidad de los administradores por daños causados a los socios deriva del incumplimiento por parte del administrador de los deberes que le impone directamente la ley de sociedades a los administradores[4].
> .....

Y, más adelante, el Tribunal Arbitral añadió:

> Contrario a lo que sucede en las regulaciones foráneas, la legislación nacional no establece límites para el ejercicio de los derechos individuales de socios, de ahí que no se pueda limitar la acción de estos solo para la reclamación de perjuicios directos.

Sin embargo, el Tribunal Arbitral citado consideraba que, de acuerdo con el artículo 233 de la Ley 222, los conflictos que tengan origen en el contrato social o en la ley que lo rige, cuando se hayan sometidos a pacto arbitral o amigable composición, se sujetarán al trámite del "proceso verbal sumario", salvo disposición legal en contrario. Atrás ya explicamos porque esta norma no es aplicable en este caso, ya que el numeral 4 del artículo 20 del CGP es claro al indicar que el juez que puede resolver este tipo de controversias debe hacerlo "en primera instancia" regla incompatible con las normas que se aplican al "proceso verbal sumario".

b.-El derecho de los socios a reclamar perjuicios patrimoniales directos al administrador.

Arriba nos ocupamos de los perjuicios **patrimoniales indirectos** causados por un administrador a los socios de una sociedad. Vamos a referirnos ahora al

[3] Tribunal presidido por Felipe Negret Mosquera, Camilo González Chaparro y Manuel Santiago Urueta, Laudo del 4 de abril de 2017, en proceso de Nelly Daza de Solarte Vs. CSS Constructores y Carlos Alberto Solarte.
[4] Página 106.

derecho de los socios a reclamar al administrador los perjuicios **patrimoniales directos** que les ocasionen.

En el derecho colombiano se consagra, de tiempo atrás, el derecho de las personas a reclamar tanto los perjuicios que se derivan del incumplimiento de un contrato (artículo 1610 y concordantes del Código Civil) o del incumplimiento de una obligación no contractual (artículo 2341 y concordantes del Código Civil).

En ninguna de estas normas se dispone que la pasividad de otras personas damnificadas por el incumplimiento, o el fracaso de alguno de los remedios intentados por otras personas damnificadas, perjudica el derecho de las demás a buscar la indemnización que la ley permita.

De modo que el hecho de que la sociedad, por medio de su asamblea, no ejercite la acción de responsabilidad que autoriza el artículo 25 de la Ley 222 contra el administrador que produce a la sociedad perjuicios directos, no tiene por qué impedir a los socios que le exijan responsabilidad al administrador por los **perjuicios directos** causados a ellos.

c.-La elección de los nuevos representantes legales, principal y suplente, de STO.

Aparte de las razones que expone el laudo citado, el literal "a" de la pretensión cuarta de esta demanda se funda en el artículo 1746 del Código Civil, según el cual el efecto de la nulidad absoluta consiste en dar "a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo".

Busca también la pretensión cuarta, que, ante la nulidad del voto de CATAY en lo relativo a la elección de representante legal de STO en la Junta del 2 de septiembre de 2020, se declare que la señora MARÍA ISABEL O. DE WIESNER, por ser la única candidata que recibió votos válidos para el cargo, fue elegida representante legal principal de STO. Y que, por la misma razón, ALBERTO MARULANDA POSADA fue elegido como suplente.

Para restituir a las partes al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el voto nulo, es claro que con el voto de ÍTACA se habría aprobado iniciar la acción de responsabilidad social contra ALBERTO MARULANDA POSADA, y declarar elegida a MARÍA ISABEL O. DE WIESNER como representante legal principal, y a ALBERTO MARULANDA POSADA como representante legal suplente, según se pide que se declare.

6.3.-PRETENSIÓN QUINTA. - ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR COMO REPRESENTANTE APARENTE DE ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA.

La pretensión **quinta** se funda en los artículos 196, 260, 261 842 y 863 del Código de Comercio, y en las normas concordantes.

Esta pretensión tiene fundamento en los hechos 5.1.6, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.19, 5.1.21, 5.2.12, 5.2.13, y 5.2.15, y desde el 5.3.1 hasta el 5.3.53, ambos inclusive.

En la pretensión **quinta** se busca que se declare que cuando ÍTACA negoció con ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR la cesión de cuotas sociales de ÍTACA en STO, lo hizo con la convicción de que tanto ALBERTO MARULANDA POSADA como ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, obraban "de buena fe", y que ALBERTO MARULANDA POSADA usaría su capacidad de decisión sobre una o varias de las sociedades que él controla, y en particular las de nombre INGETEC, para cumplir las obligaciones resultantes.

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC11815 de 2016, de la cual fue ponente la magistrada Cabello Blanco, ha dicho:

> Es frecuente, y hasta necesario en muchas ocasiones, que las personas interesadas en la celebración de negocios jurídicos utilicen intermediarios, desde el mero nuncio o portavoz que tan solo presta el servicio de colaborar en el acto material de transmitir la voluntad del contratante –llevando el documento que la contiene o informando él directamente de la misma- hasta la representación directa, derivada de la ley o de una declaración de voluntad (apoderamiento), aneja las más de las veces a un contrato de alcances administrativos o de intermediación (mandato, trabajo, preposición, prestación de servicios profesionales, etc), declaración ésa en virtud de la cual los efectos jurídicos del acto o negocio jurídico propuesto o celebrado en nombre de quien la emite, se radican en cabeza del representado.
>
> Para que tal acto de representación cumpla los efectos que le son propios, es preciso que el representante actúe en nombre del representado dentro de los límites de sus facultades y así lo explicite, de forma que el tercero sepa quién es en verdad su eventual contratante, si el representado o el representante, y con qué facultades cuenta, para lo cual no existe una regulación que determine la forma en que tal apoderamiento y su manifestación al tercero se den. Por lo que puede inferirse que a falta de solemnidad, el apoderamiento pueda en puridad conferirse y darse a conocer incluso en forma verbal, y por esa vía puede razonablemente

concluirse que ese apoderamiento se sobrentienda en razón de particulares circunstancias, como lo pone de presente el artículo 842: "*Quién dé motivo a que se crea, conforme a las costumbres comerciales o por su culpa, que una persona está facultada para celebrar un negocio jurídico, quedará obligado en los términos pactados ante terceros de buena fe exenta de culpa".* Otra cosa serán los riesgos probatorios que se corren por la falta de un escrito en el que conste el poder otorgado.

Tanto ALBERTO MARULANDA POSADA, como ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, como MARÍA ISABEL O. de WIESNER son personas de amplísima experiencia en el mundo de los negocios. Para ellos no podía caber duda de que la autorización dada por ALBERTO MARULANDA POSADA a su hijo ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, para negociar con MARÍA ISABEL O. de WIESNER comprometía en primer término a ALBERTO MARULANDA POSADA.

Además de su experiencia en el mundo de los negocios, la convicción de ÍTACA derivaba de la presencia de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR como socio o como administrador en las diversas sociedades controladas por su padre ALBERTO MARULANDA POSADA, según se observa en los hechos 5.1.6, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.19, 5.1.21, 5.2.12, 5.2.13, y 5.2.15.

ALBERTO MARULANDA POSADA era y es el controlador de las varias sociedades INGETEC y de CATAY, y ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR aparece en ellas como socio minoritario o como administrador, esto es, como persona a quien ALBERTO MARULANDA POSADA daba confianza e instrumentos para el ejercicio de su control.

Era, pues, justificado que ÍTACA entendiera que, cuando ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR negociaba respecto de las sociedades controladas por su padre, estaba facultado para ello en los términos del artículo 842 del Código de Comercio, y de acuerdo con el postulado de la "buena fe" precontractual (artículo 863 del Código de Comercio).

Pero, sobre todo, la convicción de ÍTACA se fundaba en la carta de ALBERTO MARULANDA POSADA (Hechos 5.3.2 y 5.3.3.), en la que él instruye en forma clara y explícita a ÍTACA sobre la necesidad de entenderse con ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, para la cesión de las cuotas sociales en STO. Se observa, en los hechos siguientes, que ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR negoció con ÍTACA, sin indicar cuál sería la sociedad adquirente de las cuotas, hasta el 25 de octubre de 2019 (hecho 5.3.14, y anexo 33). Solo en ese momento comunicó que la cesionaria de las cuotas sería INGETEC I&D, sociedad representada por él. Dado el control de su padre sobre las sociedades INGETEC y CATAY, era evidente que ANDRÉS MARULANDA

ESCOBAR, al negociar sin indicar quién sería el comprador, lo hacía esperando las decisiones de su padre.

Pero ya a partir del 25 de octubre de 2019, era claro que el negocio se haría con INGETEC I&D, sociedad representada por ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR. Antes, la negociación habría podido orientarse hacia cualquiera de las sociedades que controla ALBERTO MARULANDA POSADA. A partir del 25 de octubre, la responsabilidad por las decisiones de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR corresponde, no solo a ALBERTO MARULANDA POSADA, que había dado motivos para que se entendiera que ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR negociaba en su nombre, sino, también, a la sociedad que éste último representaba -INGETEC I&D- y para la cual, en los documentos posteriores, buscaba adquirir las cuotas de interés social de ÍTACA en STO.

De nuevo, la coincidencia entre las acciones de ALBERTO MARULANDA POSADA y ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR se observa en los hechos 5.3.51 y 5.3.52, que relatan cómo, casi al mismo tiempo, el 11 de agosto del 2020 ALBERTO MARULANDA POSADA confirma su decisión de no trasladar la oferta de cesión de cuotas hecha por ÍTACA a CATAY, y ANDRÉS MARULANDA POSADA, informa el 14 del mismo mes que no continuará con las negociaciones. Es del caso anotar, además, que el motivo invocado por ALBERTO MARULANDA POSADA -la negativa a permitir que la junta de CATAY conozca la negociación- refleja la misma reticencia expresada durante las negociaciones, de diversas maneras, por ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR.

ALBERTO MARULANDA POSADA era representante legal de INGETEC I&D SAS en el año 2019, y su hijo ANDRÉS en el año 2020. De modo que, por ser ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR representante legal de INGETEC I&D, también esta sociedad debe responder, con MARULANDA POSADA, por los acuerdos que alcanzaron ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR e ÍTACA respecto de la cesión a INGETEC I&D de las cuotas de interés social de ÍTACA en STO.

ÍTACA obró de buena fe, exenta de culpa,

(i) a partir de un documento escrito por ALBERTO MARULANDA POSADA, en el que instruía a MARÍA ISABEL O. de WIESNER, a entenderse con ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR;

(ii) a partir de la observación de las funciones de confianza que ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR cumplía en otras sociedades en las que su padre tiene capacidad de decisión;

(iii) por la conducta misma de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR durante las negociaciones; y

(iv) por el cargo que ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR tenia como gerente principal de INGETEC I&D.

6.4.-PRETENSIÓN SEXTA: NEGOCIO SIN CONDICIONES DISTINTAS A LAS DE LA LEY.

La **pretensión sexta** se funda en los artículos 196, 260, 261, 362, 363, 364, 365, 366, 842, 861 y 863 del Código de Comercio, y en las normas concordantes.

Los sustentos de hecho de esta pretensión se encuentran en el Capítulo 5 de esta demanda, HECHOS, y principalmente entre los hechos 5.3.2 a 5.3.50, ambos inclusive.

El contrato social de STO, consta en la escritura 3765 de 26 de noviembre de 1976, de la Notaría segunda del Círculo de Bogotá; y el negocio de cesión de cuotas de interés social a terceros está incorporado a los estatutos respectivos, en cuanto el artículo OCTAVO, en el literal "g", encomienda a la Junta de socios las funciones que la Ley atribuye a ese órgano, entre las cuales, según los artículos 360, 362 y 365 del CdC figuran todas las reformas estatutarias derivadas de la cesión de cuotas de interés social a terceros.

Ante todo, en la pretensión **sexta**, se busca que se declare que las negociaciones para la cesión de cuotas de interés social de ÍTACA en STO, en las que se confió en el poder decisorio de ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA sobre CATAY e INGETEC I&D, y luego, <u>también</u> en la condición de representante legal de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR en INGETEC I&D, produjeron un acuerdo, **en forma precisa y documentada, no solo sobre los elementos esenciales** -objeto, precio, plazo- (artículos 363 y 845 del Código de Comercio) sino, también, sobre **la mayoría de los accidentales**, para la cesión de las cuotas sociales ÍTACA en STO a INGETEC I&D.

Se busca que se declare, igualmente, que la celebración del negocio con INGETEC I&D estaba sujeta solo a la condición de que (i) se diera a CATAY el derecho a celebrar el negocio en primer término, y a rechazarlo; y, por supuesto, (ii) a la condición de que la Junta de STO le diera su aprobación final. El acuerdo era, pues, vinculante, para ALBERTO MARULANDA POSADA y para su subordinada INGETEC I&D, en los términos de los artículos 363, 845 y 861 del Código de Comercio.

6.5.-PRETENSIÓN SÉPTIMA. ALBERTO MARULANDA POSADA VIOLA SUS OBLIGACIONES Y LOS DERECHOS DE ÍTACA AL NEGARSE A DAR TRASLADO DE LA OFERTA DE ÍTACA A CATAY Y AL FRUSTRAR LAS NEGOCIACIONES ACORDADAS CON INGETEC I&D.

La **pretensión SÉPTIMA** se funda en los artículos 95, numeral 1, de la Constitución Política; 196, 200 260, 261, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 830, 861 y 863 del Código de Comercio; 23, 24 y 25 de la Ley 222, 42 y 43 de la Ley 1258 de 2008 y concordantes; 252 de la ley 1450 de 2011; 1746 del Código Civil; y 20 del CGP, numeral 4.

Los sustentos de hecho de esta pretensión se encuentran en el Capítulo 5 de esta demanda, HECHOS, y, principalmente, entre los hechos 5.3.2 a 5.3.53, ambos inclusive.

Esta pretensión busca que se declare que ALBERTO MARULANDA POSADA violó varias de sus obligaciones legales y estatutarias (i) al tratar de impedir que los minoritarios de CATAY conocieron la oferta de cesión de cuotas de interés social de ÍTACA en STO, dirigida a CATAY; (ii) al negarse a dar traslado de la oferta; y (iii) al llevar a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, su representante aparente, y representante de INGETEC I&D, a notificar a ÍTACA, con un pretexto infundado, que habían terminado las negociaciones con INGETEC I&D.

La declaración que se pide debe servir para fundar una declaración posterior de responsabilidad directa contra ALBERTO MARULANDA POSADA, como administrador de STO, por su conducta ilegal al negarse a dar traslado a CATAY, sociedad controlada por él, de la oferta de cesión de cuotas de interés social que ÍTACA le hacía, para cumplir con los requisitos legales sobre derecho de preferencia a que estaba condicionada esa negociación.

A falta de estipulación en contrario en los estatutos de STO, el artículo 363 del Código de Comercio obligaba a ÍTACA a ofrecer a CATAY las cuotas de interés social en STO, que deseaba ceder, como condición previa para poder cederlas a INGETEC I&D. ALBERTO MARULANDA POSADA estaba obligado a dar traslado inmediato de la oferta a CATAY (artículo 363 del C.Co.), pero incumplió esa obligación asumiendo facultades de contralor de legalidad del negocio, que ni la Ley ni los estatutos le confieren.

No había conflicto de interés en que ALBERTO MARULANDA POSADA, representante legal de STO, al recibir de MARÍA ISABEL O. de WIESNER la oferta de cesión de cuotas de interés social de ÍTACA en STO, orientara el negocio hacia una sociedad controlada por él, INGETEC I&D, pues, en todo caso, el negocio tendría también que ofrecerse a CATAY, igualmente controlada por él, y ésta sociedad tendría que aprobar en la Junta de STO el ingreso de INGETEC I&D y la consiguiente reforma estatutaria (artículos 362 y 365 del CdC). El negocio, era, pues, conocido de los representantes legales de todas las sociedades participantes, y la Junta de STO tendría que dispensar **finalmente** del conflicto de interés existente, al autorizar el ingreso a la sociedad del nuevo socio INGETEC I&D (artículo 365 del C.Co.).

El negocio, ventajoso para INGETEC I&D, había sido convenido en todos sus aspectos esenciales -objeto, precio y plazo- (artículos 363 y 845 del C.Co.) y en algunos de detalle. Sin embargo, ALBERTO MARULANDA POSADA resolvió bloquearlo con un argumento infundado, en el último momento.

Los antecedentes del negocio, las intervenciones de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, así como las razones que ALBERTO MARULANDA POSADA dio, por escrito, para impedir el traslado de la oferta de ÍTACA a CATAY, demuestran que el único motivo por el cual ALBERTO MARULANDA POSADA adoptó esa decisión, fue impedir que los socios minoritarios de CATAY se enteraran de las condiciones en las cuales la sociedad INGETEC I&D, controlada por él, pagaría la adquisición de esas cuotas.

En efecto, una vez logrado el acuerdo sobre el negocio, ALBERTO MARULANDA POSADA promovió, a través de ANDRÉS MARULANDA POSADA, a quien había autorizado para adelantar el negocio, un interés propio, contrario a la naturaleza del contrato de cesión de cuotas sociales, que consistía en limitar el ejercicio del "derecho de preferencia" de CATAY.

Puesto que ALBERTO MARULANDA POSADA podía obtener con facilidad la decisión que considerara conveniente a sus intereses cuando CATAY usara el "derecho de preferencia", el intento que hizo de limitar ese uso -para lo cual él y su hijo ANDRÉS consideraron, inclusive, transformar a CATAY en una sociedad de tipo SAS- demuestra su interés en impedir que los socios minoritarios de CATAY, distintos de los herederos de CARLOS S. OSPINA DELGADO (QEPD), conocieran los detalles del negocio y manifestaran su opinión en la Junta de CATAY, o usar la información en futuras negociaciones con él.

Y puesto que CATAY no podía condicionar, por sí misma, la forma en la que se le reconociera el "derecho de preferencia", la única manera que ALBERTO MARULANDA POSADA tenía para seguir adelante con el negocio y limitar el ejercicio del "derecho de preferencia" de CATAY, sin consentimiento de ÍTACA, era abusando de sus facultades como representante legal de STO. Y esto fue lo que hizo.

Y así, coincidiendo con lo dicho en el párrafo anterior, ALBERTO MARULANDA POSADA faltó a sus deberes como representante legal de STO, al emplear pretextos legales para promover la limitación al ejercicio del "derecho de preferencia" de CATAY, negándose a transmitir a esta sociedad la oferta completa de cesión de cuotas sociales que había hecho ÍTACA, e invocando como motivo la revelación que se hacía en esa oferta del negocio acordado con INGETEC I&D.

ÍTACA ofreció asumir la responsabilidad legal por el trámite que pedía, precisamente porque tenía la seguridad de que éste era legal (Anexo 50, hecho 5.3.46). Es preciso observar, en conclusión, que, con su conducta, ALBERTO

MARULANDA POSADA aprovechó en forma indebida su posición de representante legal de STO, para buscar un interés ajeno al de STO, en vez de limitarse a transmitir la oferta, y actuar a través del ejercicio legítimo de su capacidad de decisión sobre CATAY o INGETEC I&D.

El hecho de que ÍTACA quisiera cumplir con su interpretación de la ley y revelar a la Junta de CATAY la existencia y características del negocio acordado con INGETEC I&D, hubiese coincidido con la negativa a "seguir adelante", expresada por ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, vocero de ALBERTO MARULANDA POSADA en la negociación y representante legal de INGETEC I&D, revela el ilegal alcance que tenían sobre el acuerdo logrado la posición y el extraño interés de ocultamiento de ALBERTO MARULANDA POSADA, representante legal de STO.

Sobra advertir que si, en algún momento, la negociación hubiese estado condicionada a un acuerdo con los bancos, el deber de obrar "de buena fe", a que se refiere el artículo 863 del Código de Comercio, habría obligado a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, vocero de ALBERTO MARULANDA POSADA y representante legal de INGETEC I&D, a incluir esa condición, en forma clara y expresa, en los documentos que las partes intercambiaron en marzo y julio de 2020, identificados en la pretensión **sexta**.

El artículo 363 del Código de Comercio establece que "salvo estipulación en contrario, el socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a los demás socios por conducto del representante legal de la compañía, quien les dará traslado inmediatamente, a fin de que dentro de los quince días siguientes manifiesten si tienen interés en adquirirlas. (…)" (El subrayado es mío)

Los estatutos sociales de STO no contienen ninguna estipulación respecto al ejercicio del derecho de preferencia, por lo que la cesión de cuotas de esta sociedad se rige por los artículos 362, 363, 364, 365 y 366 y 367 del Código de Comercio.

El señor ALBERTO MARULANDA POSADA de manera reiterada se negó a dar traslado a la oferta de cesión de derechos de ÍTACA a CATAY, presentada a través de la comunicación del 23 de julio de 2020. Primero, se negó al traslado de oferta a través de carta del 29 de julio de 2020, presentando argumentos falsos y por fuera de la ley (Hecho 5.3.41 y Anexo 49). Luego, se negó nuevamente al traslado de la oferta mediante comunicación del 11 de agosto de 2020, a pesar de que la representante de ÍTACA le solicitara expresamente transmitir inmediatamente la oferta (Hechos 5.3.44 y 5.3.45, y Anexos 50 y 55)

El señor MARULANDA POSADA se negó a dar traslado inmediato a la oferta justificando su decisión en argumentos falsos, sin sustento legal y adjudicándose facultades que no tiene. Mediante la carta del 29 de julio de 2020 (Anexo 49), afirmó que como en la comunicación se evidencia que ya se había dado una intención de

adquisición de las cuotas ofertadas por parte de un tercero, no se había agotado lo establecido por el artículo 363 del Código de Comercio, y que por ello se estaba desconociendo el derecho de preferencia. Además, afirmó que al representante legal le corresponde verificar que la comunicación y el procedimiento de cesión de cuotas se ajuste a la ley.

En la carta del 11 de agosto de 2020 (Anexo 55), el señor ALBERTO MARULANDA POSADA afirmó nuevamente que, porque ÍTACA había iniciado ya negociaciones con un tercero sobre las cuotas sociales que posee en STO, él no podía dar traslado de la oferta a CATAY pues la oferta no cumplía con el artículo 363 del Código de Comercio. Esto, a pesar de que se le había explicado que, precisamente, lo que ÍTACA intentaba era cumplir con dicho artículo, ofreciendo su participación a CATAY para que ejerciera su "derecho de preferencia".

El artículo 363 del Código de Comercio establece un deber al representante legal de "**dar traslado inmediatamente**" de la oferta, y no condiciona dicha obligación a nada distinto que la recepción del mensaje que le dirija el socio que pretenda ceder las ofertas. La ley no le otorga al representante legal de la sociedad la facultad de abstenerse de hacer el traslado. Tampoco la ley le impone un deber de cuidar y responder por la legalidad del negocio: éste es un asunto que se debe resolver entre las partes del negocio, que son el cedente y el cesionario de las cuotas sociales. Por eso MARULANDA POSADA no podía negarse a dar traslado a la oferta presentada por ÍTACA, y al hacerlo violó el artículo 363 del Código de Comercio.

Además, no existe norma que prohíba a los socios negociar su participación en la sociedad. Lo que sí exige el Código de Comercio es que el socio que tenga la intención de vender su participación cumpla con el artículo 363 para garantizar a los demás socios el "derecho de preferencia". Esto no implica, de ninguna manera, que el socio no pueda iniciar negociaciones condicionadas con terceros para vender su participación en la sociedad, si quienes pueden ejercer el "derecho de preferencia" renuncian a él.

Por lo anterior, es claro que el señor MARULANDA POSADA violó el artículo 363 del Código de Comercio ya que no dio traslado a la oferta de cesión de cuotas presentada por ÍTACA.

Quería, pues, MARULANDA POSADA burlar el derecho que la Ley confiere a los socios de CATAY de conocer las condiciones completas en las cuales se hacía a CATAY la oferta de cuotas de interés social en STO. Ya sea que ellos tuvieran o no la capacidad de determinar las decisiones de CATAY en un sentido o en otro, el hecho es que la ley les daba la facultad de conocer con transparencia el negocio que se estaba haciendo. El solo hecho de obstaculizarles el conocimiento completo del negocio era una violación de MARULANDA POSADA a sus deberes de obrar de buena fe y con lealtad, y sin abuso del derecho propio.

Pero ALBERTO MARULANDA POSADA, como los hechos demuestran, quería mantener a los socios minoritarios de CATAY sin información para una eventual negociación posterior de sus cuotas en CATAY, influida por la negociación de las cuotas de ÍTACA en STO. Es decir, **prefirió su interés propio en una negociación futura** con tales socios, antes que el interés de STO en facilitar a sus socios el ejercicio de sus derechos.

No hubo "buena fe" ni "lealtad" de ALBERTO MARULANDA POSADA, al frustrar a un socio -ÍTACA- su derecho a ceder las cuotas de interés social en STO, solo para proteger su interés en adquirir ventajas de la ignorancia de los socios minoritarios de CATAY en una eventual negociación posterior.

El negocio nunca estuvo condicionado a una financiación bancaria, como se observa, en forma clara, en los documentos en los cuales ambas partes estuvieron de acuerdo antes de que ÍTACA formulara su oferta a CATAY. Si tal condición hubiese existido habría sido deber de buena fe de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, como representante legal de INGETEC I&D, hacerla constar en los documentos con los que participó en el acuerdo negocial. Y no hubo "buena fe" de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, vocero de ALBERTO MARULANDA POSADA y representante legal de INGETEC I&D, al invocar este pretexto para afirmar que "mal haría en seguir adelante en estas circunstancias" con las negociaciones.

La conducta de ALBERTO MARULANDA POSADA violó, pues, los deberes de "buena fe" y "lealtad" que le imponían, entre otros, el artículo 23 de la Ley 222; y la prohibición de obrar en condiciones de conflicto de interés, que contiene la misma norma.

6.6.-PRETENSIÓN OCTAVA. -LA CONDUCTA DE ALBERTO MARULANDA POSADA Y LA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE INGETEC I&D CAUSARON DAÑOS Y PERJUICIOS A ÍTACA.

La **pretensión OCTAVA** se funda en los artículos 95, numeral 1, de la Constitución Política; 200, 260, 261, 362, 363, 364, 365, 366, 830, 861 y 863 del Código de Comercio; 23, 24 y 25 de la Ley 222, 42 y 43 de la Ley 1258 de 2008 y concordantes; 252 de la ley 1450 de 2011; 1746 del Código Civil; y 20 del CGP, numeral 4.

Los sustentos de hecho de esta pretensión se encuentran en el Capítulo 5 de esta demanda, HECHOS, y principalmente a partir del hecho 5.3.2, pero, sobre todo, en el numeral 5.3.53.

En la pretensión **octava** la demanda identifica, primero, la naturaleza de los daños que ocasionó a ÍTACA el interés de ALBERTO MARULANDA POSADA de ocultar

la negociación a los socios minoritarios de CATAY, limitando el alcance del "derecho de preferencia" de esta sociedad, negándose a transferir la oferta hecha por ÍTACA, y concluyendo con un pretexto sin fundamento las negociaciones entre ÍTACA e INGETEC I&D, a través de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, su vocero y representante legal de INGETEC I&D

En general, tales daños consisten en poner de relieve la arbitrariedad con la cual ALBERTO MARULANDA POSADA, representante legal de STO, y el socio CATAY, disponen de los derechos de otros socios. La manifestación de esa arbitrariedad impide que cualquier tercero, ajeno al control de MARULANDA POSADA, quiera vincularse a STO y, de hecho, implica que la única manera de que ÍTACA pueda ejercer su derecho a negociar sus cuotas en STO sea plegándose a la voluntad de MARULANDA POSADA. E implica que, si no hay un oportuno remedio judicial, una suerte parecida espera a los socios minoritarios de CATAY.

El daño patrimonial a ÍTACA se manifiesta, sobre todo, en cuanto le impide terminar de ejecutar el negocio acordado, recibir el precio, y recibir los rendimientos de los recursos respectivos. ÍTACA tenía derecho a recibir este precio porque, habiendo llegado a un acuerdo previo con INGETEC I&D, el precio se recibiría al cerrar el negocio con CATAY, o con INGETEC I&D. Se estima en la demanda que los perjuicios de ÍTACA ascienden, por estos conceptos, a no menos de $7.375 millones, actualizados desde el 14 de agosto de 2020 hasta el día que se haga el pago, más intereses.

El hecho 5.3.53 enumera, en forma precisa, los daños y perjuicios que sufrió ÍTACA por las conductas de ALBERTO MARULANDA a las que se refiere la pretensión séptima: conductas éstas que, en una etapa posterior, fueron acolitadas por ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, representante legal de INGETEC I&D.

En el funcionamiento, y en el valor económico de los aportes sociales a una sociedad de responsabilidad limitada, influyen en forma sustancial dos normas del Código de Comercio, a saber, los artículos 362 y 363 del mismo. Ambas normas fueron violadas por MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, por lo que sus socios, fueron víctimas de daños y perjuicios, que MARULANDA POSADA debe indemnizarles.

El artículo 362 del Código de Comercio establece que "los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas. Cualquier estipulación que impida este derecho, se tendrá por no escrita."

La posibilidad de ceder las cuotas de un socio en la sociedad es una parte sustancial del valor de dichas cuotas, puesto que permite a cada socio permanecer en la sociedad mientras ésta dé unas utilidades satisfactorias, o ceder sus cuotas y retirarse de ella si considera que su inversión puede ser más rentable en otra parte.

Cuando un inversionista queda atado a una inversión en una sociedad, el valor de su inversión se congela alrededor de los rendimientos de la sociedad, de modo que si estos son inferiores a los del mercado habrá una desvalorización inevitable de la inversión. Y, por supuesto, el derecho a ceder las cuotas vale, también, en la medida en que haya compradores eventuales para ellas en el mercado.

Cuando ALBERTO MARULANDA POSADA comenzó a usar los bienes de STO para arrendarlos a sociedades controladas con él, sin contar con la autorización de su Junta y, más aún, contra la voluntad expresa de ÍTACA, ésta advirtió que la rentabilidad de su inversión estaba condicionada a la voluntad del administrador, y tomó la mejor decisión posible: vender sus cuotas para llevarse su inversión a otra parte. La cesión de las cuotas de interés social de ÍTACA fue, pues, una consecuencia lógica de los abusos de ALBERTO MARULANDA POSADA en STO, al obrar en condiciones de conflicto de interés.

En este caso está probado que el señor ALBERTO MARULANDA POSADA le negó a ÍTACA su derecho a la libre negociación de sus cuotas sociales en STO. La única forma que tiene ÍTACA para ceder su participación es cumpliendo el artículo 363 del Código de Comercio, el cual establece que para comercializar su participación en STO, debe primero ofertar dicha participación a través del representante legal de la sociedad. Si el representante legal se niega a dar traslado de la oferta presentada al único otro socio de STO, no existe otra forma que ÍTACA pueda comercializar sus cuotas cumpliendo con el procedimiento establecido por la ley.

Los daños y perjuicios que se causaron a ÍTACA tienen una expresión monetaria fácil de determinar, pues llevaron a que esta sociedad no pudiera realizar la venta pactada en $7.375 millones de pesos, no pudiera aprovechar el dinero acordado para invertirlo en forma lucrativa y, sobre todo, a que se hiciera mucho más difícil hacia adelante hacer una negociación con cualquier persona distinta de ALBERTO MARULANDA POSADA o las sociedades que él controla.

Las condiciones en las cuales ALBERTO MARULANDA POSADA y su hijo ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, representante legal de INGETEC I&D, manejaron y frustraron la negociación con ÍTACA, hacen que los derechos de ÍTACA en STO perdieran virtualmente todo su valor para una negociación con terceros.

La causa **directa e inmediata** de los perjuicios derivados de la negativa a dar traslado a CATAY de la oferta de ÍTACA, es la voluntad de ALBERTO MARULANDA POSADA, cuando dificulta que los socios minoritarios de CATAY conozcan los detalles del negocio que se haría con INGETEC I&D si CATAY no aceptara la oferta; y, sobre todo, cuando niega el traslado de la oferta de ÍTACA a CATAY para la cesión de cuotas sociales en STO.

La causa **directa e inmediata** de los perjuicios derivados de la negativa de INGETEC I&D **en continuar** con el negocio corresponde a INGETEC I&D, en cuanto ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR inventó un pretexto falso para hacerlo, en lugar de atribuir la decisión, como debía, a la conducta de ALBERTO MARULANDA POSADA.

ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR puso de presente, con su conducta, que el negocio con INGETEC I&D no podría continuar sin la voluntad de ALBERTO MARULANDA POSADA. Pero en vez de reconocerlo, agravó la situación al atribuir su decisión a una condición inexistente de financiamiento bancario. Fue así como ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, representante legal de INGETEC I&D, escribió a ÍTACA inventando el pretexto de la financiación bancaria para afirmar que "mal haría en seguir adelante" con el negocio acordado.

6.7.-PRETENSIÓN NOVENA. AL HACER IMPOSIBLE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS QUE DEPENDÍA EL NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE INGETEC I&D, ALBERTO MARULANDA POSADA ESTÁ OBLIGADO A CONSEGUIR QUE ESTA OBLIGACIÓN SE CUMPLA E INGETEC I&D ESTÁ OBLIGADA A COLABORAR.

La **pretensión novena** se funda, de nuevo, en los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 222 de 1995; en los artículos 1507, 1537, 1538, 1542 y 1602 del Código Civil, y en los artículos 362, 363, 845, 861, 863 y 871 del Código de Comercio y concordantes.

Los sustentos de hecho de esta pretensión se encuentran en el Capítulo 5 de esta demanda, HECHOS, y principalmente a partir del hecho 5.3.2, pero, sobre todo, en el numeral 5.3.53.

La pretensión **novena** se funda, en especial, en los artículos 1537, 1538 y 1542 del Código Civil, que son del siguiente tenor:

> ARTÍCULO 1537. Si la condición suspensiva es o se hace imposible, se tendrá por fallida. A la misma regla se sujetan las condiciones cuyo sentido y el modo de cumplirlas son enteramente ininteligibles.
>
> Y las condiciones inductivas a hechos ilegales o inmorales.
>
> La condición resolutoria que es imposible por su naturaleza, o ininteligible, o inductiva a un hecho ilegal o inmoral, se tendrá por no escrita.
>
> ARTÍCULO 1538. La regla del artículo precedente, inciso 1o, se aplica aún a las disposiciones testamentarias.

> Así, cuando la condición es un hecho que depende de la voluntad del asignatario y de la voluntad de otra persona, y deja de cumplirse por algún accidente que la hace imposible, o porque la otra persona de cuya voluntad depende no puede o no quiere cumplirla, se tendrá por fallida, sin embargo, de que el asignatario haya estado, por su parte, dispuesto a cumplirla.
>
> Con todo, si la persona que debe prestar la asignación, se vale de medios ilícitos para que la condición no pueda cumplirse, o para que la otra persona, de cuya voluntad depende en parte su cumplimiento, no coopere a él, se tendrá por cumplida.
>
> ARTÍCULO 1542. No puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional sino verificada la condición totalmente.
>
> Todo lo que se hubiere pagado antes de efectuarse la condición suspensiva, podrá repetirse mientras no se hubiere cumplido.

Los artículos 1538 y 1542 del Código Civil, enuncian un principio según el cual, si la persona que puede resultar obligada al cumplirse una condición se vale de medios ilícitos para que la condición no pueda cumplirse, o para que la otra persona, de cuya voluntad depende en parte su cumplimiento, no coopere a él, la condición se tendrá por cumplida.

Cuando ALBERTO MARULANDA POSADA impidió que la sociedad CATAY, que él controla, se manifestara sobre la oferta de ÍTACA, hizo imposible el cumplimiento de la condición de que pendía la celebración del contrato entre ÍTACA e INGETEC I&D, esto es, la condición de que ÍTACA hubiese cumplido previamente con presentar una oferta a CATAY, y que ésta la rechazara. Por lo tanto, de acuerdo con la regla que contienen los artículos 1537, 1548, y 1542 del Código Civil, y el artículo 863 del Código de Comercio, la condición de la que pendía la celebración del contrato entre INGETEC I&D e ÍTACA se cumplió, y el contrato debe celebrarse, como parte de la reparación debida a ÍTACA, según el artículo 863 del Código de Comercio y las normas concordantes.

La pretensión novena se limita, pues, a pedir la aplicación de tales normas al caso concreto, con una declaración de que, como ALBERTO MARULANDA POSADA, al negarse a dar traslado a CATAY de la oferta de cesión de cuotas sociales, violó la ley e hizo imposible las condiciones de las cuales dependía el negocio, tal condición se entiende cumplida y es obligatorio celebrar el negocio como parte de la indemnización de perjuicios.

ALBERTO MARULANDA POSADA no puede cumplir, por sí mismo, la obligación que se hizo exigible -celebrar el acuerdo de cesión-, esto es, ha hecho una estipulación por otro, en los términos del artículo 1507 del Código Civil. Pero, como controla a INGETEC I&D, tiene la obligación de usar su control sobre esta sociedad para que ratifique la obligación que ALBERTO MARULANDA POSADA le ha creado; y para que, en consecuencia, INGETEC I&D , con la colaboración de CATAY, celebre el contrato que estaba planeado para ella.

De la misma manera, corresponde a INGETEC I&D , por razón del artículo 861 del Código de Comercio colaborar con ALBERTO MARULANDA POSADA para que el acuerdo de cesión culmine en la Junta de socios de STO en la forma prevista en la Ley.

6.8.- PRETENSIÓN DÉCIMA. -SUBSIDIARIA DE LA NOVENA. CONDENA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE HACER, E INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS.

La **pretensión DÉCIMA, subsidiaria de la NOVENA,** se funda en los artículos 95, numeral 1, de la Constitución Política; 200, 260, 261, 362, 363, 364, 365, 366, 830, 861 y 863 del Código de Comercio; 1610 del Código Civil; 23 y 24 de la Ley 222, 42 y 43 de la Ley 1258 de 2008 y concordantes; 252 de la ley 1450 de 2011; 1746 del Código Civil; y 20 del CGP, numeral 4. También en el principio de "reparación integral y equidad" (artículo 283 del CGP), así como en los artículos 1613 y 1614, y concordantes del Código Civil.

Los sustentos de hecho de esta pretensión se encuentran en el Capítulo 5 de esta demanda, HECHOS, y principalmente a partir del hecho 5.3.2, pero, sobre todo, en el numeral 5.3.53.

La referencia al 14 de agosto del 2020, que aparece en esta pretensión, se explica por ser la fecha en la que ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, por escrito, indica que "mal haría en seguir adelante" con el negocio convenido (hecho 5.3.52), y consuma, de ese modo, el incumplimiento de lo acordado, no solo con la autorización de su padre ALBERTO MARULANDA POSADA, sino como representante legal de INGETEC I&D.

Es preciso tener en cuenta que los daños y perjuicios ocasionados a ÍTACA, no consisten solo en los que pueden observarse *prima facie*, como son, haber dejado de recibir el precio y los rendimientos que este podría producir. Porque, además, se relacionan, en buena parte, con la dificultad que las conductas de ALBERTO MARULANDA POSADA crean a ÍTACA para conseguir cesionarios ajenos por completo a las sociedades que MARULANDA POSADA controla. Algunos de esos daños no pueden estimarse en términos económicos, lo que no implica que no sean ciertos.

Ha habido una desvalorización sustancial de las cuotas sociales de ÍTACA en STO, pues la conducta de ALBERTO MARULANDA POSADA implica que ITACA no pueda ceder sus cuotas sociales sino cuando MARULANDA POSADA, atribuyéndose una facultad que la ley no le ha dado, resuelva que puede transmitir la oferta respectiva a los otros socios de STO

De modo que las conductas de ALBERTO MARULANDA POSADA implican que el derecho de negociar libremente sus cuotas de interés social en STO, que otorga a ÍTACA el artículo 362 del Código de Comercio, **ha sido dañado en una forma radical,** hasta el punto de que la reparación integral, en cuanto los daños y perjuicios pueden estimarse en términos económicos, debe consistir, **por lo menos**, en que los causantes del daño celebren las operaciones que estaban previstas cuando se violaron los derechos de ÍTACA, y que ésta encontraría ahora muy difíciles de celebrar con terceros.

A lo anterior, debe añadirse el hecho de que, dada la forma en la que están físicamente integrados los bienes sobre los cuales recaen los derechos de ÍTACA, resultaría muy difícil encontrar un comprador distinto de quienes ocupan esos bienes, empresas controladas por MARULANDA POSADA, si fueran a venderse en el mercado.

Por todas estas razones, la indemnización que se pide consiste, ante todo, en que se ordene a ALBERTO MARULANDA POSADA usar su capacidad de decisión sobre INGETEC I&D para que se celebre el negocio de cesión de cuotas de interés social en STO que había sido acordado con ella; y que, si ello no es posible, se entregue el valor acordado a ÍTACA. Todo con actualización de valor e intereses, y sin perjuicio de que ÍTACA haga cuanto esté a su alcance, y se le pida, para lograr el traslado a INGETEC I&D de sus cuotas en STO.

ALBERTO MARULANDA POSADA, como administrador de STO, está obligado, según el artículo 200 del Código de Comercio y las normas concordantes, a responder por los perjuicios que por dolo o culpa ocasionó a ÍTACA. Puesto que, como se ha explicado, ALBERTO MARULANDA POSADA incumplió su deber legal de dar traslado inmediato de la oferta de ÍTACA a CATAY, y extralimitó sus funciones legales y estatutarias asumiendo la facultad de controlar la legalidad de la oferta de ÍTACA, **su culpa se presume**.

A su vez, el artículo 861 del C.Co. obliga a INGETEC I&D a celebrar el contrato prometido bajo condición.

El artículo 1610 del Código Civil, permite exigir tanto a ALBERTO MARULANDA POSADA, como a INGETEC I&D, el cumplimiento de la obligación de hacer que la ley o los acuerdos precontractuales les imponían, esto es, que se ejecute el hecho

prometido (la celebración del contrato) o que se le indemnicen los perjuicios, en particular, el pago en dinero.

El artículo 1610 del Código Civil, permite, igualmente, pedir la indemnización por la mora.

6.9.-PRETENSIÓN UNDÉCIMA. CONFLICTO DE INTERÉS EN LOS ARRENDAMIENTOS.

La **pretensión UNDÉCIMA**, se funda en los artículos 22, 23, 24 (200 del C.Co.) y 25 de la Ley 222 de 1995 y, en particular, en el inciso final del artículo 25; y en el artículo 863 del Código de Comercio.

Los hechos que dan sustento a esta pretensión se relatan en el Capítulo 5, HECHOS, con los numerales 5.2.1 a 5.2.22, ambos inclusive.

Esta pretensión se refiere a la contravención al régimen de conflictos de interés en los que incurrió ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, al celebrar y renovar contratos de arrendamiento con sociedades en las que él era representante legal o sobre las cuales tenía capacidad de decisión derivada de su participación en el capital social, o de ser su representante legal. Esos contratos, y la forma en la que se ejecutaron, tolerando atrasos y dando financiamientos concesionales a las subordinadas de ALBERTO MARULANDA POSADA, dañaron, en primer lugar, a STO; pero, en forma indirecta, a los accionistas de STO, como ÍTACA.

MARULANDA POSADA, de acuerdo con la ley, estaba en la obligación de poner de presente, en forma explícita y directa, ante la Junta de STO, su conflicto de interés en la celebración de los contratos aludidos, para que la Junta, en la misma forma explícita, los allanara o los sostuviera. Pero no procedió así.

No puede usar MARULANDA POSADA, como disculpa, el que la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER hubiera hecho unas críticas a las tasas de interés que se obtenían de los arrendatarios incumplidos, o a asuntos semejantes, y que tales críticas hubieran sido atendidas total o parcialmente. La señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER no es abogada, y aunque siempre insistió en sus críticas al conflicto de intereses con el que actuaba MARULANDA POSADA, su referencia a una de las manifestaciones del conflicto, y su posterior subsanación eventual, no pueden tomarse como una dispensa a los deberes específicos de MARULANDA POSADA, que le debieron ser advertidos por la persona que fungía como abogada de la empresa.

Por lo demás, el Sr. Juez, al analizar la conducta dolosa o culposa de MARULANDA POSADA, debe tener en cuenta su oposición, tanto en CATAY como en STO, a la obtención de avalúos comerciales del edificio, contrariando, de esa

manera, la solicitud de accionistas en STO y CATAY (Hechos 5.3.5, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 5.4.7).

La doctrina colombiana ha sido pacífica al señalar cómo, en principio, existe un conflicto de interés cuando una persona a la cual se ha confiado la capacidad de administrar bienes de terceros, usa esa capacidad para celebrar contratos consigo mismo o con personas naturales o jurídicas a las que él tiene un deber de cuidado o promoción.

El artículo 23 de la ley 222 de 1995 establece que "los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados."

La Superintendencia de Sociedades, en su publicación "Guía Práctica para Administradores" define el deber de lealtad como: "el actuar recto y positivo que le permite al administrador realizar cabal y satisfactoriamente el objeto social de la empresa, evitando que en situaciones en las que se presenta un conflicto de sus intereses se beneficie injustamente a expensas de la compañía o de sus socios".

Además, el numeral 7 del citado artículo 23 de la Ley 222 establece que los administradores deberán: "abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas" (El subrayado es mío)

La ley colombiana no define qué se entiende como conflicto de interés. Por ello, la Superintendencia de Sociedades ha establecido que le corresponde a cada juez determinar cuándo existen circunstancias que puedan activar la regla del numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995.[5]

Como criterio general, la Superintendencia ha establecido que el análisis que haga el juez deberá establecer si el administrador "cuenta con un interés que pueda nublar su juicio objetivo en el curso de una operación determinada. Para el efecto, deben acreditarse circunstancias que representen un verdadero riesgo de que el discernimiento del administrador se vea comprometido".[6]

[5] Superintendencia de Sociedades. Superintendencia Delegada para Procedimientos Mercantiles. Sentencia N° 800-26 de 13 de abril del 2016. Rad: 2016-01-117407

[6] Superintendencia de Sociedades. Superintendencia Delegada para Procedimientos Mercantiles. Sentencia No. 800-85 de 8 de julio del 2015.

En esta demanda he acreditado múltiples circunstancias que demuestran que el señor MARULANDA POSADA realizó operaciones como administrador de STO con un claro interés personal, sin tener en cuenta que, al paso que las sociedades arrendatarias estaban todas bajo su control y el de su familia, en STO hay intereses de otras personas -ITACA y los socios minoritarios de CATAY, cuyo consentimiento ha debido conseguirse, pues ellas, mejor que él, pueden apreciar qué es lo que les conviene.

Los hechos más claros son (i) la firma del contrato de arrendamiento del 30 de septiembre de 2016 (Anexo 21); (ii) la forma en la que se evadió el cumplimiento de las normas sobre procedimiento para superar conflicto de interés, en la Junta del 21 de marzo de 2017, aprovechando que la representante de ÍTACA en la reunión no es abogada, y (iii) la suscripción, aprobada de esa manera en tal Junta, del Otrosí No. 1 del 21 de marzo de 2017, sobre el mismo contrato de arrendamiento (Anexo 23), en los que el señor MARULANDA POSADA actuó como representante tanto del arrendatario como del arrendador; y (iv) la reticencia a obtener un avalúo profesional e independiente del inmueble.

El simple hecho de representar a las dos partes en un contrato, cuando una de las partes puede tener intereses y apreciaciones distintas a las de la parte que controla MARULANDA POSADA, hace que el señor MARULANDA POSADA haya estado incurso en un conflicto de intereses. El señor MARULANDA POSADA al contratar en nombre de ambas partes al mismo tiempo, no podía conocer y valorar de la misma manera los intereses de STO y de INGETEC S.A. ya que la naturaleza de cualquier negocio bilateral y conmutativo entre personas independientes implica intereses contrapuestos. El interés para cada empresa era obtener los mayores beneficios del contrato, especialmente en el canon de arrendamiento. El interés de STO era acordar el mayor canon de arrendamiento posible en el mercado y el de INGETEC S.A., como el de las otras arrendatarias, era conseguir arrendado el uso del inmueble pagando lo menos posible, dentro de los estándares comerciales. Este tipo de situaciones, según ha explicado la Superintendencia, ocasionan que, en este caso concreto, se haya comprometido el juicio del señor MARULANDA POSADA, ya que él debía actuar protegiendo el interés de cada sociedad.

La Superintendencia de Sociedades ya se ha pronunciado acerca del conflicto de interés que surge cuando una misma persona es administradora de dos empresas independientes que contratan entre sí. Al resolver las medidas cautelares de un proceso de la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P., mediante auto no. 801-7259 del 19 de mayo de 2014, la Superintendencia afirmó que confluían intereses contrapuestos en una persona que actuó en calidad de director de la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. y que además ocupó la junta directiva de la empresa que era contraparte de la primera en un contrato de asistencia técnica; además, su voto era determinante para la celebración del contrato entre las dos empresas.

En este caso es mucho más evidente el conflicto ya que el señor MARULANDA POSADA actuaba directamente como representante legal de las dos sociedades partes del contrato, y, además, no quiso colaborar en obtener un avalúo comercial que habría podido revelar si las condiciones de los contratos correspondían o no a los precios del mercado.

Ahora, el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 establece, como excepción a la prohibición del administrador participar en actividades en conflicto de intereses, contar con autorización expresa de la junta de socios para participar en dicha actividad.

En este caso el señor MARULANDA POSADA no solo no contaba con autorización de la Junta Directiva, sino que sus actuaciones fueron reprochadas y prohibidas expresamente y en repetidas ocasiones por el socio ÍTACA LTDA.

En la Junta Ordinaria de Socios del 21 de marzo de 2017, registrada en el Acta No. 76, ÍTACA manifestó expresamente la existencia de un conflicto de interés del representante legal (Anexo 22), pero, no siendo abogada su representante, y no habiendo MARULANDA POSADA manifestado el conflicto, ella procedió sin exigir la aplicación de las normas que regulan la forma de proceder en esos casos. En la Junta del 23 de marzo de 2018, registrada en el Acta No. 77, la representante de ÍTACA expresó su desacuerdo con la gestión del señor MARULANDA POSADA, y afirmó que él no defiende los intereses de la sociedad y que toma decisiones que reflejaban conflictos de interés. Además, en esta Junta se pusieron de presente los graves incumplimiento por parte del arrendatario en el pago de los cánones, que el señor MARULANDA POSADA no había cobrado, y que si hubieran entrado oportunamente a las cuentas bancarias de STO habrían producido, seguramente, algún rendimiento (Anexo 23)

En la Junta Ordinaria de Socios del 19 de marzo de 2019, registrada en el Acta No. 78, se informó de la renovación "automática" del contrato de arrendamiento suscrito por el señor MARULANDA POSADA, con conflicto de interés. Ante lo cual, la representante de ÍTACA objetó por ilegal dicha renovación, por la existencia del conflicto de interés. En la misma Junta Ordinaria de Socios del 19 de marzo de 2019, la representante de ÍTACA señaló que la voluntad del socio ÍTACA era no prorrogar el contrato de arrendamiento en el mes de mayo de 2019. (Anexo 25). Es claro, pues, que la conducta de MARULANDA POSADA no fue solo hecha sin conseguir autorización previa, sino contra la expresa voluntad de uno de los socios.

Por lo anterior, el señor MARULANDA POSADA no representó los intereses de STO o de sus socios en la firma de esos contratos, sino que se aprovechó de su posición como representante legal de STO para favorecer a sociedades sujetas a su control, sin hacer siquiera un avalúo que permitiera establecer la razonabilidad de

los arriendos pactados. Esto fue un claro acto de violación a los deberes de lealtad y de buena fe que debe cumplir el representante legal con la sociedad.

En materia societaria el tratamiento que debe darse a tales situaciones es claro: el administrador de bienes ajenos debe poner en conocimiento de los interesados en tales bienes el conflicto eventual que existe, para que ellos le permitan seguir adelante con el negocio o para que, ante su falta de aprobación, él deba evitarlo.

En la demanda existen abundantes pruebas de la vinculación de ALBERTO MARULANDA con sociedades tales como INGETEC SAS, en cuyo capital él tiene participación indirecta, pero decisoria. De tal manera que, en principio, existía para él un conflicto de interés en la celebración de contratos de arrendamiento entre STO, sociedad que representaba legalmente, e INGETEC SAS, en cuyo capital participa y cuya representación legal tenía. Por lo tanto, era claro su deber de poner en conocimiento de la Junta de STO el conflicto de interés, y de conseguir el pronunciamiento respectivo.

MARULANDA POSADA no hizo una u otra cosa. No informó a la Junta de STO sobre el conflicto de interés, y no obtuvo tampoco una autorización para contratar. Se negó a hacer un avaluó comercial e independiente del inmueble. Fue más bien la señora MARÍA ISABEL O. DE WIESNER, representante de ÍTACA, quien se refirió a tales conflictos en las Juntas de STO y censuró los contratos, sin que ello impidiera a MARULANDA POSADA seguir adelante. CATAY, en las mismas juntas, o guardó silencio o procuró defender a MARULANDA POSADA. Las censuras de ÍTACA se refirieron al monto de los cánones y a los retrasos tolerados al arrendatario INGETEC S.A.en el pago de los cánones. Por eso tales censuras tienen relación con los daños que se reclaman en la demanda, y que serán probados y cuantificados en el proceso.

En la Junta del 2 de septiembre de 2020 el apoderado de ÍTACA se refirió de nuevo a esta situación irregular. ALBERTO MARULANDA POSADA manifestó que una parte de su informe a esta Junta se refería al asunto, que las condiciones de los contratos son conocidas por los socios, y que estos han influido en los pactos relativos a los cánones y a las tasas de interés. CATAY, en vez de abstenerse de participar, dada la situación de dependencia que tiene con MARULANDA POSADA, salió en su defensa, con argumentos ajenos también por completo a la naturaleza legal de la controversia. No pudiendo negar los hechos que dan lugar a la responsabilidad de MARULANDA POSADA, el vocero de CATAY se limitó a indicar que el inmueble ha estado bien administrado, que ha sido objeto de mejoras, que ÍTACA se ha beneficiado, que ha recibido los cánones, que ha participado en las decisiones y que ha tenido acceso a la información.

La demanda insiste en que, antes de celebrar o renovar cualquier contrato, ha debido haber una manifestación expresa y especial de ALBERTO MARULANDA

POSADA ante las Juntas sobre la existencia del conflicto, y en que ha debido haber una autorización expresa para contratar; y en que ninguno de esos actos, exigidos por la ley, tuvo lugar. La demanda insiste, además, en mostrar cómo ÍTACA, aunque no estuvo representada por abogados antes de la Junta del año 2020, dejó manifestaciones expresas en las Juntas anteriores contra estos contratos y la conducta de MARULANDA POSADA.

6.10.-PRETENSIÓN DUODÉCIMA. – PERJUICIOS INDIRECTOS OCASIONADOS POR LOS ARRENDAMIENTO DE BIENES DE STO QUE ALBERTO MARULANDA POSADA CELEBRÓ CON SOCIEDADES BAJO SU CONTROL, EN CONDICIONES DE CONFLICTO DE INTERÉS.

La **pretensión DUODÉCIMA**, se funda en los artículos 22, 23, 24 (200 del CdC), 25 de la Ley 222 de 1995 y, en particular, en el inciso final del artículo 25; y en el artículo 863 del Código de Comercio. También en el principio de "reparación integral y equidad" (artículo 283 del CGP), así como en los artículos 1613 y 1614, y concordantes del Código Civil.

Los hechos que dan sustento a esta pretensión se relatan en el Capítulo 5, HECHOS, con los numerales 5.2.1 a 5.2.22, ambos inclusive.

ÍTACA afirma que ALBERTO MARULANDA POSADA causó, directamente perjuicios económicos a STO, al celebrar y administrar contratos de arrendamiento sobre bienes de STO, en favor de sociedades controladas por él.

Afirma también ÍTACA que, como CATAY, en la Junta de socios de STO del 2 de septiembre de 2020, frustró la posibilidad de que STO reclamara esos perjuicios a MARULANDA POSADA, ella reclama ahora los perjuicios sufridos en forma indirecta por la celebración y administración de esos contratos, esto es, por el 50% de los perjuicios que MARULANDA POSADA ocasionó a STO. ÍTACA se funda, entre otras normas, en el inciso final del artículo 25 de la Ley 222.

ÍTACA afirma, además, que, como se puede observar en los hechos de la demanda, no hubo otra voluntad o causa alguna de hecho o de derecho, distinta de la voluntad de ALBERTO MARULANDA POSADA, a la que se pueda tener como causa de estos perjuicios.

Los perjuicios que MARULANDA POSADA ocasionó a STO con los contratos aludidos provienen de dos fuentes, a saber:

b.-Que tales perjuicios a ÍTACA corresponden al 50% de:

b1.-La diferencia entre los cánones pagados a STO y los que se habrían causado si los cánones hubiesen sido acordados con base en un avalúo independiente comercial de los inmuebles, y si los

cánones hubiesen sido iguales o similares a los que se pagaban en el mercado por oficinas del mismo valor;

b2.-Los intereses de mora que STO debió recibir, y no recibió, por razón de las demoras de los arrendatarios en el pago.

Los perjuicios a los que se refiere el literal b1. se causaron por la maliciosa reticencia de ALBERTO MARULANDA POSADA en obtener avalúos comerciales e independientes de los bienes de STO que le habían sido encomendados.

Los perjuicios a los que se refiere el literal b2. de esta pretensión se deben a la maliciosa tolerancia de ALBERTO MARULANDA POSADA con los atrasos de las empresas bajo su control, a las que había arrendado los bienes de STO.

Puesto que ÍTACA es dueña del 50% del capital de STO, el 50% de los perjuicios ocasionados a STO por los contratos celebrados por MARULANDA POSADA en condiciones de conflicto de interés, son perjuicios indirectos a ÍTACA.

6.12.- PRETENSIÓN DÉCIMA TERCERA. SANCIONES A MARULANDA POSADA.

La **pretensión DÉCIMA TERCERA** se funda en los artículos 22, 23, 24 (200 del CdC), 25 de la Ley 222 de 1995 y, en particular, en el inciso final del artículo 25; y en el artículo 863 del Código de Comercio. También en el principio de "reparación integral y equidad" (artículo 283 del CGP), así como en los artículos 1613 y 1614, y concordantes del Código Civil.

En la pretensión DUODÉCIMA, y en los hechos correspondientes de la demanda, ÍTACA identificó los daños que ALBERTO MARULANDA POSADA causó a STO al celebrar contratos con compañías controladas por él, en condiciones de conflicto de interés.

Y, como arriba se explicó, el 50% de esos daños afecta en forma indirecta a ÍTACA, pues es dueña del 50% del capital de STO.

ÍTACA trató, en la reunión del 2 de septiembre de 2020, que se iniciara una acción de responsabilidad contra ALBERTO MARULANDA POSADA, por los hechos que sirven de base a esta pretensión, para que STO fuera indemnizada por los perjuicios derivados de ellos. Sin embargo, CATAY, controlada por ALBERTO MARULANDA POSADA, hizo imposible que se adoptara esa decisión.

Por lo tanto, en términos del inciso final del artículo 25 de la Ley 222, y del artículo 24 de la misma Ley (200 del C.Co.), ÍTACA busca ahora, en esta pretensión décima tercera, que se le indemnicen a ella los perjuicios indirectos que sufrió como

consecuencia de los contratos celebrados por ALBERTO MARULANDA POSADA sobre bienes de STO, en condiciones de conflicto de interés.

6.13.-PRETENSIÓN DÉCIMA CUARTA. REMOCIÓN DE ALBERTO MARULANDA POSADA.

Esta pretensión se funda en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 222 de 1995 y en el artículo 5 del Decreto 1925 de 2009, incorporado hoy en el Decreto 1074 del 2015.

Se funda también en las declaraciones que, se espera, el Juez haya hecho contra ALBERTO MARULANDA POSADA, por razón del incumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias que le corresponden, como representante legal de STO según las normas enumeradas en las pretensiones anteriores, y en el párrafo anterior.

Es natural que, una vez comprobada la infracción del administrador a los deberes que le imponen la ley y los estatutos, se prescinda de sus servicios.

6.14.-PRETENSIÓN DÉCIMA QUINTA. ALBERTO MARULANDA POSADA NO DEBE SEGUIR HABILITADO PARA EJERCER EL COMERCIO.

Esta pretensión se funda en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 222 de 1995 y en el artículo 5 del Decreto 1925 de 2009, incorporado hoy en el Decreto 1074 del 2015.

En esta demanda se han identificado varias conductas de ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, que afectan en forma gravísima la cultura comercial del país, y la confianza en las instituciones societarias que son vitales para el desarrollo de la economía colombiana. Tales conductas han sido:

> a.-Violar el derecho de ÍTACA a que MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, dé traslado inmediato de la oferta de cesión de cuotas sociales que ÍTACA hace a la sociedad CATAY, y que ésta, por virtud del "derecho de preferencia", tiene derecho a recibir;
>
> b.-Evitar que los socios minoritarios de CATAY, socia de STO en el 50% del capital, conozcan en forma íntegra y transparente las circunstancias que han llevado a que ÍTACA, socia también de STO en el 50%, haga a CATAY una oferta de cesión de cuotas de interés social en STO;

c.-Celebrar en forma repetida, sin aprobación de su Junta de socios, contratos sobre bienes de la sociedad STO que él administra, con sociedades controladas por él, hasta el punto de que ÍTACA, uno de los socios de STO se sienta obligada a buscar desprenderse de sus cuotas de interés social en STO.

d.-Permitir que CATAY, una sociedad controlada por él, socia de STO, la sociedad que él administra, y propietaria, como ÍTACA, del 50% del capital social de STO, vote en las juntas de socios para impedir por bloqueo que se ejercite contra él la acción de responsabilidad social, o que se lo remueva del cargo de administrador.

Estas conductas son tan lesivas de las buenas costumbres comerciales, que ameritan que se prohíba, en adelante, a ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA ejercer el comercio.

5. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD; OPORTUNIDAD

En virtud del artículo 590 del Código General del Proceso, la solicitud de medidas cautelares que formulo atrás en esta demanda hace innecesario agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.

Según el artículo 235 de la Ley 222 de 1995, las acciones que se ejercitan en esta demanda -responsabilidad de administradores y socios, nulidad de decisiones sociales por abuso del derecho de voto en paridad- tienen una prescripción de cinco años, pues se derivan todas del incumplimiento de las obligaciones de los administradores y socios, a las que se refieren los artículos 23 a 25 de esa ley, o de la violación a lo previsto en el Libro Segundo del Código de Comercio y en la ley 222.

Los hechos que en esta demanda se censuran ocurrieron a partir del 30 de septiembre de 2016 y en los años posteriores, de modo que estas acciones se ejercitan en tiempo.

8. JURAMENTO ESTIMATORIO Y CUANTÍA

Para efectos de los artículos 82 y 206 del Código General del Proceso y normas concordantes, ITACA estima bajo juramento el valor de la indemnizaciones patrimoniales que reclama, así:

7.1 -Pretensiones octava, novena y décima: la frustrada cesión de intereses sociales de ÍTACA a INGETEC I&D.

Las pretensiones octava, novena y décima se refieren a las violaciones a la ley y a los daños y perjuicios causados por ALBERTO MARULANDA POSADA y/o INGETEC I&D a ÍTACA, con ocasión de la frustrada cesión de cuotas de interés social de ÍTACA en STO a INGETEC I&D; y buscan que ellos reparen a ÍTACA tales daños y perjuicios.

Para calcular el valor de las indemnizaciones necesarias se debe tener en cuenta el valor del negocio que había sido acordado, **siete mil trecientos setenta y cinco millones de pesos ($7.375´000.000)**, más la actualización de ese valor y los intereses correspondientes. Estos se estiman en **mil treinta y ocho millones ciento cuarenta y dos pesos ($1.038'142.000).**

El cálculo del interés moratorio se hizo desde el 14 de agosto de 2020 hasta el 22 de febrero de 2021, a una tasa efectiva anual del 26,76%, que corresponde al 1.5 del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia de Financiera.

A continuación, se explica el cálculo de dicho valor:

Desde	Hasta	Tasa interés anual	Días	Base	Intereses moratorios	Total
15-08-20	31-08-20	26,76%	17	$7.375.000.000	$91.918.767,12	$7.466.918.767,12
1-09-20	30-09-20	26,76%	30	$7.375.000.000	$162.209.589,04	$7.629.128.356,16
1-10-20	31-10-20	26,76%	31	$7.375.000.000	$167.616.575,34	$7.796.744.931,50
1-11-20	30-11-20	26,76%	30	$7.375.000.000	$162.209.589,04	$7.958.954.520,54
1-12-20	31-12-20	26,76%	31	$7.375.000.000	$167.616.575,34	$8.126.571.095,88
1-01-21	31-01-21	26,76%	31	$7.375.000.000	$167.616.575,34	$8.294.187.671,22
1-02-21	22-02-21	26,76%	22	$7.375.000.000	$118.953.698,63	$8.413.141.369,85
				TOTAL	**$1.038.142.000**	**$8.413.141.369,85**

7.2.-Pretensiones undécima, duodécima y décima tercera: celebración y administración de contratos de arriendo, en condiciones de conflictos de intereses.

La pretensión undécima alude a la violación de deberes de ALBERTO MARULANDA POSADA, como administrador de STO, al celebrar contratos de arrendamiento con sociedades que él controla, sin haber declarado el conflicto de intereses ante la Junta de STO ni haber obtenido la dispensa necesaria.

La pretensión duodécima señala los perjuicios ocasionados a STO, e, indirectamente a ÍTACA, por la celebración y administración de contratos de arrendamiento sobre bienes de STO que hizo MARULANDA POSADA en favor de sociedades controladas por él, y en condiciones de conflicto de interés.

La pretensión décima tercera busca que se condene a MARULANDA POSADA a indemnizar a ÍTACA los perjuicios ocasionados indirectamente a ella, por las razones a las que se refiere la pretensión duodécima, entre otras.

Los perjuicios causados a ÍTACA, según la pretensión duodécima, son el 50% de los causados a STO. Estos últimos provienen de dos fuentes distintas, así:

> b1.-La diferencia entre los cánones pagados a STO y los que se habrían causado si los cánones hubiesen sido acordados con base en un avalúo independiente comercial de los inmuebles; y si los cánones hubiesen sido iguales o similares a los que se pagaban en el mercado por oficinas del mismo valor;

Esos perjuicios se estiman así:

AÑO	CANON MENSUAL PACTADO	CANON ANUAL PACTADO	IPC ANUAL	6% DEL VALOR DEL AVALÚO AJUSTADO IPC	DIFERENCIA
2016 - 2017	$60.974.000	$731.668.000	5,75%	$949.736.686	$218.068.686
2017 - 2018	$63.467.837	$761.614.044	4,09%	$1.007.678.182	$246.064.138
2018 – 2019	$65.486.114	$785.833.368	3,18%	$1.050.649.757	$264.816.389
2019 - 2020	$67.568.572	$810.822.864	3,8%	$1.085.157.774*	$274.334.910
2020 - 2021	$68.399.665	$820.795.980	1,23%	$1.071.810.333	$251.014.353
				TOTAL	**$1.499.393.636**

> *Este valor corresponde al 6% del avalúo realizado por Avalúos Nacionales S.A. en el año 2019, el cual se utiliza como referente para calcular el 6% del valor del avalúo ajustado al IPC de los años 2016, 2017, 2018 y 2020.
>
> En el cuadro se comparó el canon anual pactado en los contratos el 6% del valor del inmueble según el avalúo del 2019. Para los demás años se aumentó o disminuyó según IPC.

Por lo anterior, el mayor valor de las utilidades a favor de ITACA, que STO debió declarar bajo el supuesto de esta pretensión, corresponde al 50% del valor del total de la diferencia del canon anual pactado y el que se debió ajustar, es un valor de **setecientos cuarenta y nueve millones seiscientos sesenta y nueve mil ochocientos dieciocho pesos ($749.696.818).**

> b2.-Los intereses de mora que STO debió recibir, y no recibió, por razón de las demoras de los arrendatarios en el pago.

Como MARULANDA POSADA nunca informó las fechas en las cuales finalmente pagaron los arriendos las sociedades controladas por él, para establecer el monto del perjuicio a STO por los atrasos tolerados por el administrador, tomamos en los estados financieros las cuentas por cobrar que aparecen allí cada año, que corresponden a los cánones de arrendamiento en mora, puesto que STO no tenía otra fuente de ingresos, y calculamos el valor de los intereses moratorios por el retraso de un año, así:

Año	**Cuentas por cobrar***	**Tasa interés anual**	**Interés moratorio anual**
2015	$423.628.158	29,11%	$ 123.318.157
2016	$667.627.839	31,33%	$ 209.167.802
2017	$884.644.999	32,35%	$ 286.182.657
		TOTAL	**$ 618.668.616**

Por lo anterior, el mayor valor de las utilidades que STO debió obtener desde 2016, si hubiera cobrado intereses de mora a los arrendatarios controlados por MARULANDA POSADA, habría sido de seiscientos dieciocho millones, seiscientos sesenta y ocho mil seiscientos diez y seis mil pesos ($ 618´668.616). De esa suma, el 50% de los perjuicios recayeron sobre ÍTACA, es decir **trescientos nueve millones trescientos treinta y cuatro mil trescientos ocho pesos ($309’334.308).**

9. PRUEBAS

Solicito que de decreten las que enumero en seguida, y que se practiquen aquellas que no son documentales.

8.1. Documentales

1. Certificado de existencia y representación legal de ÍTACA LIMITADA
2. Poder especial otorgado por ÍTACA al doctor HUGO PALACIOS MEJIA y correo remisorio en cumplimiento del Decreto 806 del 2020.
3. Copia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del doctor HUGO PALACIOS MEJIA.
4. Certificado de existencia y representación legal de CATAY LIMITADA
5. Certificado de existencia y representación legal de STO
6. Certificado de existencia y representación legal de INGETEC SAS
7. Certificado de existencia y representación legal de INGETEC I&D SAS
8. Certificado histórico de nombramientos de representantes legales de CATAY LIMITADA.
9. Certificado de existencia y representación legal de MARULESCO SAS.
10. Copia del Acta No. 17 de la Asamblea de Accionistas celebrada el 6 de diciembre de 2019 de MARULESCO SAS.

11. Copia ESTATUTOS MARULESCO SAS
12. Copia del Acta No. 51 MARULANDA ESCOBAR SAS
12.1 Certificado MARULANDA ESCOBAR SAS
13. Copia del Acta No. Acta No. 256 de la Asamblea de Accionistas celebrada el 12 de diciembre de 2019 de INGETEC SAS
14. Copia Acta No. 45 de la Asamblea de Accionistas celebrada el 23 de enero de 2020 de INGETEC I&D SAS
15. Certificado histórico de nombramientos de representantes legales de INGETEC I&D SAS
16. Certificado de existencia y representación legal de INGETEC G&S SAS
17. Acta No. 45 de la Asamblea de Accionistas celebrada el 21 de enero de 2020 de INGETEC G&S SAS
18. Folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1236643
19. Folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-255233
20. Folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-255232
21. Copia contrato de arrendamiento suscrito 30 de septiembre de 2016.
22. Acta 76 de la Junta de Socios de STO.
23. Copia Otrosi suscrito el 21 de marzo de 2017 del contrato de arrendamiento.
24. Copia del Acta 77 de la Junta de Socios de STO.
25. Copia del Acta 78 de la Junta de Socios de STO.
26. Copia del Acta 59 de la Junta de Socios de CATAY.
27. Copia del Acta 58 de a Junta de Socios de CATAY.
28. Copia del Carta del 19 de junio de 2020 de STO a ÍTACA
29. Copia del Carta Citación Junta de Socios STO del 4 de agosto de 2020
30. Copia del Carta del 29 de marzo de 2019 de AMP a ÍTACA
31. Avalúo del edificio de propiedad de STO e INGETEC I&D S.A
32. Correo del 10 de octubre de 2019 de MIOW a AME.
33. Transcripción de conversación de WhatsApp del 25 de octubre de 2019.
34. Correo del 17 de noviembre de 2019 de MIOW a AME.
35. Correo del 4 de diciembre de 2019 de AME a MIOW.
36. Correo del 22 de enero de 2020 de AME a MIOW.
37. Correo del 3 de febrero de 2020 de MIOW a AME.
38. Correo del 7 de febrero de 2020 de AME a MIOW.
39. Correo del 3 de marzo del 2020 de AME a MIOW.
39.1. Borrador de la oferta o carta de ofrecimiento de las cuotas parte de ÍTACA con destino al representante legal de STO.
39.2. Borrador de la carta a través de la cual el representante legal de STO remite únicamente a GUSTAVO CARRASCO MERINO, representante legal de CATAY LIMITADA, la oferta de cesión de ÍTACA LIMITADA.
39.3. Borrador de la carta a través de la cual GUSTAVO CARRASCO MERINO, como representante legal de CATAY LIMITADA, informa que esa sociedad no ejercerá su derecho de preferencia sobre las cuotas partes ofrecidas.
39.4. Borrador del proyecto de acta de junta de socios de STO en la cual se formaliza la cesión, se aprueba la reforma estatutaria derivada de dicha

cesión, y se nombra representante legal suplente pues, hecha la cesión, no había razón para que MARIA ISABEL O. DE WIESNER conservara dicho cargo en STO.

39.5. Borrador de la carta, para ser suscrita por GUSTAVO CARRASCO MERINO, en la que se ratifica que CATAY LTDA no ejercerá su derecho de preferencia para adquirir las cuotas que ofrezca ÍTACA.

39.6. Borrador del acuerdo de cesión de cuotas que se celebraría entre ÍTACA LIMITADA e INGETEC I&D S.A.S

40. Correo de 9 de marzo de 2020 de EAWA a AME

41. Correo del 26 de marzo del 2020 de AME a MIOW

41.1. Borrador del acuerdo de cesión de cuotas que se celebraría entre ÍTACA LIMITADA e INGETEC I&D S.A.S

42. Memorando del doctor Hugo Palacios Mejía del 3 de abril del 2020.

43. Correo del 6 de abril del 2020 de MIOW a AME.

44. Correo del 14 de mayo de 2020 de MIOW a AME.

45. Correo del 14 de mayo de 2020 de HPM a EAWA.

46. Carta del 19 de junio de 2020 de AME a MIOW.

47. Comunicación del 17 de junio de 2020 de MIOW a AMP.

48. Correo del 24 de julio de 2020 de MIOW a AMP.

49. Carta del 29 de julio de 2020 de AMP de MIOW

50. Carta del 5 de agosto de 2020 MIOW a AMP.

51. Carta del 6 de agosto de 2020 de AME a MIOW

52. Copia de los estados financieros de INGETEC I&D del 2019.

53. Copia de los estados financieros de INGETEC SAS del 2019.

54. Carta del 11 de agosto de 2020 de MIOW a AME

55. Carta del 11 de agosto de 2020 de AMP a MIOW

56. Carta del 14 de agosto de 2020 de AME a MIOW

57. Grabación en video de la Junta de Socios de STO celebrada el 2 de septiembre de 2020 de manera virtual.

58. Transcripción de la grabación de la Junta de Socios de STO celebrada el 2 de septiembre de 2020 realizada por la empresa ATmedios.

59. Copia de la carta solicitando copia del acta No. 79

60. Copia del Acta No. 79 de la Junta de Socios de STO.

61. Copia del Laudo del 4 de abril de 2017, en proceso de Nelly Daza de Solarte Vs. CSS Constructores y Carlos Alberto Solarte.

62. Copia de la sentencia de Corte Constitucional C-621 de 2003.

63. Copia de la comunicación enviada por MIOW a AME el 8 de marzo de 2018.

64. Copia de la comunicación enviada por AME por MIOW el 22 de marzo de 2018.

65. Copia Estatutos sociales de STO:

65.1. Copia Escritura No. 3765 de 26 de noviembre de 1976.

65.2. Copia Escritura No. 1687 del 30 julio de 1980

65.3. Copia Escritura No. 1344 del 13 de octubre de 1982

65.4. Copia Escritura No. 4890 del 19 de octubre de 1998

65.5. Copia Escritura No. 5378 del 28 de noviembre de 2005

65.6. Copia Escritura No. 1906 del 28 de mayo de 2008
66. Correos entre AME y MIOW del 5, 11 y 24 de julio de 2019. Avalúo y oferta concreta de AME.
67. Copia de la carta del 28 de marzo de MIOW a AMP pidiendo oferta, informando contratación de avaluador y pidiendo informaciones para éste.
68. Correos entre AME y MIOW del 30 de abril, 4 y 7 de mayo de 2020

8.2. Interrogatorios a las partes con exhibición de documentos:

Solicito se ordene el interrogatorio de parte del señor ALBERTO MARULANDA POSADA identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.063.997, con el fin de interrogarlo sobre los hechos que se le atribuyen en esta demanda.

Además, en virtud de los artículos 265 y 266 del Código General del Proceso, solicito se decrete, junto a la declaración de parte del representante legal de STO, la exhibición de los siguientes documentos que se encuentran en poder de STO: 1) los documentos de soporte de pago de todo los cánones de arrendamiento de los inmuebles de STO, en donde se determine la fecha y el valor de cada pago, de las anualidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020; 2) los libros de contabilidad de la sociedad STO durante los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Esto con el fin de probar los hechos que se relacionan con las pretensiones undécima, duodécima y décima tercera.

Finalmente, informo que la señora de MARÍA ISABEL O. de WIESNER, como representante legal de ITACA LIMITADA, está dispuesta, si se le ordena, a responder un interrogatorio sobre todos los hechos mencionados en la demanda, especialmente respecto a las reuniones que sostuvo con los señores ALBERTO MARULANDA POSADA y ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR.

8.3. Testimonios:

8.3.1. ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.779.202 para que declare sobre los hechos materia de esta demanda, y, en particular, acerca de los que se atribuyen a él respecto a la negociación de la participación de cuotas sociales de ITACA en STO con INGETEC I&D y su padre ALBERTO MARULANDA POSADA. El testigo podrá ser citado al correo andresmarulandae@gmail.com y andres@ingetec.com.co.

8.3.2. ANA MILENA LOPERA ROZO, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.501.243 para que, en su condición de directora legal de las sociedades INGETEC, declare sobre los hechos materia de esta demanda, y en particular, a los que se refieren a la negociación de la participación de cuotas sociales de ITACA en STO con INGETEC I&D, y sobre las

actuaciones del señor MARULANDA POSADA. La testigo podrá ser citada al correo analopera@ingetec.com.co.

8.4. Dictamen pericial:

De acuerdo con el artículo 227 del Código General del Proceso, anuncio que ÍTACA desea aportar un dictamen pericial, pero no ha tenido tiempo de hacer las diligencias necesarias para que el perito lo complete, por lo que solicito al señor Juez que nos otorgue un plazo para presentarlo. El dictamen deberá servir para cuantificar los daños y perjuicios patrimoniales que ha padecido ÍTACA, y para probar los de naturaleza inmaterial, así:

(i) el *quantum* del impacto dañino de la celebración y administración de los contratos de arrendamiento que se censuran en la demanda,; y

(ii) el *quantum* del impacto dañino de frustración del negocio por la negativa de ALBERTO MARULANDA a transferir a CATAY la oferta de ÍTACA para la cesión de sus cuotas de interés social en STO, y

(iii) el *quantum* del impacto dañino sobre el valor de las cuotas de interés social de ÍTACA por efecto del manejo de MARULANDA POSADA sobre los contratos de arrendamiento; y por efecto de su forma de aplicar sus facultades de administrador sobre la solicitud de dar traslado a CATAY de la oferta de ÍTACA.

El perito cumplirá con los requisitos del artículo 226 del citado Código.

Por lo anterior, solicito respetuosamente se decrete como prueba el dictamen pericial que se allegará y que se fije un término para ello.

10. ANEXOS

Los enunciados en el acápite de pruebas documentales que se allegan con el correo electrónico con el cual se radica la presente demanda.

El correo electrónico que contiene la presente demanda y sus anexos se envía en copia a los correos electrónicos de las demás partes, junto con la demanda, cumpliendo con el Decreto 806 de 2020

11. NOTIFICACIONES

10.1. El suscrito recibirá notificaciones en la oficina de la Carrera 11 No. 82 - 01 Ofic. 1002 de Bogotá. Teléfono 6291828. Correos electrónicos: estudios@palacioslleras.com y hpalacios@palacioslleras.com.

10.2. ÍTACA puede ser notificada en la Carrera 9 No. 80-15, Oficina 602, Bogotá, D.C., correo electrónico: jgarcia@wiesnerasociados.com

10.3. SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA, puede ser notificada en la carrera 6 No. 30A-30 en Bogotá D.C., y en el correo electrónico registrado: conta@ingetec.com.co

10.4. ALBERTO MARULANDA POSADA puede ser notificado en la calle 30 A No. 6-22 Of 1301 en Bogotá D.C. y su correo electrónico es amarulapos@ingetec.com.com

10.5. CATAY LIMITADA puede ser notificada en la carrera 6 No. 30A-30 en Bogotá D.C., correo electrónico registrado: conta@ingetec.com.co

10.6. INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. – INGETEC SAS puede ser notificada en la carrera 6 No. 30A – 3 en Bogotá D.C. correo electrónico registrado: conta-ing@ingetec.com.co

10.7. INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS -INGETEC I&D SAS puede ser notificada en la carrera 30 No. 6-22 Of 601 en Bogotá D.C. correo electrónico registrado: conta-iyd@ingetec.com.co

10.8. ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR puede ser notificado en carrera 30 No. 6-22 Of 601 en Bogotá D.C. y en los correos electrónicos andresmarulandae@gmail.com y andres@ingetec.com.co

En atención al auto del 6 de octubre de 2022 que el Despacho expidió para solicitar una subsanación de la demanda, previa a su admisión, **ACREDITO** que las direcciones de notificación se obtuvieron de la siguiente manera:

1. Las direcciones de notificación de SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA, las cuales corresponden a la carrera 6 No. 30A-30 en Bogotá D.C., y al correo electrónico registrado: conta@ingetec.com.co, las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA, aportado como anexo 5 de la demanda.

2. Las direcciones de notificación de ALBERTO MARULANDA POSADA, las cuales corresponden a la calle 30A No. 6-22 Of 1301 en Bogotá D.C. y sus correos electrónicos son amarulapos@ingetec.com.co, las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de MARULESCO SAS, sociedad en de la que el señor Marulanda es representante legal, aportado como anexo 9 de la demanda.

3. Las direcciones de notificación de CATAY LIMITADA las cuales corresponden a la carrera 6 No. 30A-30 en Bogotá D.C., y el correo electrónico registrado: conta@ingetec.com.co, las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de CATAY LIMITADA, aportado como anexo 4 de la demanda.

4. Las direcciones de notificación de INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. – INGETEC SAS las cuales corresponden a la carrera 6 No. 30A – 3 en Bogotá D.C. y el correo electrónico registrado: conta-ing@ingetec.com.co, las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de INGETEC SAS, aportado como anexo 6 de la demanda.

5. Las direcciones de notificación de INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS -INGETEC I&D SAS las cuales corresponden a la carrera 30 No. 6-22 Of 601 en Bogotá D.C. y el correo electrónico registrado: conta-iyd@ingetec.com.co, las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de INGETEC I&D SAS, aportado como anexo 7 de la demanda.

6. Las direcciones de notificación de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR las cuales corresponden a la carrera 30 No. 6-22 Of 601 en Bogotá D.C. y los correos electrónicos andresmarulandae@gmail.com y andres@ingetec.com.co, las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de INGETEC I&D SAS, aportado como anexo 7 de la demanda, sociedad de la que el señor Marulanda ostenta la calidad de representante legal para asunto laborales.

   Asimismo, estas direcciones de correo electrónico constan en las comunicaciones habituales del señor Marulanda con ÍTACA, tal y como consta de los anexos 34 a 39 de la demanda.

Del señor Juez, con todo respeto,



HUGO PALACIOS MEJÍA
C.C. 17.064.471 de Bogotá D.C.
T.P. 4.003 del C.S.J.

Palacios Lleras

Sergio Alejandro Gallego Morales <sgallego@palacioslleras.com>

ITACA

1 mensaje

Ingrid Perez - Wiesner & Asociados <jgarcia@wiesnerasociados.com> 24 de febrero de 2021, 9:27
Para: hpalacios@palacioslleras.com
Cc: sgallego@palacioslleras.com

Doctor

Hugo Palacios Mejía

hpalacios@palacioslleras.com

Apreciado doctor:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 806 de 2020, como representante legal Ítaca Ltda en liquidación, anexo a este correo poder especial otorgado a usted por la sociedad que represento, para que, según su criterio profesional, presente demanda contra una o varias de las personas que en el poder se relacionan y con el objeto que allí se describe.

Atentamente,

MARÍA ISABEL O. DE WIESNER

* *
This message is being sent from a law firm and may contain information which is confidential and/or privileged.
If you are not the intended recipient, please advise the sender immediately by reply email and delete this message and any attachments without retaining a copy. Thank you.
Nota Confidencial:
La información contenida en este email es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o por la compañía a la cual esta dirigido.
Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley.
Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

Please consider the environment before printing this e-mail. Thank you.

Poder de MIOW-Itaca Ltda a HPM Feb.24-21.pdf
114K

Señores
JUECES CIVILES DEL CIRCUITO DE BOGOTA
(REPARTO)

ASUNTO: PODER ESPECIAL

Yo, MARÍA ISABEL JUANA OSPINA DE WIESNER, mayor de edad y domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con cédula de ciudadanía No. 51.713.072, actuando como representante legal de **ÍTACA LIMITADA** en liquidación, sociedad comercial constituida por escritura pública No. 2346 del 16 de agosto de 1976, otorgada en la Notaría 2 de Bogotá, con NIT 860.048.865-1, por medio del presente escrito manifiesto que otorgo poder especial, amplio y suficiente al Dr. **HUGO PALACIOS MEJÍA**, también mayor de edad y vecino de la ciudad de Bogotá, D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 17.064.471 de Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional de abogado No. 4.003 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en nombre y representación de ÍTACA LIMITADA, según su criterio profesional, presente demanda contra una o varias de las siguientes personas: el señor **ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.063.997; el señor **ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.779.202; la sociedad **CATAY LIMITADA** con Nit 860.048.866-9; la sociedad **SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA** con NIT 860.009.936-1; la sociedad **INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. - INGETEC SAS** con NIT 860.001.986-1; la sociedad **INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS -INGETEC I&D S.A.S** con NIT 900206480-2, para que pida, según su discreción profesional, que se hagan declaraciones sobre los siguientes o similares asuntos:

(i) el control de **ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA** sobre esas sociedades, y sobre MARULESCO SAS y MARULANDA ESCOBAR SAS como subordinadas, y las consecuencias de ello;

(ii) la nulidad absoluta de los votos de la sociedad CATAY LTDA. en la Junta de Socios de la sociedad STO que se reunió virtualmente el 2 de septiembre de 2020 y las determinaciones que se tomaron ese día por la Junta de Socios;

(iii) la responsabilidad de **ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA** como administrador de **SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA**. por violación de sus deberes legales y estatutarios, y en particular por violación de las reglas sobre conflicto de interés;

(iv) que **ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA** creó una representación aparente en **ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR** para un negocio de cesión de cuotas de interés social en **SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA**;

(v) que **ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA** violó directamente, y a través de sociedades subordinadas y de su representante aparente, sus deberes como representante legal y el deber de negociar de buena fe en una negociación de cuotas de interés social en **SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA.**;

(vi) que **ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA** hizo imposible, directamente y/o por la acción de su representante aparente y de sus sociedades subordinadas, el cumplimiento de las condiciones de que pendía una negociación de cuotas de interés social en **SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA.** y que, por lo tanto, la condición debe entenderse cumplida;

(vii) que **ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA**, directamente o por medio **CATAY LIMITADA** impidió, ilegalmente, que la Junta de Socios de **SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA** que tuvo lugar el 2 de septiembre de 2020 ejerciera la acción de responsabilidad social contra él, y eligiera otro representante legal;

(viii) que se declare la elección de un representante legal de **SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA**.

Y que, el Dr. PALACIOS MEJIA, en consecuencia de una o varias de las anteriores o similares declaraciones, pida que **se condene** a **ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA**, o a una o varias de las sociedades subordinadas, o a aquel con éstas o por medio de éstas y/o con **ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR**, a que indemnicen en forma íntegra a **ÍTACA LTDA**, los daños y perjuicios causados, bien en dinero o en natura, esto es, también celebrando los actos y contratos que **ALBERTO MARULANDA POSADA y/o ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR**, y una o más de las las sociedades subordinadas frustraron con sus conductas ilegales o abusivas.

La enumeración anterior no limita de ninguna manera las facultades que, según el artículo 77 del Código General del Proceso corresponden a todos los apoderados en todo proceso judicial. Pero el Dr. PALACIOS queda autorizado también para sustituir este poder, para conciliar y para pactar cláusulas arbitrales.

Aclaro que si bien ÍTACA LIMITADA se encuentra en liquidación por haberse cumplido la causal de disolución por vencimiento del plazo de la vigencia de la sociedad, tengo facultades para otorgar este poder en calidad de liquidadora en virtud del artículo 227 del Código de Comercio, toda vez que la sociedad no ha nombrado liquidador a la fecha y me encuentro inscrita como representante legal de la sociedad.

Informo que el correo electrónico del Dr. Palacios Mejia, que coincide con el inscrito en el Registro Nacional de Abogados, es: hpalacios@palaciosilleras.com.

Solicito se le reconozca personería al apoderado para actuar en los términos aquí señalados.

Cordialmente,

MARÍA ISABEL JUANA OSPINA DE WIESNER
C.C. 51.713.072
Representante legal
ÍTACA LIMITADA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
100

ACTA DE REUNION ORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS DE SERVICIOS TECNICOS OMICRON LTDA.

ACTA No. 79

De forma virtual, el día dos (02) del mes de septiembre de dos mil veinte (2020) siendo las 11:30 a.m. se reunieron en reunión ordinaria, a través de la plataforma tecnológica google meet, lo cual consta en grabación de dicha sesión, las personas que a continuación se relacionan, previa citación escrita enviada el 4 de agosto de 2020 a través de correo electrónico, por el Representante Legal de la Sociedad a cada uno de los socios de la sociedad Servicios Tecnicos Omicron Ltda (en adelante "STO"), de acuerdo con los estatutos de la sociedad:

SOCIOS	Representado por	CUOTA PARTE	VALOR APORTE
Itaca Ltda.	José Miguel Mendoza Daza, Apoderado	3.200	320.000
Catay Ltda.	Daniel Garcia Piñeros, Apoderado	3.200	320.000
TOTAL		6.400	640.000

Asisten a la reunión el señor Alberto Marulanda Posada, en calidad de representante Legal de la Sociedad, el Señor Yivher Andres González Velandia, en calidad de Revisor Fiscal, y la señora Ana Milena Lopera Rozo, en calidad de invitada.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El señor Alberto Marulanda manifestó que en horas de la mañana recibió*...un e-mail en el María Isabel Ospina había nombrado al Dr. Mendoza como representante en esta reunión e igualmente un e-mail de Gustavo Carrasco como representante de Catay nombrando a Daniel García como representante de la sociedad en esta reunión...*

El Dr. Marulanda indica que verificó los poderes y los certificados de existencia y representación legal de las sociedades y evidencia que ambos socios se encuentran debidamente representados para participar en la reunión.

Verificada la asistencia de todos los socios a la reunión se constata que se encuentran representadas la totalidad de cuotas de interés social que conforman el capital de la compañía, y que en consecuencia estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 6.400 cuotas sociales.

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

El Dr. Mendoza, apoderado de Itaca Ltda., propone dar el mismo trato que se ha venido ejerciendo en estas reuniones por la sociedad, y en consecuencia, propone que el Dr. García se designe como Presidente y el Dr. Mendoza como Secretario.

NOTARIA 02 REPUBLICA DE COLOMBIA
ANA DIAZ GRANADOS BONIVENTO
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

El Dr. García, apoderado de Catay Ltda., manifiesta que lo que se ha hecho en años anteriores es que Ana Milena Lopera, quien está presente, es quien ha elaborado las actas, y lo que se propone que en el punto 10 del orden del día que dice que se hará la elaboración y aprobación del acta, y que en últimas los apoderados de los socios son los que van a tener que aprobar el texto del acta, se tomen el tiempo para compartir la pantalla para que ambos apoderados de los socios puedan enfocarse en los temas y sea Ana Milena quien tome notas tema de practicidad.

El Dr. Mendoza propone nombrar una comisión para aprobar el acta, lo cual facilita el trámite de su redacción. La comisión estaría integrada por los apoderados de los dos socios.

El Dr. García acepta la propuesta pero solicita que Ana Milena la vaya redactando, de esa forma al final solo queda el ejercicio de leerla y estar de acuerdo con el Acta.

De acuerdo con lo anterior, se elige como Presidente de la sesión al Dr. García, Ana Milena Lopera Rozo como secretaria, se compone una comisión con el Dr. García y con el Dr. Mendoza para la aprobación del acta, y se advierte que el Dr. Marulanda debe firmar el acta, de acuerdo con lo indicado por la Ley 222 de 1995. Por unanimidad de los asistentes, que conforman el 100% del capital social, se aprueba lo anterior con el voto favorable de las 6400 cuotas en las que se encuentra dividido el capital social.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El orden del día propuesto en la convocatoria es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Elección de Presidente y secretario de la reunión
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura del Informe de Gestión 2019 del Representante Legal.
5. Lectura del Informe del Revisor Fiscal.
6. Examen, aprobación o improbación de los estados financieros a 31 de diciembre De 2019
7. Lectura y aprobación del proyecto de distribución de Utilidades.
8. Elección o ratificación del Representante Legal
9. Elección o ratificación del Revisor Fiscal.
10. Elaboración y aprobación del Acta

El Dr. Mendoza propone modificar el orden del día para incluir un punto de proposiciones y varios. Aun cuando considera que no es estrictamente necesario incluirlo, en la medida en que el artículo 182 del Código de Comercio establece que en cualquier momento se pueden proponer temas no incluidos en este tipo de reuniones, para efectos de orden propone que se adicione en este momento en el punto 11 del orden del día el asunto relativo a proposiciones y varios.

NOTARIA 072 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
ANA DIAZ GRANADOS BONIVENTO
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

El Dr. García no ve inconveniente en la propuesta e indica que se puede revisar en su momento, inclusive que quede como punto 10 para que el punto 11 corresponda a elaboración y aprobación del acta.

Se propone aprobar la modificación del orden del día, el cual quedará de la siguiente forma:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Elección de Presidente y secretario de la reunión
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura del Informe de Gestión 2019 del Representante Legal.
5. Lectura del Informe del Revisor Fiscal.
6. Examen, aprobación o improbación de los estados financieros a 31 de diciembre De 2019
7. Lectura y aprobación del proyecto de distribución de Utilidades.
8. Elección o ratificación del Representante Legal
9. Elección o ratificación del Revisor Fiscal.
10. Proposiciones y varios.
11. Elaboración y aprobación del Acta

Por unanimidad de los asistentes que conforman el 100% del capital social, esto es, el voto favorable de las 6400 cuotas en las que se encuentra dividido el capital social, se aprobó el orden del día ya indicado.

4. LECTURA DEL INFORME DE GESTIÓN 2019 DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Dr. García manifiesta que teniendo en cuenta que el documento fue conocido por todos con la debida antelación, y se tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de inspección, y si no se tiene ningún comentario para efectos de dejar en el acta se podría proceder con la aprobación.

El Dr. Mendoza pregunta si se va a someter a aprobación el informe de gestión, a lo cual el Dr. García manifiesta que efectivamente se someterá a aprobación.

En esa medida, el Dr. Mendoza estaría de acuerdo con omitir la lectura del informe y proceder a la votación para la aprobación del informe de gestión.

El Dr. García emite su aprobación con voto a favor del informe de gestión.

El Dr. Mendoza vota en contra de la aprobación del informe, y procede a dejar una constancia en ese sentido, e informa que remitirá a través de correo electrónico la constancia para que quede incluida textualmente en el acta. Acto seguido procede a su lectura.

NOTARIA 65 DE BOGOTÁ D.C.
ANA DIAZ GRANADOS BONIVENTO
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

A través de correo electrónico dirigido a la secretaria de la reunión, en la dirección analopera@ingetec.com.co, el Dr. Mendoza remite la constancia que deja la sociedad Itaca Ltda. sobre el informe de gestión:

CONSTANCIA – INFORME DE GESTION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Desde hace ya varios años, el representante legal principal de STO Ltda., Alberto Marulanda Posada, ha venido participando en actos y operaciones que le han representado claríssimos conflictos de interés. Tales conflictos se han presentado respecto de los contratos por cuya virtud STO Ltda. le ha arrendado su único activo a Ingetec S.A., una compañía con la cual el señor Marulanda y sus familiares mantienen vínculos de diversa índole.

A pesar de haber estado incurso en los referidos conflictos de interés, el señor Marulanda no surtió el procedimiento de autorización regulado en el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995. Esta omisión le representó al señor Marulanda una violación manifiesta de sus deberes como administrador de STO Ltda., a la luz de los pronunciamientos que sobre el particular han emitido las autoridades colombianas, incluida la Superintendencia de Sociedades. Lo anterior es tanto más grave cuanto que, en los contratos de arrendamiento suscritos por el señor Marulanda, se pactaron condiciones económicas beneficiosas para Ingetec S.A., en detrimento de los intereses de STO Ltda.

Así las cosas, además de que la omisión en comento acarrea la nulidad absoluta de los contratos de arrendamiento, el señor Marulanda deberá responder por los perjuicios que el incumplimiento de sus deberes legales le ha causado a STO Ltda. y a sus socios. En este sentido, según lo previsto en el artículo 2.2.2.3.1 del Decreto 1074 del 2015, "el administrador que incurra por sí o por interpuesta persona, en interés personal o de terceros, en conductas que impliquen conflicto de interés [...] en violación de la ley y sin la debida autorización de la asamblea general de accionistas o junta de socios, responderá solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasione a los asociados, a la sociedad o a terceros perjudicados".

A pesar de la gravedad de las actuaciones descritas en esta constancia, en el informe de gestión sometido a consideración de la junta de socios no se ha hecho referencia alguna a los conflictos de interés en cuestión, ni a los perjuicios que ha sufrido STO Ltda. por virtud de los arrendamientos antes mencionados. En esta medida, Itaca Ltda. vota en contra de la aprobación del informe de gestión sometido a consideración de la junta de socios de STO Ltda. No está de más advertir que el informe referido sí debe presentarse para su aprobación o improbación por parte de los asociados, tal y como lo ordena expresamente el artículo 46 de la Ley 222 de 1995.

Como consecuencia de lo anterior, debe advertirse que el señor Alberto Marulanda Posada no podrá ejercer el cargo de liquidador de STO Ltda., en caso de que la compañía se disuelva el 31 de diciembre del 2020. Ello obedece que, de conformidad con lo previsto en el artículo 230 del Código de Comercio, "quien administre bienes de la sociedad y sea designado liquidador, no podrá ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las cuentas de su gestión por la asamblea o por la junta de socios" (se resalta). En este sentido, como el informe de gestión del señor Marulanda no fue aprobado por la junta de socios de STO Ltda., es claro que no se cumple con el requisito exigido por el citado artículo 230 para que el representante legal pueda ocupar el cargo de liquidador.

Dado a los 2 días del mes de septiembre del 2020, durante la reunion ordinaria de la junta de socios de STO Ltda.

José Miguel Mendoza
Apoderado – Itaca Limitada

NOTARIA 23 REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOGOTA D.C.
ANA DIAZ GRANADOS BONIVENTO
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

El Dr. García manifiesta que como representante de la sociedad Catay en la reunión, y que previamente ha aprobado el informe de gestión, deja una constancia en el sentido de aclarar que la postura de Itaca a través de su apoderado es lejana de la realidad. Indica que la señora María Isabel en todas las juntas de socios en las que ha participado, ha tenido conocimiento absoluto de los estados financieros, de los informes de gestión rendidos por el Dr. Alberto Marulanda como representante legal de la sociedad STO, donde cuyo único activo de STO es el inmueble que es arrendado, ha tenido absolutamente todo el detalle de todos los movimientos, y que si bien ha hecho una mención en relación con un conflicto de interés, nunca ha hecho una mención en relación con la terminación del contrato de arrendamiento y nunca ha pedido una revisión detallada como consecuencia de la terminación. Por el contrario, lo que siempre ha hecho, es recibir las utilidades y beneficiarse del arriendo del inmueble que tiene STO. Continua su intervención indicando que Catay se aparta rotundamente de esa posición y de esa interpretación porque este contrato de arrendamiento se ha venido desarrollado durante muchos años, se ha venido obteniendo el pago de forma cumplida, a pesar de esta situación de Covid, se ha mantenido el canon, se ha mantenido una posición neutra en este sentido, y no entiende por qué solo cuando hay una discrepancia en relación con el manejo se alega un posible conflicto de interés. Entiende que se esté dejando una constancia pero considera que no es el foro para hacerlo.

El Dr. Mendoza manifiesta que lo que realmente les preocupa es que no se haya obtenido la autorización especial que exige la ley 222 de 1995 para que el Dr. Marulanda pueda participar de una relación comercial entre STO e INGETEC. Al no cumplirse ese trámite, se generan unos efectos jurídicos sobre los contratos y sobre los deberes que le corresponde al Sr. Marulanda en su calidad de represente legal de la compañía.

El presidente le concede el uso de la palabra al representante legal de STO, Dr. Alberto Marulanda, quien manifiesta que en el punto 4 de su informe se indica lo siguiente, procedimiento a leer texto a continuación:

> Es de resaltar que el señor Alberto Marulanda Posada es el representante legal de INGETEC S.A.S., empresa con la cual Servicios Técnicos Omicron Ltda. tiene relación comercial por cuenta del contrato de arrendamiento sobre el edificio, relación que data de hace más de diez (10) años. Las condiciones del arriendo han sido pactadas entre las Partes y conocidas por los socios de Servicios Técnicos Omicron Ltda., inclusive, logrando acuerdos sobre canon de arrendamiento, tasas de interés, y las reparaciones necesarias del inmueble.

El Dr. Mendoza agradece al Dr. Marulanda su aclaración e indica que efectivamente vieron el numeral 4 del informe de gestión en el que se habla de estas operaciones, pero insiste en que la simple afirmación en un informe de gestión no puede suplir la autorización que exige la ley para casos de conflicto de interés y sobre esto la Superintendencia de Sociedades por vía judicial se ha pronunciado, e insiste en que para que el Dr. Marulanda pueda actuar en cualquier relación de cualquier naturaleza con INGETEC, en donde el Dr. Marulanda reviste también la calidad de representante legal, se requiere que la junta de socios lo autorice, lo cual no ha ocurrido en el pasado ni durante esta junta de socios.

NOTARIA 69
ANA DIAZ GRANADOS BONIVENTO
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

El Dr. García, como Presidente de la reunión toma la palabra y menciona que para cerrar el punto y dejar constancia en el acta que como representante de Catay discrepa y tiene una posición radicalmente opuesta, en el sentido en que la información y el conocimiento al único socio adicional a Catay que es Itaca, en los últimos 7 y 8 años ha estado presente y si Itaca a través de su apoderado está haciendo esta mención resulta válido que quede en el acta pero no es lo que Catay considera ni es lo que cree que deba ser el orden de las cosas. Continua diciendo que el Dr. Marulanda, a través de este contrato de arrendamiento ha hecho una gestión que Catay considera válida y la ha reconocido como importante, el inmueble está, es un inmueble que tiene unas condiciones únicas para este estilo de compañías y para este estilo de negocios, se ha mantenido en perfectas condiciones, se han hecho más obras y más mejoras a las específicamente requeridas por ley, y la poderdante del Dr. Mendoza ha expresado en varias oportunidades que no considera que deba asumir esas mejoras sino que las ha debido asumir el arrendatario y no se entiende cuál es el fondo de esto, cuando se han beneficiado, han recibido los cánones, han participado de las decisiones y nunca se les ha negado el acceso a la información, las decisiones o la participación, e insiste que nunca en ninguna de las actas que se tiene ha habido una manifestación expresa de haya una terminación del contrato.

Se le concede la palabra al Dr. Mendoza, quien manifiesta que se ha tocado un punto importante y es el fondo de la constancia, lo cual es muy sencillo, la ley colombiana exige que se cumpla un trámite, y ese trámite no es cualquier cosa, está diseñado para que se proteja a la compañía. Manifiesta que está seguro que el Sr. Marulanda en la gestión de sus negocios ha actuado de buena fe pero hay un trámite que busca que los socios de la compañía tengan acceso a una información adicional a la que se presenta en el informe de gestión, y que los socios se puedan pronunciar sobre la posibilidad de que el Sr. Marulanda sea el que lleve la rienda de los negocios que se celebran con INGETEC, y eso no ha ocurrido, y debería ocurrir por una razón principal y es que si no ocurre, si la Junta de Socios no autoriza al Sr. Marulanda para que el participe en esas operaciones, el Sr. Marulanda estaría violando una disposición imperativa de la Ley 222 con las consecuencias que eso acarrea, por eso se quiso poner de presente en este punto sobre el informe de gestión, además que sirve de justificación para tener que votar en contra de la aprobación del informe de gestión.

Se deja constancia expresa en el acta que al no contar con una votación mayoritaria a favor para la aprobación del informe de gestión el mismo no queda aprobado por la Junta de Socios de STO.

El informe se anexa como parte integrante del protocolo de los documentos de esta reunión y que el representante legal ha presentado él mismo a la Junta de Socios, así como la constancia remitida por el apoderado de Itaca Ltda. vía correo electrónico en la misma reunión.

5. INFORME DEL REVISOR FISCAL

Se da la palabra al Revisor Fiscal, quien procede a dar lectura a su informe, el cual fue previamente compartido con los socios.

NOTARIA 23 REPUBLICA DE COLOMBIA
BOGOTA D.C.
ANA DIAZ GRANADOS BONIVENTO
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

El informe se anexa como parte integrante del protocolo de los documentos de esta reunión.

El presidente de la reunión somete a aprobación el informe del revisor.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. Mendoza, quien manifiesta que el informe no se somete a aprobación, pero que sí tiene un par de preguntas para el sr. Revisor Fiscal. A continuación procede a interrogar al Revisor Fiscal así:

1) El apoderado de Itaca menciona que uno de sus deberes como Revisor Fiscal, según el numeral 1 del artículo 207 del Código de Comercio, es cerciorarse que los actos y contratos celebrados por la compañía se ajusten a los estatutos, a las decisiones de la Junta de Socios y a la Ley, en esa medida se le pregunta si ha revisado el problema del conflicto de interés que ha sido mencionado. Acto seguido, el apoderado procede a reiterarlo en los siguientes términos, por si no se ha oído adecuadamente: Ítaca Ltda. considera que el Sr. Alberto Marulanda tiene un conflicto de interés en cualquier operación, acto, omisión o cualquier decisión que tenga que ver con todas las compañías del grupo INGETEC, especialmente de INGETEC S.A., en la medida en que no solamente ocupa el cargo de representante legal tanto en STO como en INGETEC S.A. sino que también, según la información que se ha presentado en las juntas de socios anteriores, el Sr. Marulanda tiene un interés económico en esas compañías. Bajo la jurisprudencia reiterada de la Superintendencia de Sociedades, esos vínculos dan lugar a un conflicto de interés que hacen necesario surtir un procedimiento especialísimo contemplado en el numeral 7 del artículo 23 de la ley 222. Haciendo una revisión de las actas de junta de socios de la compañía, hemos encontrado que esa autorización nunca se impartió y en esta reunión de hoy por supuesto tampoco se ha impartido. Quisiera entonces conocer la opinión del revisor fiscal acerca de si estos contratos de arrendamiento se han ajustado a la ley, los estatutos y las decisiones de la junta de socios, en la medida en que a nuestro criterio nunca se impartió esta autorización a la que se hace referencia.

El Revisor Fiscal manifiesta que en su opinión en sus pruebas no ha visto conflicto de interés, se ha venido cumplimiento con el contrato de arrendamiento que fue firmado en un periodo de hace 4, 5 u 8 años, se ha venido subiendo su canon, se ha venido pagando mensualmente, entonces en su concepto no considera que haya un conflicto de interés.

Toma la palabra el Presidente de la reunión, el Dr. Garcia, quien manifiesta su intención de comentar que ha notado que el Dr. Mendoza reiteradamente habla de un grupo empresarial y aquí no hay ningún grupo. No ha habido ni un registro de grupo empresarial ni ha habido un pronunciamiento de la Superintendencia de Sociedades en este sentido. Considera que el Dr. Mendoza también omite que el Dr. Marulanda actúa como representante legal de STO en donde hay solo dos socios, luego al final del día las decisiones las han tomados esos dos socios; y con la sociedad con la cual se tiene el contrato de arrendamiento tampoco es el accionista mayoritario, por Itaca siempre ha habido una interpretación equivocada en función de historia de vieja data de la forma como se manejaban las cosas en INGETEC, pero indica que en los últimos 20 años en los

NOTARIA 23 REPÚBLICA DE COLOMBIA BOGOTÁ D.C.
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

cuales hay otros socios activos en INGETEC y que en virtud del modelo de negocio que tiene INGETEC de prestación de servicios el Dr. Marulanda es un representante legal que sigue las órdenes de todos los socios. Además, el Revisor Fiscal es el de esta sociedad y se desconoce si tiene conocimiento de otras sociedades en las cuales tenga el Dr. Marulanda pero considera que no viene al caso. Hay es un informe del revisor fiscal y le solicita al Dr. Mendoza formular todas las preguntas para que el Revisor Fiscal las responda, pero considera que el espíritu de socios no sea que después de que se ha trabajado, recibido todos estos cánones, vistas las cosas así, buscando ahora una formalidad que claramente no se entiende cual es el punto, buscando declarar algo que en su concepto no es susceptible de ser declarado o que por lo menos se dejan constancias pero no es el foro como ya lo ha mencionado. Invita al Dr. Mendoza a que mire el escenario, la forma como se han venido desarrollando los negocios en esta sociedad.

Se le concede la palabra al Dr. Mendoza, quien tiene varias cosas por decir. Primero manifiesta que el hecho de que INGETEC sea o no un grupo empresarial es irrelevante para los efectos de lo que está diciendo en la reunión; si se dijo tal vez fue coloquialmente refiriéndose al grupo INGETEC, pero intentará ser más preciso para que no haya confusiones porque el hecho de que sean o no un grupo inscrito es irrelevante para efectos del conflicto de interés. En segundo lugar, el señor Mendoza explicó que, en su criterio, el conflicto no necesariamente surge del hecho de que el Sr. Marulanda sea o no accionista controlante de INGETEC; la simple circunstancia de que el sea accionista ya daría pie a un conflicto de interés en STO, Además, el apoderado manifestó que el Sr. Marulanda sí aparece inscrito en el registro mercantil como representante legal principal de INGETEC SA y como representante legal principal de Itaca (Sic). Esa es una circunstancia que, por el hecho de ser pública, debería de ser de conocimiento del señor revisor fiscal. Incluso, el revisor fiscal habla de contratos antiquísimos pero hay unos más recientes sobre todo unos otrosíes en los cuales aparece el Sr. Marulanda firmando de lado y lado. En relación con que el Sr. Presidente hablaba de las intenciones de fondo y del espíritu de los socios, sobre eso le gustaría proponer más adelante una serie de ideas para que sean discutidas en el punto de proposiciones y varios. En palabras del señor Mendoza, no se están proponiendo formalismos inanes y tratando de que se cumplan unos trámites que no llevan a nada. La preocupación real es la administración del único activo de la compañía y por eso existe ese procedimiento de conflicto de interés, [por lo cual propondré más adelante] que se ordene la contratación de un avalúo para saber cuánto vale el inmueble y revisar con un asesor experto si los cánones que se están cobrando están en línea con lo que debería estar cobrando STO por el arrendamiento del inmueble. Con eso se podría empezar a zanjar diferencias. También añadió que, lo que busca el procedimiento de conflicto de interés al que se ha referido en varias oportunidades es evitar que se celebren contratos en perjuicio de la compañía. En esa medida, si se cuenta con el dictamen en el que se diga lo que se debe cobrar por el arrendamiento o los rangos entre los que deberían estar el canon, ahí se podría solventar una de las múltiples dudas que se tienen. Así mismo, menciona que tampoco se quiere molestar al Revisor Fiscal; simplemente se le está haciendo una pregunta sobre el contenido de su informe, y es que el señor Revisor Fiscal dijo que las operaciones celebradas por la compañía se han ajustado a la Ley y a los Estatutos. Por eso se le preguntó al revisor fiscal, con base en el artículo que se citó del Código de Comercio, si

NOTARIA 72 BOGOTÁ D.C.
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA CORRESPONDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

eso seguía siendo cierto a pesar de que ha venido explicando desde que comenzó la junta de socios.

En cuanto a la segunda inquietud, el apoderado de Itaca menciona:

2) Tiene que ver con la primera, ya que el Revisor Fiscal dijo que él consideraba que no había ningún conflicto de interés, y quisiera saber si el Revisor Fiscal ha revisado esto que se acaba de decir, que en algunas de esas operaciones aparece el Sr. Marulanda firmando en nombre de STO y de otro lado firmado en nombre de INGETEC.

   El Revisor Fiscal considera que no se ha presenta ningún conflicto de interés porque se ha mantenido el contrato, se han venido pagando mensualmente cumplidamente, se ha subido de acuerdo a lo determinado por la administración. Considera que si el contrato sigue vigente y no se ha dado una terminación o directriz por parte de algún socio es porque no se ha detectado ese conflicto de interés al que se hace mención, igual si lo firma la misma persona en las dos empresas no implica que se presente un conflicto porque no se ha cambiado ninguna condición favorable que se pudiera evidenciar

6. EXAMEN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019.

El presidente de la reunión manifiesta que ambos socios tuvieron acceso a los estados financieros, y le concede la palabra al apoderado de Itaca para que manifieste si los aprueba o no los aprueba o si tiene algún comentario en relación con los mimos.

El Dr. Mendoza manifiesta que votará a favor de la aprobación de los estados financieros con una salvedad: Considera que la compañía ha venido sufriendo unos perjuicios por cuenta de unos conflictos de interés que no han recibido el tratamiento que la ley exige, por eso votan en contra de la aprobación de las cuentas que ha presentado el señor Marulanda, pero creen que los estados financieros son muy sencillos y reflejan los números contables de la compañía y no ven ninguna falsedad o inexactitud, razón por la cual se ha decidido votar a favor de la aprobación de tales estados financieros. Pero el voto va con la salvedad de que en ningún caso puede entenderse que se están aprobando las cuentas de la gestión del señor Marulanda, ni refrendando o ratificando los conflictos de interés en los que se ha incurrido en el caso de los arrendamientos del único activo de propiedad de la compañía.

El Dr. García como apoderado de Catay aprueba los estados financieros y deja una constancia de felicitación y agradecimiento con el Dr. Marulanda por su gestión, considera que a pesar de las circunstancias se ha logrado mantener el contrato de arrendamiento, se ha buscado que el contrato de arrendamiento no se haya ajustado ni reducido en su canon desde los meses de marzo en que se decretó la emergencia económica, y se aprovecha para que quede constancia en el acta, que a diferencia de las otras reuniones, en esta reunión el Dr. Mendoza si está dejando una clara constancia de Itaca sobre su posición sobre el contrato lo cual no ocurría en las reuniones pasadas y considera que el Dr. Mendoza hablará en proposiciones y varios en relación con el inmueble.

NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA
03 NOV 2020

Por unanimidad de los asistentes que conforman el 100% del capital social, el voto favorable con las 6400 cuotas en las que se encuentra dividido el capital social la aprobación a los Estados Financieros presentados. Los estados financieros puestos a consideración de la Junta fueron elaborados de acuerdo con la normativa NIIF, contiene además las notas explicativas de los mismos, y se anexa como parte integrante del protocolo de documentos de esta reunión.

7. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

El Presidente pone de presente que los socios tuvieron acceso al proyecto de distribución de utilidades, y pregunta si están de acuerdo con dicho proyecto.

El Dr. Mendoza manifiesta que ha entendido que la propuesta es que se reparta el 100% de las utilidades que ha generado la compañía durante el ejercicio 2019, y en esa medida están a favor de dicha propuesta.

El Dr. García manifiesta que Catay tampoco tiene observaciones sobre el proyecto, y que en la medida en que se aprobaron los estados financieros también procerá a la aprobación del proyecto de distribución de utilidades.

La Junta aprobó por unanimidad de los asistentes que conforman el 100% del capital social, esto es, con el voto favorable de las 6400 cuotas en las que se encuentra dividido el capital social, el proyecto de distribución de utilidades.

El Proyecto de Distribución de Utilidades presentado por el Representante Legal se anexa como parte integrante del protocolo de documentos de esta reunión.

8. RATIFICACIÓN O ELECCIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL

El apoderado de Itaca Ltda. manifiesta que se opone a la ratificación del señor Alberto Marulanda como representante legal de STO, con base en que la compañía tiene un único activo que es el edificio arrendado a Ingetec, y se necesita que la compañía pueda proteger ese único activo que tiene, recibir los máximos cánones posibles, asegurar que el arrendatario se esté comportando de la mejor manera posible, y asegurar que STO tenga las mejores condiciones contractuales disponibles en el mercado. En esa media, teniendo en cuenta que el señor Marulanda es el representante legal de INGETEC SA, que la Junta de Socios no lo ha autorizado a tener negociaciones con INGETEC SA en cuanto a la explotación del único activo de STO, que al no haberse obtenido esa autorización el señor Marulanda debe abstenerse de participar en cualquier negociación con INGETEC o trato o discusiones que tengan que ver con los intereses de STO, y por eso la propuesta es que la señora María Isabel Ospina de Wiesner asuma la representación legal principal y el señor Marulanda la representación legal suplente, estando inclusive de acuerdo en considerar modificaciones a lo que se acaba de proponer, pero para comenzar se quiere someter esa propuesta a la Junta de Socios.

NOTARIA 69 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
DESPACHO
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

El Dr. García manifiesta que Catay no acepta la propuesta de Itaca y emite voto en contra. El Dr. García propone que se mantenga la representación legal tal y como está, en cabeza del Dr. Alberto Marulanda y se mantenga al suplente. Teniendo en cuenta que el Dr. Marulanda fue nombrado conforme a los estatutos debe mantener hasta que finalice su periodo.

El Dr. Mendoza manifiesta que no está de acuerdo con la propuesta y vota en contra de la ratificación y permanencia del Dr. Marulanda como representante legal principal.

Se deja constancia que no hubo acuerdo y no hay aprobación de la propuesta sobre la representación legal.

9. RATIFICACIÓN O ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE

ITACA manifiesta que está preocupada por la manifestación que hizo el Sr. González, en el sentido de que a su criterio no hay un conflicto de interés cuando una misma persona representa dos compañías en la celebración de un contrato. Sin embargo, no tiene una propuesta para que se reemplace al señor revisor fiscal en este momento, le gustaría poder hacerla en el futuro pero hoy no trajo ninguna propuesta así que no tiene nada que decir ahí, más allá de reiterar su preocupación por lo que se ha manifestado en esta junta de socios.

El presidente manifiesta que para efectos de la elección o ratificación se tiene que dejar en el acta si se ratifica o no.

El apoderado de Itaca indica que vota en contra de cualquier ratificación. No sabe que efectos tenga eso en vista de que tampoco se le ha removido. No sabe si el seguirá inscrito en la Cámara de Comercio hasta que se produzca la nueva elección. Lo que pide, y se lo pide respetuosamente al representante legal, es que la compañía consiga unas cotizaciones para saber si hay otros candidatos que puedan cumplir con esa función de revisoría fiscal por unas sumas iguales o inferiores a las que se están cobrando en la actualidad.

Sobre las manifestaciones de Itaca, el Dr. García deja la siguiente constancia: La sociedad para efectos de la presentación de sus impuestos tiene que tener un representante legal (SIC). El Sr. Mendoza en representación de Itaca está negándole a la sociedad esta obligación y está probablemente generando que de llegar a hacer alguna confusión sobre si la sociedad cumple o no con el requisito de la firma del revisor fiscal para la presentación de los impuestos los socios pueden llegar a ser responsables por tratarse de una sociedad de responsabilidad limitada. Se deja la constancia en el sentido de la no aprobación y el posible daño y perjuicio que se va a causar a los socios. En los muchos años de vigencia que ha tenido la sociedad nunca ha dejado de presentar los impuestos desde el momento en que tuvo la obligación de tener revisor fiscal siempre ha tenido revisor fiscal y es la primera vez en la que se siente y se ve que se está impidiendo a la sociedad cumplir con sus obligaciones fiscales.

NOTARIA 23 REPUBLICA DE COLOMBIA
BOGOTA D.C.
ANA DIAZ GRANADOS BONIVENTO
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

El Dr. Mendoza afirmó categóricamente que él no está proponiendo que STO incumpla obligaciones ante la DIAN; lo que está diciendo es que el revisor fiscal ha manifestado que no hay un conflicto de interés en una situación en la que claramente, a la luz de todo lo dicho por las autoridades colombianas, si hay un conflicto de interés, entonces no se puede esperar que se vote por la ratificación de un revisor fiscal que ha cometido semejante error. Por eso se pidió a la administración que trajera a la siguiente junta de socios, que podría ser la siguiente semana, o cuando se estime conveniente, propuestas para la elección de un nuevo revisor fiscal. El señor Mendoza aclaró que su voto no quiere decir que se haya destituido, implica la remoción del actual revisor fiscal, razón por la cual nada impide que la compañía pueda seguir presentando sus declaraciones tributarias y cumpliendo sus responsabilidades con el fisco. En ese sentido, el señor Mendoza consideró que el presidente estaba tergiversando lo que quiso decir la propuesta de Ítaca y eso no se puede aceptar. Por ello, el referido apoderado dejó constancia de que votar en contra de la ratificación de un revisor fiscal que ha dicho cosas contrarias a la ley no puede entenderse como una intención de Itaca de inducir un incumplimiento de obligaciones tributarias; si se aceptara esa teoría del señor presidente, sería entonces imposible remover revisores fiscales y la compañía quedaría condenada a nunca poder cambiar un revisor fiscal, en la medida en que eso acarrearía incumplir obligaciones tributarias.

El Dr. García toma la palabra y manifiesta que el Dr. Mendoza acomoda lo que dice, ya que indica que las autoridades ya han declarado un conflicto de interés, y hasta donde se tiene conocimiento no se ha declarado ningún conflicto de interés, y solo se trata de una posición que ha tenido un socio que la ha venido mencionado y que en ningún momento se les ha impedido que mencionen o expongan ese conflicto. Continua diciendo que el Dr. Mendoza es reiterativo en decir que no quiere causar perjuicios; que no puede ratificar, pero no trae ninguna propuesta, entonces se pregunta si una propuesta constructiva sería traer 3 propuestas de revisores fiscal con valores, pero simplemente lo que se está diciendo es salir a oponerse a decir que no vota pero resulta que la decisión es que se debe ratificar o decir que se hace con el revisor fiscal, porque el revisor fiscal esta nombrado pero Itaca no lo está ratificando, entonces se quiere entender cuál es la posición de Itaca en ese sentido.

Luego, el Dr. Mendoza manifiesta que al parecer se está teniendo un dialogo diálogo de sordos en donde él manifiesta una cosa y el Presidente entiende otra. Aclara que el no dijo que las autoridades del estado se hayan pronunciado a cerca del conflicto de interés del señor Marulanda; lo que se dijo fue que la situación en la fáctica que está incurso el señor Marulanda ha sido objeto de múltiples pronunciamientos de todas las autoridades del estado, es decir, cuando un representante legal esta de un lado y de otro.... Pide que se revise la grabación y que queden sus palabras expresa porque ha sido absolutamente preciso en lo que ha dicho.

Continua el Dr. Mendoza, manifestando que en segundo lugar, considera que el señor presidente tampoco entendió la propuesta que está haciendo; no se está diciendo que la compañía quede sin revisor fiscal y que se incumpla nada; se trajo como propuesta que la administración pida unas cotizaciones y las presente a la mayor brevedad ante la junta de socios, pues el revisor fiscal actual no genera confianza en lo absoluto. Su voto es por no ratificarlo y por cambiarlo a la mayor brevedad posible siempre que la administración

NOTARIA 72 BOGOTÁ COLOMBIA
ANA DIAZ GRANADOS BUNCH
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA DE ESTA COPIA CONFORME EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

ayude con la consecución de las cotizaciones, y si la administración se rehúsa a hacerlo, entonces Itaca podría traer las propuestas. Se consideró que, si lo hacia el administrador, se podría conseguir un revisor fiscal que se pudiera engranar en mejor manera con la administración y que genere confianza, pero si se quiere que Itaca las traiga, entonces así será y se cambiaría la propuesta de que el señor Marulanda las pida e Itaca procederá a pedirlas. Luego, podría citarse a una junta de socios para la próxima semana y se presentarán las 3 propuestas de revisoría fiscal.

Toma la palabra el Dr. Garcia solicitando que no se den ataques y que lo único que se está haciendo es procurando que la sociedad no quede en un limbo en relación con el revisor fiscal. Según los estatutos, Itaca tiene el derecho a convocar o pedir que se convoque una junta de socios, presentar las propuestas y como se ha hecho todos los años, se analizarán y revisarán. Se pide continuar con el orden del día, teniendo presente que el revisor fiscal se mantendrá y seguirá revisando las declaraciones impuestos para efectos de que no haya incumplimientos.

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

El Presidente le concede el uso de la palabra al Dr. Mendoza, teniendo en cuenta que manifestó al inicio de la reunión tener un punto a tratar en este espacio.

El Dr. Mendoza manifiesta que son dos los puntos a tratar. La primera propuesta es una acción de social de responsabilidad, y será remitida al correo electrónico de la secretaria para que su escrito haga parte del Acta.

Una vez fue leída la propuesta, a continuación se procede a insertar el texto de la misma:

NOTARIA 23 REPUBLICA DE COLOMBIA
BOGOTA D.C.
ANA DIAZ GRANADOS BONIVENTO
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

PROPUESTA – APROBACIÓN DE UNA ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD

El suscrito, actuando como apoderado especial de Itaca Ltda., se permite someter a consideración de la junta de socios la aprobación de una acción social de responsabilidad en contra del representante legal principal, el señor Alberto Marulanda, por la violación de sus deberes como administrador.

La referida acción social encuentra como fundamento, en primer lugar, la violación de las reglas que rigen el derecho de preferencia en las sociedades de responsabilidad limitada. En verdad, el representante legal se rehusó injustificadamente a transmitirle a la sociedad Catay Ltda. la oferta que Itaca Ltda. envió en cumplimiento del trámite del derecho de preferencia en la negociación de cuotas.

En segundo lugar, la acción social propuesta tiene como fundamento la violación, por parte del señor Marulanda, del régimen de conflictos de interés previsto en el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995. En verdad, durante su gestión como representante legal de STO Ltda., el señor Alberto Marulanda Posada ha celebrado operaciones viciadas por conflictos de interés con Ingetec S.A., una compañía con la cual tanto él como sus familiares tienen vínculos de diversa índole. Las operaciones antes mencionadas fueron celebradas sin contar con la autorización de la junta de socios de STO Ltda., en los términos que exige el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995. Además, como queda claro tras una simple revisión de las condiciones económicas aceptadas por el representante legal de STO Ltda., los contratos en cuestión le han causado importantes perjuicios a la compañía.

Las anteriores circunstancias constituyen una violación patente de los deberes legales que el ordenamiento societario colombiano les atribuye a los administradores de sociedades en Colombia. En consecuencia, le propongo a la junta de socios que, a la luz de lo previsto en el artículo 25 de la Ley 222 de 1995, apruebe una acción social de responsabilidad en contra del señor Marulanda, para que STO Ltda. pueda reclamar judicialmente los perjuicios que ha sufrido con ocasión de las conductas desplegadas por su actual representante legal. En este sentido, según lo dispuesto en el artículo 200 del Código de Comercio, "los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros".

Dado a los 2 días del mes de septiembre del 2020.

José Miguel Mendoza
Apoderado – Itaca Limitada

Toma la palabra el presidente, quien manifiesta que dicha propuesta, de acuerdo con la ley, debe ser sometida a votación para su aprobación.

Se le da el uso de la palabra al apoderado de Itaca para que manifieste el sentido de su voto.

El Dr. Mendoza manifiesta que vota a favor de la acción social de responsabilidad.

Acto seguido, el Dr. García en su condición de apoderado de Catay, manifiesta que vota en contra, y al contrario, reitera la gestión que ha hecho el señor Marulanda, agradece la gestión que ha tenido con STO, considera que su remuneración para efectos de lo que ha venido siendo el desarrollo y velar por la forma como se ha venido desarrollando el

NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA CONCUERDA
EXACTAMENTE CON EL
ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

contrato ha sido más que satisfactoria, no hay sino agradecimiento por lo que ha hecho, y en ese sentido vota en contra de esta proposición.

El Dr. Mendoza toma la palabra y manifiesta que en vista que no se ha aprobado la acción social quiere entonces dejar una constancia, la última escrita que será remitida por correo electrónico a la secretaria, en vista del bloqueo de parte de Catay en relación con la acción social de responsabilidad.

A continuación se inserta en el acta el documento leído por el apoderado y remitido al correo de la secretaria.

CONSTANCIA – BLOQUEO ABUSIVO DE LA ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD

La decisión de Catay Ltda. de bloquear injustificadamente la aprobación de una acción social de responsabilidad, fue una determinación abusiva, en los términos del artículo 43 de la Ley 1258 del 2008, a cuyo tenor "quien abuse de sus derechos de accionista en las determinaciones adoptadas en la asamblea, responderá por los daños que ocasione". Ello se debe a que el veto ejercido por Catay Ltda. perjudicará gravemente los intereses de STO Ltda., en la medida en que hará imposible recobrar los perjuicios que, con su conducta, el señor Marulanda le ha causado a la compañía. En este sentido, la Superintendencia de Sociedades ha expresado, por vía de jurisprudencia, que "cuando se hubiere negado la posibilidad de iniciar una acción social de responsabilidad para encubrir las actuaciones irregulares de un administrador o proteger la desviación de recursos sociales [...] la decisión de rechazar la acción social correspondería a una finalidad que no es tolerada por el ordenamiento colombiano". En cuanto a las consecuencias derivadas de ese bloqueo abusivo, la misma Superintendencia ha manifestado que una de ellas "puede ser la indemnización de los perjuicios sufridos por el demandante". Esta alternativa encuentra consagración expresa en el artículo 43 de la Ley 1258 de 2008, a cuyo tenor, 'quien abuse de sus derechos de accionista en las determinaciones adoptadas en la asamblea, responderá por los daños que ocasione".

Así las cosas, se deja expresa constancia de que el bloqueo injustificado que ha hecho Catay Ltda. de la acción social de responsabilidad le ha causado importantes perjuicios a Itaca Ltda.

Dado a los 2 días del mes de septiembre del 2020.

José Miguel Mendoza
Apoderado – Itaca Ltda.

Continúa el Dr. Mendoza, manifestando que no se referirá a los perjuicios que se le han causado a Catay por el hecho de que no le fue transferida la oferta que oportunamente se le hizo llegar al Dr. Marulanda, porque eso no es del resorte de la competencia de Itaca.

Toma la palabra el Dr. García, quien manifiesta que para cerrar el punto quiere dejar una constancia en el sentido de la indignación y la sorpresa que causa después de tantos años de tener una relación de socios de recibir estas afirmaciones, donde pareciera que

NOTARÍA 73 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
JANA DIAZ GRANADOS BONIVENTO
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

estuviera tratando con un representante legal que a pesar de su gestión durante muchos años de tener un inmueble que es visible en el estado tan bueno y adecuado que esta, que no cobra por su gestión, que hace su gestión para permitir que el canon de arrendamiento llegue directamente.

En este punto de la reunión, se suspende por unos minutos por problemas técnicos de parte del Dr. Daniel García y del Dr. Marulanda.

Se reanuda la sesión y continua la intervención del Dr. García, quien manifiesta que celebra y aplaude la gestión del Dr. Marulanda, sin recibir remuneración alguna, no comprende como a nivel de socios se presentan estas acusaciones y estas insinuaciones, no comparte la acusación, no la respalda, y manifiesta su sentimiento sobre el agradecimiento se debe tener frente a la labor al Dr. Marulanda. Se deja la constancia por instrucciones de María Isabel y de Itaca pero se aparta radicalmente de lo que se ha dicho. Menciona que nunca se le ha violado o vulnerado o impedido la posibilidad a Itaca de ejercer las acciones legales de expresar su inconformidad pero considera que se ha llegado a un punto en donde se encuentra sorprendido, no se aceptan y no se comparten.

El presidente pide que se deje la constancia en el acta, ya que el Dr. Mendoza ha dejado una serie de constancias muy elaboradas y estructuradas. Propone que se proceda a compartir las grabaciones y se circule el acta para que el Dr. Mendoza y el Dr. García la aprueben, y se proceda a la firma de la secretaria y del Dr. Marulanda.

Toma la palabra el Dr. Mendoza, quien manifiesta que le hace falta una propuesta como lo había anunciado y procederá a hacerla para poder terminar. Previo a su propuesta, manifiesta que le sorprende mucho que Catay esté felicitando a un representante legal que no les trasmitió una propuesta de venta de cuotas sociales que podría haber beneficiado a Catay y ese fue uno de los fundamentos de la propuesta de la acción social, y no sabe si el Dr. García tenga conocimiento de esto, pero Itaca hizo una propuesta de venta de sus cuotas sociales, y en cumplimiento del derecho de preferencia esa oferta debió habérsele entregado a Catay; si no ocurrió, Catay pudo haber perdido la oportunidad de comprar las cuotas sociales de Itaca, pero solo es una aclaración en respuesta a lo manifestado por el Dr. García.

Indica el Dr. Mendoza, que para empezar a zanjar los debates sobre la administración de un único activo de la compañía STO se propone contratar a un experto independiente para que haga un avalúo del edificio y para que también indique si los cánones que se cobran resultan congruentes y ajustados a los valores del mercado y en caso que no lo estén se proceda con el ajuste de los cánones hasta donde debieran estar.

El Dr. García manifiesta que no está de acuerdo y vota en contra de esta propuesta. Indica que Itaca está en todo el derecho de hacerlo, inclusive se tiene entendido que ya Itaca hizo un avalúo y no se ve el caso que en esta reunión se mire este tema, y reitera que no comparte y no considera que sea del caso estas afirmaciones, y que se deba constreñir como debe ser el voto o la mención que se haga sobre la gestión del Dr Marulanda, por eso se ha nombrado y ratificado. Se insiste en que cada socio puede hacer el avalúo que corresponda, la información siempre ha estado ahí, la posibilidad

NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE
EXACTAMENTE CON EL
ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA
03 NOV 2020

entrar siempre ha estado ahí, nunca se ha negado la posibilidad que se haga pero en esta oportunidad consideramos que esta propuesta no se debe aprobar.

El Dr. Mendoza manifiesta que ya para cerrar, quiere reiterar cuál es el fondo de estas propuestas que es precisamente la protección del patrimonio de STO. Itaca tiene unas dudas absolutamente legítimas sobre el valor de los cánones que se están cobrando, el avalúo real de ese inmueble, en vista de que el término de duración de la compañía expirará próximamente y que el Dr. Marulanda no va a poder ejercer el cargo de liquidador, y que van a venir ahora ciertas circunstancias que van a obligar a los socios a tomar decisiones importantes. Por eso, para zanjar discrepancias y diferencias, se propuso traer un experto que diga cuánto vale el lote y cuánto en realidad debería estar cobrándose por concepto de cánones de arrendamiento. Se entiende que la propuesta nos sea aprobada y por supuesto, ni más faltaba, que no se le está diciendo a Catay cómo votar. El comentario sobre el derecho de preferencia es porque no se tenía claro si Catay estuvo enterado que no le habían transmitido una oferta que debió haber conocido.

Acto seguido, el Dr. Mendoza agradece a los asistentes su presencia, al señor representante legal a pesar de todos los reparos formulados, a la señor secretaria y por supuesto al revisor fiscal, y al presidente de la reunión por haber abierto el espacio para que los socios manifestarán sus opiniones y ejercieran sus derechos políticos y económicos.

El Dr. García, manifiesta que ya para cerrar le llama la atención que el apoderado de Itaca haya traído el tema de la liquidación cuando en varias oportunidades ha sido Catay quien en varias oportunidades han propuesto la prórroga de la vigencia y ha sido Itaca quien se ha negado a una ampliación. Entiende que la sociedad va a surtir su trámite de liquidación por vencimiento del término y será ese el caso, y que entiende que Itaca no está indicando como votar pero también se quiere que el derecho y posición de Catay sea mantenida, sobre todo para que el apoderado de Itada tenga una visión más amplia de lo ha venido pasando. Considera que la información que le ha trasmitido la poderdante ha omitido una serie de consideraciones para efectos de que la argumentación sea más contúndete pero es del caso recordar que el inmueble, que es un área supremamente grande, ha sido mantenido en su totalidad por el arrendatario, nunca la arrendadora ha tenido que invertir un peso sobre las mejoras necesarias y esenciales, entonces no se considera que el tema sea como se pone en la reunión. Se pregunta por el espíritu de las manifestaciones, ya que no se está en una instancia o una audiencia o un foro donde hay un tema legal sino es una junta de socios, donde debe haber una búsqueda de que la sociedad gane, y se reitera, no era del caso venir a lanzar afirmaciones cuando la forma como se ha operado ha sido muy distinta.

El Dr. Mendoza toma la palabra y manifiesta su más enérgico rechazo a la afirmación del Dr. García sobre que le fue suministrada información incompleta, ya que por supuesto antes de asistir a la reunión todas las actas y todos los documentos que consideró relevantes para entender bien el contexto, y a partir de esa labor exhaustiva es que ha manifestado sus reparos de lo que ha venido ocurriendo. Menciona que se ha dicho que se cuenta con un arrendatario maravilloso, pero le llama la atención que el mismo arrendatario no quiere exponerse a que un tercero independiente diga si los cánones están a valor de mercado o no. Insiste en que no quiere abrir nuevamente esa compuerta

NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

porque ya se votó la propuesta, pero sí insiste en la importancia de dejar claro ese punto. En cuanto a la liquidación, entiende que Catay tampoco propuso nada respecto de la prórroga o el rechazo de la propuesta de prórroga de la duración, y entiende que el Dr. García tiene una propuesta que le gustaría considerarla y estudiarla conjuntamente con su poderdante.

El Dr. García manifiesta que no tiene ninguna propuesta sobre la prórroga de la vigencia de la sociedad, ya que ese tema en otras reuniones fue considerado y no fue objeto de aprobación.

11. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No siendo otro el objeto de la reunión, el Presidente levantó la sesión siendo la 1 p.m.

Se procede a la elaboración del Acta y se remite a los miembros de la comisión para su lectura y aprobación.

Una vez leía el acta por la comisión integrada por Daniel García Piñeros y José Miguel Mendoza daza se procede a su aprobación.

En constancia de lo anterior la firman,

Daniel García Piñeros
Presidente

Ana Milena Lopera Rozo
Secretaria

Alberto Marulanda Posada
Representante Legal

Firmada por la comisión revisora del acta:

Daniel García Piñeros

Jose Miguel Mendoza

NOTARIA 23 REPUBLICA DE COLOMBIA
BOGOTA D.C.
ANA DIAZ GRANADOS BONIVENTO
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO TERCERO (3°) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
Carrera 9 No. 11-45 piso 6° Edificio Virrey – Torre Central.
j03cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co – Teléfono 2820261

Bogotá, D.C., Veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

PROCESO VERBAL NULIDAD ACTOS SOCIETARIOS Y ABUSO DEL DERECHO RAD. **2021-00091**00

Por reunir los requisitos exigidos por el artículo 82 del Código General del Proceso, y teniendo en cuenta que fue subsanada en tiempo la demanda, el Juzgado **ADMITE** la presente demanda **VERBAL DE NULIDAD DE ACTOS SOCIETARIOS Y ABUSO DEL DERECHO** que promueve **Ítaca Ltda.**, contra **Alberto María Marulanda Posada**, **Catay Ltda.**, **Servicios Técnicos Omicron Ltda. En Liquidación** y Contra **INGETEC Ingeniería & Diseño S.A.S. – INGETEC I&D S.A.S.**

Cítese como litisconsortes cuasinecesarios a la sociedad **Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos INGETEC S.A.S.**, y al señor **Andrés Marulanda Escobar**.

Tramítese este asunto por el procedimiento verbal previsto en el Libro Tercero, Título I, Capítulo I, artículos 368 y s.s. del Código General del Proceso.

De la demanda y sus anexos córrase traslado a la parte demandada por el término de veinte (20) días de conformidad con el artículo 369 del Código General del Proceso, notifíquese la presente providencia según lo preceptuado en el artículo 291 y 292, en armonía con los dispuesto en el artículo 08 de la Ley 2213 del 2022.

Se reconoce personería al **Dr. Hugo Palacios Mejía** como mandatario judicial de la parte actora, en los términos y condiciones del poder conferido.

NOTIFÍQUESE (3),

LILIANA CORREDOR MARTÍNEZ
JUEZ

Yapn

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
La anterior providencia se notifica por anotación en Estado No. 030 hoy 24 de marzo de 2023.

ALEJANDRO GEOVANNY SALINAS
Secretario

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Carrera 10 No. 19-65 Edificio Camacol - Piso 11.
j52ccto@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D. C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

EXP. Verbal - Nulidad actos societarios y abuso del derecho
No. 11001-31-03-003-2021-00091-00.

Se avoca el conocimiento del proceso de la referencia, remitido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, en virtud de lo dispuesto en los Acuerdos PCSJA22-12028 de 2022 del Consejo Superior de la Judicatura y CSJBTA23-42 de 2023 proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

Notifíquese.

MAYRA CASTILLA HERRERA
Juez
(2)

MABR

JUZGADO CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

ESTA PROVIDENCIA FUE NOTIFICADA POR ANOTACIÓN EN ESTADO DE 16 DE JUNIO DE 2023.

_____

ANYELA KATERINE BALLESTEROS BARRANTES
SECRETARIA

Firmado Por:
Mayra Castilla Herrera
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 052
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d5d3353f24c2bc7dbaf6e74f2c006bf183e6640b4052d3f945292bb85107232a**
Documento generado en 15/06/2023 10:35:31 AM

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Carrera 10 No. 19-65 Edificio Camacol - Piso 11.
j52ccto@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D. C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

EXP. Verbal - Nulidad actos societarios y abuso del derecho
No. 11001-31-03-003-2021-00091-00

En atención al informe secretarial que antecede, encuentra el juzgado que la parte actora no ha cumplido con la carga procesal correspondiente a notificar a los demandados ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA, CATAY LTDA., SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA EN LIQUIDACIÓN E INGETEC INGENIERÍA & DISEÑO S.A.S INGETEC I&D S.A.S., ni a los litisconsortes convocados al juicio, en los términos del auto que admitió la demanda, datado del 23 de marzo de 2023 (023AutoAdmiteDemanda).

En consecuencia, se **REQUIERE** para que, en un término no mayor a 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de este auto por estado, adelante y agote **en su integridad** las actuaciones conducentes a la notificación de la parte demandada, so pena de dar por terminado el asunto por desistimiento tácito, de conformidad con el artículo 317 del C.G.P.

Notifíquese.

MAYRA CASTILLA HERRERA
Juez
(2)

MAER

JUZGADO CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

ESTA PROVIDENCIA FUE NOTIFICADA POR ANOTACIÓN EN ESTADO DE 16 DE JUNIO DE 2023.

_____

ANYELA KATERINE BALLESTEROS BARRANTES
SECRETARIA

Firmado Por:

Mayra Castilla Herrera

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 052

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ad64e3b959ee3c6f006584ff627d299b096738f7e1fc13fbb488b428d3098cc6**
Documento generado en 15/06/2023 10:35:30 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Carrera 10 No. 19-65 Edificio Camacol - Piso 11.
j52cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

EXP. Verbal – Nulidad actos societarios y abuso del derecho
No. 11001-31-03-003-2021-00091-00.

En aras de continuar con el trámite del presente asunto, el Juzgado DISPONE:

1.- Reconocer personería al abogado OSCAR ROSALES NIETO como apoderado judicial de la sociedad demandante ÍTACA LIMITADA EN LIQUIDACIÓN en los términos y para los efectos del mandato conferido (030MemorialOrogamientoPoderÍtaca).

2.- Téngase en cuenta que los DEMANDADOS ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA y ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, se notificaron del auto admisorio de la demanda de forma personal, conforme lo prevé el artículo 8° de la Ley 2213 de 2022, mediante comunicación enviada como mensaje de datos desde 24 de julio de 2023[1] y, dentro de la oportunidad procesal, por intermedio de apoderado judicial, formularon recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda.

3.- Reconocer personería al abogado DANIEL PIÑEROS GARCÍA, como apoderado judicial de los demandados ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA Y ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR en los términos y para los efectos del mandato conferido.

4.- No se tienen como legalmente efectuadas las notificaciones de los demandados CATAY LTDA., SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA. EN LIQUIDACIÓN, INGENIERÍA & DISEÑO S.A.S. –INGETEC I&D S.A.S**.** y la sociedad INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS INGETEC S.A.S., realizadas por la parte actora, de conformidad con el artículo 8° de la Ley 2213 de 2022, toda vez que no se informó a los convocados la fecha desde la cual se entendían notificados, los términos con los que contaban para contestar la demanda, así como tampoco la dirección física o electrónica del juzgado.

En consecuencia, **deberán rehacerse las diligencias respecto de los demandados Catay Ltda., Servicios Técnicos Omicron Ltda. En Liquidación, Ingeniería & Diseño S.A.S. –Ingetec I&D S.A.S.** y la sociedad **Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos Ingetec S.A.S.**

[1] Pág.6, 032Notificación.

5.- Una vez integrado el contradictorio, se resolverán los recursos de reposición formulados por los demandados Alberto María Marulanda Posada y Andrés Marulanda Escobar.

Notifíquese.

MAYRA CASTILLA HERRERA
Juez

MAER

JUZGADO CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

ESTA PROVIDENCIA FUE NOTIFICADA POR ANOTACIÓN EN ESTADO DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2023.

YADY MILENA SANTAMARÍA CEPEDA
SECRETARIA

Firmado Por:
Mayra Castilla Herrera
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 052
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **05f813849d2675fb7d34e8a83c18f5667001fb70e9353751b21f758f99bfa2ff**
Documento generado en 27/11/2023 03:30:32 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

SERVIENTREGA
Centro de Soluciones

Usted ha recibido el siguiente correo electrónico seguro y certificado.

Asunto
NOTIFICACIÓN - Art. 8 L.2213/22 / NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA / PROCESO 2021-0009100

Enviado por
RUBEN DARIO

Fecha de envío
2023-12-04 a las 18:41:32

Fecha de lectura
2023-12-04 a las 18:48:40

Señores:
INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS SAS

E. S. D.

Ref.:
Demandante:
Ítaca Limitada

Demandados:
Alberto Maria Marulanda Posada; Servicios Técnicos Omicrón Limitada, Catay Limitada e Ingetec I&D S.A.S.

Litisconsortes:
Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos S.A.S.-Ingetec S.A.S- y Andrés Marulanda Escobar.

Trámite:
Proceso declarativo

Despacho:
Juzgado Cincuenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá

Radicado:
110013103003-2021-00091-00

Documentos Adjuntos
07_Sustitucion_poder_de_ORN.pdf 06_Poder_de_MIOW_a_ORN_Juni.pdf 05_Auto_ordena_notificar_y_.pdf 04_Auto_ordena_notificar.pdf
03_Auto_avoca_conocimiento.pdf 02_Auto_admisorio.pdf 01_Demanda_y_subsanacion.pdf

SEALMAIL

Exp. 2021-091 | Dte. Ítaca Ltda. | Ddo. Alberto Marulanda Posada y otros | Subsanación de la demanda

Estudios <estudios@palacioslleras.com>

Jue 13/10/2022 3:21 PM

Para: Juzgado 03 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j03cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Juzgado 03 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j03cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: hpalacios@palacioslleras.com <hpalacios@palacioslleras.com>;Luis Falla <lfalla@palacioslleras.com>;Daniela Devia Romero <ddevia@palacioslleras.com>

Doctora
LILIANA CORREDOR MARTÍNEZ
JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
E. S. D.

Referencia:	Proceso verbal de acción de responsabilidad contra administrador
Radicado:	11001-31-03-003-**2021-00091**-00
Demandante:	Ítaca Limitada
Demandados:	Alberto María Marulanda Posada y otros.
Asunto:	Subsanación de la demanda y texto de la demanda subsanada

Cordial saludo,

Por instrucciones del doctor **HUGO PALACIOS MEJÍA,** apoderado de la sociedad **ÍTACA LIMITADA,** según poder que obra en el expediente de la referencia, me permito radicar memorial de subsanación de la demanda, texto de la demanda subsanada, y 3 anexos.

Agradezco acusar recibo del correo y los documentos adjuntos.

Atentamente,

Daniela Devia
Abogada
Estudios Palacios Lleras

Bogotá, D.C., 13 de octubre de 2022

Doctora
LILIANA CORREDOR MARTÍNEZ
JUEZ TERCERA CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Ciudad

Demandante:	**ÍTACA LIMITADA**
Demandados:	**ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA; SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LIMITADA, CATAY LIMITADA e INGETEC I&D S.A.S.**
Asunto:	Subsanación de la demanda
Radicado:	110013103003-**2021**-**00091**-00

Yo, **HUGO PALACIOS MEJÍA**, abogado, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado de la sociedad **ÍTACA LIMITADA** (en adelante "ÍTACA"), según poder que obra en el expediente y que he aceptado, presento una **EXPLICACIÓN SOBRE LA SUBSANACIÓN DE LA DEMANDA** y la **DEMANDA SUBSANADA** para atender las cuatro observaciones que el Despacho dispuso para la admisión de la demanda, mediante auto del 6 de octubre de 2022.

Para efectos de la subsanación se han hecho aclaraciones en este memorial, y cambios en el texto de la demanda inicial, en particular, en relación con la primera orden de APORTAR, en las páginas 2 a 5. En relación con la primera orden de ADECUAR, en la página 7. En relación con la segunda orden de ADECUAR, en las páginas 31 y 32. Y en relación con la ORDEN DE ACREDITAR, en las páginas 118 y 119.

Ruego, en consecuencia, al Despacho, proceder a dictar auto admisorio de la demanda.

En este escrito sobre la subsanación de la demanda he seguido el orden del auto de inadmisión para explicar los cambios que he hecho en la DEMANDA SUBSANADA adjunta, atendiendo el orden de los cuatro párrafos de instrucciones que el auto contiene, precedidos por los verbos rectores "APORTAR", "ADECUAR", "ADECUAR" y "ACREDITAR".

I.- OPORTUNIDAD

Según el artículo 90 del Código General del Proceso (CGP) y de acuerdo con el término de cinco (5) días otorgado para subsanar la demanda en el auto del 6 de octubre de 2022, notificado por estado del 7 de octubre de 2022, me encuentro dentro de la oportunidad procesal para presentar escrito de subsanación de la demanda.

II.- PUNTOS POR SUBSANAR

A continuación, desarrollo individualmente cada uno de los puntos a subsanar, solicitados por su despacho, con el propósito de atenderlos y corregirlos íntegramente:

1. "APORTAR" el poder conferido con ciertas formalidades

Solicitó el despacho que, para efectos de la subsanación, se aportara el poder dentro de ciertos cánones.

Para tal efecto, indicó:

> 1° APORTAR el poder conferido en la forma consagrada en el artículo 5° de la ley 2213 de 2022 o en el canon 74 del Código General del Proceso, teniendo en cuenta la dirección inscrita del profesional del derecho en el Registro Nacional de Abogados, en razón a que el poder allegado no está inserto en el mensaje de datos, el apoderado judicial no aceptó de forma expresa la labor encomendado (sic) y tampoco se determinó e identificó claramente el asunto al ser este un poder especial, aunado a lo anterior, deberá dirigirse al Juzgado.

Así las cosas, doy cumplimiento a la orden de "APORTAR el poder conferido" en los precisos términos indicados por el Despacho en este numeral.

Para tal efecto, me permito acompañar al presente escrito el mismo poder que presenté como Anexo 2 de la demanda, el cual cumple a cabalidad tanto con el artículo 5º de la ley 2213 de 2022[1] como con el artículo 74 del CGP[2].

En efecto, y en los mismos términos del numeral 1º de la providencia del auto del 6 de octubre de 2022:

a. **Dirección inscrita en Registro Nacional de Abogados:** el poder que se me otorgó, y que aporté con la demanda, y que aporto de nuevo, *tiene en cuenta* la dirección inscrita en el Registro Nacional de Abogados y así la indica expresamente: hpalacios@palacioslleras.com.

   En los términos de la norma aplicable, el escrito de poder indica dicha dirección de correo electrónico y la misma coincide con la que aparece registrada en el Registro Nacional de Abogados.

b. **Inserción del poder en el mensaje de datos:** acompaño al presente el mensaje de datos del 24 de febrero de 2021, en formato Outlook y PDF, en el cual se advierte que el remitente (jgarcia@wiesnerasociados.com) adjuntó al mensaje de datos el escrito de poder en formato.pdf, con el nombre de archivo "Poder de MIOW-Itaca Ltd a HPM Feb.24-21.pdf".

   El envío del escrito de poder como archivo adjunto, cumple con la especificación que le exige el Despacho a Ítaca, de *insertar* el poder en el mensaje de datos.

---

11 [Ley 2213 de 2022] Artículo 5°- Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.
En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.
Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales.

2 [Código General del Proceso] ARTÍCULO 74.- Los poderes generales para toda clase de procesos solo podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los asuntos deberán estar determinados y claramente identificados.
El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas.
Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello; en ese último caso, su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 251.
Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorga hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiera el poder sea apoderado de una persona.
Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital.
Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio.

En los términos de la norma aplicable, el escrito de poder fue *remitido* a través de mensaje de datos, por memorial dirigido al juez de conocimiento.

Según indiqué arriba, en el poder consta mi correo electrónico como apoderado, que coincide con el inscrito en el Registro Nacional de Abogados, y es hpalacios@palacioslleras.com

Por ende, para efectos de la subsanación, me permito acompañar a este escrito el correo electrónico por medio del cual se me otorgó poder, en formato Outlook, con lo cual se acredita que el poder se encuentra "inserto" en el respectivo mensaje de datos, como archivo adjunto.

Me permito advertir que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 527 de 1999, en el propio Código General del Proceso y en el artículo 2.8.2.7.2 del Decreto 1080 de 2015, existe una diferencia entre el concepto de "mensaje de datos" y "mensaje de correo electrónico". El primero se refiere a *"Los documentos generados y gestionados a través de sistemas electrónicos"*[3], como bien lo puede ser un documento generado en formato "PDF".

Respecto al segundo concepto, un "mensaje de correo electrónico", se refiere, en el contexto de la Ley 2213, al canal de remisión, mediante el cual las personas inscritas en el registro mercantil deben remitir los poderes otorgados. Por lo que con el reenvío que hago del poder, queda subsanado lo relativo a que el poder relativo se encuentre inserto en el mensaje de datos.

c. **El apoderado judicial no aceptó de forma expresa la labor:** Es cierto que el poder no contiene la aceptación "expresa" del apoderado.

En todo caso, con la presentación del presente memorial de subsanación, aunado a la presentación de los memoriales del 13 de mayo de 2021, 16 de julio de 2021 y del 22 de octubre de 2021, ejerzo el poder que me fue conferido por la sociedad ÍTACA y en tal sentido **lo acepto.**

Vale señalar que, según el inciso final del artículo 74 del CGP "Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio".

En los términos de la norma aplicable, me acojo a la potestad que me confiere la Ley para aceptar el poder a mí conferido "por su ejercicio".

Desde que presenté la demanda, y ahora de nuevo, me he acogido a la facultad que me confiere el artículo 74 del CGP para aceptar el poder de ÍTACA "por su ejercicio".

Es así como, en el encabezamiento de la demanda anuncié que tenía poder de ÍTACA LIMITADA y que obraba como apoderada de ella para presentar la demanda. De modo que, en forma inequívoca, que consta en la demanda, acepté el poder por su ejercicio.

Después, en nombre de la misma sociedad, y en ejercicio de mi derecho de postulación, promoví actuaciones que ya fueron resueltas por el propio Despacho y por su superior jerárquico.

d. **No se determinó e identificó claramente el asunto del poder especial**: el poder que aporto cumple a cabalidad con el artículo 74 del CGP, en cuanto a la determinación e identificación, con claridad, de los "asuntos" a los que se refiere.

---

[3] Artículo 2.8.2.7.2. del Decreto 1080 de 2015.

El poder no permite iniciar o atender varios procesos de **ÍTACA**, sino que se otorgó para "una demanda", contra las personas que en él se mencionan.

El poder enumera siete asuntos perfectamente determinados y numerados, para obtener declaraciones relacionadas con ellos, y una condena que permita una indemnización a favor de ÍTACA.

El poder precisó los "asuntos" a los que él se refiere, con más detalles de los usuales en este tipo de poderes.

Por supuesto, las pretensiones de la demanda se redactaron teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas sustantivas y procesales, en la forma que, a juicio del apoderado, y según la discreción que autoriza el poder, puedan resolver mejor la controversia sobre tales "asuntos". Así lo autoriza el artículo 77 del CGP cuando dice: "El apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime conveniente para beneficio del poderdante".

e. **Deber de dirigir el poder especial al juzgado**: el **escrito** de poder que aporto, para la presentación de la demanda, está dirigido a JUECES CIVILES DE BOGOTÁ (REPARTO), y, de ese modo, cumple con la designación del despacho judicial de conocimiento.

El CGP tiene en cuenta que, al presentar la demanda, los trámites del reparto no permiten al actor conocer a cuál despacho le será asignado el conocimiento de la demanda y del proceso. Y de acuerdo con el principio de "economía procesal" que es parte del derecho fundamental al "debido proceso" (Art. 29 de la Constitución) y al que se refiere el numeral 1 del artículo 42 del CGP, entiendo que la orden de subsanación, que acato, no exige que ÍTACA me confiera ahora un nuevo poder que se dirija específicamente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá.

Es de anotar que, para efectos de la competencia funcional, la Ley no distingue entre despachos judiciales dentro de la misma jurisdicción y con el mismo nivel de jerarquía.

2. "ADECUAR" el acápite de las pretensiones

Solicitó el despacho que, para efectos de la subsanación, se adecuara el acápite de las pretensiones en relación con el **tipo de proceso** que se va a adelantar.

Para tal efecto, indicó:

> 2° ADECUAR el acápite de las pretensiones indicando el tipo de proceso que se pretende adelantar, porque si es un proceso de Impugnación de Actos de Asambleas, Juntas Directivas o de Socios, deberá aportar los acuerdo o actos sujetos a registro demandados con la constancia de la fecha de la inscripción adecuando el escrito de demanda y excluyendo las condenas y perjuicios pretendidos por no ser propias de la naturaleza del trámite especial contenido en el artículo 382 del C.G.P.

Para acatar la orden de subsanación, señalo, en primer término, que el tipo de proceso que pretendo adelantar corresponde a un **proceso verbal,** de acuerdo con el artículo 368 del CGP y las normas concordantes, tales como el literal "e" del numeral 5 del artículo 24 del CGP, y de su precedente en el artículo 43 de la Ley 1258 de 2008, que, por disposición del Parágrafo 1 del numeral 6 del mismo artículo 24, lleva la competencia hacia el numeral 4 del artículo 20 del CGP y los jueces civiles del circuito en primera instancia.

En segundo lugar, y para referirme a la hipótesis que planteó la orden de subsanación, aclaro que el proceso al que se refiere la demanda **no es el del 382 del Código GPP**, sino el del literal "e" del numeral 5, del artículo 24 del mismo Código que, por disposición del Parágrafo 1 del numeral 6 del mismo artículo corresponde al Juez del Circuito, en los términos del numeral 4 del artículo 20 del mismo Código. El literal "e", aludido, es la norma procesal que corresponde a la acción que se deriva del articulo 830 del Código de Comercio y que tiene como precedente histórico el artículo 43 de la Ley 1258.

Tanto en el artículo 20 del CGP, como en el artículo 24 del mismo, se advierte la diferencia entre los procesos que tienen por objeto la "impugnación de actos de asambleas…" y aquellos que surjan de "Todas las controversias que surjan con ocasión del contrato de sociedad" y los de "nulidad absoluta de la **determinación** adoptada en abuso del derecho por ilicitud del objeto y la de indemnización de perjuicios en los casos de abuso de mayoría como en los de minoría y paridad, cuando los accionistas no ejerzan su **derecho a voto** en interés de la compañía…."

Por lo demás, con la demanda se aportaron copias de las actas de las sociedades a las que se refiere la demanda, en especial: 1 acta de la Asamblea de la sociedad Marulesco SAS; 1 acta de Marulanda Escobar SAS; actas de Ingetec SAS; acta de Ingetec I&D SAS; 2 actas de Ingetec G&S SAS; 4 actas de Junta de Socios de STO; 2 actas de Juntas de Socios de CATAY SAS; grabación en video y transcripción de una Junta de Socios de STO.

No estando, pues, la demanda, en la hipótesis del artículo 382 del CGP a la que se refiere el auto, y por lo que sí es posible pedir en la demanda condenas y perjuicios, sólo es del caso aportar con este escrito el Acta No. 79 de la Junta de Socios de STO, celebrada el 2 de septiembre de 2020 de manera virtual.

3. "ADECUAR" los hechos de la demanda y las pretensiones

Solicitó el despacho que, para efectos de la subsanación, se adecuaran los hechos de la demanda, en consonancia con el acápite de pretensiones.

Para tal efecto, indicó:

> 3° ADECUAR los hechos de la demanda, en consonancia con el numeral anterior, haciendo un relato claro, preciso y sucinto que fundamente las pretensiones, las cuales deberán expresarse también con precisión y claridad, de conformidad con el artículo 82 del C.G.P.

Puesto que, como se advirtió atrás, el proceso que se busca debe ceñirse a las reglas del "**proceso verbal**", y no a las del proceso especial al que se refiere el artículo 382 del CGP (Impugnación de Actos de Asambleas, Juntas Directivas o de Socios) no es preciso adecuar los hechos de la demanda ni las pretensiones de la misma.

Los hechos de la demanda contienen una relato claro, preciso y sucinto adecuados a la naturaleza de las pretensiones, que acumulan -como se expresó en la demanda- peticiones de nulidad de **votos en reuniones societarias** y de ciertas **determinaciones en reuniones societarias** fundadas en las causales especiales de "abuso del derecho" que derivan hoy de los artículos 830 del Código de Comercio y del literal "e" del numeral 5 del artículo 24 del CGP, sobre el cual el Parágrafo 1 del numeral 6 del mismo artículo conduce a la competencia de los jueces de circuito en primera instancia, por el numeral 4 del artículo 20 del CGP. El precedente de esta acción es el artículo 43 de la Ley 1258. Así lo han entendido también la Superintendencia de Sociedades [4] y tribunales arbitrales.

[4] Superintendencia de Sociedades; Proceso 2012-801-052, Sentencia del 19 de diciembre de 2013,

De otra parte, el auto del 6 de octubre no contiene ninguna glosa precisa en cuanto a la redacción de los **hechos de la demanda,** y entiendo que solo han debido modificarse en la hipótesis de que el tipo de proceso que solicita la demanda fuera la del articulo 382 del CGP, lo cual, como expliqué, no es el caso.

De la misma manera, el auto del 6 de octubre no contiene ninguna glosa precisa a la redacción de las **pretensiones de la demanda**, y entiendo que solo han debido modificarse en la hipótesis de que el tipo de proceso que solicita la demanda fuera la del artículo 382 del CGP, lo cual, como expliqué, no es el caso.

4. "ACREDITAR" la forma como obtuvo direcciones de notificación

Solicitó el despacho que, para efectos de la subsanación, se acreditara la forma como obtuvimos las direcciones de notificación de las personas que componen la parte demandada.

Para tal efecto, indicó:

> 4° ACREDITAR la forma como obtuvo las direcciones de notificación de las personas que componen la parte demandada, conforme a lo dispuesto en la Ley 2213 en razón a que la evidencia relacionada en el numeral 1.3 del acápite de las pruebas documentales no guarda relación con las direcciones indicadas en el acápite de notificaciones.

De acuerdo con lo anterior, **ACREDITO** que las direcciones de notificación se obtuvieron de la siguiente manera:

1. Las direcciones de notificación de SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA, las cuales corresponden a la carrera 6 No. 30A-30 en Bogotá D.C., y al correo electrónico registrado: conta@ingetec.com.co , las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA, aportado como anexo 5 de la demanda.

2. Las direcciones de notificación de ALBERTO MARULANDA POSADA, la que corresponde a la calle 30A No. 6-22 Of 1301 en Bogotá D.C. y su correo electrónico son amarulapos@ingetec.com.co , las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de MARULESCO SAS, sociedad en de la que el señor Marulanda es representante legal, aportado como anexo 9 de la demanda.

3. Las direcciones de notificación de CATAY LIMITADA las cuales corresponden a la carrera 6 No. 30A-30 en Bogotá D.C., y el correo electrónico registrado: conta@ingetec.com.co, las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de CATAY LIMITADA, aportado como anexo 4 de la demanda.

4. Las direcciones de notificación de INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. – INGETEC SAS las cuales corresponden a la carrera 6 No. 30A – 3 en Bogotá D.C. y el correo electrónico registrado: conta-ing@ingetec.com.co, las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de INGETEC SAS, aportado como anexo 6 de la demanda.

5. Las direcciones de notificación de INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS -INGETEC I&D SAS las cuales corresponden a la carrera 30 No. 6-22 Of 601 en Bogotá D.C. y el correo electrónico registrado: conta-iyd@ingetec.com.co, las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de INGETEC I&D SAS, aportado como anexo 7 de la demanda.

6. Las direcciones de notificación de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR las cuales corresponden a la carrera 30 No. 6-22 Of 601 en Bogotá D.C. y los correos

electrónicos andresmarulandae@gmail.com y andres@ingetec.com.co, las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de INGETEC I&D SAS, aportado como anexo 7 de la demanda, sociedad de la que el señor Marulanda ostenta la calidad de representante legal para asunto laborales.

Asimismo, estas direcciones de correo electrónico constan en las comunicaciones habituales del señor Marulanda con ÍTACA, tal y como consta de los anexos 34 a 39 de la demanda.

III.- ANEXOS PARA LA SUBSANACIÓN

Me permito adjuntar los siguientes documentos para completar la subsanación:

1. (Anexo 2) Copia del Poder que me fue otorgado por ÍTACA
2. Copia del mensaje de datos con el cual se remitió el poder en formato Outlook
3. Copia del Acta No. 79 de la Junta de Socios de STO, celebrada el 2 de septiembre de 2020 de manera virtual

Para mayor facilidad en el trámite del proceso y por razones de economía procesal acompaño este escrito con el texto de la demanda subsanada en un solo documento integrado con la demanda inicial, que solicito que, para los efectos del curso del proceso, se tenga como el escrito de demanda con el cual habrá de trabarse el debate procesal.

Manifiesto, en todo caso, que las modificaciones hechas al texto inicial de la demanda cumplen con los requisitos previstos en el artículo 82 del CGP, comoquiera que solo se corrigió lo ordenado por el despacho; y que estas modificaciones no corresponden a una "corrección" de la demanda (Artículo 93 del CGP), en cuanto se hacen en acatamiento a una orden judicial y no por la simple voluntad del demandante.

De la señora Juez, con el debido respeto,



HUGO PALACIOS MEJÍA
C.C. 17.064.471 de Bogotá D.C.
T.P. 4.003 del C.S.J.

DEMANDA SUBSANADA-13 OCTUBRE 2022.

ÍTACA LTDA.

VS.

ALBERTO MARULANDA POSADA, CATAY LTDA.

e INGETEC I&D SAS.

TABLA DE CONTENIDO

1. **DESIGNACIÓN DE LAS PARTES** 5
2. **PRETENSIONES** 7
3. **COMPETENCIA DEL JUEZ DEL CIRCUITO; ACUMULACIÓN; PROCEDIMIENTO.** 14
4. **MEDIDAS CAUTELARES** 23
5. **HECHOS QUE SUSTENTAN LA DEMANDA** 31
6. **FUNDAMENTOS DE DERECHO.** 75
7. **JURAMENTO ESTIMATORIO Y CUANTÍA** 110
8. **PRUEBAS** 113
9. **ANEXOS** 117
10. **NOTIFICACIONES** 117

Bogotá, D.C., marzo 2 de 2021
Subsanada el 13 de octubre de 2022

Señor
JUEZ CIVIL DEL CIRCUITO
(REPARTO)
BOGOTÁ
Vía https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/demandaenlinea

Demandante:	ÍTACA LIMITADA
Demandados:	ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA; SERVICIOS TECNICOS OMICRON LIMITADA, CATAY LIMITADA e INGETEC I&D S.A.S.
Asunto:	Proceso verbal, pretensiones acumuladas. Demanda de responsabilidad vs administrador; y contra MARULANDA POSADA, STO y otros por nulidad abuso de paridad en votos y determinaciones de asamblea. Medidas cautelares.

Yo, **HUGO PALACIOS MEJÍA** abogado, residente y con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado de la sociedad **ÍTACA LIMITADA,** en liquidación, identificada con el NIT 860.048.865-1, condición que acredito con el poder y el certificado de existencia y representación que adjunto (Anexos 1, 2 y 3), presento demanda contra **ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA**, contra **CATAY LIMITADA**, contra **SERVICIOS TECNICOS OMICRON LIMITADA** en liquidación, y contra **INGETEC INGENIERÍA & DISEÑO SAS -INGETEC I&D S.A.S.**, todos identificados adelante.

1. NOTAS PRELIMINARES SOBRE EL PODER A MÍ CONFERIDO

a. **Dirección inscrita en Registro Nacional de Abogados:** el poder que se me otorgó, y que aporté con la demanda inicial como anexo 2, y que aporté nuevamente con el escrito de subsanación, *tiene en cuenta* la dirección inscrita en el Registro Nacional de Abogados y así la indica expresamente: hpalacios@palacioslleras.com.

En los términos de la norma aplicable, el escrito de poder indica dicha dirección de correo electrónico y la misma coincide con la que aparece registrada en el Registro Nacional de Abogados.

b. **Inserción del poder en el mensaje de datos:** acompaño al presente el mensaje de datos del 24 de febrero de 2021, en formato Outlook y PDF, en el cual se advierte que el remitente (jgarcia@wiesnerasociados.com) adjuntó al mensaje de datos el escrito de poder en formato.pdf, con el nombre de archivo "Poder de MIOW-Itaca Ltd a HPM Feb.24-21.pdf".

   El envío del escrito de poder como archivo adjunto, cumple con la especificación que le exige el Despacho a Ítaca, de *insertar* el poder en el mensaje de datos.

   En los términos de la norma aplicable, el escrito de poder fue *remitido* a través de mensaje de datos, por memorial dirigido al juez de conocimiento.

   Según indiqué arriba, en el poder consta mi correo electrónico como apoderado, que coincide con el inscrito en el Registro Nacional de Abogados, y es hpalacios@palacioslleras.com

   Por ende, para efectos de la subsanación, acompañé al escrito de subsanación el correo electrónico por medio del cual se me otorgó poder, en formato Outlook, con lo cual se acredita que el poder se encuentra "inserto" en el respectivo mensaje de datos, como archivo adjunto.

   Me permito advertir que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 527 de 1999, en el propio Código General del Proceso y en el artículo 2.8.2.7.2 del Decreto 1080 de 2015, existe una diferencia entre el concepto de "mensaje de datos" y "mensaje de correo electrónico". El primero se refiere a *"Los documentos generados y gestionados a través de sistemas electrónicos"*[3], como bien lo puede ser un documento generado en formato "PDF".

   Respecto al segundo concepto, un "mensaje de correo electrónico", se refiere, en el contexto de la Ley 2213, al canal de remisión, mediante el cual las personas inscritas en el registro mercantil deben remitir los poderes otorgados. Por lo que con el reenvío que hago del poder, queda subsanado lo relativo a que el poder relativo se encuentre inserto en el mensaje de datos.

c. <u>El apoderado judicial no aceptó de forma expresa la labor:</u> Es cierto que el poder no contiene la aceptación "expresa" del apoderado.

En todo caso, con la presentación del presente memorial de subsanación, aunado a la presentación de los memoriales del 13 de mayo de 2021, 16 de julio de 2021 y del 22 de octubre de 2021, ejerzo el poder que me fue conferido por la sociedad ÍTACA y en tal sentido **lo acepto.**

Vale señalar que, según el inciso final del artículo 74 del CGP <u>"Los poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio"</u>.

En los términos de la norma aplicable, me acojo a la potestad que me confiere la Ley para aceptar el poder a mí conferido "por su ejercicio".

Desde que presenté la demanda, y ahora de nuevo, me he acogido a la facultad que me confiere el artículo 74 del CGP para aceptar el poder de ÍTACA "por su ejercicio".

Es así como, en el encabezamiento de la demanda anuncié que tenía poder de ÍTACA LIMITADA y que <u>obraba como apoderada de ella para presentar la demanda</u>. De modo que, en forma inequívoca, que consta en la demanda, <u>acepté el poder por su ejercicio.</u>

Después, en nombre de la misma sociedad, y en ejercicio de mi derecho de postulación, <u>promoví actuaciones que ya fueron resueltas por el propio Despacho y por su superior jerárquico.</u>

d. <u>No se determinó e identificó claramente el asunto del poder especial</u>: el poder que aporto cumple a cabalidad con el artículo 74 del CGP, en cuanto a la determinación e identificación, con claridad, de los "asuntos" a los que se refiere.

El poder no permite iniciar o atender varios procesos de **ÍTACA**, sino que se otorgó para "<u>una demanda"</u>, contra las personas que en él se mencionan.

El poder enumera <u>siete asuntos perfectamente determinados y numerados,</u> para obtener declaraciones relacionadas con ellos, y una condena que permita una indemnización a favor de ÍTACA.

El poder precisó los "asuntos" a los que él se refiere, con <u>más detalles</u> de los usuales en este tipo de poderes.

Por supuesto, las pretensiones de la demanda se redactaron teniendo en cuenta lo dispuesto en las normas sustantivas y procesales, en la forma que, a juicio del apoderado, y según la discreción que autoriza el poder, puedan resolver mejor la controversia sobre tales "asuntos". Así lo autoriza el artículo 77 del CGP cuando dice: "El apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime conveniente para beneficio del poderdante"

Ruego se me reconozca personería.

2. DESIGNACIÓN DE LAS PARTES

1.1. Convocante

ÍTACA LIMITADA, en liquidación, (en adelante **ÍTACA)** sociedad comercial constituida por escritura pública No. 2346 del 16 de agosto de 1976, otorgada en la Notaría 2 de Bogotá. Su domicilio está en la ciudad de Bogotá, en la carrera 9 No. 80-15, oficina 602. Su matrícula mercantil es 00078267 del 27 de agosto de 1976 y su NIT es 860.048.865-1. Está representada por la señora **MARÍA ISABEL JUANA OSPINA DE WIESNER**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.713.072, quien figura como gerente en el certificado de existencia y representación legal (Anexo 1).

1.2. Convocados

1.2.1. **ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá e identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.063.997. En esta demanda, por gracia de la brevedad, nos referiremos a él, también, como **ALBERTO MARULANDA POSADA**. Se lo podrá notificar en la carrera 9 No. 84C – 40 en Bogotá D.C., y en los correos: amarulapos@ingetec.com.com y amarulapos3@gmail.com

1.2.2. **CATAY LIMITADA,** (en adelante también **CATAY**) sociedad comercial constituida por escritura pública No. 2246 de la Notaría 2 de Bogotá el 9 de agosto de 1976, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá. Su matrícula mercantil es 00077936 del 19 de agosto de 1976 y su NIT es 860.048.866-9. Esta sociedad está representada por GUSTAVO MERINO CARRASCO, identificado con la cédula # 19.111.772, a quien podrá notificarse en la carrera 6 No. 30A-30 en Bogotá D.C., y al correo electrónico registrado conta@ingetec.com.co. (Anexo 4)

1.2.3. **SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LIMITADA (**en adelante también **STO**), en liquidación, sociedad comercial constituida por escritura pública No. 5985 del 21 de diciembre de 1969, otorgada en la

Notaría 7 de Bogotá. Su domicilio está en la ciudad de Bogotá, en la carrera 6 No. 30A - 30. Su matrícula mercantil es 00021524 del 22 de mayo de 1972 y su NIT es 860.009.936-1. Esta sociedad ha estado representada por el demandado ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA. (Anexo 5).

1.2.4. **INGETEC INGENIERÍA & DISEÑO SAS -INGETEC I&D S.A.S.,** (en adelante también INGETEC I&D) sociedad comercial constituida mediante escritura pública No. 755 del 6 de marzo de 2008 otorgada en la Notaría 31 de Bogotá. Su domicilio está en la ciudad de Bogotá, en la carrera 30 No. 6-22 Of 601, y se la puede notificar allí o en el correo electrónico info@ingetec.com.co. Su matrícula mercantil es 01784158 del 13 de marzo de 2008 y su NIT es 900206480-2. Esta sociedad está representada hoy por el señor ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá e identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.779.202 y como aparece en su certificado de existencia y representación legal. (Anexo 7).

1.3. Litisconsortes cuasi necesarios.

Aunque no considero que las siguientes personas deban ser partes en el proceso, porque la demanda no contiene ninguna pretensión contra ellas, la decisión que recaiga sobre esta demanda podría tener, eventualmente, algún efecto indirecto sobre ellas. Por eso, si el Sr. Juez considera necesario citarlas para integrar el litisconsorcio como litisconsortes cuasinecesarios, las identifico aquí plenamente. Estas personas son:

1.3.1. **INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. – INGETEC SAS**, (en adelante también INGETEC) sociedad comercial constituida mediante escritura pública No. 311 del 18 de febrero de 1957 otorgada en la Notaría Primera de Bogotá. Su domicilio está en la ciudad de Bogotá, en la carrera 6 No. 30A – 30. Su matrícula mercantil es 00023592 del 22 de junio de 1972 y su NIT es 860001986-1. Esta sociedad está representada por el señor ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá e identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.063.997, y como aparece en su certificado de existencia y representación legal (Anexo 6).

1.3.2. **ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR,** mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, e identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.779.202, quien podrá notificarse en la carrera 30 No. 6-22 Of 601 en Bogotá D.C. y en los correos electrónicos andresmarulandae@gmail.com y andres@ingetec.com.co

3. PRETENSIONES

Las pretensiones de esta demanda **no** se relacionan con las que darían lugar al tipo especial de proceso al que se refiere el artículo 382 del CGP.

Con base en los hechos y normas a los que me referiré adelante en esta demanda, solicito que, en un **PROCESO VERBAL**, se atiendan las siguientes pretensiones acumuladas, derivadas de la acción a la que se refiere el artículo 25, inciso final, de la Ley 222 de 1995, y de la de "nulidad/abuso", creada en los artículos 830 del Código de Comercio y en el artículo 43 de la Ley 1258, regulada hoy en el literal "e" del numeral 5 del artículo 24 del CGP y sobre la cual tienen competencia los jueces civiles del circuito, en primera instancia, en virtud del Parágrafo 1 del numeral 6 del mismo artículo 24, y por el numeral 4 del artículo 20 del CGP.

Primera: Que se declare, contra ALBERTO MARULANDA POSADA, que, en el año 2016 y en los siguientes hasta la presentación de esta demanda:

(a) Tuvo y tiene control y poder de decisión sobre la Sociedad CATAY LIMITADA por lo que esta sociedad ha sido y es subordinada suya;

(b) Tuvo y tiene control y poder de decisión sobre la sociedad INGETEC SAS, por lo que esta sociedad ha sido y es subordinada suya;

(c) Tuvo y tiene control y poder de decisión sobre la sociedad INGETEC I&D SAS, por lo que esta sociedad ha sido y es subordinada suya;

(d) Tuvo y tiene control y poder de decisión sobre la sociedad MARULESCO SAS, por lo que esta sociedad ha sido y es subordinada suya;

(e) Tuvo y tiene control y poder de decisión sobre la sociedad MARULANDA ESCOBAR SAS, por lo que esta sociedad ha sido y es subordinada suya;

Segunda: Que se declare contra CATAY, STO, y ALBERTO MARULANDA POSADA:

Que fueron nulos, de nulidad absoluta, **los votos** de la sociedad CATAY, en la Junta de Socios de la sociedad STO que se reunió virtualmente el 2 de septiembre de 2020, por objeto ilícito y por abusar del derecho de voto en paridad, en perjuicio de ÍTACA, cuando:

a.- El apoderado de CATAY, sociedad subordinada de ALBERTO MARULANDA POSADA, participó en el voto de la proposición de ÍTACA, que ordenaba iniciar una acción de responsabilidad social contra MARULANDA;

b.- El apoderado de CATAY, sociedad subordinada de ALBERTO MARULANDA POSADA, impidió con su voto que se aprobara la proposición de iniciar un juicio de responsabilidad social contra el administrador de STO, ALBERTO MARULANDA POSADA;

c.- El apoderado de CATAY, sociedad subordinada de ALBERTO MARULANDA POSADA, impidió con su voto que se aprobara la proposición de elegir a la señora MARÍA ISABEL O. DE WIESNER como nueva representante legal principal y al señor ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA como representante suplente.

Tercera: Que se declare contra ALBERTO MARULANDA POSADA, STO y CATAY:

Que fueron nulas, de nulidad absoluta, por abuso de CATAY del derecho de voto en paridad y por objeto ilícito, las siguientes **determinaciones** que, según relata el Acta 79, se tomaron en la Junta de Socios de STO que se reunió virtualmente el 2 de septiembre de 2020, en cuanto:

a.-Al final del desarrollo del punto 8 del orden del día, cuando, según el Acta, "no hubo aprobación de la propuesta sobre representación legal";

b.-En el desarrollo del punto 10 del orden del día, cuando, según el Acta, no se aprobó la propuesta de ÍTACA de adelantar una acción de responsabilidad social de STO contra ALBERTO MARULANDA POSADA.

Cuarta: Que, como consecuencia de la prosperidad de cualquiera de las declaraciones de nulidad a las que se refieren las pretensiones segunda y tercera, se declare contra ALBERTO MARULANDA POSADA, STO y CATAY:

a.-Que, sin perjuicio de que se hayan declarado las nulidades pedidas, ÍTACA puede,

(i) reclamar a ALBERTO MARULANDA POSADA los daños y perjuicios indirectos que recaen sobre ÍTACA por los daños y perjuicios causados por ALBERTO MARULANDA POSADA a STO;

(ii) reclamar a ALBERTO MARULANDA POSADA los daños y perjuicios directos causados a ÍTACA por actos de ALBERTO

MARULANDA POSADA y/o las sociedades que él controla, cuando tales actos no causaron perjuicios directos a STO.

b.-Que, como consecuencia de cualquiera de las nulidades a las que se refieren las pretensiones segunda y tercera, debe entenderse ahora que la acción de responsabilidad social de STO contra ALBERTO MARULANDA POSADA fue aprobada.

c.-Que, como consecuencia de cualquiera de las nulidades a las que se refieren las pretensiones segunda y tercera, debe entenderse ahora que la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER fue electa en la Junta de STO del 2 de septiembre de 2020 como representante legal principal de STO, y el señor ALBERTO MARULANDA POSADA como suplente.

Quinta: Que se declare, contra ALBERTO MARULANDA POSADA, que:

a.-ALBERTO MARULANDA POSADA dio motivos a ÍTACA para que creyera que su hijo, el señor ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, estaba facultado para celebrar con ÍTACA un negocio para adquirir, a través de sociedades subordinadas de ALBERTO MARULANDA POSADA, los derechos sociales de ÍTACA en STO.

b.-Y que, en consecuencia, ALBERTO MARULANDA POSADA está obligado ante ÍTACA, a responder por el curso y el resultado de las negociaciones que hizo su representante aparente ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda con él a INGETEC I&D, a la que se refieren la pretensión OCTAVA y las consecuenciales.

Sexta: Que se declare contra ALBERTO MARULANDA POSADA e INGETEC I&D, que:

a.- INGETEC I&D, representada por ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, y en desarrollo de la autorización dada por ALBERTO MARULANDA POSADA, negoció y acordó con ÍTACA, todos los elementos esenciales de un contrato para que INGETEC I&D fuera cesionaria de todas las cuotas sociales de ITACA en STO;

b.-Que la celebración de ese contrato entre ÍTACA y INGETEC I&D, estaba sujeta, únicamente, a dos condiciones de origen legal, a saber: (i) la condición de que CATAY no hiciera uso de su derecho de preferencia para adquirir tales cuotas, y (ii) a la aprobación final de la Junta de STO.

Séptima: Que se declare contra ALBERTO MARULANDA POSADA, que, siendo representante legal de STO, y, al mismo tiempo controlador de CATAY, violó

los deberes de buena fe y lealtad a los que estaba sujeto en STO, y las reglas sobre conflictos de interés, cuando:

a.-Directamente y/o por medio de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, trató de impedir que los socios minoritarios de CATAY conocieran la opción que ÍTACA debía dar a CATAY, según las reglas sobre "derecho de preferencia", para poder ceder eventualmente a INGETEC I&D las cuotas de interés social de ÍTACA en STO.

b.- Se negó a transmitir a CATAY la oferta que hizo ÍTACA a CATAY para la cesión de las cuotas sociales de ÍTACA en STO.

c.-Hizo saber a ÍTACA, directamente y/o por medio de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, que las negociaciones para la eventual compra de sus cuotas sociales en STO a través de INGETEC I&D, no seguirían adelante, por falta de financiación bancaria, condición ésta que nunca se incorporó en los documentos acordados.

Octava. Que se declare contra ALBERTO MARULANDA POSADA e INGETEC I&D SAS, que:

a.- Cuando ALBERTO MARULANDA POSADA, incurrió en las conductas a las que se refieren los literales "a", "b" y "c" de la pretensión **séptima**, causó daños y perjuicios directos a ÍTACA,

b.-Cuando INGETEC I&D, a través de su representante legal ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR y representante aparente de ALBERTO MARULANDA POSADA, comunicó a ÍTACA su decisión de no continuar con el procedimiento necesario para que INGETEC I&D adquiriera las cuota de interés social de ÍTACA en STO, causó daños y perjuicios directos a ÍTACA LTDA.

c.-Que el valor de esos daños y perjuicios, ocasionados por ALBERTO MARULANDA y por INGETEC I&D a ÍTACA, equivale, por lo menos, a $7.375 millones, del 14 de agosto de 2020 y a lo que se demuestre en el proceso.

Novena. -Que se declare, contra ALBERTO MARULANDA POSADA e INGETEC I&D, que

a.-Cuando ALBERTO MARULANDA POSADA se negó a dar traslado a CATAY de la oferta de cuotas de interés social de ITACA en STO, violó la ley e hizo imposible el cumplimiento de las dos condiciones de las cuales pendía la celebración del contrato entre ÍTACA, como cedente de cuotas de interés social en STO, e INGETEC I&D como cesionaria.

b.- Y que, en consecuencia, esas condiciones se deben entender cumplidas (según los principios de los artículos 1537, 1538 y 1542 del Código Civil), y corresponde a ALBERTO MARULANDA POSADA usar su control y poder de decisión en INGETEC I&D y CATAY para que se celebre y cumpla el contrato de cesión acordado en lo esencial entre ÍTACA e INGETEC I&D.

c.-Y que cuando INGETEC I&D, por medio de su representante legal ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, terminó abrupta y unilateralmente las negociaciones con ÍTACA, para adquirir las cuotas de interés social de ÍTACA en STO, violó la ley y, en particular, su deber de obrar de buena fe.

d.-Y que, en consecuencia, se condene a INGETEC I&D, por sí misma, o por instrucciones y con el apoyo de su controlador ALBERTO MARULANDA POSADA, a celebrar los actos necesarios y el contrato acordado en lo esencial con ÍTACA, con actualizaciones e intereses de mora, para reparar así los daños que ellos causaron a ÍTACA según la pretensión octava.

Décima.- Que, en subsidio de los literales "a", "b" y "d" de la pretensión **novena**, y como consecuencia de las declaraciones que recaigan contra ALBERTO MARULANDA POSADA y contra INGETEC I&D en las pretensiones quinta, sexta, séptima, octava, y novena, literal "c", se condene a ALBERTO MARULANDA POSADA a dar traslado inmediato a CATAY de la oferta de cesión de sus cuotas de interés social en STO que hizo ÍTACA el 24 de julio de 2020, y que,

a.-Si CATAY acepta la oferta dentro del término legal, que ALBERTO MARULANDA POSADA e INGETEC I&D, solidariamente, paguen a ÍTACA, en adición al precio que pague CATAY, la actualización de ese precio y los intereses de mora, a partir del 14 de agosto de 2020; y que los costos y gastos que ocasionen la cesión y la reforma de estatutos de STO sean por cuenta de ALBERTO MARULANDA POSADA e INGETEC I&D;

b.-Si CATAY rechaza la oferta o no la responde dentro del término legal, que se condene a ALBERTO MARULANDA POSADA y a INGETEC I&D, solidariamente, a indemnizar a ÍTACA los daños y perjuicios directos que le causaron a ella, así:

(i) Ordenando a ALBERTO MARULANDA POSADA usar su control y poder de decisión en INGETEC I&D, para que esta sociedad celebre con ITACA, el contrato cuyos elementos esenciales se habían

convenido entre ellas para la cesión de las cuotas de ÍTACA en STO; y para que CATAY facilite en la Junta de STO la cesión.

(ii) Ordenando a INGETEC I&D celebrar el contrato cuyos elementos esenciales se habían acordado con ÍTACA, para adquirir como cesionaria las cuotas de interés social de ÍTACA en STO.

(iii) Ordenando que el texto del contrato de cesión entre ÍTACA e INGETEC I&D incluya todas las coincidencias esenciales y accidentales entre el texto que envió ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR a ITACA el 26 de marzo de 2020, y el texto que, a su vez, ofreció ITACA a CATAY el 24 de julio de 2020,

(iv) Ordenando que INGETEC I&D añada al texto resultante según los literales (i) (ii) y (iii) anteriores de esta pretensión los elementos **accidentales** necesarios para dar eficacia a la sentencia que recaiga sobre esos literales.

(v) Ordenando que ALBERTO MARULANDA POSADA o INGETEC I&D, entreguen el precio de la cesión a ÍTACA, actualizado y con intereses de mora, a partir del 14 de agosto de 2020; y que los costos y gastos que ocasionen la cesión y la reforma de estatutos de STO sean por cuenta de ALBERTO MARULANDA POSADA e INGETEC I&D.

(vi) Y que, de no cumplirse, en el término que señale la sentencia, las órdenes a las que se refieren los literales anteriores de esta pretensión, se condene en forma solidaria a ALBERTO MARULANDA POSADA y a INGETEC I&D a:

> (vi-a) Pagar a ÍTACA la suma convenida para la cesión a INGETEC I&D de sus cuotas de interés social en STO, más la actualización de valor e intereses de mora a partir del 14 de agosto de 2020, más cualesquiera otros valores que se demuestren en el proceso, actualizados y con intereses.
>
> (vi-b) Sin perjuicio de que, después de haber hecho el pago al que se refiere el literal (vi-a), ALBERTO MARULANDA POSADA, o INGETEC I&D, puedan solicitar a ÍTACA la colaboración necesaria para que, en cuanto de ella dependa, se cumplan todos los trámites de ley para que INGETEC I&D, entre formalmente a ser socia de STO. En este último evento, los costos y gastos que ocasionen la cesión y la reforma de estatutos serán por cuenta de ALBERTO MARULANDA POSADA e INGETEC I&D.

Undécima: que se declare, contra ALBERTO MARULANDA POSADA, que siendo representante legal principal de STO, violó los deberes de buena fe y lealtad, y los demás deberes que le imponen los artículos 22, 23 y concordantes de la Ley 222 de 1995, incluyendo los relativos al conflicto de intereses, cuando:

a. Suscribió con INGETEC S.A., en nombre de STO, el contrato de arrendamiento del 30 de septiembre de 2016 sobre las partes del edificio San Martín, que STO posee en común y proindiviso con INGETEC I&D,

b. Suscribió el Otrosí No.1 del 21 de marzo de 2017 al mismo contrato, y lo renovó de la misma manera, en los años 2017, 2018 y 2019, pese a las críticas expresas de ÍTACA.

c. Toleró que las sociedades arrendatarias se atrasaran en el pago de los arrendamientos, sin aplicarles las sanciones previstas en la ley y en el contrato.

d. A partir de la negativa de la Junta de STO a las prórrogas del contrato, siguió permitiendo que sociedades controladas por él ocuparan los bienes arrendados, sin hacer gestión alguna para modificar los acuerdos existentes en forma que recibieran aceptación expresa de la Junta, o para buscar otros arrendatarios, o para obtener el desalojo de los espacios alquilados.

Duodécima: Que se declare contra ALBERTO MARULANDA POSADA, que:

a.- ALBERTO MARULANDA POSADA, siendo representante legal de STO, causó perjuicios y daños indirectos a ÍTACA, en cuanto socia de STO, al violar las normas sobre conflicto de interés, en relación con la celebración y administración de los contratos de arrendamiento aludidos en la pretensión anterior.

b.-Que tales perjuicios a ÍTACA corresponden al 50% de:

b1.-La diferencia entre los cánones pagados a STO y los que se habrían causado si los cánones hubiesen sido acordados con base en un avalúo independiente comercial de los inmuebles, y si los cánones hubiesen sido iguales o similares a los que se pagaban en el mercado por oficinas del mismo valor;

b2.-Los intereses de mora que STO debió recibir, y no recibió, por razón de las demoras de los arrendatarios en el pago.

Décima tercera: Que se **condene** a ALBERTO MARULANDA POSADA, a indemnizar el perjuicio y daño indirectos ocasionados a ÍTACA, y descritos en la pretensión duodécima, en los valores que se demuestren en este proceso, con las actualizaciones de valor e intereses a que haya lugar según la ley.

Décima cuarta: Que, contra ALBERTO MARULANDA POSADA, en consecuencia del éxito eventual de algunas o todas las pretensiones anteriores que se dirigen contra él,

a.-Se ordene la remoción de ALBERTO MARULANDA POSADA como representante legal de STO; y

b.-Se informe a la Cámara de Comercio de Bogotá para que registre lo que la sentencia judicial disponga sobre la eventual remoción y sus motivos.

Décima quinta: Que, en los términos del artículo 5 del Decreto 1925 de 2009, incorporado hoy en el Decreto 1074 del 2015, se sancione a ALBERTO MARULANDA POSADA con inhabilidad para ejercer el comercio.

Décima sexta: Que se condena a los demandados a pagar todas las costas y gastos del proceso si se oponen a las pretensiones de esta demanda.

4. COMPETENCIA DEL JUEZ DEL CIRCUITO; ACUMULACIÓN; PROCEDIMIENTO.

El señor Juez del Circuito de Bogotá es competente para conocer de todas las pretensiones acumuladas en esta demanda, por las razones que paso a exponer.

3.1.-Competencia: Interpretación de acuerdo con la Constitución.

El artículo 116 de la Constitución dispone:

> ARTÍCULO 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y **los Jueces, administran Justicia**. También lo hace la Justicia Penal Militar.
>
> El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.
>
> **Excepcionalmente** la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. (He añadido las negrillas).

De acuerdo con la Constitución es claro, entonces, que, **por regla general**, la administración de justicia corresponde a las diversas clases de **jueces.** Y que, **solo por excepción**, la ley puede atribuir función jurisdiccional **en materias precisas** a determinadas autoridades administrativas.

El artículo 116 de la Constitución no significa que el solo hecho de atribuir función jurisdiccional en materias precisas a ciertas autoridades administrativas, implique, sin más, que los jueces queden privados del ejercicio de su función judicial en las mismas materias. Se requería un mandato más explícito para llegar a esa conclusión. La función jurisdiccional admite competencias concurrentes o a prevención.

En el derecho colombiano se acepta en forma pacífica, que las normas excepcionales se aplican en **forma restrictiva**, esto es, solo en la manera precisa en la que las redacta el legislador, sin que puedan interpretarse o aplicarse en forma extensiva.

Ahora bien; el artículo 20 del CGP dispone, en el numeral 4 que:

> **Artículo 20. Competencia de los jueces civiles del circuito en primera instancia.** Los jueces civiles del circuito conocen en primera instancia de los siguientes asuntos:
>
> ……
> 4. De **todas** las controversias que surjan con ocasión del contrato de sociedad, o por la aplicación de las normas que gobiernan las demás personas jurídicas de derecho privado, así como de los de nulidad, disolución y liquidación de tales personas, salvo norma en contrario.

"**Todas**" son "todas". De acuerdo, pues, con el artículo 116 de la Constitución, y el numeral 4 del artículo 20 del CGP, los jueces civiles del circuito conocen, en primera instancia, de **todas** las controversias que surjan **con ocasión del contrato de sociedad**, salvo **norma en contrario.**

¿Qué debe entenderse por una "**norma en contrario**" de la regla general del numeral 4 del artículo 20 del CGP?.

En primer término, cuando el numeral 4 del artículo 20 advierte que la regla de competencia que él contiene opera "salvo norma en contrario", debe entenderse que se refiere al evento de una norma contraria en materia de **competencia de los jueces,** puesto que el numeral 4 se refiere a competencia "de los jueces civiles del circuito", y no a los casos excepcionales de competencia judicial de las autoridades administrativas. Estos casos excepcionales no son "norma en contrario", sino "normas complementarias".

En todo caso, son normas "contrarias" solo aquellas que indiquen que, determinadas controversias que surjan con ocasión del contrato de sociedad, no son de competencia **de los jueces civiles del circuito en primera instancia.**

No son "norma en contrario" las que, simplemente, se limitan a atribuir competencia a autoridades **administrativas** en materias iguales o similares a las que son de competencia de los jueces civiles del circuito, porque:

> a.-Debe preferirse la interpretación que mejor se ajuste a la Constitución. Ésta, como hemos visto, atribuye a los jueces por regla general la función de administrar justicia. Y está más acorde con esa regla constitucional general una interpretación según la cual la simple atribución de competencias a autoridades administrativas lleva a competencias concurrentes o complementarias entre los jueces y tales autoridades, que la interpretación que prescinde de la competencia de los jueces sin que la atribución de competencias a las autoridades administrativas, en las mismas materias, sea claramente **incompatible** con la primera.
>
> b.-Debe preferirse la interpretación que garantice en forma más amplia el derecho fundamental de "acceso a la justicia"
>
> c.-En nuestro derecho procesal es un fenómeno común que haya facultades que se ejercen a prevención.

3.2.-El origen de las controversias a las que se refiere esta demanda es el contrato social de STO, en cuanto regula las funciones de su representante legal, y el desarrollo y facultades de la Junta de socios. La condición de ALBERTO MARULANDA POSADA, como administrador de STO, y, controlador, al mismo tiempo, de CATAY, una de las dos sociedades socias de STO, es el origen de la controversia sobre el "derecho de preferencia" a la que se refiere una parte sustancial de esta demanda. Aunque los estatutos de STO no se refieren directamente al "derecho de preferencia" para la cesión de cuotas de interés social a terceros, los estatutos de STO (Escritura 3765 de 1976, Anexo 65) sí disponen, en el artículo octavo, literal "g", que corresponden a la Junta de socios las funciones que determine la ley. Entre éstas, según el artículo 360 del Código de Comercio, consta la de aprobar reformas a los estatutos sociales, y el artículo 362 del Código dispone que la cesión de cuotas de interés social debe hacerse mediante reforma estatutaria. Además, corresponde a la Junta de socios, según el artículo 365 del Código de Comercio, autorizar el ingreso de un extraño a la sociedad. De modo que las reglas sobre cesión de cuotas de interés social, y "derecho de preferencia" en STO es un asunto que "surge con ocasión del contrato social".

Todas las pretensiones de la demanda tienen origen en un contrato social, a saber, los estatutos de la sociedad SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA (STO), cuya versión más reciente consta en la escritura 3765 de 26 de noviembre de 1976, de la Notaría segunda del Círculo de Bogotá (Anexo 65).

La sociedad STO ha tenido y tiene como representante legal inscrito al señor ALBERTO MARULANDA POSADA, contra quien se dirigen **todas** las pretensiones de la demanda, sin perjuicio de que algunas de ellas se dirijan también contra STO -la sociedad que él representa- o contra CATAY e INGETEC I&D, sociedades que él controla. La sociedad STO está compuesta por dos socios, las sociedades ÍTACA, actora en este proceso, y la sociedad CATAY, subordinada de ALBERTO MARULANDA POSADA, una de las otras demandadas en este proceso.

Todas las pretensiones tienen origen en el contrato social de STO, porque se dirigen a resolver:

a.-Controversias entre ÍTACA y ALBERTO MARULANDA POSADA relativas a

(i) las negociaciones sobre cuotas de interés social de ÍTACA en STO, que se adelantaron con **INGETEC I&D,** sociedad subordinada a ALBERTO MARULANDA POSADA. En estas negociaciones se imputa responsabilidad al administrador, bien por (i) omitir su deber de dar traslado inmediato a CATAY de una oferta de cesión de cuotas de interés social en STO, que le hizo ÍTACA; (ii) bien por haber frustrado una negociación de cuotas sociales en STO entre ÍTACA e INGETEC I&D -sociedad controlada por él- que el mismo había orientado a través de su hijo ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, representante legal, a la vez, de INGETEC I&D.

(ii) la celebración de contratos de arrendamiento de los bienes de STO a sociedades tales como INGETEC S.A. -controlada por él- en condiciones de conflicto de interés;

b.-Controversias entre ÍTACA e **INGETEC I&D,** sociedad subordinada a ALBERTO MARULANDA POSADA, por la negociación de cuotas de interés social de ÍTACA en STO.

c.-Controversias entre ÍTACA, CATAY y STO, relacionadas con la forma en la que CATAY actuó en una junta de socios de STO, celebrada el 2 de septiembre de 2020.

3.3.- Acumulación de pretensiones en esta demanda. La acumulación de acciones que se hace en esta demanda cumple todos los requisitos del artículo 88 del CGP, como explicamos en seguida.

Esta demanda incluye varias clases de pretensiones, por lo que es útil explicar por qué la acumulación cumple los requisitos del artículo 88 del CGP.

3.3.1.-Competencia del Juez del Circuito.

El numeral 4 del artículo 20 del CGP indica que el Juez del Circuito es competente para conocer de "**todas** las controversias que surjan con ocasión del contrato de sociedad" sin reparar en cuáles sean las acciones que dan lugar a esas controversias o que permitan resolverlas". "**Todas**" significa "todas".

El numeral 4 del artículo 20 del CGP solo limita en dos formas la competencia universal sobre controversias societarias que otorga al Juez del Circuito, a saber:

> a.-Que las controversias "surjan con ocasión del contrato de sociedad" esto es, que tales controversias no podrían existir sin la existencia previa de un contrato societario relacionado con todas ellas.
>
> b.- Que no haya "**norma en contrario",** esto es, una norma que indique que determinada controversia **no es de competencia del Juez del circuito**. No basta que otra norma se limite a atribuir competencia complementaria o a prevención sobre una controversia igual o similar a otra autoridad, sino que se requiere que **excluya** la posibilidad de **competencia compartida** o a prevención entre esa otra autoridad y la del Juez del circuito, porque resulte **incompatible** con ésta.

No hay norma alguna que indique que las controversias a las que se refiere esta demanda no son de competencia del Juez del Circuito, aunque, **sin duda**, algunas de esas controversias podrían ser de competencia, a prevención, de la Superintendencia de Sociedades.

> En esta demanda, las pretensiones **segunda, tercera y cuarta**, piden la nulidad de votos y decisiones de una junta de socios de STO, por "objeto ilícito" y "abuso del derecho de paridad". Tales votos y decisiones surgen de la ley y del contrato social de STO, en particular de su artículo Décimo Primero (sic), según el cual:
>
> > ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. -QUORUM Y DECISIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS. La junta de socios deliberará con un número plural de socios. Las decisiones se tomarán por un **número plural de socios** que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que

> se halle dividido el capital social de la compañía. Las reformas estatutarias se adoptarán con el voto favorable de un número plural de socios que represente, cuando menos, el setenta por ciento (70%) de las cuotas en que se halle dividido el capital social. (He añadido las negrillas).

En Colombia existen ciertos regímenes sociales que permiten que las juntas o asambleas tomen decisiones con los votos de un solo socio. No es el caso del que se ocupa esta demanda. El artículo "Décimo Primero" de los estatutos de STO exige que las decisiones en las juntas se STO se tomen por un número **plural** de socios y es por ello que las pretensiones **segunda, tercera y cuarta**, relacionadas con el **"abuso de paridad**", surgen del contrato social.

Ya el Código de Comercio indica, en el artículo 830, que

> ARTÍCULO 830. El que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause.

Pero, además, desde la aprobación por el Congreso del artículo 43 de la Ley 1258, en el derecho societario colombiano se hace un desarrollo especial del artículo 830 del Código de Comercio, y se califican de **ilícitas** -esto es, de **generadoras de nulidad**- las conductas de accionistas que usan el voto para causar daño a la sociedad o a otros accionistas, o para obtener para sí o para terceras personas ventajas injustificadas; o cuyo voto pueda ocasionar un perjuicio a la compañía o a otros accionistas. La misma norma censura los abusos de mayoría, minoría y paridad.

El artículo 43 de la Ley 1258 dice:

> **Artículo 43. Abuso del derecho**. Los accionistas deberán ejercer el derecho de voto en el interés de la compañía. Se considerará abusivo el voto ejercido con el propósito de causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para una tercera ventaja injustificada, así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas. Quien abuse de sus derechos de accionista en las determinaciones adoptadas en la asamblea, responderá por los daños que ocasione, sin perjuicio que la Superintendencia de Sociedades pueda declarar la nulidad absoluta de la determinación adoptada, por la ilicitud del objeto.
>
> La acción de nulidad absoluta y la de indemnización de perjuicios de la determinación respectiva podrán ejercerse tanto en los casos de

> abuso de mayoría, como en los de minoría y de paridad. El trámite correspondiente se adelantará ante la Superintendencia de Sociedades mediante el proceso verbal sumario.

Así las cosas, debe tenerse en cuenta que el artículo 43 de la Ley 1208 es una norma de carácter **excepcional**, y, por lo tanto, de interpretación restrictiva, pues, consiste, nada menos, que en atribuir una competencia judicial a una autoridad administrativa. Se trata de una excepción al inciso tercero del artículo 116 constitucional según el cual,

> **Excepcionalmente** la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas (He añadido la negrilla)

Y el artículo 43 de la Ley 1258, atribuye una competencia a la Superintendencia de Sociedades, pero no indica que los jueces del circuito no puedan resolver también las controversias a las que se refiere el artículo 43, como parte de la regla general constitucional que atribuye a los jueces la función de "administrar justicia". De modo que el artículo 43 de la Ley 1258 debe interpretarse y aplicarse en forma que sea conforme con la **regla general** del artículo 116 de la Constitución, y no como si fuera incompatible con ella.

Es así como resulta de especial importancia en este caso el Parágrafo 1 del artículo 24 del CGP, que se refiere a las funciones judiciales de la Superintendencia de Sociedades, y dispone:

> Parágrafo 1°. Las funciones jurisdiccionales a que se refiere este artículo, **generan competencia a prevención** y, por ende, no excluyen la competencia otorgada por la ley a las autoridades judiciales y a las autoridades administrativas en estos determinados asuntos. (He añadido las negrillas).

En síntesis: aun teniendo en cuenta el artículo 43 de la Ley 1258, el Juez del Circuito es competente para decidir las controversias a las que se refieren las pretensiones **segunda, tercera y cuarta** de esta demanda, con base en el artículo 116 de la Constitución, en el artículo 830 del Código de Comercio, en el numeral 4 del artículo 20 del CGP, y en el Parágrafo 1 del artículo 24 del CGP.

3.3.2.-La cláusula arbitral no se aplica a las pretensiones de esta demanda.

El texto del artículo DÉCIMO OCTAVO de los estatutos sociales de STO es el siguiente:

> DIFERENCIAS. Las diferencias que surjan entre los socios o entre estos y la sociedad con motivo del contrato social, **y diferentes de aquellas que deben decidirse por votación en la Junta de Socios**, se someterán a la decisión de tres árbitros que designará la Cámara de Comercio de Bogotá. Dichos árbitros operarán en Bogotá y deberán fallar en conciencia, pudiendo conciliar las pretensiones opuestas. (La negrilla es mía) (Anexo 65)

No es del caso aplicar el artículo DÉCIMO OCTAVO de los estatutos sociales de STO, puesto que **todas** las pretensiones que contiene la demanda atañen a controversias entre la sociedad ÍTACA y el administrador de STO, ALBERTO MARULANDA POSADA, **que no es socio** de STO. Estas pretensiones se enderezan a señalarle responsabilidades y deberes a él, como persona natural.

Otras pretensiones se dirigen contra la sociedad **INGETEC INGENIERÍA & DISEÑO SAS -INGETEC I&D** que tampoco es socia de STO.

De otra parte, las pretensiones **segunda, tercera y cuarta** que se refieren a controversias entre ITACA y CATAY, socios de STO, o de ÍTACA contra STO, versan, **precisamente**, sobre asuntos que deben decidirse por votación en la Junta de Socios, como son:

> a.- Las votaciones realizadas en la junta de socios de STO celebrada el 2 de septiembre de 2020, y en donde los votos de CATAY implicaron abuso del derecho.
>
> b.- La aprobación del ingreso de un nuevo socio, por cesión de cuotas de interés social, según el artículo 365 del Código de Comercio, incorporado a los estatutos sociales de STO por la remisión que el artículo OCTAVO de los estatutos sociales hace a las normas legales sobre funciones de la Junta de Socios.

Y cuando en la pretensión **décima** se pide una condena contra CATAY es, exclusivamente, por los perjuicios ocasionados por sus votos en la Junta de Socios de STO del 2 de septiembre de 2020.

3.3.3.-Todas las pretensiones pueden tramitarse por el proceso verbal.

El numeral 4 del artículo 20 del CGP encarga al Juez del Circuito de definir, **en primera instancia,** "**todas** las controversias que surjan con ocasión del contrato de sociedad".

Ahora bien, si la competencia de los jueces civiles del circuito para conocer de todas las controversias que surjan con ocasión del contrato de sociedad es para conocerlas **en primera instancia**, resulta obvio que el procedimiento que deben seguir para resolver esas controversias no puede ser el del "proceso verbal sumario", pues éste, según el Parágrafo Primero del artículo 390 del CGP, es de **única instancia.**

El artículo 233 de la Ley 222 de 1995 disponía:

> REMISIÓN AL PROCESO VERBAL SUMARIO. Los conflictos que tengan origen en el contrato social o en la ley que lo rige, cuando no se hayan sometido a pacto arbitral o amigable composición, se sujetarán al trámite del proceso verbal sumario, salvo disposición legal en contrario.

El numeral 4 del artículo 20 del CGP, por la razón anotada, es "disposición legal en contrario" al artículo 233, por lo que éste no es aplicable a la presente controversia.

Sin duda, el artículo 390 del CGP dice que se tramitarán por la vía del proceso "verbal sumario"

> 9. Los que en leyes especiales se ordene tramitar por el proceso verbal sumario.

pero esta regla no implica que las autoridades judiciales deban tramitar por el proceso "verbal sumario" las controversias que se refieran a la nulidad de votos y decisiones que se toman en juntas de socios con abuso del derecho de paridad, pues el artículo 43 de la Ley 1258 **solo se refería a los procesos que se siguieran ante la Superintendencia de Sociedades**.

Más aún, debe tenerse en cuenta el Parágrafo 3 del artículo 24 del CGP, relativo a las facultades judiciales de la Superintendencia de Sociedades, y según el cual,

> Las autoridades administrativas tramitarán los procesos a través de **las mismas vías procesales** previstas en la ley para los jueces.

Como se observa, el Parágrafo 3 del artículo 24 del CGP **impone** a las autoridades administrativas que asuman funciones judiciales, el uso de <u>las vías procesales **propias de los jueces**, y no las que se hubiesen creado para las autoridades administrativas.</u>

No se puede, pues, imponer a un juez el trámite, por la vía del "proceso verbal sumario", de las controversias relativas a nulidades en votos y decisiones de juntas

de socios, por abuso del derecho de paridad, pues **tal restricción surgió únicamente para las autoridades administrativas,** y en una situación excepcional, esto es, cuando fueran a ejercer funciones judiciales. Hoy el Parágrafo 3 del artículo 24 del CGP impone a las autoridades administrativas el deber de adoptar las vías procesales que el CGP señala a los jueces, y no las que pudieron ser propias de su excepcional ejercicio judicial.

Finalmente, es de notar que cuando el artículo 24, numeral 5, literal "e" del CGP faculta a la Superintendencia de Sociedades para tramitar este tipo de pretensiones, suprimió la regla original de la ley 1258 que le exigía tramitar este proceso por la vía del "proceso verbal sumario".

De modo que el Parágrafo 3 del artículo 24, arriba citado, no obliga a los jueces a tramitar estas controversias por la vía del "proceso verbal sumario" sino que, **al revés,** la Superintendencia debe tramitar los procesos de anulación de decisiones de juntas o asambleas por objeto ilícito y abuso del derecho por la vía del "proceso verbal" y no por la vía del "proceso verbal sumario".

Por las razones dichas, las pretensiones **segunda, tercera y cuarta** de esta demanda deben tramitarse, como todas las demás, por el "proceso verbal", y no por el "proceso verbal sumario", razón por la cual se cumplen, en este caso, todos los requisitos para la acumulación de acciones.

3.3.4.-Las pretensiones contra varios demandados son acumulables porque provienen de la misma causa, se hallan en relación de dependencia entre sí, y se sirven de las mismas pruebas.

Las pretensiones **segunda, tercera, cuarta** se dirigen contra varios demandados, porque provienen de la misma causa (Junta de socios de STO el 2 de septiembre de 2020) y deben servirse de las mismas pruebas: acta y grabaciones de esa Junta, certificados en los que consta la subordinación de INGETEC I&D SAS y CATAY a ALBERTO MARULANDA POSADA y documentos provenientes de ALBERTO MARULANDA POSADA y ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR.

Las pretensiones **sexta, octava, novena y décima**, se dirigen contra varios demandados, porque provienen de la misma causa (terminación unilateral de las negociaciones para la cesión de cuotas de interés social de ÍTACA en STO) y deben servirse de las mismas pruebas: certificados en los que consta la subordinación de INGETEC I&D SAS, y documentos de ALBERTO MARULANDA POSADA y de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR acta y grabaciones de esa Junta, y de CATAY a ALBERTO MARULANDA POSADA.

5. MEDIDAS CAUTELARES

Con todo respeto, y con fundamento en el artículo 590 del Código General del Proceso, solicito del señor Juez que se decreten y practiquen las medidas cautelares que enumerará adelante.

Además, ruego al Sr. Juez, tener en cuenta que ÍTACA se encuentra en liquidación, y que estas medidas no recaen ni limitan derechos patrimoniales o económicos de los demandados, por lo que el Sr. Juez podría ejercer la facultad que le otorga el numeral 2 del artículo 590 del CGP y liberar a ÍTACA del deber de prestar una caución, o fijar ésta en una suma mínima.

Las medidas cautelares que se solicitan, son las siguientes:

> **Primera-**Que se ordene a ALBERTO MARULANDA POSADA abstenerse de votar con sus votos y con los de MARULESCO SAS (sociedad que controla y que él representa), en las Juntas de CATAY, cuando los asuntos que se discutan en ellas se refieran a contratos entre (i) STO y él; o entre (ii) STO y las sociedades que MARULANDA representa o en cuyas juntas o asambleas tenga, directamente o con otras sociedades y/o con su esposa o hijos, más del 50% del poder de voto.
>
> **Segunda. -**Que se ordene a ALBERTO MARULANDA POSADA conseguir que se convoque una Junta de socios de CATAY (sociedad que él controla), de asistir a ella, y de presentar y votar en favor de una proposición según la cual, cuando la sociedad CATAY asista a las Juntas de Socios de STO, quien la represente allí debe abstenerse de presentar o apoyar cualquier propuesta que permita a ALBERTO MARULANDA POSADA, mientras sea representante legal de STO,
>
> > (i) hacer contratos en nombre de STO con cualquier sociedad en la que él o las sociedades que él controla en forma directa o indirecta, o en las que su esposa o sus hijos sean socios, o
> >
> > (ii) impedir que se transmitan a la Junta de Socios de CATAY propuestas de cesión de cuotas sociales en STO,
>
> salvo que tal o tales propuestas provengan o tengan aceptación de quien represente a ITACA en la Junta de STO.
>
> **Tercera.-** Que, para obtener el cumplimiento de los artículos 164 y 442 del Código de Comercio, en la forma en la que fueron declarados constitucionales en el numeral 11 de la Sentencia C-621 de 2003, se ordene a quienes aparezcan en el registro mercantil como representante legal o como revisor fiscal de STO, convocar una Junta Extraordinaria de Socios para que, según sea procedente,

(i) designen o ratifiquen al representante legal y al revisor fiscal de la sociedad;

(ii) inicien y culminen un procedimiento, en colaboración con el liquidador de la sociedad, para designar una persona o personas que busquen arrendadores o compradores para los espacios que STO ha tenido arrendados, para que esa persona o personas celebren los contratos de arrendamiento que los socios de STO aprueben, o para que promuevan la venta de tales espacios, previa aprobación de los socios.

Fundo esta solicitud de medidas cautelares en los hechos y razones de derecho que explico en seguida.

En este caso se cumplen las condiciones que exige el artículo 590 de la ley 1564 de 2012 para que proceda el otorgamiento de medidas cautelares, así:

a.-Legitimación o interés de las partes: los hechos de esta demanda relatan diversos actos de ALBERTO MARULANDA POSADA, en los cuáles él falta a sus deberes de administrador y viola el régimen de conflictos de interés:

-Negándose a transmitir la oferta que ÍTACA formuló a CATAY para cederle sus cuotas de interés social en STO, oferta indispensable, según el régimen de "derecho de preferencia", para que ÍTACA pudiera continuar con el negocio acordado condicionalmente de cesión de esas cuotas a INGETEC I&D -sociedad que controla ALBERTO MARULANDA POSADA. ALBERTO MARULANDA POSADA quería impedir que los socios minoritarios de CATAY conocieran las condiciones en las cuáles él -a través de INGETEC I&D -estaba comprando las cuotas de interés social de ÍTACA en STO.

-Celebrando contratos sobre bienes de STO con sociedades que él controla, sin autorización de la Junta de STO; e

ITACA, es socia de STO, sociedad en liquidación, y tiene, según los estatutos de la sociedad, y la ley, derecho a que los administradores de la sociedad obren en interés de la sociedad, de buena fe, sin abuso del derecho, sin conflictos de intereses, y cumpliendo las obligaciones que les imponen el artículo 363 del Código de Comercio y el artículo 23 de la Ley 222 de 1905, y normas concordantes.

Por ese motivo, diversas normas y, entre otras, los artículos 200 y 363 del Código de Comercio, 22, 23 y 25 de la Ley 222 de 1905 y 24 del Código General del Proceso,

confieren a ITACA legitimación para pedir estas medidas cautelares, cuando el cumplimiento de los deberes respectivos del administrador haya puesto o ponga en peligro el interés de la sociedad o los derechos de los socios. Así mismo, los artículos 1742 y 1746 del Código Civil reconocen el interés de ITACA en exigir responsabilidad a los administradores, incluyendo las pretensiones declarativas y de condena que contiene la demanda, en relación con los actos realizados u omitidos por el representante legal de STO, ALBERTO MARULANDA POSADA.

La "primera" y "segunda" medida cautelar que ITACA pide, buscan solo que ALBERTO MARULANDA POSADA respete en forma efectiva, aún en el seno de CATAY, sociedad que él controla con sus propios votos y los de MARULESCO SAS, y que es socia de STO, el régimen de conflictos de interés que impone la ley cuando ALBERTO MARULANDA POSADA haya de actuar como representante legal de STO. Ese régimen, en este caso, se construye a partir del hecho de que ALBERTO MARULANDA POSADA es representante legal de STO, calidad que no pierde por el hecho de asistir a la junta de una sociedad como CATAY, si el tema de su actuación es uno de los que cae dentro del régimen de conflictos de interés en STO.

En el caso de la "segunda" medida cautelar, la orden que se pide no es contra CATAY, sino contra su socio controlante ALBERTO MARULANDA POSADA, para que éste no permita que el voto de CATAY sirva para facilitar la violación del régimen de conflictos de interés de ALBERTO MARULANDA POSADA en STO.

ITACA está legitimada para pedir la "tercera" medida cautelar por cuanto, en la Junta de Socios de STO del 2 de septiembre de 2020, ni ALBERTO MARULANDA POSADA ni el Revisor Fiscal YIVHER ANDRÉS GONZÁLEZ VELANDIA fueron "confirmados ni reelegidos", por lo que no conviene a los intereses de STO que, en el registro comercial, continúen apareciendo como representante legal y revisor fiscal de la sociedad, personas que fueron objeto de censuras en la Junta y que no lograron recibir el apoyo estatutario suficiente para continuar en sus cargos.

La grabación que se hizo de la reunión de la Junta, y que, con su trascripción se acompaña a la demanda (pues solo el 29 de noviembre se pudo obtener copia del Acta, pedida con más de un mes de anticipación), comprueba estos hechos. Los artículos 164 y 442 del Código de Comercio, en la forma en la que fueron declarados constitucionales en el numeral 11 de la Sentencia C-621 de 2003, y en la parte resolutiva de la misma (Anexo 59), disponen que, si no se produce una reelección o ratificación de un representante legal, o de un revisor fiscal, debe hacerse en forma pronta una Junta de Socios para elegir las personas que ocupen esos cargos. La actual situación de "bloqueo" que CATAY ejerce en este momento en la junta de STO, en interés de ALBERTO MARULANDA POSADA su socio controlante y no de STO, acredita el derecho de ITACA a pedir esta medida.

Además, según los artículos 372 y 460 del Código de Comercio, durante la liquidación, los socios serán convocados en las épocas, forma y términos prescritos para las reuniones de la Junta de Socios. Y en tales reuniones, se observarán las reglas establecidas en el contrato social o, en su defecto, las que se prevén en este código para el funcionamiento y decisiones de la asamblea general, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 248 (249)[1].

ITACA Ltda., está, pues, legitimada para pedir todas estas medidas cautelares.

b.-Vulneración del derecho. ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, vulneró el derecho de ITACA a negociar sus cuotas sociales cuando se negó a transmitir a CATAY la oferta que ITACA hizo a CATAY para cederle SUS cuotas sociales en STO. (Artículos 362 y 363 del Código de Comercio) y cuando, habiendo hecho imposible la aceptación de CATAY a la oferta de ÍTACA, se negó a concluir el negocio que, con su autorización, su hijo ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR había orientado hacia INGETEC I&D, -sociedad controlada por ALBERTO MARULANDA POSADA- y que había convenido con ÍTACA para el evento de que CATAY no aceptara la oferta.

Además, ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, había vulnerado las normas que le imponen obligaciones respecto a conflictos de intereses. En efecto, como puede verificarse "*prima faciæ*" en las actas y documentos anexos a esta demanda, ALBERTO MARULANDA POSADA procedió a celebrar los contratos de alquiler de bienes sociales con sociedades que él controla, sin haber reconocido ante la Junta la situación de conflicto de interés en la que se encontraba, y sin haber recibido dispensa. Él tiene un interés directo en las sociedades que fueron arrendatarias, y en particular en INGETEC S.A, bien como representante legal, como controlante de ellas, o como socio, o por varias de estas razones. Las pruebas obran como anexos a la demanda.

Y cuando la vigencia de los contratos de arrendamiento terminó, porque la Junta de STO no obtuvo mayoría que permitiera renovarlos, ALBERTO MARULANDA POSADA violó el artículo 23 de la ley 222, pues fue negligente en buscar otros inquilinos o en buscar la aprobación de la Junta para contratar con los mismos, y, en general, para evitar que la relación jurídica existente entre quienes tenían esos bienes y la sociedad STO se desarrollara en una situación de informalidad, o para buscar otros inquilinos.

Estas vulneraciones del derecho de ITACA han sido posibles porque ALBERTO MARULANDA POSADA no solo actúa como representante legal de STO, sino que, además, tiene el control sobre CATAY, gracias a sus aportes personales al capital de la sociedad, y a los de la sociedad MARULESCO SAS, que él representa y que también controla. Gracias al control de ALBERTO MARULANDA POSADA sobre CATAY, esta

[1] Se ha entendido que la referencia legal debió ser al artículo 248 del Código.

sociedad tolera en las Juntas de socios de STO las conductas irregulares de ALBERTO MARULANDA POSADA, o bloquea la posibilidad de que las Juntas lleguen a decisiones contrarias a los intereses de ALBERTO MARULANDA POSADA, aunque estos sean contrarios a la ley, a los intereses de STO y a los derechos de ITACA.

La "primera" y la "segunda" medida cautelar que se solicitan son necesarias para evitar que ALBERTO MARULANDA POSADA, desde CATAY o con su apoyo, continúe usando su calidad de representante legal de STO para crear las condiciones en las cuáles él viola el régimen de conflictos de interés en perjuicio de STO y de ITACA.

Las medidas cautelares que se piden no imponen obligación ninguna patrimonial a CATAY, pero impiden que ALBERTO MARULANDA POSADA incida en aquellas decisiones de CATAY que permitirían que él siguiera violando la ley en STO.

Se trata, pues, con estas respetuosas solicitudes de "medidas cautelares", de "evitar las consecuencias" de la vulneración de los derechos objeto del litigio, de hacer cesar las consecuencias ya causadas, y de asegurar la efectividad de las pretensiones de la demanda, como autoriza el artículo 590 de la ley 1564 de 2012.

c.-Apariencia de buen derecho.- ALBERTO MARULANDA POSADA, a través de su control sobre CATAY, ha bloqueado la Junta de STO para que ésta sociedad no pueda exigirle responsabilidad por su administración; y para que, en las Juntas de STO, CATAY condone los contratos de arrendamiento que ALBERTO MARULANDA POSADA, sin aprobación de la Junta de STO, ha celebrado con sociedades que él controla. Su control sobre CATAY dificultad, igualmente, la posibilidad de que ITACA encuentre un comprador para sus cuotas de interés social en STO. Por esto son necesarias las medidas cautelares pedidas, y para ello aportamos con la demanda abundantes pruebas documentales en las que consta que:

> (i) ALBERTO MARULANDA POSADA, siendo representante legal, al mismo tiempo, de STO, de INGETEC SAS y de INGETEC I&D, por escrito, autorizó a su hijo ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, que luego fue representante legal de INGETEC I&D para adelantar con ITACA negociaciones relacionadas con la eventual cesión de las cuotas de interés social de ITACA en STO;
>
> (ii) ALBERTO MARULANDA POSADA es socio de CATAY con un porcentaje del 55%, y que, además, otra sociedad, MARULESCO SAS, que ALBERTO MARULANDA POSADA controla, es socia de CATAY con un porcentaje del 8,2%;
>
> (iii) de parte de ITACA, las negociaciones se adelantaron exigiendo que fueran comunicadas a CATAY para que esta sociedad, si lo deseaba, adquiriera esas cuotas;

(iv) ALBERTO MARULANDA POSADA procuró que la decisión de CATAY quedara al arbitrio del representante legal de CATAY y no de la Junta de Socios de CATAY, con lo cual los socios minoritarios de esta sociedad no podrían conocer qué valor se estaba dando a las cuotas sociales en STO;

(v) ALBERTO MARULANDA POSADA se negó a dar traslado de la oferta de ITACA a CATAY, con el argumento de que la oferta no debía revelar la negociación eventual que se haría con la sociedad escogida por él para recibir las cuotas sociales de ITACA si CATAY no decidía adquirirlas; y que

(vi) habiendo hecho imposible que CATAY se pronunciara sobre la oferta que ÍTACA quiso hacerle, se negó también a permitir que se celebrara el contrato que, bajo condición, había autorizado celebrar entre ÍTACA e INGETEC I&D.

Está probado, también, que, en el momento en el que ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, reclamó para sí la facultad de decidir cómo debería ÍTACA hacer a CATAY las ofertas de cesiones de sus cuotas en STO, eliminó de hecho la facultad legal de ÍTACA de ceder sus cuotas ofreciéndolas como consideraba legal y conveniente ofrecerlas; impidió que CATAY se pronunciara sobre la oferta de ÍTACA y, de esa manera, hizo fallar, por su voluntad, la condición de la cual pendía el negocio entre ÍTACA e INGETEC I&D.

En este caso, también, obran en el expediente actas y otras pruebas documentales que, *prima faciæ,* revelan en forma objetiva que ALBERTO MARULANDA POSADA era representante legal de STO cuando celebró contratos de arrendamiento sobre bienes de STO con sociedades vinculadas a él y, en particular, con INGETEC S.A; que las arrendatarias eran unas sociedades con las cuales él tenía relación como socio, socio de socios, y administrador; que se abstuvo de plantear en la Junta de STO una situación de conflicto de interés al celebrar esos contratos de arrendamiento; que toleró atrasos en los pagos de los arriendos debidos por las arrendatarias controladas por él; y que la Junta nunca aprobó los contratos en referencia sino que, por el contrario, ITACA los censuró en diversas ocasiones.

De este modo, la amplia prueba documental que hemos aportado con esta demanda, demuestra, *prima faciæ,* (i) la violación de los artículos 23 de la Ley 222 en cuanto al régimen de "conflictos de interés"; (ii) la de los artículos 362 y 363 del Código de Comercio, que otorgan a los socios la facultad de negociar sus cuotas de interés social, y que obligan a los administradores de las sociedades a transmitir inmediatamente, las ofertas de cesiones de cuotas de interés social que unos socios hagan a otros; y (iii) la de los artículos 1538 y 1542 del Código Civil que obligan, a quien hace imposible de cumplir la condición de la cual depende el nacimiento de sus obligaciones, a asumir tales obligaciones, en vez de repudiarlas con razones no

demostrables. Demuestran también, sin necesidad de mayor exégesis, la violación de la norma que surge al concordar los artículos 372 y 404 del Código de Comercio pues esta última norma impedía ocultar de la Junta de socios de CATAY la negociación que se estaba haciendo, condicionalmente, entre ITACA e INGETEC I&D y que tenía que culminar con una aprobación de la Junta de STO.

De modo que, estando acreditado el carácter de administrador de STO que tenía ALBERTO MARULANDA POSADA cuando incurrió en las conductas a las que se refiere el párrafo anterior al frustrar la cesión de cuotas sociales de ÍTACA en STO; y cuando celebró los contratos de arrendamiento con INGETEC S.A. y otras sociedades dentro de su órbita de control, debe reconocerse a ITACA actora en este proceso, al menos la "apariencia de buen derecho" para sostener las pretensiones de la demanda y esta petición de "medidas cautelares", sin perjuicio, por supuesto, de lo que se alegue y pruebe en el proceso, y de lo que el Sr. Juez, finalmente, decida en relación con las pretensiones.

d.-Necesidad y proporcionalidad de las medidas. Las "medidas cautelares" impetradas **no tienen carácter económico alguno**, ni tienden a limitar a ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA o a CATAY el uso de sus derechos patrimoniales.

La "primera" y la "segunda" medida cautelar no implican órdenes de ninguna clase a CATAY; implican sí órdenes a ALBERTO MARULANDA POSADA, que él puede cumplir en CATAY gracias al control que ejerce sobre esa sociedad. Las medidas que se piden se enfocan, de modo explícito, a conseguir que, temporalmente, mientras dura el proceso, el control que ALBERTO MARULANDA POSADA tiene sobre CATAY Ltda no se use en las Juntas de STO para facilitar a ALBERTO MARULANDA POSADA realizar actos o incurrir en omisiones con bienes de STO, o con las facultades que tiene como representante legal de STO, violando el régimen de conflicto de intereses, en perjuicio de STO o de ITACA.

En vista de la disolución de STO, por expiración del término de vigencia pactado, es también urgente la "tercera" medida cautelar que se pide y que tiende a conseguir que la sociedad STO disponga de administrador y revisor fiscal que representen la voluntad y el interés común de los socios ITACA y CATAY y no, solamente, la inercia ilegal de quienes continúan ocupando los dos primeros cargos gracias al abuso que CATAY -controlada por ALBERTO MARULANDA POSADA- hace de su capacidad de bloquear en la Junta de STO otras alternativas.

Para precaver que se tomen las decisiones ilegales y abusivas, y para impedir que se hagan ilusorios los derechos procesales de ITACA, las medidas provisionales que ella solicita guardan proporcionalidad con el perjuicio que se quiere evitar. Las medidas se limitan a conseguir que el administrador ALBERTO MARULANDA POSADA no pueda ejercer sus derechos sociales cuando tenga propósitos claramente

ilegítimos, es decir, bloqueando desde CATAY los instrumentos de los que ITACA debería disponer para proteger sus derechos contra la celebración de contratos por ALBERTO MARULANDA POSADA en conflicto de interés, y contra la frustración de contratos que no se ajusten a los intereses de ALBERTO MARULANDA POSADA, y contra el bloqueo a decisiones de STO tendientes a exigir a ALBERTO MARULANDA POSADA responsabilidad por sus actos como administrador de STO..

Por supuesto, la "primera" y la "segunda" medida cautelar pedidas buscan, finalmente, como la "tercera", facilitar un acuerdo en la Junta de STO para designar una persona, distinta de ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA como representante legal de STO. Pero ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA nunca ha tenido derecho a perpetuarse en el cargo de representante legal de STO contra la voluntad de un socio que representa el 50% del capital social. No puede, pues, alegar que las medidas cautelares que tienen ese propósito le resultan gravosas o desproporcionadas.

Finalmente, en relación con la "tercera" medida cautelar que se impetra, si no se remueve al señor ALBERTO MARULANDA POSADA como representante legal de STO, su continuidad en el cargo resultaría ser un riesgo para los intereses de STO y sus socios, dadas las experiencias y las razones que se exponen en la demanda.

Sin estas medidas cautelares, el administrador ALBERTO MARULANDA POSADA puede obtener, con sus cuotas de interés social y las de sus hijos y las sociedades que controla, por lo menos el 51% de los votos en las Juntas de CATAY, para dar instrucciones al representante legal de CATAY y bloquear de esa manera las decisiones que serían necesarias en las Juntas de socios de STO para impedir que ALBERTO MARULANDA POSADA continúe violando el régimen de conflictos de interés y para conseguir que la sociedad STO tenga administradores que representen el interés común de los socios.

Si el señor Juez no ampara el derecho de ITACA en este proceso se producirá una situación de parálisis en STO y CATAY, multiplicando litigios en forma innecesaria, y poniendo en riesgo el valor de los bienes de STO y de sus socios. Uno de los objetivos de este proceso, y de las medidas cautelares que se impetran, es que, ante la inminente liquidación de STO, se logren garantías para todos los socios, y se impida la inevitable desvalorización de sus bienes que resultaría como consecuencia de una cascada de litigios.

6. HECHOS QUE SUSTENTAN LA DEMANDA

A continuación, presento los hechos que sustentan las pretensiones de esta demanda, separados por subcapítulos. El relato de los hechos se orienta, en el **primer capítulo (5.1)**, a sustentar declaraciones según las cuales ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante de STO, sociedad en la cual ÍTACA es

socia, tiene control sobre varias sociedades que, o bien ocupan bienes en los cuales ÍTACA es también propietario, o bien están en condiciones de paridad con ÍTACA en otras sociedades, o bien tuvieron acuerdos de adquisición de acciones de ÍTACA, lo cual creó las condiciones de hecho para que él violara sus deberes como administrador de STO, y creara las condiciones en las cuales ÍTACA puede pedir que se declare su responsabilidad como administrador en los términos del último inciso del artículo 25 de la Ley 222.

En el **segundo capítulo (5.2)** los hechos relatan ciertas conductas de ALBERTO MARULANDA, relacionadas con contratos en los que tiene conflictos de interés, y que dan sustento a la pretensión de responsabilidad contra él, como administrador de la sociedad STO, en la cual ÍTACA es socia, en los términos del último inciso del artículo 25 de la Ley 222.

En el **tercer capítulo (5.3)** los hechos relatan otras conductas de ALBERTO MARULANDA, relacionadas con conductas suyas orientadas a impedir la celebración de un contrato de venta de acciones de ÍTACA, que él consideraba contrario a sus intereses. De nuevo, estas otras conductas también fundamentan la petición de declaración de responsabilidad contra él, fundada en el último inciso del artículo 25 de la Ley 222.

El **cuarto capítulo (5.4)** de los hechos tiene el propósito de mostrar como la Sociedad Catay abusó de su derecho en una votación de Junta de Socios en la que participaba ÍTACA, y de ese modo lesionó los derechos de ésta. Las pretensiones de nulidad a las que sirven de sustento estos hechos **no** se relacionan entonces con el proceso especial que regula el artículo 382 del CGP y que se refiere a la "Impugnación de actos de Asambleas, juntas directivas o de socios". En cambio, los hechos del cuarto capítulo **sí** tienen el propósito de sustentar las pretensiones de nulidad de **votos y determinaciones por abuso del derecho**, que contiene la demanda, y que se fundan en la acción derivada del artículo 830 del Código de Comercio 830 y del literal "e" del numeral 5 del artículo 24 del CGP que, por disposición del Parágrafo 1 del numeral 6 del mismo artículo, corresponde también, a prevención, al juez civil del Circuito, según el artículo 20, numeral 4, del CGP. El precedente remoto de esta acción es el artículo 43 de la Ley 1258.

5.1. STO; Y LA SUBORDINACIÓN DE CATAY Y OTRAS EMPRESAS A LA VOLUNTAD DE ALBERTO MARULANDA POSADA.

5.1.1. La sociedad SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA (STO), hoy en liquidación, se creó en el año 1965 como SERVICIOS TÉCNICOS INGETEC LIMITADA, mediante escritura pública No. 5985 del 21 de diciembre de 1965, otorgada en la Notaría Séptima de Bogotá, y registrada el 29 de diciembre de 1969. (Anexo 5). Sus actuales

estatutos constan, principalmente, en la escritura 3765 de 26 de noviembre de 1976, pasada ante el Notario 2 del Circuito de Bogotá; tienen 5 reformas posteriores relacionadas solo con el plazo de existencia de la sociedad, el nombre de la sociedad y asuntos que no tienen incidencia en las pretensiones de la demanda. (Anexo 65)

5.1.2. El término de duración de STO expiró el 31 de diciembre de 2020, según consta en el Acta No. 67 de la Junta de Socios, protocolizada mediante la escritura No. 1906 del 28 de mayo del 2008, otorgada en la Notaría Treinta y Uno de Bogotá. (Anexo 5)

5.1.3. Según el certificado de existencia y representación, actualmente, el capital de STO está compuesto así: (Anexo 5)

Socios	Valor	Cuotas	Porcentaje
ÍTACA LIMITADA	$320.000	3.200	50%
CATAY LTDA	$320.000	3.200	50%
Total	$640.000	6.400	100%

5.1.4. El señor ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA es representante legal de STO desde el 8 de mayo de 1987, a partir del nombramiento de la Junta de Socios consignado en el Acta No. 39 del 27 de abril del mismo año. (Anexo 5)

5.1.5. ÍTACA LIMITADA, socia de STO, también en liquidación, es una sociedad domiciliada en Bogotá, representada por la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER, cuyo objeto social principal es comprar y vender bienes inmuebles y hacer inversiones en los mismos. (Anexo 1)

5.1.6. CATAY LIMITADA, socia de STO, es una sociedad domiciliada en Bogotá, cuyo objeto principal es comprar y vender bienes inmuebles y hacer inversiones en los mismos, y actualmente está representada por GUSTAVO CARRASCO MERINO en el cargo de Gerente; su suplente es el señor FABIO ANÍBAL AMAYA REY. (Anexo 4) ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, hijo de ALBERTO MARULANDA POSADA, fue representante legal de CATAY LIMITADA desde el 30 de mayo de 2013 hasta el 5 de abril de 2019. (Anexo 8)

5.1.7. ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA, en términos del artículo 359 del Código de Comercio, ha tenido y tiene poder de decisión y control de la Junta de Socios de CATAY LIMITADA, según se observa en las votaciones en la asamblea, gracias a su propio aporte de capital (55.5%), y al aporte de MARULESCO SAS (8.2%) en la que también es

socio con capacidad mayoritaria de voto y decisión. Según el certificado de existencia y representación legal (anexo 4) la composición del capital de CATAY es la siguiente:

Socios	Cuotas	Porcentaje
CARLOS SEBASTIÁN OSPINA DELGADO	446	6,37%
DILIA MARGARITA CAMACHO GARCÍA	496	7%
FRANCISCO JOSE CAMACHO GARCIA	497	7,1%
FABIO ANÍBAL AMAYA REY	597	8,5%
ALBERTO MARULANDA POSADA	3.890	55,5%
DILIA GARCIA DE CAMACHO	497	7,1%
MARULESCO SAS	577	8,2

5.1.8. Actualmente, la sociedad MARULESCO S.A.S. tiene como representante legal al señor ALBERTO MARULANDA POSADA, y como representante legal suplente a la señora MARÍA CLAUDIA ESCOBAR DE MARULANDA. (Anexo 9). ALBERTO MARULANDA POSADA es el esposo de la señora MARÍA CLAUDIA ESCOBAR DE MARULANDA, y ambos son padres de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR y de CAMILO MARULANDA ESCOBAR.

5.1.9. La señora MARIA CLAUDIA ESCOBAR DE MARULANDA tiene, con su esposo, el 55% de los votos de la sociedad MARULANDA ESCOBAR SAS, en la que sus hijos ANDRÉS y CAMILO, tienen el 45% restante del derecho a voto. (Anexo 11)

5.1.10. En CATAY LIMITADA, ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA cuenta, usualmente, además de sus votos y los de MARULESCO SAS, con el voto del señor FABIO ANÍBAL AMAYA REY; y, por el contrario, usualmente votan en forma distinta a la suya cuatro **socios minoritarios**, a saber: los 2 socios Camacho García, la señora García de Camacho y el vocero de la sucesión de CARLOS SEBASTIÁN OSPINA DELGADO (q.e.p.d.). Esto se evidenció, por ejemplo, en las últimas dos juntas de socios, celebradas el 23 de marzo de 2018 y el 7 de marzo de 2019, y en las Actas No. 58 y 59 respectivas. (Anexos 26 y 27)

5.1.11. En el Acta No. 58 de la Junta de Socios de CATAY celebrada 23 de marzo de 2018, se observan las diferencias entre los socios mayoritarios (ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA, AMAYA REY y MARULESCO SAS) y los minoritarios. Allí, la representante de la sucesión de CARLOS SEBASTIÁN OSPINA DELGADO (q.e.p.d.) y el señor FRANCISCO CAMACHO GARCÍA, en representación de los demás socios CAMACHO, manifestaron que no estaban de acuerdo en aumentar la vigencia de la sociedad, puesto que el interés común bajo el cual se participaba en la sociedad había dejó de existir. (Anexo 26)

5.1.12. Por su parte, FABIO ANÍBAL AMAYA REY, socio de CATAY, ha tenido una constante y cercana relación con las empresas INGETEC y con ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA. En INGETEC I&D ha tenido diferentes cargos, como administrador desde su constitución en 2008, y a la fecha es el segundo suplente del gerente (en reemplazo de ALBERTO MARULANDA POSADA); en INGETEC SAS actualmente ocupa el cargo de primer suplente del gerente; y en INGETEC G&S es el segundo suplente del gerente. Además, su hijo, ANDRÉS AMAYA VILLANEDA, es accionista de las sociedades INGETEC SAS, INGETEC G&S e INGETEC I&D.

5.1.13. La sociedad MARULESCO S.A.S. con NIT 900.501.556-8, es una sociedad comercial, fue constituida mediante Escritura Publica No. 3634 de la Notaría 23 de Bogotá D.C., el 19 de diciembre de 2011, e inscrita el 18 de enero de 2012. La sociedad se constituyó como sociedad en comandita, y en diciembre de 2017 se transformó en SAS. Actualmente, la sociedad MARULESCO S.A.S. tiene como representante legal al señor ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA, y como representante legal suplente a su esposa, la señora MARÍA CLAUDIA ESCOBAR DE MARULANDA. (Anexo 9)

5.1.14. A diciembre de 2019, la sociedad MARULESCO S.A.S. tenía la siguiente composición accionaria:

ACCIONISTA	ACCIONES	TIPO DE ACCIÓN	% ACCIONES	% DERECHO A VOTO
ALBERTO MARULANDA POSADA	15	A	1,5%	55%
MARÍA CLAUDIA ESCOBAR DE MARULANDA	15	A	1,5%	
ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR	135	B	13,5%	45%
CAMILO MARULANDA ESCOBAR	135	B	13,5%	
MARULANDA ESCOBAR SAS	700	B	70%	

De la composición accionaria de esta sociedad debe resaltarse que existen dos tipos de acciones (tipo A y B), las cuales otorgan diferentes derechos de voto. Por ello, a pesar de que el señor ALBERTO MARULANDA POSADA y su esposa poseen solo el 3% de la participación accionaría, al tener acciones tipo A, estas les otorgan el 55% de derechos de voto. (Anexo 10 y 11). En sus asambleas

ALBERTO MARULANDA POSADA ha tenido poder de decisión, con el concurso de los demás socios.

5.1.15. Además, la sociedad MARULANDA ESCOBAR S.A.S., con NIT 860.041.952-2, que tiene la mayor participación accionaria en MARULESCO SAS, tiene la siguiente composición accionaría:

ACCIONISTA	ACCIONES	TIPO DE ACCIÓN	% ACCIONES	% DERECHO A VOTO
ALBERTO MARULANDA POSADA	5	A	5%	55%
MARÍA CLAUDIA ESCOBAR DE MARULANDA	5	A	5%	
ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR	45	B	45%	45%
CAMILO MARULANDA ESCOBAR	45	B	45%	

En esta sociedad, ALBERTO MARULANDA POSADA y su esposa también tienen una participación accionaria muy pequeña, pero al poseer acciones tipo A, poseen el 55% de los derechos de voto. (Anexo 12). Por lo anterior, él, con el concurso de su esposa y de sus hijos, ha tenido el poder decisorio en las asambleas sociales.

5.1.16. El señor ALBERTO MARULANDA POSADA es representante legal de la sociedad MARULESCO S.A.S., posee junto a su esposa más de la mitad de los derechos de voto, pues cada uno tiene el 27,5% de dichos derechos; también posee junto a su esposa la mayor cantidad de votos en la asamblea de accionistas de la sociedad MARULANDA ESCOBAR S.AS., el mayor accionista de MARULESCO S.A.S. Todo lo anterior le ha dado la capacidad de controlar las decisiones de MARULESCO S.A.S. con el concurso de los demás accionistas; y las de CATAY LTDA.

5.1.17. La sociedad INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS SAS (sigla INGETEC SAS), con NIT 860.001.986-1 es una sociedad comercial, cuyo gerente principal y representante legal es también ALBERTO MARULANDA POSADA. (El 26 de diciembre de 2018 se transformó de sociedad anónima a SAS) (Anexo 6)

5.1.18. La sociedad INGETEC SAS tenía, a diciembre de 2019, la siguiente composición accionaria:

ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE
MARULESCO SAS	240.000	56%
ANJUNI SAS	78.800	19,7%
ACP3 SAS	19.200	4,8%
HORCAS SAS	19.200	4,8%
Daniel Rebolledo D.	16.000	4,0%
LAURASIA SAS	19.400	4,85%
FEJAGAL SAS	19.400	4,85%
Andrés Amaya Villaneda	4.000	1%

De este modo, la sociedad MARULESCO S.A.S., representada por el señor ALBERTO MARULANDA POSADA, tiene el 56% de las acciones de INGETEC SAS. Así se observa en el Acta No. 45 de la Asamblea de Accionistas del 23 de enero de 2020. (Anexo 13). Por el control sobre MARULESCO, ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA ha tenido control y poder decisorio en las asambleas de INGETEC SAS.

5.1.19. La sociedad INGETEC INGENIERÍA & DISEÑO S.A.S. (sigla INGETEC I&D S.A.S), con NIT 900.206.480-2, (el 26 de diciembre de 2018 se transformó de sociedad anónima a SAS), tiene como gerente general y representante legal al señor ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, hijo de ALBERTO MARULANDA POSADA (Anexo 6)

5.1.20. La sociedad INGETEC I&D tenía, a diciembre de 2019, la siguiente composición accionaria:

ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE
MARULESCO SAS	4.478	56%
ANJUNI SAS	1.580	19,8%
ACP3 SAS	384	4,8%
HORCAS SAS	384	4,8%
DANIEL REBOLLEDO D.	321	4,0%
LAURASIA SAS	384	4,8%
FEJAGAL SAS	384	4,8%
ANDRÉS AMAYA VILLANEDA	80	1%

Po lo anterior, se observa que la composición accionaria de INGETEC S.A.S es igual a la de INGETEC I&D, ya que ambas tienen los mismos accionistas con el mismo porcentaje de participación. Por ello, la

sociedad MARULESCO S.A.S., representada por ALBERTO MARULANDA POSADA, también tiene la mayoría accionaria en INGETEC SAS, con el del 56% de acciones. Así se observa en el Acta No. 256 de la Asamblea de Accionistas celebrada el 12 de diciembre de 2019. (Anexo 15). Por su control sobre MARULESCO, ALBERTO MARULANDA POSADA ha tenido control y poder decisorio en las asambleas de INGETEC I&D SAS.

5.1.21. Desde la constitución de INGETEC I&D SA (ahora INGETEC I&D SAS) hasta diciembre de 2019, ALBERTO MARULANDA POSADA fue administrador de esta sociedad. En efecto, fue gerente principal de INGETEC I&D desde el año 2008 hasta diciembre de 2010, cuando fue nombrado en ese cargo su hijo, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR. Y luego, desde diciembre de 2010 hasta el diciembre de 2019, tuvo el cargo de segundo suplente del gerente. (Anexo 15)

5.1.22. La sociedad INGETEC GERENCIA Y SUPERVISIÓN S.A.S (sigla INGETEC G&S) con NIT 900.206.483, tiene como gerente general y representante legal al señor CAMILO MARULANDA ESCOBAR, hijo de ALBERTO MARULANDA POSADA. (Anexo 16)

5.1.23. La sociedad INGETEC G&S SAS tenía a diciembre de 2019 la siguiente composición accionaría

ACCIONISTA	**ACCIONES**	**PORCENTAJE**
INGETEC SAS	4.157	52%
MARULESCO SAS	2.159	27%
ANJUNI SAS	759	9,5%
ACP3 SAS	200	2,5%
HORCAS SAS	200	2,5%
DANIEL REBOLLEDO D.	160	2%
LAURASIA SAS	161	2%
FEJAGAL SAS	161	2%
ANDRÉS AMAYA VILLANEDA	38	0,5%

En INGETEC G&S las sociedades INGETEC S.A.S. y MARULESCO S.A.S., ambas representadas por ALBERTO MARULANDA POSADA, tienen una participación del 52% y 27% respectivamente. Así se observa en el Acta No. 45 de la Asamblea de Accionistas del 21 de enero de 2020. (Anexo 17). Por su control sobre INGETEC SAS y sobre MARULESCO SAS, ALBERTO MARULANDA POSADA ha tenido control y poder decisorio en las asambleas de INGETEC G&S SAS.

5.1.24. En síntesis, a partir de los hechos descritos atrás, ALBERTO MARULANDA POSADA, ha tenido y tiene control y poder de decisión sobre CATAY LIMITADA, INGETEC S.A.S., INGETEC I&D e INGETEC G&S, con los votos que le confieren sus propias acciones o los de las acciones de la sociedad MARULESCO S.A.S., de la cual es representante legal sin limitaciones. Y con el concurso de su esposa y de sus dos hijos ha tenido mayorías superiores al 50% para tomar las decisiones de las asambleas de las sociedades MARULESCO SAS y MARULANDA ESCOBAR SAS.

5.2. ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA, POR RAZÓN DE LOS CONTRATOS DE ARRIENDO CELEBRADOS EN CONDICIONES DE CONFLICTO DE INTERÉS SOBRE UN EDIFICIO QUE TIENE EN COMÚN CON STO, HA LLEVADO A QUE ÍTACA NO TENGA INTERÉS EN CONSERVAR SU INVERSIÓN EN STO.

5.2.1. Desde 1988, la sociedad STO es propietaria del 66.667%, en común y proindiviso con INGETEC I&D, de un edificio ("Edificio San Martin"), situado en la calle 30 con carrera 6 de Bogotá. El edificio está compuesto por tres partes, físicamente interconectadas y difíciles de separar (Anexo 27), que se identifican por medio de tres folios de matrículas inmobiliarias, a saber, 50C-1236643, 50C-255233 y 50C-255232, y se describen así:

a) El inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. **50C-1236643**, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la Calle 30ª No. 6-10 (Calle 30ª No. 5-20) del edificio San Martín, Bloque C, Unidad Privativa No. 2. (Anexo 18)

b) El inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. **50C-255233,** ubicado en la ciudad de Bogotá, en la calle 30ª No. 6-22, local 305. Este inmueble hace parte del edificio San Martín, Bloque B. (Anexo 18)

c) El inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria **No. 50C-255232,** ubicado en la ciudad de Bogotá, en la calle 30ª No. 6-22, garaje 205. (Anexo 20)

5.2.2. INGETEC I&D S.A.S posee el 33% del edificio San Martín, a través de un patrimonio autónomo denominado PARQUEO INGETEC.

5.2.3. Desde julio de 2008, STO ha suscrito diferentes contratos de arrendamiento sobre su parte en el edificio "San Martín", con la sociedad INGETEC I&D y con la sociedad INGETEC G&S, representadas también por ALBERTO MARULANDA POSADA o por CAMILO MARULANDA ESCOBAR (hijo de ALBERTO MARULANDA POSADA).

Hasta junio de 2020 las varias empresas INGETEC tenían buena parte de sus oficinas en el edificio "San Martin".

5.2.4. Los contratos se han renovado en varias ocasiones; y a veces con autorización de la Junta, hasta antes de septiembre de 2016.

5.2.5. El 30 de septiembre de 2016, ALBERTO MARULANDA POSADA, tanto en calidad de representante legal de la sociedad STO (arrendador) como de representante legal de la sociedad INGETEC S.A. (ahora INGETEC SAS) (arrendatario), suscribió un contrato de arrendamiento de las 2/3 partes de la Unidad Privativa No. 2 del Edificio San Martín, Bloque C.

5.2.6. No hubo información ni consulta previa a la Junta para obtener la autorización necesaria para celebrar el contrato al que se refiere el hecho anterior, a pesar del conflicto de intereses. Según los estados financieros de STO, las arrendatarias, vinculadas a ALBERTO MARULANDA POSADA, no pagaban a tiempo los cánones y él, como representante legal de STO, permitía la demora, sin consultar con la Junta, con un pago de intereses. (Anexo 21)

5.2.7. En la reunión de la Junta de Socios de STO del 21 de marzo de 2017, que consta en el Acta No. 76, la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER, en representación de ÍTACA LTDA, conoció por primera vez las condiciones del contrato de arrendamiento, y puso de presente la existencia de un conflicto de intereses por parte del representante legal de STO. El representante de CATAY, ANDRES MARULANDA ESCOBAR, en la Junta, no hizo observación alguna. El acta dice:

> "La señora María Isabel Ospina de Wiesner preguntó por las razones por las cuales el representante legal hizo dicho cambio, dado que ese era un ejemplo del conflicto de interés que existe entre el representante legal y los arrendatarios del único activo de la sociedad." (Anexo 22)

5.2.8. Puesto que ni el representante legal de STO, ALBERTO MARULANDA POSADA, ni el presidente de la Junta, ANDRES MARULANDA ESCOBAR, representante de CATAY en la Junta, ni la abogada de INGETEC S.A., ANA MILENA LOPERA ROZO, que estaba presente, informaron a la Junta los requisitos especiales requeridos para superar una situación de conflicto de interés, la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER, que no es abogada, se limitó a sugerir unos ajustes en el contrato que, tras discusión, fueron aprobados. Con la misma fecha de la Junta, STO e INGETEC S.A. (ahora INGETEC SAS) celebraron el Otrosí No. 1 de fecha

21 de marzo de 2017, al contrato de arrendamiento suscrito el 30 de septiembre de 2016. (Anexo 23)

5.2.9. El contrato de arrendamiento suscrito el 30 de septiembre de 2016 por el señor ALBERTO MARULANDA POSADA, representando ambas partes sin la autorización de la junta de STO, ha sido renovado automáticamente por ALBERTO MARULANDA POSADA hasta la fecha de presentación de esta demanda. Así consta en los informes de gestión del representante legal de los años 2018 y 2019 que se encuentran en las actas de las juntas de socios No. 78 y 79.

5.2.10. En la Junta de Socios de STO celebrada el 23 de marzo de 2018, la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER, como representante de ÍTACA, manifestó su desacuerdo con la gestión de ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA como Gerente de STO y la existencia del conflicto de intereses en el contrato de arrendamiento que se ejecuta. Como ejemplo se refirió a la tolerancia en los retrasos de los cánones y a las bajas tasas de interés que pagaba el arrendatario al retrasarse en los pagos. Es por ello que en el Acta No. 77 quedó la siguiente constancia:

> "La Señora María Isabel O. de Wiesner manifestó su desacuerdo con la gestión del señor (…). En su opinión el señor Marulanda Posada no defiende los intereses de la sociedad y toma decisiones que reflejan un conflicto de interés entre sus obligaciones y responsabilidades como representante legal de STO limitada y sus obligaciones y responsabilidades como empleado, gerente, socio o ex socio (no conozco con certeza la relación que tiene) [original del acta] de Ingetec S.A. Un análisis anual de su gestión y de los estados financieros de STO Limitada muestran como a través de los años las decisiones tomadas han beneficiado a Ingetec S.A. y a sus socios. Como ejemplo, ha pagado anualmente los arriendos pagando una tasa de interés ajustada muy distinta a lo que un banco cobraría por un préstamo de dichas características." (Anexo 24)

5.2.11. Igualmente, la señora MARÍA ISABEL O. WIESNER, actuando en representación de ÍTACA LIMITADA, manifestó en la Junta Ordinaria de Socios de STO del 23 de marzo de 2018 que

> "se han pagado anualmente los arriendos pagando una tasa de interés ajustada muy distinta a lo que un banco cobraría por un préstamo de dichas características." Con

base en esto, señaló que "el representante legal de STO debe exigir el pago a los arrendatarios de los $844 millones dentro de 3 meses y que la tasa de interés a cobrarle a los arrendatarios debe ser una tasa comercial". (Acta No. 77 STO – Anexo 24)

5.2.12. Por su parte, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, actuando como representante de CATAY LIMITADA en la Junta Ordinaria de Socios del 23 de marzo de 2018, simplemente manifestó que la administración siempre ha estado presta a atender cualquier inquietud y que está abierta a que se planteen medidas para la tranquilidad de los socios. (Anexo 24)

5.2.13. Después, en la Junta Ordinaria de Socios de STO del 19 de marzo de 2019, el señor ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR informó sobre una renovación "automática" del contrato. La señora MARIA ISABEL O. de WIESNER, como representante de ÍTACA, manifestó la existencia del conflicto de intereses en el contrato de arrendamiento que se ejecuta y su objeción al mismo. Por eso quedó la siguiente constancia en el Acta No. 78 de dicha Junta:

"La señora María Isabel O. de Wiesner manifestó que no está de acuerdo y tiene objeciones al informe de gestión presentado por el señor Alberto Marulanda Posada, en razón al conflicto de interés con el cual él ha venido administrando la sociedad STO.

A. Inmuebles

Objeto por ilegal la renovación automática que hizo Alberto Marulanda Posada del contrato de arrendamiento suscrito con INGETEC S.A.S. a partir del 1 de Mayo de 2018, por cuanto el representante legal de STO, estando en clara situación de conflicto de interés según lo define el numeral 7 del artículo 23 de la ley 222 de 1995, no pidió autorización expresa a la Junta de Socios para la celebración de dicho contrato. De la misma manera pongo de presente que los contratos de arrendamiento que celebró el señor Alberto Marulanda Posada en calidad de arrendador y arrendatario para los años 2017-2'18, 2016-2017, 2015-2016 y 2014-2015 sobre el inmueble de STO, no contaron con aprobación de la junta de socios, causaron perjuicio a la sociedad, y son nulos. Además, manifiesto que no estoy de acuerdo con que Alberto

> Marulanda Posada pueda prorrogar el contrato de arrendamiento con INGETEC S.A.S. para el periodo mayo 2019 a mayo 2020.
>
> (…)
>
> María Isabel O. de Wiesner manifiesta que de acuerdo con el numeral 7 del artículo 23 de la ley 222 de 1995, sí es necesario tener la autorización expresa de los socios para poder celebrar esos contratos de arrendamiento y no se solicitó." (Anexo 25)

5.2.14. En la misma Junta Ordinaria de Socios de STO del 19 de marzo de 2019, MARÍA ISABEL O. de WIESNER señaló que la voluntad del socio ÍTACA es no prorrogar el contrato de arrendamiento en el mes de mayo de 2019. Así consta en la última página del Acta 78. (Anexo 25)

5.2.15. Por su parte, en la misma Junta Ordinaria de Socios de STO, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, actuando como representante legal de CATAY, defendió la gestión de su padre ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, y manifestó expresamente que no existió conflicto de interés. (página 4 del Acta 78, anexo 25)

5.2.16. Es importante resaltar que MARÍA ISABEL O. de WIESNER, en representación de CARLOS SEBASTIÁN OSPINA DELGADO (QEPD), en la Junta Ordinaria de Socios de CATAY LIMITADA, celebrada el 7 de marzo de 2019, manifestó que considera que existe un conflicto de interés en los contratos celebrados entre STO e INGETEC y que favorecen a esta última sociedad. Así consta en el Acta 59 de la Junta de Socios de CATAY. ANA MILENA LOPERA ROZO, quien aparece como directora jurídica de las sociedades INGETEC, actuó como representante de los socios ALBERTO MARULANDA POSADA y MARULESCO S.A.S. y no hizo observación alguna al respecto. (Anexo 26)

5.2.17. Dada la negativa de ÍTACA a autorizar la prórroga del contrato de arrendamiento al que nos hemos referido atrás, éste terminó su existencia conforme a derecho. Sin embargo, ALBERTO MARULANDA POSADA y la sociedad INGETEC S.A.S. siguieron ocupando la parte del inmueble que les había sido arrendada sin que ALBERTO MARULANDA POSADA hiciera alguna gestión adicional para presentar a la Junta un nuevo contrato y conseguir su aprobación, o para

conseguir un nuevo arrendatario, o para que las sociedades que ocupaban el inmueble lo desocuparan.

5.2.18. Hasta la fecha de presentación de esta demanda, ALBERTO MARULANDA POSADA y las sociedades que él controla han seguido ocupando las áreas del edificio San Martin en Bogotá que les habían sido arrendadas por STO, pese a que, por lo menos desde el año 2016, dada la posición de ÍTACA, es claro que la Junta no tuvo oportunidad formal para pronunciarse y votar sobre un conflicto de intereses explicado por el administrador como obliga la ley, ni autorizó, con la clara información requerida, la celebración de los contratos, y mucho menos su extensión, es decir, pese a la terminación del contrato según derecho.

5.2.19. ALBERTO MARULANDA POSADA, desde el año 2016, y salvo la información incompleta que dio a la Junta en 2017, no hizo alguna gestión adicional para formalizar con aprobación de la Junta un nuevo contrato, o para conseguir un nuevo arrendatario, o para que las sociedades que ocupaban el inmueble lo desocuparan. Ha habido conversaciones informales sobre este contrato entre MARÍA ISABEL O. de WIESNER y ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, pero ninguna decisión nueva de la Junta de socios de STO.

5.2.20. ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, había citado la Junta ordinaria de socios para el 31 de marzo de 2020, pero fue aplazada en forma indefinida, aunque, para esa fecha, ya existía autorización oficial para emplear medios virtuales. Finalmente, luego de varias solicitudes por parte de ÍTACA, entre esas una comunicación del 17 de junio de 2020, se programó la reunión ordinaria, pero en forma virtual, para el 2 de septiembre de 2020. (Anexos 28 y 29)

5.2.21. Al revisar los estados financieros de STO desde 2015 y hasta 2018, se comprueba que, al cierre de cada año fiscal existían cuentas por cobrar a terceros, a favor de STO, por valores que representaban casi el ingreso total anual de la sociedad, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:

AÑO	**ACTIVO CORRIENTE-CLIENTES**
2015	$423.628.158
2016	$667.627.839
2017	$884.644.999

Teniendo en cuenta que el único ingreso de STO proviene de los contratos de arrendamiento, y que del 2015 al 2017 existían cuentas por cobrar por montos entre cuatrocientos y ochocientos millones de pesos, al final de cada año fiscal, se comprueba que los arrendatarios no pagaban los arrendamientos cada mes. Por lo tanto, STO financiaba a las empresas INGETEC -controladas por ALBERTO MARULANDA POSADA- con el valor del canon mensual de arrendamiento, que debería haber ingresado **a la caja** de STO para facilitar allí otras inversiones o lograr intereses. ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA, representante legal de STO, dirigía o toleraba estaba situación irregular en favor de sus empresas arrendatarias, sin urgir el pago, sin cobrar intereses moratorios, y sin obtener garantías.

5.2.22. En relación con la cuenta por cobrar del ejercicio fiscal del 2017, por valor de $844.644.999, mediante comunicación del 8 de marzo de 2018, la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER, como representante legal de ITACA, preguntó a ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante de STO, si existían contratos de préstamos con las sociedades INGETEC G&S e INGETEC SA, ya que habían sido reportadas como las deudoras de dicho monto. Mediante comunicación del 22 de marzo de 2018, ALBERTO MARULANDA POSADA respondió que la cuenta por cobrar correspondía a deudas por concepto de los arrendamientos de los contratos de arrendamientos entre STO y dichas sociedades, por lo que no existían otro tipo de contratos o garantías sobre dichas deudas. Además, manifestó que, en la ejecución de los contratos, se conservan las políticas de manejo implantadas en STO por los representantes legales anteriores, y que ese tipo de manejo ha conducido a que se paguen intereses a la sociedad. (Anexos 63 y 64)

5.3. LA NEGOCIACIÓN DE CESIÓN DE CUOTAS DE INTERÉS SOCIAL DE ÍTACA EN STO; Y LOS OBSTÁCULOS PARA QUE LOS SOCIOS MINORITARIOS DE CATAY SE ENTERARAN DE LAS CONDICIONES DE LA CESIÓN. OBSTÁCULOS PARA IMPEDIR LA CESIÓN DE CUOTAS

5.3.1. Se resumen en este numeral los hechos que se presentarán separados y con detalles en los hechos siguientes.

Por las irregularidades en el arrendamiento de las partes de STO en el edificio SAN MARTÍN, ÍTACA decidió ceder sus cuotas en STO. ALBERTO MARULANDA POSADA, por intermedio de su hijo ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, negoció un precio para comprarlas; y luego ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR indicó que se había designado como

eventual comprador a INGETEC I&D, si CATAY no aceptaba la oferta que debería recibir según las reglas sobre "derecho de preferencia". ALBERTO MARULANDA POSADA y ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR procuraron que solo el representante legal de CATAY conociera y decidiera sobre la oferta, sin que los socios minoritarios de CATAY tuvieran noticia de ella, lo que generó diferencias con ÍTACA, que afirma que la oferta debe ser conocida por la Junta de CATAY, y no solo por el representante legal de esta sociedad. Finalmente, ALBERTO MARULANDA POSADA, obrando como representante legal de STO, y con el argumento de que la oferta de cesión de cuotas a CATAY no debería incluir el contrato condicional acordado con INGETEC I&D, se opone a dar traslado a CATAY de la oferta de ÍTACA, dejando sin aplicar la orden de traslado "inmediato" que contiene el artículo 363 del Código de Comercio. ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, su vocero en la negociación, se negó a seguir con el negocio pactado en lo esencial, alegando, en contravía del artículo 863 del Código de Comercio, que el negocio estaba condicionado a conseguir financiación bancaria.

5.3.2. A inicios del 2019, por sugerencia del señor ALBERTO MARULANDA POSADA, cuando era representante legal tanto de STO como de INGETEC SAS y de INGETEC I&D, la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER, en vista de que sus objeciones más importantes a los contratos de arrendamiento no eran atendidas, y de que ALBERTO MARULANDA POSADA controla a CATAY, no tuvo alternativa a la de iniciar conversaciones con ALBERTO MARULANDA POSADA, en nombre de ÍTACA y en interés de la sucesión de CARLOS S. OSPINA DELGADO (QEPD), para ceder las cuotas de interés social que ÍTACA posee en STO, y las que la sucesión de CARLOS S. OSPINA DELGADO (QEPD) posee en CATAY.

5.3.3. ALBERTO MARULANDA POSADA, en conversaciones entre él y su hijo, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, con MARÍA ISABEL O. de WIESNER, le indicó a ella que el eventual precio para la compra de los derechos sociales de ÍTACA en STO debería ser similar al precio acordado unos años antes para adquirir los derechos de DIEGO LLORENTE MARTÍNEZ; y que el precio debería tener en cuenta varios problemas del edificio. Por eso, aludiendo a esas conversaciones, en carta del 28 de marzo de 2019 MARÍA ISABEL O. de WIESNER pidió a ALBERTO MARULANDA POSADA una oferta. Le informó, además, que, de otra parte, para tener un avalúo independiente y profesional, había contratado la firma Avalúos Nacionales, para cuyo avaluador, DIEGO BOTERO, pedía planos y una indicación de los problemas constructivos y legales que pudieran demeritar el valor del edificio (Anexo 67).

5.3.4. ALBERTO MARULANDA POSADA, expertísimo hombre de empresa, delegó en su hijo, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, empresario igualmente avezado, adelantar negociaciones que permitieran al arrendatario INGETEC I&D comprar las cuotas de interés social de ÍTACA en STO. Esto consta en la carta que envió ALBERTO MARULANDA POSADA, firmando como representante de STO, a ÍTACA el 29 de marzo de 2019, en la que señaló

> La propuesta de compra sobre el porcentaje de copropiedad que posee Servicios Técnicos Omicron Ltda. en los bienes raíces que componen su inversión es tema que ha sido delegado por el arrendatario INGETEC al señor Andrés Marulanda Escobar. (Anexo 30)

5.3.5. Según la había anunciado, y teniendo en cuenta que el único bien de STO es su porcentaje de propiedad en el Edificio San Martín, ÍTACA contrató la firma Avalúos Nacionales S.A. (DIEGO BOTERO), para valorar dicho Edificio, con el fin de obtener el valor de su participación en STO. CATAY, el otro socio de STO, controlado por ALBERTO MARULANDA POSADA, se había negado a colaborar con ÍTACA para realizar un avalúo comercial independiente actualizado del Edificio SAN MARTÍN, tal como consta en las Actas de Junta de Socios 76 y 77 de STO. (Anexos 22 y 24)

5.3.6. El Avalúo Comercial No. 19163/19 de 27 de mayo de 2019, elaborado por Avalúos Nacionales S.A, (Dr. DIEGO BOTERO), estableció un valor de $27,128,808,730.00 por la totalidad del edificio San Martín. Ello implica que el porcentaje de 66.667%. que posee STO tiene un valor de $ $18.085.962.916 (Anexo 31). Y que el 50% que posee ÍTACA en STO debería tener, para el negocio con INGETEC I&D SAS, un valor de $9.042.845.814:

PROPIETARIO	PORCENTAJE DE PROPIEDAD	VALOR
STO	66,667%	$18.085.962.916
ÍTACA	33,333%	$9.042.845.814
TOTAL	100%	$27.128.808.730

5.3.7. ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR no aceptó la invitación de MARÍA ISABEL O. de WIESNER a hacer un avalúo del edificio, alegando que su padre no creía en los avalúos comerciales y que el que aparecía en los estados financieros era un avalúo. Cuando conoció el avalúo, hecho

por decisión de MARÍA ISABEL O. de WIESNER, no expresó objeción alguna y dijo que lo estudiaría. La señora lo invitó a compartir los costos del avalúo y él se negó. El 5 de julio de 2019, en correo de las 4.55 pm. a MARÍA ISABEL O. de WIESNER, en el que hace referencia no explicada a sus métodos de avalúo, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR dice que el valor del 33% del edificio es $6.703´483.703. (Anexo 66)

5.3.8. MARÍA ISABEL O. de WIESNER, en respuesta del 11 de julio de 2019 a la 1:27 pm, al mensaje de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, reitera que él había considerado bien hecho el avalúo de DIEGO BOTERO; y explica que el precio no se puede definir con base en índices generales, por lo que ella había considerado necesario un avalúo hecho con datos concretos y la situación del mercado, como el de BOTERO. Añadió que si tienen necesidades de liquidez se pueden estudiar propuestas sobre plazos para facilitarles la operación. (Anexo 66)

5.3.9. Y luego ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, en mensaje del 24 de julio de 2019 a MARÍA ISABEL O. de WIESNER, dijo que el avalúo no contemplaba la realidad de las adecuaciones que habría que hacer al edificio ni las alternativas que tiene INGETEC en el sector, ni la experiencia que se obtuvo al comprar sus cuotas en STO a DIEGO LLORENTE, experto en construcción. Añadió que, para pagar el precio ofrecido requerirían acudir a endeudamiento, y que si ÍTACA podía vender a un tercero sus cuotas al precio del avalúo no se opondrían, ni a la entrega de una parte física del inmueble. Añadió que no pagaría más de lo ofrecido. (Anexo 66)

5.3.10. La señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER y ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, ambas personas familiarizadas con las prácticas empresariales, y teniendo como antecedente la autorización dada por ALBERTO MARULANDA POSADA a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, tuvieron varias reuniones de negocios, en el Gun Club de Bogotá. Es así como el 9 de octubre de 2019 acordaron que, previa aplicación de las normas sobre derecho de preferencia en interés de CATAY, si había un rechazo de CATAY, un comprador designado por los señores MARULANDA, y no identificado todavía, pagaría $7.600.000.000 por la totalidad de la participación de ÍTACA en STO. El pago de $7.600.000.000 acordado, se haría en cuatro (4) cuotas de $1.900.000.000 pagaderas cada 2.5 meses.

5.3.11. Como se observa, el precio convenido por las cuotas de ÍTACA en STO, era inferior en $1.442´981.458 a los $9.042´981.458 que correspondería al 50% de ÍTACA, según el avalúo de DIEGO BOTERO.

La diferencia entre el precio del avalúo y el precio negociado revela el poder de ALBERTO MARULANDA POSADA en la estructura societaria, pues, siendo él representante legal de STO y controlador de CATAY, sin aprobación de ALBERTO MARULANDA POSADA y CATAY resultaba muy difícil a ÍTACA conseguir un cesionario, como se comprobó más tarde.

5.3.12. Entre MARÍA ISABEL O. de WIESNER y ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR se acordó, también, entre otro precio, para ceder las cuotas de CARLOS SEBASTIÁN OSPINA DELGADO (QEPD) en CATAY. Después se encontró que habría dificultades legales para negociar los derechos de CARLOS SEBASTIÁN OSPINA DELGADO (QEPD) en CATAY, por lo que esa parte del negocio no tuvo desarrollo posterior.

5.3.13. El 10 de octubre de 2019 MARÍA ISABEL O. de WIESNER le envió a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR un correo electrónico aceptando la oferta y las condiciones de pago que se habían negociado el 9 de octubre de 2019. (Anexo 32). Aunque ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR había dicho, para negociar, que tendrían que buscar financiamiento para pagar el precio, MARÍA ISABEL O. de WIESNER le había ofrecido plazos, en tal forma que ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR los aceptó en el acuerdo del 9 de octubre de 2019, en el que no puso como condición que hubiese una financiación bancaria para la adquisición de las cuotas de ÍTACA en STO.

5.3.14. Luego del acuerdo, MARÍA ISABEL O. de WIESNER y ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR intercambiaron una serie de correos electrónicos y mensajes, y tuvieron reuniones en las que precisaron varios elementos no esenciales del negocio. En particular:

a.-Mensaje de WhatsApp del 25 de octubre de 2019, en el que ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR indica que la sociedad cesionaria de las cuotas sería INGETEC I&D SAS, como beneficiario de un fideicomiso (Anexo 33)

b.-Correo electrónico del 17 de noviembre de 2019, en el que la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER le envió a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR un borrador de contrato de cesión de cuotas y el borrador del acta de Junta de socios de STO para autorizar dicha cesión. (Anexo 34, el cual contiene el correo y los anexos) .

c.-Correo del 25 de noviembre de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR a MARÍA ISABEL O. de WIESNER, con comentarios sobre aspectos procedimentales que aparecían en los borradores de contratos que

ella le había enviado para la cesión de cuotas en CATAY y en STO.(Anexo 35)

c.-Correo del 4 de diciembre de 2019, con el cual ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, en dos archivos, devuelve los borradores de cesión de derechos en CATAY e ÍTACA, incorporando en ellos, con el apoyo de "Ana", los cambios a los que se refiere su correo del 25 de noviembre de 2019. (Anexo 35, el cual contiene el correo y los anexos)

d.-Reunión del 18 de diciembre de 2019, con ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, en la que MARÍA ISABEL O. de WIESNER pidió que, como el pago se haría a plazos, y pensando en las vigencias 2019 y 2020, el 50% de las utilidades obtenidas por STO en el tiempo trascurrido entre uno y otro de los pagos a que daría lugar la cesión de cuotas, correspondiera proporcionalmente a ÍTACA; y que también la transferencia del poder de voto de las cuotas cedidas se hiciera en la medida en que se fueran recibiendo los pagos.

e.- ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR respondió en esa reunión que, por las solicitudes de la señora MARÍA ISABEL O. DE WIESNER, y porque ella pedía, además, que se diera aviso del negocio a la Junta de CATAY, la señora MARÍA ISABEL O. DE WIESNER creaba problemas. Y que, para evitar el asunto de los plazos, como le habían aprobado un préstamo bancario, podría hacer un pago de contado, pero que el precio se reduciría a $7.300 millones, esto es, que ÍTACA debería asumir $150 millones, la mitad de los intereses que cobraría el banco. MARÍA ISABEL O. de WIESNER señaló que el préstamo no era asunto suyo y que la propuesta de compartir intereses no era justa. Y, finalmente, cuando ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR aceptó asumir $75 millones de los intereses, el precio de la cesión se redujo de $7.600 millones a $7.375 millones, que se pagarían en un solo contado.

f.-Correo del 22 de enero de 2020, en el que ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR adjuntó el borrador del contrato que se usaría para la cesión de cuotas de ÍTACA LIMITADA a INGETEC I&D en STO. En el borrador no aparece la condición de que el negocio quedaba condicionado a que hubiese un préstamo de un Banco (Anexo 36).

g.-Correo del 3 de febrero de 2020, en el que MARÍA ISABEL O. de WIESNER recordó a su destinatario, refiriéndose al borrador recibido, que era indispensable que se diera una oferta previa por parte de ÍTACA a CATAY, la cual debía quedar mencionada en el

acuerdo de cesión, entre otros aspectos de la transacción. (Anexo 37)

5.3.15. Los Estatutos Sociales de STO no contienen ninguna estipulación específica respecto al ejercicio del derecho de preferencia, pero el literal "g" de su artículo octavo atribuye a la Junta de Socios las funciones que la ley misma dispone para ese órgano social; por lo tanto, incorpora de ese modo a los estatutos las reglas de los artículos 362, 363, 364, 365 y 366 y 367 del Código de Comercio, relativas a la reforma estatutaria que debe hacer la Junta para que los socios puedan ceder sus cuotas de interés social a terceros. (Anexo 65)

5.3.16. El 7 de febrero de 2020, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR envió correo electrónico a MARÍA ISABEL O. de WIESNER, y en respuesta a la comunicación del 3 de febrero dijo:

> "En cuanto a la necesidad previa de una oferta por parte de ÍTACA a Catay, suponemos que se refieren a la de agotar el derecho de preferencia antes de la cesión que ÍTACA pudiera hacer de sus cuotas a un tercero. Sobre este requerimiento, aun cuando no está contemplado en los estatutos de STO para la cesión de cuotas, no tenemos inconveniente. No obstante, consideramos que no es necesario incluir el agotamiento de ese requisito en el contrato de cesión entre ÍTACA e INGETEC I&D." (Anexo 38)

5.3.17. Mediante correo electrónico del 3 de marzo del 2020, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR envió a MARIA ISABEL O. de WIESNER seis documentos en formato Word, en respuesta al correo del 3 de febrero de 2020, uno de los cuales contenía el texto acordado del contrato; los otros se referían a los trámites que deberían cumplirse para satisfacer requisitos legales. La señora ANA MILENA LOPERA ROZO, que actuaba como directora jurídica de las sociedades INGETEC, (quien también redacta documentos que serían firmados por el representante legal de CATAY LIMITADA), preparó, o envió los documentos (Anexo 39). Estos eran:

a. Borrador de la oferta o carta de ofrecimiento de las cuotas parte de ÍTACA con destino al representante legal de STO. (anexo 39.1)

b. Borrador de la carta a través de la cual el representante legal de STO remite a GUSTAVO CARRASCO MERINO, representante legal

de CATAY LIMITADA, la oferta de cesión de ÍTACA LIMITADA. (Anexo 39.2)

c. Borrador de la carta a través de la cual GUSTAVO CARRASCO MERINO, como representante legal de CATAY LIMITADA, informa que esa sociedad no ejercerá su derecho de preferencia sobre las cuotas partes ofrecidas. La carta no indica que la oferta habría sido llevada a la Junta de socios de CATAY. (Anexo 39.3)

d. Borrador del proyecto de acta de junta de socios de STO en la cual se acepta y formaliza la cesión, se aprueba la reforma estatutaria derivada de dicha cesión, y se nombra representante legal suplente pues, hecha la cesión, no había razón para que MARIA ISABEL O. DE WIESNER conservara dicho cargo en STO. (anexo 39.4)

e. Borrador de la carta, para ser suscrita por GUSTAVO CARRASCO MERINO, representante legal de CATAY LTDA, en la que se ratifica que CATAY no ejercerá su derecho de preferencia para adquirir las cuotas que ofrezca ÍTACA. En el borrador de la carta no se indica que la decisión haya sido aprobada por la Junta de Socios de CATAY. (Anexo 39.5)

f. Texto del eventual contrato de cesión de cuotas que se celebraría entre ÍTACA LIMITADA e INGETEC I&D S.A.S, en el cual no se menciona nada relacionado con el derecho de preferencia de CATAY LTDA, o con la condición de un financiamiento bancario. (Anexo 39.6).

5.3.18. El 9 de marzo de 2020, el señor EDUARDO A. WIESNER ACERO, en representación de su esposa MARÍA ISABEL O. de WIESNER, remitió correo electrónico a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR con tres (3) documentos preparados por el Dr. PALACIOS MEJÍA, con observaciones del Dr. PALACIOS a los seis (6) documentos que ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR había enviado por correo electrónico a MARÍA ISABEL O. DE WIESNER el 3 de marzo de 2020. (Anexo 40, el cual contiene el correo y los anexos).

5.3.19. Uno de los 3 documentos enviados a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR el 9 de marzo, tiene fecha del 6 de marzo, y es un concepto del Dr. PALACIOS MEJÍA sobre los documentos recibidos de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR. En el numeral 3 de ese concepto, relativo a la carta propuesta por ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR para que el Dr. GUSTAVO CARRASCO, representante legal de CATAY LTDA., manifieste que esta sociedad no tiene interés en adquirir las cuotas

ofrecidas, el Dr. PALACIOS MEJÍA indica que es necesario que el Dr. GUSTAVO CARRASCO consulte a la Junta de socios de CATAY LTDA, e informe que la Junta rechazó la oferta, si ese es el resultado. El Dr. PALACIOS MEJÍA advirtió que el certificado de existencia y representación legal de CATAY LIMITADA contenía una limitación a las facultades del representante legal, según la cual, para los actos cuya cuantía excediera de $500.000.000, el representante legal debería obtener autorización de la Junta de Socios; y que, por cuanto la oferta de cuotas que haría ÍTACA excede ese valor, debería ser llevada a la Junta de Socios de CATAY sin que el representante legal de esta sociedad tuviera autorización para aceptarla o rechazarla sin contar con la Junta. (El Anexo 40, contiene el correo y los anexos; y el certificado de existencia y representación legal de CATAY se allega como anexo 4)

5.3.20. Como respuesta a las observaciones del Dr. PALACIOS MEJÍA, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, en correo electrónico del 26 de marzo del 2020, remitió el concepto del abogado Dr. DANIEL GARCÍA PIÑEROS, preparado para las sociedades INGETEC. Allí, el abogado afirma que podría considerarse que el rechazo de la oferta de cesión de cuotas hace parte del ejercicio del derecho de preferencia, por lo que este acto podría calificarse como un acto "sin cuantía", y, por ende, para la cesión de cuotas no se aplicaría dicha limitación. Aclaró el Dr. GARCÍA PIÑEROS que, frente a este tema, no existe una posición categórica o legal, y que, en consecuencia, habría de atenerse a la interpretación que se quiera dar al asunto. Es importante resaltar que la abogada ANA MILENA LOPERA ROZO había indicado que el rechazo a la oferta era un acto "sin valor". (Anexo 41, el cual contiene el correo y los anexos)

5.3.21. En el correo del 26 de marzo de 2020, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR también incluyó un texto para el contrato y para los documentos enviados el 3 de marzo de 2020, ajustados por ANA MILENA LOPERA ROZO, directora jurídica de INGETEC, a algunas de las observaciones del doctor PALACIOS MEJÍA. En el correo del 26 de marzo ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR informó que se eliminaba el documento No. 5, que correspondía a la carta rechazo de la oferta de parte de CATAY LIMITADA, "teniendo en cuenta que con la manifestación efectuada de forma previa a la celebración de la junta de socios de STO es suficiente."

5.3.22. Ni en estos documentos, ni en ninguno anterior, la adquisición de las cuotas de interés social de ÍTACA en STO aparecía condicionada al financiamiento de los bancos.

5.3.23. Puesto que, en la Junta de socios de CATAY, ALBERTO MARULANDA POSADA tenía sobrada capacidad decisoria, ÍTACA consideró extraño que el correo del 26 de marzo de 2020 no explicara por qué se quería prescindir de una constancia formal del rechazo de CATAY a la oferta, para adelantar este negocio.

5.3.24. Al eliminar el documento 5, como informó ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR en el correo del 26 de marzo de 2020, era claro que la propuesta de cesión de cuotas no llegaría a la Junta de socios de CATAY, en la cual, como se relató arriba, había un grupo de socios minoritarios, usualmente opuestos a las propuestas de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR y ALBERTO MARULANDA POSADA.

5.3.25. De esta manera, con el texto del contrato que envió ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR el 26 de marzo, las partes quedaron de acuerdo en cuanto a los elementos esenciales -objeto, precio, plazo- (artículos 363 y 845 del Código de Comercio) del contrato de cesión que, eventualmente, ÍTACA e INGETEC I&D celebrarían, cuando se hubiera cumplido con el deber de ofrecer el negocio a CATAY y ésta lo hubiera rechazado. (Anexo 41.1)

5.3.26. ÍTACA aceptó los elementos esenciales -objeto, precio, plazo- (artículos 363 y 845 del Código de Comercio) del documento que envió ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR con el texto del contrato eventual, y los incorporó en la oferta que luego hizo a CATAY, el 24 de julio del 2020, con variaciones formales o sobre asuntos accidentales, como se verá adelante.

5.3.27. Ante el concepto del 26 de marzo, del Dr. GARCIA PIÑEROS, en el sentido de que no era necesario conseguir que la Junta de CATAY LTDA. se pronunciara sobre la oferta de cuotas en STO que le dirigiría ÍTACA, el 6 de abril del 2020, la señora MARIA ISABEL O. de WIESNER envió un correo a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, diciéndole que había recibido un concepto muy largo de Dr. PALACIOS MEJÍA, que expresaba su desacuerdo con los abogados ANA MILENA LOPERA y DIEGO GARCÍA PIÑEROS, y ofreció enviarlo si ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR lo pedía. Añadió, como propuesta para solucionar el impasse, que se incluyeran en el contrato unas cláusulas para indemnizar a ÍTACA, en caso de que, luego de celebrado el contrato, alguna autoridad tomara una decisión que pudiera perjudicar a ÍTACA si el representante legal de CATAY se abstenía de consultar la oferta con su Junta, en la que, como se relató

atrás, hay socios minoritarios opuestos usualmente a las propuestas de los MARULANDA. (Anexo 43).

5.3.28. ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR pidió el concepto del Dr. PALACIOS MEJÍA, en mensaje del 7 de abril, a las 10:47 A.M. El mismo 7 de abril del 2020, a través de correo electrónico, MARÍA ISABEL O. de WIESNER, respondió: "envío lo solicitado", esto es, el concepto de PALACIOS MEJÍA. En ese concepto, fechado el 3 de abril de 2020, PALACIOS MEJÍA, asesor de ÍTACA, explicó, que, según la ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado, y la enseñanza de profesores de finanzas, el derecho de CATAY LIMITADA a recibir una oferta de cesión de cuotas sociales, constituye una "opción", cuyo valor es determinable, y que, en este caso concreto, sería superior a $500 millones de pesos. Y que, por ello, para que el representante legal de CATAY pudiera manifestar un rechazo a la oferta, debería haber recibido instrucciones de la Junta de Socios, sin que pudiera decidir el asunto por sí solo. (Anexo 42)

5.3.29. Hubo silencio de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, por lo que el 17 de abril de 2020, en mensaje enviado a la 1:53 p.m. MARÍA ISABEL O. de WIESNER le preguntó a MARULANDA ESCOBAR cómo iban con el tema. Y el 21 de abril de 2020 ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR envió un mensaje al teléfono celular de MARÍA ISABEL O. de WIESNER -no a su correo electrónico- pidiendo una cita para conversar. Al responder MARÍA ISABEL O. de WIESNER, quedó acordada una cita telefónica para el miércoles 22 de abril de 2020, a las 4:30 pm.

5.3.30. Relata MARÍA ISABEL O. de WIESNER que el 22 de abril de 2020, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR y MARÍA ISABEL O. de WIESNER conversaron, y MARULANDA ESCOBAR manifestó que la preocupación del doctor PALACIOS MEJÍA era válida, por lo que proponía un acuerdo interno para transformar a STO en una SAS y no tener que acogerse al "derecho de preferencia"; y que también creía que se podía convocar a una junta de socios de CATAY LIMITADA, en la cual su padre y FABIO AMAYA (socio de CATAY) ratificarían lo decidido por GUSTAVO CARRASCO MERINO, representante legal de CATAY LIMITADA. MARÍA ISABEL O. de WIESNER le ofreció consultar con el Dr. PALACIOS MEJÍA, ante lo cual ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR aceptó.

5.3.31. El mismo 22 de abril MARÍA ISABEL O. de WIESNER y EDUARDO ALBERTO WIESNER consultan por teléfono a PALACIOS MEJÍA, quien informa que la transformación sería legal, pero que podría ser

interpretada como fraudulenta porque tendría como propósito no informar, a los socios de CATAY LTDA, de los detalles del negocio. MARÍA ISABEL O. de WIESNER le preguntó, a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, en correo electrónico, por el estado del asunto, y el 4 de mayo éste le respondió que la transformación se podría hacer en ese momento en la Cámara de Comercio de Bogotá, con un acta firmada y un pago con tarjeta de crédito. MARÍA ISABEL O. DE WIESNER le contesta el mismo día, a las 9:42, "Listo., hazlo". (Anexo 68)

5.3.32. El 14 de mayo de 2020, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR y MARIA ISABEL O. de WIESNER volvieron a hablar por teléfono. Ese mismo día MARIA ISABEL O. de WIESNER le envió a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR un correo electrónico deseándole que pudiera definir pronto la gestión que él había iniciado con un banco, sin expresar que ello fuera una condición para celebrar el negocio, y tratando otros asuntos, así: (Anexo 44)

> "Me parece importante resumir las conclusiones de nuestra conversación de hace un rato.
>
> 1. Dada la situación actual, el banco te está solicitando una mayor garantía real de parte de Ustedes para desembolsar el préstamo que ya les había aprobado. Espero puedas llegar a un acuerdo con ellos lo antes posible.
>
> 2. Transformación de la sociedad STO de limitada a SAS- Tu propusiste esto como solución al tema legal que encontró Hugo Palacios Mejía. Sugiero seguir adelante con esto pues hay que tener todo listo para lograr la transformación de la sociedad de manera que podamos hacer el negocio apenas se logre tu tema con el banco.
>
> Por otro lado, te quisiera pedir nos anticipes las utilidades del año 2019". (Se hace referencia a las utilidades de ÍTACA EN STO)

5.3.33. El mismo 14 de mayo de 2020, el doctor PALACIOS MEJÍA envió un correo a EDUARDO A. WIESNER ACERO (esposo de MARÍA ISABEL O. DE WIESNER), en respuesta formal a la consulta de ella sobre la propuesta de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR de transformar STO a una sociedad por acciones simplificada. El doctor PALACIOS MEJÍA, que ya antes había expresado reservas sobre la propuesta, manifestó que la estrategia de transformar a STO en SAS permitiría prescindir

del derecho de preferencia de CATAY, pero que dicha transformación podría mirarse como fraudulenta, pues su propósito era privar a CATAY de un derecho que actualmente tenía. Y que, por lo tanto, recomendaba insistir en que se diera traslado a la Junta de CATAY, en donde ALBERTO MARULANDA POSADA tenía suficientes votos para que se adoptara la decisión que él quisiera adoptar, pero todo el procedimiento sería más sencillo y transparente. Recomendó, en todo caso, enviar la oferta a CATAY para adquirir la posibilidad de negociar con cualquiera si ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR no quisiera hacer el negocio. (Anexo 45)

Luego, no se volvió a hablar de la transformación de STO en otro tipo de sociedad.

5.3.34. Mediante comunicación del 17 de junio de 2020, MARÍA ISABEL O. de WIESNER, como representante de ÍTACA LIMITADA, dirigida a ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante de STO, manifestó la necesidad de tener la Junta ordinaria de STO, aplazada, como se informó atrás. Se refirió a varios de los asuntos propuestos por ALBERTO MARULANDA POSADA a comienzo de año para la agenda de la frustrada Junta ordinaria de marzo de 2020, y entre ellas, a la propuesta de extender la vida de STO, que ALBERTO MARULANDA POSADA había hecho en el informe de gestión enviado, desde entonces, a los socios. Indicó la representante de ÍTACA que, aunque no aprobaría esa propuesta de reforma de estatutos en una junta ordinaria de STO, sí estaría dispuesta a aprobarla en una junta extraordinaria, que se había planteado para culminar la cesión de derechos sociales, y que estaba demorada por la renuencia de algunas personas a adoptar las medidas legales necesarias para ello, aludiendo a las diversas alternativas que se relataron arriba, respecto a los trámites para cumplir con el "derecho de preferencia" de CATAY. La representante de ÍTACA añade que, para no interferir con una pronta reunión de la Junta ordinaria que había sido aplazada, la reforma estatutaria propuesta por ALBERTO MARULANDA POSADA se podría hacer luego. Ella no hizo mención alguna a otras condiciones, o a diferencias en cuanto al acuerdo mismo de cesión (Anexo 47).

5.3.35. Mediante correo electrónico de la abogada del grupo INGETEC, ANA MILENA LOPERA ROZO, a MARÍA ISABEL O. de WIESNER, llegó una carta fechada el 19 de junio de 2020 de ALBERTO MARULANDA POSADA a MARÍA ISABEL O. de WIESNER, en la que aquel responde la comunicación del 17 de junio de 2020 (Anexo 47), y, entre otras cosas, le dice a la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER que:

> "Por otro lado, con relación a lo manifestado en su carta sobre: "...el asunto se haya demorado por la renuncia (sic) de algunas personas a adoptar las medidas legales necesarias para culminar la cesión de derechos que deseamos hacer.", manifestamos que a la fecha no cursa en la sociedad STO una oferta de cesión de cuotas partes de interés por parte de la sociedad ÍTACA Ltda." (Anexo 46)

5.3.36. En vista de que ALBERTO MARULANDA POSADA atribuyó las demoras en la negociación a la falta de una oferta de cesión de cuotas -**y no a otros asuntos ni a la necesidad de obtener créditos bancarios**- el 24 de julio de 2020, MARÍA ISABEL O. de WIESNER, como representante legal de ÍTACA LTDA, envió al señor ALBERTO MARULANDA POSADA, en su calidad de representante legal de STO, la oferta de cesión de la totalidad de la participación de ÍTACA LTDA en STO, y pidió que se diera traslado a CATAY LIMITADA. (Anexo 48).

5.3.37. En dicha carta se solicitó expresamente poner en conocimiento de CATAY la totalidad del negocio, con todos los detalles y aspectos esenciales -objeto, precio, plazo- (artículos 363 y 845 del Código de Comercio) del proyecto de contrato de cesión de cuotas que se había negociado con INGETEC I&D, y que aparecía en los documentos que ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR envió a MARÍA ISABEL O. de WIESNER el 26 de abril de 2020. Y se señaló que, si CATAY manifestaba no querer ejercer su derecho de preferencia, se sometería en seguida a la Junta de socios de STO la decisión de ofrecer las cuotas a INGETEC I&D SAS como tercero.

5.3.38. La propuesta de cesión de cuotas que hacía parte de los documentos que ÍTACA remitió a ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante de STO, no difería en los **elementos esenciales** -objeto, precio, plazo- de la que ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR había enviado a ÍTACA en el correo del 26 de marzo. Pero sí contenía unas pocas diferencias formales y accidentales.

5.3.39. Las principales diferencias entre el borrador que envió ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR el 26 de marzo y el proyecto de contrato que ÍTACA envió como oferta a CATAY el 24 de julio de 2020, consisten en que la oferta de contrato de ÍTACA:

(i) pedía, en el considerando tercero, que se dejara constancia de que CATAY (no mencionada por su nombre) había rechazado previamente la oferta;

(ii) en la oferta de ITACA a CATAY no se incluyó una frase propuesta por MARULANDA ESCOBAR para el numeral 2.2 del contrato y relativa a un descuento que se haría, antes de firmar la escritura, de un 50% de los costos estimados de notaría y registro;

(iii) en la cláusula 2.3 de la oferta de ITACA a CATAY el cesionario autorizaba a STO para pagar al cedente no solo las utilidades de STO que correspondieran a las cuotas que adquiriera y que se hubieran causado en el año 2019 sino las que, proporcionalmente, se hubieren causado también en el año 2020; y

(iv) en la cláusula 2.4, la oferta de ÍTACA a CATAY, en concordancia con su propuesta para el considerando tercero del contrato, contemplaba una indemnidad para ÍTACA si alguna autoridad competente llegara a determinar que los procedimientos de la cesión no se ciñeron a las normas legales o estatutarias.

5.3.40. Como se observa, los puntos (i) y (iv) de la oferta de ÍTACA a CATAY del 24 de julio tenían el simple propósito de dar certidumbre jurídica al negocio, en el evento de demandas de los socios minoritarios de CATAY si acaso el procedimiento escogido por ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, con la autorización de ALBERTO MARULANDA POSADA y el concepto del abogado GARCÍA PIÑEROS y la Gerente del Departamento Jurídico de INGETEC SAS, ANA MILENA LOPERA ROZO, consistiera en prescindir de la Junta de CATAY y atenerse a una simple carta de su representante legal en la que se rechazara la oferta.

5.3.41. En respuesta a la solicitud de trasladar a CATAY la oferta de cesión de ÍTACA, que esta sociedad hizo a ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, el 29 de julio de 2020, ALBERTO MARULANDA POSADA envió comunicación a ÍTACA LTDA afirmando que tenía ciertas observaciones a la cesión, las cuales deberían ser superadas antes de poner en conocimiento de CATAY LTDA la oferta de cesión de cuotas. (Anexo 49)

5.3.42. Las observaciones de MARULANDA POSADA, representante legal de STO, para no transmitir a CATAY la oferta de ÍTACA, tal como ésta la había enviado, eran las siguientes:

1) que como los estatutos sociales de STO no contemplan estipulaciones relacionadas con el derecho de preferencia, se

deben cumplir los artículos 363 y siguientes del Código de Comercio, así como el artículo 845 en relación con la oferta;

2) **que la oferta debe contener como mínimo los elementos esenciales del negocio, y que al respecto no tiene ninguna observación**;

3) que la Superintendencia de Sociedades ha indicado que se deben agotar los requisitos del artículo 363 del Código de Comercio antes de ofrecer las cuotas sociales a un tercero, siempre y cuando se haya verificado que ningún otro socio se encuentra interesado en adquirir las cuotas ofrecidas;

4) que se entiende que el ofrecimiento de cuotas a socios y a terceros son dos momentos diferentes, y que la cesión de cuotas a terceros solo se puede dar cuando se constate que ninguno de los socios desea ejercer el derecho de preferencia;

5) que en la comunicación se evidencia que ya se dio una intención de adquisición de las cuotas por parte de un tercero, con lo que podría entenderse que ya existe un acuerdo con ese tercero, sin haberse agotado lo establecido en el artículo 363 del Código de Comercio, lo que podría llegar a implicar un desconocimiento del derecho de preferencia de CATAY; y

6) que al representante legal le corresponde verificar que la comunicación y el procedimiento de cesión de cuotas se ajusten a la ley, y que no es posible por el momento dar traslado a la comunicación, ya que la misma no se ajusta a las normas citadas y no reúne los requisitos para surtir el derecho de preferencia, lo que podría llevar a "un tema de nulidades".

5.3.43. Es de notar que las negociaciones previas entre ÍTACA e INGETEC I&D, que ALBERTO MARULANDA POSADA quería que ÍTACA ocultara ahora, habían sido conocidas y autorizadas por él, por escrito, desde marzo de 2019. En su respuesta del 29 de junio, ALBERTO MARULANDA POSADA no hizo reparo alguno al texto del contrato propuesto, ni manifestó que no correspondiera a lo que se había previsto, condicionalmente, con INGETEC I&D SAS; ni hizo mención alguna a que el contrato con esta sociedad estuviese condicionado a un financiamiento bancario.

5.3.44. El 5 de agosto de 2020, la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER contestó la carta del 29 de julio de 2020, y manifestó que no podía

aceptar los argumentos del señor ALBERTO MARULANDA POSADA. Explicó que, por supuesto, la negociación con un tercero no podría hacerse mientras no se hubiese recibido la respuesta de CATAY, pero que sí podía hacerse tal negociación, como se había hecho, bajo la condición de que, habiendo hecho la propuesta a CATAY, la respuesta de ésta fuera negativa. Añadió que, en la comunicación en la que pidió el traslado de la oferta, incluyó como parte de ella el proyecto de contrato negociado con ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, como representante legal de INGETEC I&D, ya que ésta era la forma más transparente de cumplir con el requisito del artículo 363 del Código de Comercio, y de facilitar la etapa final del negocio que incluía la aceptación de la Junta de STO al socio que remplazaría a ÍTACA. Además, manifestó que, con ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, se había acordado que ese mismo texto se usaría con CATAY para contratar, si CATAY aceptara la oferta. (Anexo 50)

5.3.45. En la comunicación del 5 de agosto de 2020, la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER también incluyó las razones jurídicas que el asesor HUGO PALACIOS dio respecto a los argumentos que usó ALBERTO MARULANDA POSADA para negarse a dar traslado de la oferta a CATAY. Tales razones se pueden resumir así:

1) que el artículo 363 del Código de Comercio ordena al representante legal "*dar traslado inmediatamente*" de la oferta, lo que significa que él no tiene facultad legal para negarse, y que las partes de la cesión son quienes deben responder por la legalidad del negocio, y que el representante legal de la sociedad cuyas cuotas se negocian no adquiere derecho ni obligaciones en el negocio;

2) que el concepto de la Superintendencia de Sociedades (Oficio 93125 del 2012), que se citó en la respuesta de ALBERTO MARULANDA POSADA, no se refiere al artículo 363, sino al 365, que regula un eventual evento posterior a la oferta relacionado con el hecho de que ningún socio haya aceptado la oferta y no se haya obtenido autorización para el ingreso de un tercero;

3) que el Oficio 220-133177 del 1 de julio de 2016 de la Superintendencia de Sociedades, que se refiere al artículo 365 del Código, señala que no es indispensable que la oferta de cesión de cuotas en las sociedades de responsabilidad limitada se acompañe con la presentación de un tercero a la junta de socios, lo que significa que "*esa presentación, aunque no es indispensable como algunos afirmaban, puede hacerse desde la*

formulación de la oferta, pues no solo ninguna norma lo prohíbe, sino que, como explicó el Consejo de Estado en la sentencia que cita el Oficio 220-133177 de 2016, la presentación temprana del tercero puede ser muy útil para evitar llegar a las dificultades a las que puede dar lugar el artículo 365 del Código de Comercio."

5.3.46. Finalmente, en la comunicación del 5 de agosto de 2020 (Anexo 50), la señora MARIA ISABEL O. de WIESNER solicitó a ALBERTO MARULANDA POSADA:

a.- Le ruego transmitir <u>inmediatamente</u> a Catay Ltda. nuestra carta de oferta, con el proyecto de contrato que acompañamos y que hace parte integral de tal oferta; lo liberamos de cualquier responsabilidad que pudiera surgir del simple hecho de hacer esa transmisión inmediata e íntegra, esto es, de la carta y del proyecto de contrato. Y saldremos en su defensa si un tercero procura imputarte responsabilidad por ese simple hecho.

b.- Por el contrario, si se abstiene, con cualquier motivo, de hacer la transmisión <u>inmediata</u> que pedimos, le haremos responsable de los perjuicios que ello nos ocasione, y apoyaremos a cualquier tercero que resulte perjudicado por su omisión.

c.- Catay Ltda. decidirá si acepta o no la oferta que le hacemos, tal como la hacemos. Si acepta la oferta, haremos el negocio con Catay Ltda. Si no la acepta, <u>por cualquier motivo</u>, estaremos listos a hacer el negocio acordado condicionalmente con INGETEC I&D S.A.S.

5.3.47. El 6 de agosto de 2020, ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR escribió a MARÍA ISABEL O. de WIESNER, informando sobre problemas derivadas de la dificultad de conseguir financiación de los bancos, e invitando a buscar alternativas. (Anexo 51).

5.3.48. En los estados financieros de INGETEC I&D del año 2019, aprobados y certificados por su representante legal y revisor fiscal, se puede observar que la sociedad tiene unos activos totales de más de $34 mil millones de pesos frente a un pasivo total de $13 mil millones, y unos ingresos ordinarios de $35 mil millones de pesos, con una ganancia neta de $9 mil millones de pesos. La utilidad habría sido suficiente, por sí sola, para pagar el precio convenido con ÍTACA.

Todo demuestra una sólida situación financiera de INGETEC I&D, y su capacidad para seguir adelante con el negocio acordado con ÍTACA, con o sin el apoyo de un banco determinado. (Los estados financieros de INGETEC I&D se pueden verificar en el Anexo 52)

5.3.49. Al revisar los estados financieros de INGETEC SAS del año 2019, también se puede encontrar una sólida situación financiera con activos de $63 mil millones de pesos frente a pasivos de $43 mil millones y una ganancia neta de casi $3 mil millones de pesos. (Los estados financieros de INGETEC SAS se pueden verificar en el Anexo 53). Dados los vínculos entre las diversas sociedades INGETEC, los estados financieros de esta sociedad ponen de presente que podría colaborar con INGETEC I&D para financiar el negocio con ITACA, si INGETEC I&D lo requiriera.

5.3.50. MARÍA ISABEL O. de WIESNER contestó a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR el 11 de agosto de 2020, manifestando su voluntad de diálogo y reiterando que, aunque ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR había informado sobre una negociación con los bancos, la cesión de cuotas nunca estuvo condicionado a la aprobación de tal financiación, y que ÍTACA seguía dispuesta a hacer el negocio como se había planteado. Y el 13 de agosto de 2020 MARÍA ISABEL O. de WIESNER envió un mensaje a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR indicándole oportunidades para dialogar. (Anexo 54)

5.3.51. El 11 de agosto de 2020, ALBERTO MARULANDA POSADA, actuando como representante legal de STO, dio respuesta a la comunicación que le había enviado la señora MARIA ISABEL O. de WIESNER el 5 de agosto, reiterando los argumentos expuestos en su carta del 29 de julio de 2020, y manifestando que no daría trámite a la oferta a CATAY. Respecto al Oficio 220-133177 de la Superintendencia de Sociedades, el señor MARULANDA POSADA manifestó que tiene una interpretación diferente, y que ÍTACA LTDA no ha cumplido con los términos del artículo 363 del Código de Comercio. Finalmente, en esta comunicación se afirma que, si bien la negociación de las cuotas sociales se adelantó con ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, a quien llama "familiar" en la carta, ellos deben actuar como administradores de sociedades diferentes. (Anexo 55)

5.3.52. El 14 de agosto de 2020 ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, quien había actuado por recomendación escrita de ALBERTO MARULANDA POSADA en la negociación que derivó hacia INGETEC I&D S.A.S., se dirige a MARÍA ISABEL O. de WIESNER, **finalmente,** y le indica que el negocio para la eventual compra de sus derechos sociales estaba

condicionado a obtener financiación de los bancos. Concluye diciendo:

> "En consecuencia, además de los reparos manifestados a las condiciones contractuales solicitas (sic) por ustedes, sin una fuente de financiación en firme, mal haría en seguir adelante en estas circunstancias." (Anexo 56).

5.3.53. Cuando ALBERTO MARULANDA POSADA se negó a transmitir a CATAY la oferta de cesión de cuotas sociales de ÍTACA en STO, siendo representante legal de STO, y teniendo poder de decisión en CATAY, causó daños y perjuicios a ÍTACA, patrimoniales y extrapatrimoniales, porque:

(i) Dañó a ÍTACA al impedir que ésta pudiera concluir, como estaba acordada, la cesión de sus cuotas sociales en STO, y recibir **$ 7.375 millones, que era el precio pactado**; y estableció un precedente que dificulta aún más la cesión de tales cuotas a un tercero, reduciendo sustancialmente su valor. Y dañó a ÍTACA, por cuando el precedente hace difícil que terceros independientes encuentren interés en adquirir cuotas de interés social en STO.

(ii) Dañó a ÍTACA al impedir que ésta obtuviera en el mercado los rendimientos que habría percibido al invertir **$ 7.375 millones, que era el precio pactado** para la cesión. Y dañó a ÍTACA, por cuando el precedente hace difícil que terceros independientes encuentren interés en adquirir cuotas de interés social en STO.

(iii) Dañó a ÍTACA, al impedir a ÍTACA el ejercicio del derecho que concede a todos los socios de STO el artículo 362 del Código de Comercio a ceder su participación en la sociedad STO, y el que le concede a todos los socios el artículo 363 del mismo Código a que sus ofertas de cesión se transmitan inmediatamente a su destinario. Y el precedente hace difícil que terceros independientes encuentren interés en adquirir cuotas de interés social en STO.

(iv) Dañó a ÍTACA cuando, como representante legal de la sociedad STO, se abrogó el derecho que no tenía de

transmitir o no las ofertas de cesión que hicieran los socios. Y dañó a ÍTACA, pues ese precedente hace difícil que terceros independientes encuentren interés en adquirir cuotas de interés social en STO.

(v) Dañó a ÍTACA, en cuanto impidió que se conociera con transparencia la valoración que MARULANDA POSADA, INGETEC I&D e ÍTACA hacían de las cuotas de interés social de STO. Y dañó a ÍTACA pues el precedente hace difícil que terceros independientes encuentren interés en adquirir cuotas de interés social en STO.

(vi) Dañó a ÍTACA en cuanto la reticencia a permitir que los socios minoritarios de CATAY conocieran las condiciones de la negociación, hace difícil que sociedades independientes con socios minoritarios encuentren interés en adquirir cuotas de interés social en STO.

(vii) Dañó a ÍTACA, en cuanto el propósito de evitar que los socios minoritarios de CATAY conocieran la negociación crearía un riesgo de inseguridad jurídica ante eventuales oposiciones judiciales de ellos a la negociación.

5.3.54. Cuando el representante legal de INGETEC I&D, ANDRÉS MARULANDA POSADA, informó a ÍTACA que no podía seguir con el negocio por falta de financiamiento bancario, en lugar de reconocer que ello era el efecto de la conducta de ALBERTO MARULANDA POSADA, causó daños y perjuicios a ÍTACA, por tratar de ocultar la responsabilidad de éste en su decisión.

5.4. CATAY bloqueó de manera injustificada y abusiva la aprobación de la acción social de responsabilidad, en la junta ordinaria de socios de STO celebrada el 2 de septiembre del 2020.

5.4.1. El 2 de septiembre de 2020, se celebró la Junta Ordinaria de Socios de STO de manera virtual. En dicha reunión ÍTACA estuvo representada por el apoderado doctor JOSE MIGUEL MENDOZA DAZA, y CATAY estuvo representada por el doctor DANIEL GARCIA PIÑEROS, también como apoderado. Además, participaron el señor ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, el señor YIVHER ANDRÉS GONZÁLEZ VELANDIA, como revisor fiscal de STO, y la señora ANA MARÍA LOPERA ROZO, quien asistió como invitada de ALBERTO MARULANDA POSADA y fue nombrada secretaria de la

reunión. La reunión fue grabada. (Se anexa la grabación y trascripción de la Junta mediante Anexos 57 y 58)

5.4.2. Si bien la secretaria de la Junta, la Dra. LOPERA ROZO, envió varios días después el borrador del acta de la reunión de la Junta de STO del 2 de septiembre (Acta No. 79), y el Dr. MENDOZA DAZA la aprobó y firmó unas semanas luego, el señor ALBERTO MARULANDA POSADA se tomó un tiempo adicional considerable para firmarla. Y pese a las instancias verbales de ÍTACA para poder conseguir una copia del acta firmada por MARULANDA POSADA, ella no se obtuvo. Por eso, el 29 de octubre de 2020, MARÍA ISABEL O. de WIESNER se vio obligada a enviar por correo electrónico una carta pidiendo una copia formal (Anexo 59) que solo se recibió, con la firma de todos quienes debían firmarla, el 25 de noviembre de 2020, casi tres meses después de celebrada la reunión. (Anexo 60).

5.4.3. Teniendo en cuenta que el señor MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, no había entregado oportunamente copia del acta, firmada por él, de la reunión del 2 de septiembre del 2020, ÍTACA contrató a la empresa ATmedios para realizar la transcripción de la grabación de la Junta de Socios. ATmedios cuenta con una amplia experiencia en el tema, y transcribió en forma exacta todo lo dicho en la Junta. (Anexos 55 y 56).

5.4.4. Tal como consta en el Acta 79 y en la trascripción, durante la Junta Ordinaria de STO del 2 de septiembre de 2020 el Dr. MENDOZA DAZA expuso las faltas en las que ha incurrido el señor MARULANDA POSADA como representante legal de STO, y que se relatan atrás en los hechos de esta demanda.

5.4.5. En la Junta de STO del 2 de septiembre de 2020, en la etapa de lectura y aprobación del informe de gestión del señor MARULANDA POSADA como representante legal de STO en el 2019, el Dr. MENDOZA DAZA votó en contra de la aprobación del informe y dejó constancia por escrito de las razones de dicho voto. (Páginas 4 del Acta No.79 y 5 y 6 de la trascripción; y 00:07:46 minutos de la grabación). De dicha constancia se resalta lo siguiente:

> Desde hace ya varios años, el representante legal principal de STO Ltda., Alberto Marulanda Posada, ha venido participando en actos y operaciones que le han representado clarísimos conflictos de interés. Tales conflictos se han presentado respecto de los contratos por cuya virtud STO Ltda. le ha arrendado su único activo

a Ingetec S.A., una compañía con la cual el señor Marulanda y sus familiares mantienen vínculos de diversa índole.

A pesar de haber estado incurso en los referidos conflictos de interés, el señor Marulanda no surtió el procedimiento de autorización regulado en el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 2995. Esta omisión representó al señor Marulanda una violación manifiesta de sus deberes como administrador de STO Ltda., a la luz de los pronunciamientos que sobre el particular han emitido las autoridades colombianas, incluida la Superintendencia de Sociedades. Lo anterior es tanto más grave cuanto que, en los contratos de arrendamiento suscritos por el señor Marulanda, se pactaron condiciones económicas beneficiosas para Ingetec S.A., en detrimento de los intereses de STO Ltda.

(…)

A pesar de la gravedad de las actuaciones descritas en esta constancia, en el informe sometido a consideración de la junta de socios no se ha hecho referencia alguna a los conflictos de interés en cuestión, ni a los perjuicios que ha sufrido STO Ltda. Por virtud de los arrendamientos antes mencionados. En esa medida, ÍTACA Ltda. vota en contra de la aprobación del informe de gestión sometido a consideración de la junta de socios de STO Ltda. No está de más advertir que el informe referido sí debe presentarse para su aprobación o improbación por parte de los asociados, tal y como lo ordena expresamente el artículo 46 de la Ley 222 de 1995.
Como consecuencia de lo anterior, debe advertirse que el señor Alberto Marulanda Posada no podrá ejercer el cargo de liquidador de STO Limitada en caso de que la compañía se disuelva el 31 de diciembre de 2020.

Ello obedece a que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 230 del Código de Comercio: ‘Quien administre bienes de la sociedad y sea designado liquidador no podrá ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las cuentas de su gestión por la Asamblea o Junta de Socios.

> En esa medida, como el informe de gestión del señor Marulanda no fue aprobado por la Junta de Socios de STO Limitada, tras el voto negativo de mi poderdante, es claro que no se cumple con el requisito exigido por el citado Artículo 230 para que el representante legal pueda ocupar el cargo de liquidador".

5.4.6. Por su parte, el Dr. GARCÍA PIÑEROS manifestó que CATAY LIMITADA sí aprobaba el informe de gestión del representante legal, y dejó una constancia señalando que la postura de ÍTACA era alejada de la realidad. Sobre esto, primero, manifestó que la señora MARÍA ISABEL O. DE WIESNER había participado en todas las juntas de socios y había tenido conocimiento de los estados financieros, de los informes de gestión de ALBERTO MARULANDA POSADA, y que ha tenido detalles de absolutamente todos los movimientos de la sociedad. Luego, afirmó que, en relación con un conflicto de interés, ella nunca ha hecho mención en relación con la terminación del contrato de arrendamiento y que nunca ha pedido una revisión detallada como consecuencia de la terminación. Finalmente, manifestó que el contrato de arrendamiento se ha venido desarrollando durante muchos años, se ha obtenido el pago de forma cumplida, y que a pesar de la situación de Covid, se ha mantenido el canon. (Página 5 del Acta No. 79 y 00:11:10 minutos de la grabación)

5.4.7. Pese a las afirmaciones del abogado GARCÍA PIÑEROS, ÍTACA afirmó en la Junta de STO del 2 de septiembre de 2020, que no es cierto que la señora MARÍA ISABEL O. DE WIESNER, como apoderada de ÍTACA LIMITADA, no se haya opuesto a la continuación del contrato de arrendamiento. Tal como se señaló atrás en esta demanda, en la Junta de Socios del 19 de marzo de 2019, que quedó consignada en el Acta No. 78, ella expresamente manifestó que la voluntad de ÍTACA LIMITADA era que no se prorrogara el contrato de arrendamiento que se vencía el mes de mayo de 2019. Además, desde que el representante legal de STO firmó los contratos de arrendamiento con conflicto de interés, ÍTACA LIMITADA ha manifestado reiteradamente en todas las juntas (Actas No. 77 y 78) la existencia del conflicto de interés y la necesidad de realizar un avalúo comercial al inmueble para determinar el canon de arrendamiento justo, a las condiciones del mercado.

5.4.8. También, en la Junta de STO del 2 de septiembre de 2020, durante la aprobación del informe del revisor fiscal, el Dr. MENDOZA DAZA le

preguntó al señor YIVHER ANDRÉS GONZÁLEZ VELANDIA si había revisado el problema del conflicto de interés del representante legal de STO. El revisor fiscal respondió que, en su opinión, no ha visto conflicto de interés ya que se ha venido cumpliendo el contrato de arrendamiento, se ha venido subiendo su canon y se ha venido pagando mensualmente. Además, afirmó que si el contrato sigue vigente y no se ha dado una terminación o directriz por parte de algún socio, es porque no se ha detectado ese conflicto de interés al que se hace mención. Y finalizó diciendo que, si el contrato lo firma la misma persona en las dos empresas, eso no implica que se presente un conflicto, porque no se ha cambiado ninguna condición favorable que se pudiera evidenciar. (Páginas 7, 8 y 9 del Acta No. 79 y 00:28:10 minutos de la grabación)

5.4.9. En la Junta de STO del 2 de septiembre de 2020, en la parte del orden del día relativa a la ratificación o elección del representante legal de la Junta Ordinaria, el Dr. MENDOZA DAZA, representante de ÍTACA, propuso que, en vista de las censuras hechas a la administración de ALBERTO MARULANDA POSADA, la señora MARÍA ISABEL O. DE WIESNER asuma la representación legal principal y el señor MARULANDA POSADA la representación legal suplente. El representante de CATAY manifestó que votaba en contra de la propuesta de ÍTACA, y que, por su parte, proponía que se mantuviera la representación legal del doctor ALBERTO MARULANDA POSADA, y mantener el suplente. (Páginas 10 y 11 del Acta No. 79, 18 y 19 de la transcripción; y 00:43:22 minutos de la grabación)

5.4.10. El representante de CATAY, entonces, manifestó:

> De todas formas, lo que vemos es que aquí, pues, no nos estamos poniendo de acuerdo, sin embargo, el doctor Marulanda fue, conforme los estatutos, nombrado, y el periodo podría mantenerse en la medida en que los estatutos establecen que puede mantener en el cargo hasta que se acabe el periodo que establece, que tengo claro que se vence el próximo año.
>
> Entonces, pues, yo propondría que deje en el acta reflejada, pues, que no hubo una votación y se continúe con el siguiente punto del revisor fiscal. (Página 19 de la transcripción y 00:45:40 minutos de la grabación)

5.4.11. Ante la propuesta de dejar en el acta la afirmación falsa de que no había habido una votación, el Dr. MENDOZA DAZA, a su turno, manifestó:

> "Presidente, no. Es que yo creo que en el acta debería quedar reflejado, primero, que nosotros propusimos un cambio, una alternancia en la representación legal y que eso fue votado en contra por usted y votado a favor por nosotros, entonces, no se aprobó, y ustedes propusieron que siguiera el señor Marulanda, ante lo cual nosotros, por supuesto, votamos en contra por las razones ya expuestas, y eso tampoco se aprobó, con los efectos que tenga la ley, pero que quede claro que nosotros hicimos una propuesta que fue votada en contra y ustedes hicieron otra con la que ocurrió lo mismo." (Página 19 de la transcripción y 00:46:18 minutos de la grabación)

5.4.12. En vista de las palabras del Dr. MENDOZA DAZA, el presidente GARCÍA PIÑEROS, representante de CATAY, aceptó y pidió a la secretaria registrar lo dicho. Quedó, claro, pues, que en la Junta de STO del 2 de septiembre de 2020, en el punto de la ratificación o elección de representante legal, hubo una votación y que por razón del voto de CATAY, cuya legalidad se disputa en esta demanda, no hubo acuerdo en elegir o ratificar un representante legal de STO. (Página 11 del Acta No. 79 y 00:46:52 minutos de la grabación).

5.4.13. Se pasó luego a la elección del revisor fiscal, con un resultado similar al que hubo al tratar la representación legal. (Páginas 11 a la 13 del Acta No. 79 y 00:47:17 minutos de la grabación)

5.4.14. En la Junta de STO del 2 de septiembre de 2020, en etapa de proposiciones y varios, el Dr. MENDOZA DAZA propuso a la Junta de Socios la aprobación de una acción social de responsabilidad en contra del representante legal principal, el señor ALBERTO MARULANDA POSADA, y sustentó su proposición en varios ejemplos de la violación de sus deberes como administrador. (Páginas 14 del Acta No. 79 y 23 de la transcripción; y 00:55:30 minutos de la grabación)

5.4.15. El Dr. MENDOZA DAZA envió y leyó durante la junta la propuesta de acción social de responsabilidad, en los siguientes términos:

> El suscrito, actuando como apoderado especial de Ítaca Limitada, se permite someter a consideración de la Junta de Socios de STO la aprobación de una acción social de

responsabilidad en contra del representante legal principal, señor Alberto Marulanda Posada, por la violación de sus deberes como administrador. La referida acción social encuentra como fundamento en primer lugar la violación de las reglas que rigen el derecho de preferencia en las sociedades de responsabilidad limitada. En verdad, el representante legal de la compañía se rehusó injustificadamente a transmitirle a la sociedad Catay Limitada la oferta que Ítaca Limitada envió en cumplimiento del trámite del derecho de preferencia en la negociación de cuotas.

En segundo lugar, la acción social propuesta tiene como fundamento la violación por parte del señor Marulanda del régimen de conflictos de interés previsto en el numeral 7 del Artículo 23 de la Ley 222 del 95. Durante su gestión como representante legal de STO Limitada, el señor Marulanda Posada ha celebrado operaciones viciadas por conflicto de interés con Ingetec S. A., una compañía con la cual, tanto él como sus familiares, tienen vínculos de diversa índole. Las operaciones antes mencionadas fueron celebradas sin contar con la autorización de la Junta de Socios de STO Limitada en los términos que exige el numeral 7 del Artículo 23. Además, como queda claro tras una simple revisión de las condiciones económicas aceptadas por el representante legal de STO, los contratos en cuestión no le han sido favorables a la compañía.

Las anteriores circunstancias constituyen una violación patente de los deberes legales que el ordenamiento societario colombiano le atribuye a los administradores de sociedades en Colombia, y, en consecuencia, le propongo a la Junta de Socios que, a la luz de lo previsto en el Artículo 25 de la Ley 222, apruebe una acción social de responsabilidad en contra del señor Marulanda para que STO Limitada pueda reclamar judicialmente los perjuicios que ha sufrido la compañía con ocasión de las conductas desplegadas por su actual representante legal principal. (Página 14 del Acta No. 79)

5.4.16. En la Junta de STO del 2 de septiembre de 2020, al votar la proposición de la acción social de responsabilidad contra el administrador MARULANDA POSADA, ÍTACA votó a favor y CATAY votó

en contra. Al explicar su voto, cuya legalidad se controvierte en esta demanda, el Dr. GARCIA PIÑEROS no se refirió a los precisos argumentos legales invocados por el Dr. MENDOZA en su proposición, y se limitó a reiterar los méritos que CATAY encuentra en la gestión de MARULANDA POSADA, agradeció su gestión con STO, y manifestó que considera que la remuneración y la forma como se ha venido desarrollando el contrato ha sido más que satisfactoria. (Página 20 de la transcripción y 00:57:53 minutos de la grabación)

5.4.17. Ante dicha votación, en la Junta de STO del 2 de septiembre de 2020, el Dr. MENDOZA, representante de ÍTACA, dejó la siguiente constancia:

> La decisión de Catay Limitada de bloquear injustificadamente la aprobación de una acción social de responsabilidad fue una determinación abusiva en los términos del Artículo 43 de la Ley 1258 del 2008 a cuyo tenor: 'Quien abuse de sus derechos de accionista en las determinaciones adoptadas en la asamblea responderá por los daños que ocasione', eso se debe a que el veto ejercido por Catay Limitada perjudicará gravemente los intereses de STO Limitada en la medida en que hará imposible recobrar los perjuicios que con su conducta el señor Marulanda le ha causado a la compañía. En ese sentido, la Superintendencia de Sociedades ha expresado por vía de jurisprudencia que: 'Cuando se hubiere negado la posibilidad de iniciar una acción social de responsabilidad para encubrir las actuaciones irregulares de un administrador o proteger la desviación de recursos sociales, la decisión de rechazar la acción social corresponde a una finalidad que no es tolerada por el ordenamiento colombiano' --hasta ahí la cita-- En cuanto a las consecuencias derivadas de ese bloqueo abusivo, la misma Superintendencia ha manifestado que una de ellas es la indemnización de los perjuicios sufridos por el demandante en el respectivo proceso. Esa alternativa encuentra consagración expresa en el Artículo 43 de la Ley 1258 de 2008 que, aunque regula las sociedades por acciones simplificadas, se le ha hecho extensivo en su aplicación a las sociedades de responsabilidad limitada también por virtud de la Ley 1450 de 2011 y el Código General del Proceso. Así las cosas, se deja expresa constancia de que el bloqueo injustificado que ha hecho Catay Limitada de la acción social le ha causado importantes perjuicios a Ítaca.

> Y, por supuesto, no me voy a referir a los perjuicios que ha sufrido Catay por el hecho de que no le transmitieron la oferta que oportunamente le hicimos llegar al señor Marulanda, porque eso no es del resorte de nuestra competencia, sino, por supuesto, de Catay." (Página 24 de la transcripción)

5.4.18. Después de una breve interrupción, ocasionada por dificultades con la grabación, el Dr. GARCÍA, apoderado de CATAY, se expresó así:

> …como lo dije, me encuentro sorprendido por la posición que está teniendo Ítaca. Celebro y aplaudo la labor del doctor Marulanda, quien, a pesar de ser el representante legal y gerente de esta sociedad, ha ejecutado esta gestión sin recibir remuneración alguna, no comprendo y no entiendo cómo, a nivel de socios, estamos en estas acusaciones y en estas insinuaciones.
>
> No comparto la posición, no la respaldo, me siento que tenemos que agradecerle la labor al doctor Marulanda y que dejamos la constancia por instrucciones de María Isabel y por instrucciones de Ítaca, pero, en realidad, nos apartamos radicalmente de lo que se ha dicho.
>
> Creemos y nunca le hemos violado ni vulnerado o impedido la posibilidad a Ítaca de ejercer las acciones legales o de expresar sus inconformidades, pero ya, pues, estamos llegando a un punto en el que, francamente, me encuentro sorprendido y no las acepto y no las comparto.
>
> Yo pido que en el acta quede esta constancia, al igual que el doctor Mendoza ha hecho una serie de constancias muy estructuradas y muy elaboradas, pido que se deje esta constancia. Propongo que se proceda a compartir las grabaciones y se circule el acta para que el doctor Mendoza y yo aprobemos el acta y la firme la secretaria y el doctor Marulanda, como representante legal." (Página 24 de la transcripción).

5.4.19. A la fecha de presentación de esta demanda, la Junta de Socios de STO no ha nombrado nuevos representante legal y revisor fiscal.

El voto de CATAY en la Junta de socios de STO, el 2 de septiembre de 2020, en cuanto a las propuestas de iniciar una acción social de responsabilidad contra ALBERTO MARULANDA POSADA, y a la de nombrar a MARÍA ISABEL O. DE WIESNER como representante legal de la sociedad STO, perjudicó a STO y a sus socios, entre otras razones, así:

(i) en cuanto impidió un examen y decisión imparcial, por una autoridad judicial, de las críticas hechas a MARULANDA POSADA en su gestión social;

(ii) en cuanto sentó un precedente negativo respecto de la posibilidad de conseguir un control judicial sobre los actos de MARULANDA, disminuyendo, en esa medida, el valor de la sociedad; y

(iii) en cuanto creó incertidumbre jurídica en lo relativo a la representación legal de STO en la etapa crítica de su liquidación.

En cuanto la naturaleza de estos perjuicios sea susceptible de estimación económica, su monto será el que se pruebe en el proceso o el que determine el señor Juez al aplicar el principio de "reparación integral y equidad".

5.4.20. ÍTACA ha pedido a la Superintendencia de Sociedades (Delegatura de Inspección, vigilancia y control), desde el 1 de septiembre de 2020, que utilice las facultades que le confiere el artículo 85, numerales 4 y 5 de la Ley 222 de 1995 para tomar varias medidas en relación con el señor ALBERTO MARULANDA POSADA, representante legal de STO, por razón de algunos de los mismos hechos a los que se refiere esta demanda. Entre tales medidas se ha pedida que, con **las facultades administrativas** de que dispone la Superintendencia, se remueva del cargo de representante legal de STO a MARULANDA POSADA y se lo inhabilite para ejercer el comercio. Ese ejercicio de facultades administrativas no se opone, por su misma naturaleza, al ejercicio de **funciones judiciales** que pedimos en esta demanda. Hasta el momento, pese a las varias peticiones de impulso que hemos hecho, no se conoce ningún resultado de las medidas impetradas a la Superintendencia (Delegatura de Inspección, vigilancia y control).

5.4.21. ÍTACA acaba de pedir a la Superintendencia de Sociedades (Delegatura de Procedimientos Mercantiles), que designe un liquidador para STO, y que declara que ALBERTO MARULANDA POSADA no puede ser liquidador.

7. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

A partir de los hechos narrados, presentaré las normas y razones para explicar por qué ÍTACA espera que el Sr. Juez, luego de adelantar el proceso según la ley, resuelva las pretensiones en la forma que solicita la demanda.

6.1.-PRETENSIÓN PRIMERA. - ALBERTO MARULANDA POSADA, Y SU CONTROL SOBRE CATAY, Y SOBRE LOS SOCIOS DE CATAY.

La pretensión primera se funda en los artículos 260, 261 y concordantes del Código de Comercio (C.Co.), tomados de la Ley 222 de 1995.

Se funda, también, en los hechos 5.1.1 a 5.1.24 de esta demanda.

El texto de los artículos 260 y 261 es el siguiente:

> ARTÍCULO 260. <SUBORDINACIÓN>. <Artículo subrogado por el artículo 26 de la Ley 222 de 1995, diario oficial No. 42.156 del 20 de diciembre de 1995. El nuevo texto es el siguiente:> Una sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria.
>
> ARTÍCULO 261. <PRESUNCIONES DE SUBORDINACIÓN>. <Artículo subrogado por el artículo 27 de la Ley 222 de 1995.> Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos:
>
> 1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto.
>
> 2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de votos necesario para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere.

3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración de la sociedad.

PARÁGRAFO 1o. Igualmente habrá subordinación, para todos los efectos legales, cuando el control conforme a los supuestos previstos en el presente artículo, sea ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas de naturaleza no societaria, bien sea directamente o por intermedio o con el concurso de entidades en las cuales éstas posean más del cincuenta por ciento (50%) del capital o configure la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en la dirección o toma de decisiones de la entidad.

PARÁGRAFO 2o. Así mismo, una sociedad se considera subordinada cuando el control sea ejercido por otra sociedad, por intermedio o con el concurso de alguna o algunas de las entidades mencionadas en el parágrafo anterior.

La **pretensión primera** se encamina a que se declare, contra ALBERTO MARULANDA POSADA, que él tiene y ha tenido poder de decisión sobre las sociedades CATAY, INGETEC SAS, e INGETEC I&D SAS, MARULESCO SAS, Y MARULANDA ESCOBAR SAS.

Para sustentar <u>el literal "a" de la pretensión primera</u>, en relación con CATAY LTDA., socia de STO, debe aplicarse el Parágrafo 1 del artículo 261 del CdC. y las normas concordantes del mismo artículo, teniendo en cuenta los hechos de esta demanda, y los anexos en los que se sustentan, según los cuales ALBERTO MARULANDA POSADA puede emitir en las Juntas de socios de CATAY:

a.-Con solo sus propias cuotas de interés social, emite el 55.5% de los votos;

b.-Además, con los votos de MARULESCO SAS, de la cual es representante legal, emite en las Juntas de CATAY el 8.5% de los votos;

c.-En las asambleas de MARULESCO SAS, ALBERTO MARULANDA POSADA puede emitir el 100% de los votos, con el concurso de su esposa e hijos y con los votos de MARULANDA ESCOBAR SAS;

d.-En las asambleas de MARULANDA ESCOBAR SAS, ALBERTO MARULANDA POSADA controla el 100% de los votos con acciones propias y con el concurso de su esposa y sus hijos.

Para sustentar el <u>literal "b" de la pretensión primera</u>, en relación con INGETEC SAS, arrendataria de bienes de STO, deben aplicarse el Parágrafo 1 del artículo 261 del CdC. y las normas concordantes del mismo artículo, teniendo en cuenta los hechos de esta demanda, y los anexos en los que se sustentan, según los cuales ALBERTO MARULANDA POSADA, además de ser representante legal de INGETEC SAS,

a.- Puede emitir en las Asambleas de socios de INGETEC SAS el 56% de los votos, correspondientes a MARULESCO SAS, de la cual también es representante legal;

b.-Y porque, en las asambleas de MARULESCO SAS, él puede lograr la emisión del 100% de los votos, bien como titular de acciones propias, bien con el concurso de su esposa y de sus hijos (Hecho 4.1.14).

Para sustentar el <u>literal "c" de la pretensión primera</u>, en relación con INGETEC I&D SAS, eventual comprador de cuotas de interés social de ÍTACA en STO, deben aplicarse el Parágrafo 1 del artículo 261 del CdC. y las normas concordantes del mismo artículo, teniendo en cuenta los hechos de esta demanda y los anexos en los que se sustentan, según los cuales ALBERTO MARULANDA POSADA, además de haber sido su representante legal hasta finales de 2019,

a.- Puede emitir en las asambleas de socios de INGETEC I&D SAS el 56% de los votos, correspondientes a MARULESCO SAS, de la cual es representante legal;

b.-Y porque, en las asambleas de MARULESCO SAS, él puede lograr la emisión del 100% de los votos, como titular de acciones propias, y con el concurso de su esposa, de sus hijos y de la sociedad MARULANDA ESCOBAR, de la cual es también socio y representante legal (Hecho 4.1.14).

Para sustentar el <u>literal "d" de la pretensión primera</u>, en relación con MARULESCO SAS, socia de CATAY, deben aplicarse el Parágrafo 1 del artículo 261 del C.Co. y las normas concordantes del mismo artículo, teniendo en cuenta los hechos de esta demanda y los anexos en los que se sustentan, según los cuales ALBERTO MARULANDA POSADA, además de ser su representante legal ,

Puede emitir en las asambleas de MARULESCO SAS, con el concurso de su esposa, el 55% de los votos; y, con el concurso de sus hijos y de la sociedad MARULANDA ESCOBAR SAS, de la cual es representante legal, puede emitir el 45% restante de los votos.

Para sustentar el <u>literal "e" de la pretensión primera</u>, en relación con MARULANDA ESCOBAR SAS, socia de MARULESCO, deben aplicarse el Parágrafo

1 del artículo 261 del C.Co. y las normas concordantes del mismo artículo, teniendo en cuenta los hechos de esta demanda y los anexos en los que se sustenta, según los cuales ALBERTO MARULANDA POSADA, además de ser su representante legal ,

> Puede emitir en las asambleas de MARULANDA ESCOBAR SAS, con el concurso de su esposa, el 55% de los votos; y, con el concurso de sus dos hijos, el 45% restante de los votos.

6.2.-PRETENSIONES SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA: NULIDAD DE VOTOS Y DETERMINACIONES EN LA JUNTA DE SOCIOS DE STO DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020, POR ABUSO DEL DERECHO DE VOTO EN PARIDAD Y OBJETO ILÍCITO EN BLOQUEO SOCIAL.

6.2.1.-LA PRETENSIÓN SEGUNDA, dirigida contra ALBERTO MARULANDA POSADA, CATAY y STO, se funda en los artículos 95, numeral 1, de la Constitución Política; 189, 192, 200 y 830 del Código de Comercio; 23, 24 y 25 de la Ley 222, 42 y 43 de la Ley 1258 de 2008 y concordantes; 252 de la ley 1450 de 2011; 1746 del Código Civil; y 20 del CGP, numeral 4.

Estas pretensiones se fundan en los hechos 5.4.1 a 5.4.21 de esta demanda.

Naturaleza de la acción.- La acción que se invoca en este caso no es la de "nulidad/impugnación", regulada por el artículo 190 del Código de Comercio, sino la de "nulidad/abuso", creada en los artículos 830 del Código de Comercio y en el artículo 43 de la Ley 1258, extendida a todas las sociedades en el artículo 252 de la Ley 1450, e incorporada a la competencia general de los jueces civiles del circuito en asuntos societarios, por el numeral 4 del artículo 20 del CGP. Así lo han entendido también la Superintendencia de Sociedades [2] y tribunales arbitrales.

La pretensión segunda se orienta a conseguir la nulidad **de los votos** de CATAY en la Junta del 2 de septiembre de 2020, respecto de las proposiciones de (i) iniciar acción de responsabilidad social contra MARULANDA, y la de (ii) elegir representante legal principal de STO a la señora MARIA ISABEL O. de WIESNER.

La razón de la nulidad de esos votos es que ellos se emitieron con objeto ilícito y abuso del derecho de paridad.

La proposición relativa al uso por STO de la **acción de responsabilidad social** contra MARULANDA, censuraba las actuaciones de éste al incurrir en conflictos de interés,

[2] Superintendencia de Sociedades; Proceso 2012-801-052, Sentencia del 19 de diciembre de 2013,

(i) en materia de contratos sobre los bienes de STO con las compañías que él controla, y

(ii) en cuanto a su interferencia ilegal como administrador en el negocio de cesión de cuotas de interés social de ÍTACA en STO.

La razón de la nulidad de los votos de CATAY en la Junta del 2 de septiembre de 2020, en cuanto a (i) la proposición de iniciar una acción de responsabilidad social contra ALBERTO MARULANDA POSADA, y en cuanto a (ii) la elección de MARIA ISABEL O. de WIESNER como representante legal principal de STO, consiste en que ellos se emitieron con objeto ilícito y abuso del derecho de paridad.

La pretensión segunda se dirige no solo contra CATAY, por su voto respecto de las proposiciones aludidas, sino también contra ALBERTO MARULANDA POSADA, porque el voto de CATAY puede atribuirse también a él como controlador de esa sociedad. Y se dirige contra STO, en cuanto los votos de CATAY, mientras no sean anulados, permiten sostener que las decisiones adoptadas con ellos son decisiones de la sociedad, esto es, de STO.

En la sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional, la Corte explica que comete "abuso del derecho", "el titular de un derecho que hace un uso inapropiado e irrazonable a la luz de su contenido esencial y de sus fines". Añadió la Corte que "Para que se configure el fraude a la ley y el abuso del derecho no se requiere la existencia de una intención o culpa, basta que se produzca un resultado manifiestamente desproporcionado contrario a las finalidades previstas por el ordenamiento para una disposición o institución jurídica".

En primer término, CATAY ha debido de **abstenerse de votar** las proposiciones relativas a la acción de responsabilidad social contra ALBERTO MARULANDA POSADA, y la de elección de un representante legal principal distinto de él. Ha debido poner de presente que se abstenía por cuanto MARULANDA POSADA es su controlador, lo que creaba para CATAY un conflicto de interés. CATAY representaba en la Junta directamente los intereses de su controlante MARULANDA POSADA -un tercero en la Junta de STO-, y, por lo tanto, estaba en un **conflicto de interés** para votar.

Según el inciso tercero del artículo 23 de la Ley 222 MARULANDA POSADA estaba en el deber de promover esa abstención, y el representante de CATAY, aún sin la intervención de MARULANDA POSADA, tenía el deber de abstenerse en la votación. Como CATAY no se abstuvo, su voto adoleció de nulidad por objeto ilícito.

En segundo lugar, puede observarse que el voto de CATAY respecto de las dos proposiciones **fue abusivo**, porque el apoderado de CATAY, al explicarlo, no entró en detalle alguno respecto de la motivación alegada por el apoderado de ÍTACA, sino que se limitó a hacer observaciones generales para elogiar la gestión de

ALBERTO MARULANDA POSADA. No hubo, pues, una objeción sustentada a la propuesta de ÍTACA.

En efecto, el representante de CATAY, en la Junta del 2 de septiembre de 2020, no hizo refutación concreta alguna de:

> (i) las razones o los hechos por los cuales ALBERTO MARULANDA POSADA se negó a dar a CATAY el traslado de la oferta que le hizo ÍTACA de cesión de cuotas de interés social en STO, o
>
> (ii) de los hechos o las razones por las cuales ALBERTO MARULANDA POSADA podía contratar en nombre de STO con sociedades en las que él tenía un interés directo, sin obtener previamente dispensa de la Junta de Socios y, más aún, en contra de las repetidas objeciones de la representante de ÍTACA en las Juntas de STO.

Sin embargo, como STO solo tiene dos socios, cada uno con igualdad de partes en el capital social, el representante de CATAY en la Junta **bloqueó** con su voto la aprobación de la propuesta de iniciar acción de responsabilidad social contra MARULANDA POSADA, y la de remplazarlo en la representación legal de STO, sin dar explicaciones distintas a las de su admiración, reconocimiento y gratitud por la supuesta buena gestión de MARULANDA POSADA en STO. En otras palabras, CATAY, controlada por MARULANDA POSADA, abusó del "derecho de paridad".

En tercer lugar, CATAY, controlada por ALBERTO MARULANDA POSADA, tenía el deber de votar en interés de STO, y sin perjudicar a otros socios. Así lo dispone el artículo 43 de la Ley 1258 -aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada por obra del artículo 252 de la Ley 1450 de 2011, y justiciable por el Juez Civil del Circuito según el numeral 4 del artículo 20 del CGP.

Sin embargo, el voto inmotivado de CATAY perjudicó a STO, porque tiende a evitar el control judicial sobre los actos de los terceros administradores de STO. Por lo tanto, establece un precedente nocivo en cuanto a la eficacia de los instrumentos legales disponibles para asegurar ese control. E invita a que los actos de los administradores, cuando son contrarios a los mandatos legales, queden impunes. El voto de CATAY, en este respecto, por ser contrario al interés de STO, tenía un objeto ilícito.

CATAY debió votar teniendo en cuenta el interés de STO, y no el de un tercero. Pero el resultado directo de su voto fue favorecer el interés de una persona que, frente a STO era y es un tercero: el representante legal de STO. El voto de CATAY confirió una "ventaja injustificada" a un tercero en STO, ALBERTO MARULANDA POSADA, pues no se observa cómo, librar a ese tercero de un juicio de responsabilidad social, o favorecer la permanencia en su cargo de representante

legal principal de STO, pudiera resultar ventajoso para alguien distinto de MARULANDA POSADA mismo, en primer término. Desde esta perspectiva, también el voto de CATAY tenía objeto ilícito.

Por su participación indebida, y por la escasez de respuestas o razones concretas en los votos y decisiones de CATAY, no se observa que tales votos hayan tenido el objetivo de obtener provecho alguno para STO. Se observa, en cambio, que el voto de CATAY tenía un efecto directo, inmediato y doloso, en relación con otro objetivo, de interés exclusivo del accionista ALBERTO MARULANDA POSADA, controlador de CATAY: conseguir que MARULANDA POSADA no tuviera que justificar ante la justicia los actos que realizó como administrador de STO, relativos a la violación del régimen de **conflicto de interés**, en los asuntos de arrendamientos y de la negociación de las cuotas de interés social de ÍTACA en CATAY.

Se observa también que el voto de CATAY en la Junta de STO tenía el propósito de lograr que MARULANDA pudiera **seguir administrando como representante legal principal la sociedad STO**, pese a las críticas de ÍTACA, que representa el 50% del capital de la sociedad y el 50% de los votos en sus Juntas.

Además, el voto de CATAY perjudica a ÍTACA, porque tiende a rodear de impunidad la conducta del administrador que, al negarse a dar traslado a CATAY de la oferta de ÍTACA para la cesión de sus cuotas sociales en STO, puso un obstáculo ilegal al derecho de ÍTACA a enajenar sus cuotas de interés social (artículo 362 del Código de Comercio). De nuevo, desde esta perspectiva, el voto de CATAY tenía objeto ilícito.

Por estas razones, se ruega al señor Juez del Circuito acceder a las pretensiones segunda, tercera y cuarta de la demanda.

6.2.2.-LA PRETENSIÓN TERCERA se funda en las mismas normas y hechos que la pretensión segunda.

Esta pretensión parte del supuesto de que, si los votos que obtiene una proposición en una Junta de socios son nulos, **las decisiones** aprobadas o logradas con esos votos son igualmente nulas.

Por eso la pretensión tercera solicita que, por razón de la nulidad de los votos de CATAY, en cuanto a (i) la proposición de adelantar un juicio de responsabilidad social contra el administrador ALBERTO MARULANDA POSADA, y en cuanto a (ii) la proposición de elegir a la señora MARÍA ISABEL OSPINA DE WIESNER como representante legal principal de la sociedad STO, y a ALBERTO MARULANDA POSADA como suplente, se declare la nulidad de las proposiciones que se aprobaron gracias a la emisión de los votos nulos.

En el caso concreto, la petición de nulidad se dirige contra la decisión de negar el uso de la acción de responsabilidad social y la de negar la elección de los representantes propuestos por ÍTACA.

6.2.3.-LA PRETENSIÓN CUARTA de la demanda se funda en las mismas normas de la pretensión segunda y en los artículos 1610 y concordantes del Código Civil; y en los mismos hechos de las pretensiones segunda y tercera.

Esta pretensión tiene tres objetivos, a saber: declarar que la negativa de la proposición de iniciar una acción de responsabilidad social contra el administrador de STO, una vez anulada (i) no impide a ÍTACA, exigir responsabilidad a MARULANDA por los **perjuicios patrimoniales indirectos** que ALBERTO MARULANDA POSADA le causó, como socia de STO, al dañar a STO; ni (ii) impide a ÍTACA exigir responsabilidad a MARULANDA POSADA por los **perjuicios directos** que les causó, sin que ello hubiese representado un daño patrimonial a STO.

Los perjuicios indirectos que ALBERTO MARULANDA POSADA causó a ÍTACA, son, en esta demanda, los que sufrió ÍTACA, en cuanto socia de STO, por razón de los contratos de arrendamiento que MARULANDA POSADA celebró con las sociedades subordinadas suyas respecto de los derechos de STO en el edificio San Martin.

Los perjuicios directos que ALBERTO MARULANDA POSADA causó a ÍTACA son, en esta demanda, los que sufrió ÍTACA por la frustración del negocio de enajenación de sus derechos sociales en STO a INGETEC I&D o, eventualmente, a CATAY.

Busca la **pretensión cuarta** que se declare que, siendo nulo el voto de CATAY, y válido el voto de ÍTACA respecto de la proposición de adelantar una acción de responsabilidad social contra ALBERTO MARULANDA POSADA, esta proposición fue aprobada. La asamblea de STO debe determinar, luego, la forma de hacer efectiva esa proposición, pues esta demanda, en ese respecto, se refiere solo a la indemnización de los perjuicios indirectos ocasionados por ALBERTO MARULANDA POSADA a ÍTACA.

Busca también la pretensión cuarta que, ante la nulidad del voto de CATAY en lo relativo a la elección de representantes legales principal y suplentes de STO en la Junta del 2 de septiembre de 2020, se declare que la señora MARÍA ISABEL O. DE WIESNER, y ALBERTO MARULANDA POSADA fueron elegidos representantes legales principal y suplente, respectivamente, de STO.

a.-El derecho de los socios a reclamar perjuicios patrimoniales indirectos al administrador.

La posibilidad de que los socios reclamen perjuicios patrimoniales indirectos a los administradores de una sociedad, por razón de los que estos hayan ocasionado a la sociedad, ha sido objeto de controversia en Colombia. En particular, la Superintendencia de Sociedades se ha pronunciado en varias oportunidades contra esa posibilidad, fundándose, ante todo, en razones de derecho comparado.

Sin embargo, hay razones mejores que las de la Superintendencia para sostener que, en el derecho colombiano, no existen las limitaciones que se encuentran en el derecho español o europeo para negar a los socios la posibilidad de reclamar los perjuicios que les ocasiona una administración ilegal del representante de la sociedad. Esta posibilidad es más clara cuando el administrador se vale de una situación de control para frustrar la aprobación de la acción de responsabilidad social contra él; pero existe aún si el Juez anula la decisión de negar la aprobación de la acción de responsabilidad.

Es así cómo, si el administrador impide por algún medio indebido que la sociedad lo obligue a indemnizar los perjuicios ocasionados a ella -indemnización que favorecería, de modo indirecto, a todos los accionistas- no sería equitativo que estos perdieran también el derecho a ser indemnizados por los perjuicios que el administrador les ocasionó a ellos en forma indirecta, al disminuir las utilidades de la sociedad o al desvalorizar las acciones o derechos sociales en la misma.

Ni sería equitativo que, para recuperar los perjuicios indirectos sufridos, cada accionista tuviera que esperar a que la sociedad demandara al administrador que haya incurrido en responsabilidad. Ese límite no existe en la ley colombiana.

En efecto, el artículo 25 de la Ley 222 dispone:

> La acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde a la compañía, previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios, que podrá ser adoptada, aunque no conste en el orden del día. En este caso, la convocatoria podrá realizarse por un número de socios que represente por lo menos el veinte por ciento de las acciones, cuotas o partes de interés en que se halle dividido el capital social.
>
> La decisión se tomará por la mitad más una de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión e implicará la remoción del administrador.
>
> Sin embargo, cuando adoptada la decisión por la asamblea o junta de socios, no se inicie la acción social de responsabilidad dentro de los tres meses siguientes, ésta podrá ser ejercida por cualquier administrador, el revisor fiscal o por cualquiera de los socios en interés de la sociedad. En este caso los acreedores que representen por lo menos el cincuenta por

ciento del pasivo externo de la sociedad, podrán ejercer la acción social siempre y cuando el patrimonio de la sociedad no sea suficiente para satisfacer sus créditos.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos individuales que correspondan a los socios y a terceros. (He añadido la subraya).

El inciso final del artículo 25 debe interpretarse en forma que pueda producir efectos, esto es, que produzca un "efecto útil". De modo que no puede significar, simplemente, como ha enseñado desde siempre el derecho, que el socio a quien un administrador ocasiona un daño directo puede exigirle responsabilidad por él. El inciso final del artículo 25 debe interpretarse y aplicarse dentro del contexto de ese artículo, esto es, dentro del contexto de los daños que el administrador ocasiona **a la sociedad** por su conducta irregular y que, en forma indirecta, perjudican a cada uno de los socios.

Dentro de ese contexto, el artículo 25 revela que, para efecto de exigir responsabilidad a los administradores sociales por los daños a la sociedad hay **dos tipos de derechos**, así: derechos **de la sociedad**, que actúa por medio de su asamblea o junta, y que busca que el daño completo se indemnice a la sociedad. Y derechos **individuales indirectos** de los socios y de terceros. Estos últimos tienen la función de obtener indemnización por aquella parte de los daños que los socios padecen como reflejo de los daños que el administrador ocasiona a la sociedad.

Ahora bien: es claro que cada uno de los socios no puede exigir que se le paguen a él todos los perjuicios que el administrador haya causado a la sociedad, de modo que el inciso final implica que puede pedir que se reparen a él los que el administrador le haya causado, **en cuanto miembro de la sociedad**, es decir, los **perjuicios patrimoniales indirectos.**

Tales perjuicios son aquellos que disminuyen de alguna manera el valor de la acción o derecho de interés social que posee el socio, bien porque (a) ésta o estos terminan produciendo **menos dividendos** de los que habría producido si el administrador no hubiese actuado en la forma ilegal o culposa en la que actuó, de otra manera, o (b) el valor patrimonial de la acción o derecho de interés social disminuye por cualquiera otra causa, derivada de la conducta irregular del administrador, lesiva en forma directa para la sociedad.

El inciso final del artículo 25 indica que, cualquiera que sea la suerte de la acción social de responsabilidad, que permite **a la sociedad** recuperar el valor de los perjuicios que el socio le haya ocasionado a ella, esto no afecta los derechos individuales de los socios que permiten a **cada uno de ellos** recuperar los perjuicios

indirectos que el administrador les haya ocasionado al causar perjuicios a la sociedad. Tal es uno de los alcances de la pretensión cuarta de la demanda.

Frente al claro texto legal no se ve razón para buscar interpretaciones traídas del derecho extranjero y, menos aún, restricciones al derecho individual de cada accionista, sin sustento en el derecho positivo colombiano.

En esta demanda, por eso, acogemos las razones de un laudo de abril de 2017, de un Tribunal de Arbitramento[3] (Anexo 61), organizado con las reglas de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuando explicó, con base en un análisis de doctrina y legislación nacional y extranjera, y en la comparación con los textos de los artículos 24 y 25 de la Ley 222, que,

> En criterio de este Tribunal, la responsabilidad de los administradores por daños causados a los socios deriva del incumplimiento por parte del administrador de los deberes que le impone directamente la ley de sociedades a los administradores[4].
> .....

Y, más adelante, el Tribunal Arbitral añadió:

> Contrario a lo que sucede en las regulaciones foráneas, la legislación nacional no establece límites para el ejercicio de los derechos individuales de socios, de ahí que no se pueda limitar la acción de estos solo para la reclamación de perjuicios directos.

Sin embargo, el Tribunal Arbitral citado consideraba que, de acuerdo con el artículo 233 de la Ley 222, los conflictos que tengan origen en el contrato social o en la ley que lo rige, cuando se hayan sometidos a pacto arbitral o amigable composición, se sujetarán al trámite del "proceso verbal sumario", salvo disposición legal en contrario. Atrás ya explicamos porque esta norma no es aplicable en este caso, ya que el numeral 4 del artículo 20 del CGP es claro al indicar que el juez que puede resolver este tipo de controversias debe hacerlo "en primera instancia" regla incompatible con las normas que se aplican al "proceso verbal sumario".

b.-El derecho de los socios a reclamar perjuicios patrimoniales directos al administrador.

Arriba nos ocupamos de los perjuicios **patrimoniales indirectos** causados por un administrador a los socios de una sociedad. Vamos a referirnos ahora al

[3] Tribunal presidido por Felipe Negret Mosquera, Camilo González Chaparro y Manuel Santiago Urueta, Laudo del 4 de abril de 2017, en proceso de Nelly Daza de Solarte Vs. CSS Constructores y Carlos Alberto Solarte.
[4] Página 106.

derecho de los socios a reclamar al administrador los perjuicios **patrimoniales directos** que les ocasionen.

En el derecho colombiano se consagra, de tiempo atrás, el derecho de las personas a reclamar tanto los perjuicios que se derivan del incumplimiento de un contrato (artículo 1610 y concordantes del Código Civil) o del incumplimiento de una obligación no contractual (artículo 2341 y concordantes del Código Civil).

En ninguna de estas normas se dispone que la pasividad de otras personas damnificadas por el incumplimiento, o el fracaso de alguno de los remedios intentados por otras personas damnificadas, perjudica el derecho de las demás a buscar la indemnización que la ley permita.

De modo que el hecho de que la sociedad, por medio de su asamblea, no ejercite la acción de responsabilidad que autoriza el artículo 25 de la Ley 222 contra el administrador que produce a la sociedad perjuicios directos, no tiene por qué impedir a los socios que le exijan responsabilidad al administrador por los **perjuicios directos** causados a ellos.

c.-La elección de los nuevos representantes legales, principal y suplente, de STO.

Aparte de las razones que expone el laudo citado, el literal "a" de la pretensión cuarta de esta demanda se funda en el artículo 1746 del Código Civil, según el cual el efecto de la nulidad absoluta consiste en dar "a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo".

Busca también la pretensión cuarta, que, ante la nulidad del voto de CATAY en lo relativo a la elección de representante legal de STO en la Junta del 2 de septiembre de 2020, se declare que la señora MARÍA ISABEL O. DE WIESNER, por ser la única candidata que recibió votos válidos para el cargo, fue elegida representante legal principal de STO. Y que, por la misma razón, ALBERTO MARULANDA POSADA fue elegido como suplente.

Para restituir a las partes al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el voto nulo, es claro que con el voto de ÍTACA se habría aprobado iniciar la acción de responsabilidad social contra ALBERTO MARULANDA POSADA, y declarar elegida a MARÍA ISABEL O. DE WIESNER como representante legal principal, y a ALBERTO MARULANDA POSADA como representante legal suplente, según se pide que se declare.

6.3.-PRETENSIÓN QUINTA. - ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR COMO REPRESENTANTE APARENTE DE ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA.

La pretensión **quinta** se funda en los artículos 196, 260, 261 842 y 863 del Código de Comercio, y en las normas concordantes.

Esta pretensión tiene fundamento en los hechos 5.1.6, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.19, 5.1.21, 5.2.12, 5.2.13, y 5.2.15, y desde el 5.3.1 hasta el 5.3.53, ambos inclusive.

En la pretensión **quinta** se busca que se declare que cuando ÍTACA negoció con ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR la cesión de cuotas sociales de ÍTACA en STO, lo hizo con la convicción de que tanto ALBERTO MARULANDA POSADA como ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, obraban "de buena fe", y que ALBERTO MARULANDA POSADA usaría su capacidad de decisión sobre una o varias de las sociedades que él controla, y en particular las de nombre INGETEC, para cumplir las obligaciones resultantes.

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC11815 de 2016, de la cual fue ponente la magistrada Cabello Blanco, ha dicho:

> Es frecuente, y hasta necesario en muchas ocasiones, que las personas interesadas en la celebración de negocios jurídicos utilicen intermediarios, desde el mero nuncio o portavoz que tan solo presta el servicio de colaborar en el acto material de transmitir la voluntad del contratante –llevando el documento que la contiene o informando él directamente de la misma- hasta la representación directa, derivada de la ley o de una declaración de voluntad (apoderamiento), aneja las más de las veces a un contrato de alcances administrativos o de intermediación (mandato, trabajo, preposición, prestación de servicios profesionales, etc), declaración ésa en virtud de la cual los efectos jurídicos del acto o negocio jurídico propuesto o celebrado en nombre de quien la emite, se radican en cabeza del representado.
>
> Para que tal acto de representación cumpla los efectos que le son propios, es preciso que el representante actúe en nombre del representado dentro de los límites de sus facultades y así lo explicite, de forma que el tercero sepa quién es en verdad su eventual contratante, si el representado o el representante, y con qué facultades cuenta, para lo cual no existe una regulación que determine la forma en que tal apoderamiento y su manifestación al tercero se den. Por lo que puede inferirse que a falta de solemnidad, el apoderamiento pueda en puridad conferirse y darse a conocer incluso en forma verbal, y por esa vía puede razonablemente

concluirse que ese apoderamiento se sobrentienda en razón de particulares circunstancias, como lo pone de presente el artículo 842: "*Quién dé motivo a que se crea, conforme a las costumbres comerciales o por su culpa, que una persona está facultada para celebrar un negocio jurídico, quedará obligado en los términos pactados ante terceros de buena fe exenta de culpa".* Otra cosa serán los riesgos probatorios que se corren por la falta de un escrito en el que conste el poder otorgado.

Tanto ALBERTO MARULANDA POSADA, como ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, como MARÍA ISABEL O. de WIESNER son personas de amplísima experiencia en el mundo de los negocios. Para ellos no podía caber duda de que la autorización dada por ALBERTO MARULANDA POSADA a su hijo ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, para negociar con MARÍA ISABEL O. de WIESNER comprometía en primer término a ALBERTO MARULANDA POSADA.

Además de su experiencia en el mundo de los negocios, la convicción de ÍTACA derivaba de la presencia de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR como socio o como administrador en las diversas sociedades controladas por su padre ALBERTO MARULANDA POSADA, según se observa en los hechos 5.1.6, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.19, 5.1.21, 5.2.12, 5.2.13, y 5.2.15.

ALBERTO MARULANDA POSADA era y es el controlador de las varias sociedades INGETEC y de CATAY, y ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR aparece en ellas como socio minoritario o como administrador, esto es, como persona a quien ALBERTO MARULANDA POSADA daba confianza e instrumentos para el ejercicio de su control.

Era, pues, justificado que ÍTACA entendiera que, cuando ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR negociaba respecto de las sociedades controladas por su padre, estaba facultado para ello en los términos del artículo 842 del Código de Comercio, y de acuerdo con el postulado de la "buena fe" precontractual (artículo 863 del Código de Comercio).

Pero, sobre todo, la convicción de ÍTACA se fundaba en la carta de ALBERTO MARULANDA POSADA (Hechos 5.3.2 y 5.3.3.), en la que él instruye en forma clara y explícita a ÍTACA sobre la necesidad de entenderse con ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, para la cesión de las cuotas sociales en STO. Se observa, en los hechos siguientes, que ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR negoció con ÍTACA, sin indicar cuál sería la sociedad adquirente de las cuotas, hasta el 25 de octubre de 2019 (hecho 5.3.14, y anexo 33). Solo en ese momento comunicó que la cesionaria de las cuotas sería INGETEC I&D, sociedad representada por él. Dado el control de su padre sobre las sociedades INGETEC y CATAY, era evidente que ANDRÉS MARULANDA

ESCOBAR, al negociar sin indicar quién sería el comprador, lo hacía esperando las decisiones de su padre.

Pero ya a partir del 25 de octubre de 2019, era claro que el negocio se haría con INGETEC I&D, sociedad representada por ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR. Antes, la negociación habría podido orientarse hacia cualquiera de las sociedades que controla ALBERTO MARULANDA POSADA. A partir del 25 de octubre, la responsabilidad por las decisiones de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR corresponde, no solo a ALBERTO MARULANDA POSADA, que había dado motivos para que se entendiera que ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR negociaba en su nombre, sino, también, a la sociedad que éste último representaba -INGETEC I&D- y para la cual, en los documentos posteriores, buscaba adquirir las cuotas de interés social de ÍTACA en STO.

De nuevo, la coincidencia entre las acciones de ALBERTO MARULANDA POSADA y ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR se observa en los hechos 5.3.51 y 5.3.52, que relatan cómo, casi al mismo tiempo, el 11 de agosto del 2020 ALBERTO MARULANDA POSADA confirma su decisión de no trasladar la oferta de cesión de cuotas hecha por ÍTACA a CATAY, y ANDRÉS MARULANDA POSADA, informa el 14 del mismo mes que no continuará con las negociaciones. Es del caso anotar, además, que el motivo invocado por ALBERTO MARULANDA POSADA -la negativa a permitir que la junta de CATAY conozca la negociación- refleja la misma reticencia expresada durante las negociaciones, de diversas maneras, por ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR.

ALBERTO MARULANDA POSADA era representante legal de INGETEC I&D SAS en el año 2019, y su hijo ANDRÉS en el año 2020. De modo que, por ser ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR representante legal de INGETEC I&D, también esta sociedad debe responder, con MARULANDA POSADA, por los acuerdos que alcanzaron ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR e ÍTACA respecto de la cesión a INGETEC I&D de las cuotas de interés social de ÍTACA en STO.

ÍTACA obró de buena fe, exenta de culpa,

(i) a partir de un documento escrito por ALBERTO MARULANDA POSADA, en el que instruía a MARÍA ISABEL O. de WIESNER, a entenderse con ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR;

(ii) a partir de la observación de las funciones de confianza que ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR cumplía en otras sociedades en las que su padre tiene capacidad de decisión;

(iii) por la conducta misma de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR durante las negociaciones; y

(iv) por el cargo que ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR tenia como gerente principal de INGETEC I&D.

6.4.-PRETENSIÓN SEXTA: NEGOCIO SIN CONDICIONES DISTINTAS A LAS DE LA LEY.

La **pretensión sexta** se funda en los artículos 196, 260, 261, 362, 363, 364, 365, 366, 842, 861 y 863 del Código de Comercio, y en las normas concordantes.

Los sustentos de hecho de esta pretensión se encuentran en el Capítulo 5 de esta demanda, HECHOS, y principalmente entre los hechos 5.3.2 a 5.3.50, ambos inclusive.

El contrato social de STO, consta en la escritura 3765 de 26 de noviembre de 1976, de la Notaría segunda del Círculo de Bogotá; y el negocio de cesión de cuotas de interés social a terceros está incorporado a los estatutos respectivos, en cuanto el artículo OCTAVO, en el literal "g", encomienda a la Junta de socios las funciones que la Ley atribuye a ese órgano, entre las cuales, según los artículos 360, 362 y 365 del CdC figuran todas las reformas estatutarias derivadas de la cesión de cuotas de interés social a terceros.

Ante todo, en la pretensión **sexta**, se busca que se declare que las negociaciones para la cesión de cuotas de interés social de ÍTACA en STO, en las que se confió en el poder decisorio de ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA sobre CATAY e INGETEC I&D, y luego, <u>también</u> en la condición de representante legal de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR en INGETEC I&D, produjeron un acuerdo, **en forma precisa y documentada, no solo sobre los elementos esenciales** -objeto, precio, plazo- (artículos 363 y 845 del Código de Comercio) sino, también, sobre **la mayoría de los accidentales**, para la cesión de las cuotas sociales ÍTACA en STO a INGETEC I&D.

Se busca que se declare, igualmente, que la celebración del negocio con INGETEC I&D estaba sujeta solo a la condición de que (i) se diera a CATAY el derecho a celebrar el negocio en primer término, y a rechazarlo; y, por supuesto, (ii) a la condición de que la Junta de STO le diera su aprobación final. El acuerdo era, pues, vinculante, para ALBERTO MARULANDA POSADA y para su subordinada INGETEC I&D, en los términos de los artículos 363, 845 y 861 del Código de Comercio.

6.5.-PRETENSIÓN SÉPTIMA. ALBERTO MARULANDA POSADA VIOLA SUS OBLIGACIONES Y LOS DERECHOS DE ÍTACA AL NEGARSE A DAR TRASLADO DE LA OFERTA DE ÍTACA A CATAY Y AL FRUSTRAR LAS NEGOCIACIONES ACORDADAS CON INGETEC I&D.

La **pretensión SÉPTIMA** se funda en los artículos 95, numeral 1, de la Constitución Política; 196, 200 260, 261, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 830, 861 y 863 del Código de Comercio; 23, 24 y 25 de la Ley 222, 42 y 43 de la Ley 1258 de 2008 y concordantes; 252 de la ley 1450 de 2011; 1746 del Código Civil; y 20 del CGP, numeral 4.

Los sustentos de hecho de esta pretensión se encuentran en el Capítulo 5 de esta demanda, HECHOS, y, principalmente, entre los hechos 5.3.2 a 5.3.53, ambos inclusive.

Esta pretensión busca que se declare que ALBERTO MARULANDA POSADA violó varias de sus obligaciones legales y estatutarias (i) al tratar de impedir que los minoritarios de CATAY conocieron la oferta de cesión de cuotas de interés social de ÍTACA en STO, dirigida a CATAY; (ii) al negarse a dar traslado de la oferta; y (iii) al llevar a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, su representante aparente, y representante de INGETEC I&D, a notificar a ÍTACA, con un pretexto infundado, que habían terminado las negociaciones con INGETEC I&D.

La declaración que se pide debe servir para fundar una declaración posterior de responsabilidad directa contra ALBERTO MARULANDA POSADA, como administrador de STO, por su conducta ilegal al negarse a dar traslado a CATAY, sociedad controlada por él, de la oferta de cesión de cuotas de interés social que ÍTACA le hacía, para cumplir con los requisitos legales sobre derecho de preferencia a que estaba condicionada esa negociación.

A falta de estipulación en contrario en los estatutos de STO, el artículo 363 del Código de Comercio obligaba a ÍTACA a ofrecer a CATAY las cuotas de interés social en STO, que deseaba ceder, como condición previa para poder cederlas a INGETEC I&D. ALBERTO MARULANDA POSADA estaba obligado a dar traslado inmediato de la oferta a CATAY (artículo 363 del C.Co.), pero incumplió esa obligación asumiendo facultades de contralor de legalidad del negocio, que ni la Ley ni los estatutos le confieren.

No había conflicto de interés en que ALBERTO MARULANDA POSADA, representante legal de STO, al recibir de MARÍA ISABEL O. de WIESNER la oferta de cesión de cuotas de interés social de ÍTACA en STO, orientara el negocio hacia una sociedad controlada por él, INGETEC I&D, pues, en todo caso, el negocio tendría también que ofrecerse a CATAY, igualmente controlada por él, y ésta sociedad tendría que aprobar en la Junta de STO el ingreso de INGETEC I&D y la consiguiente reforma estatutaria (artículos 362 y 365 del CdC). El negocio, era, pues, conocido de los representantes legales de todas las sociedades participantes, y la Junta de STO tendría que dispensar **finalmente** del conflicto de interés existente, al autorizar el ingreso a la sociedad del nuevo socio INGETEC I&D (artículo 365 del C.Co.).

El negocio, ventajoso para INGETEC I&D, había sido convenido en todos sus aspectos esenciales -objeto, precio y plazo- (artículos 363 y 845 del C.Co.) y en algunos de detalle. Sin embargo, ALBERTO MARULANDA POSADA resolvió bloquearlo con un argumento infundado, en el último momento.

Los antecedentes del negocio, las intervenciones de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, así como las razones que ALBERTO MARULANDA POSADA dio, por escrito, para impedir el traslado de la oferta de ÍTACA a CATAY, demuestran que el único motivo por el cual ALBERTO MARULANDA POSADA adoptó esa decisión, fue impedir que los socios minoritarios de CATAY se enteraran de las condiciones en las cuales la sociedad INGETEC I&D, controlada por él, pagaría la adquisición de esas cuotas.

En efecto, una vez logrado el acuerdo sobre el negocio, ALBERTO MARULANDA POSADA promovió, a través de ANDRÉS MARULANDA POSADA, a quien había autorizado para adelantar el negocio, un interés propio, contrario a la naturaleza del contrato de cesión de cuotas sociales, que consistía en limitar el ejercicio del "derecho de preferencia" de CATAY.

Puesto que ALBERTO MARULANDA POSADA podía obtener con facilidad la decisión que considerara conveniente a sus intereses cuando CATAY usara el "derecho de preferencia", el intento que hizo de limitar ese uso -para lo cual él y su hijo ANDRÉS consideraron, inclusive, transformar a CATAY en una sociedad de tipo SAS- demuestra su interés en impedir que los socios minoritarios de CATAY, distintos de los herederos de CARLOS S. OSPINA DELGADO (QEPD), conocieran los detalles del negocio y manifestaran su opinión en la Junta de CATAY, o usar la información en futuras negociaciones con él.

Y puesto que CATAY no podía condicionar, por sí misma, la forma en la que se le reconociera el "derecho de preferencia", la única manera que ALBERTO MARULANDA POSADA tenía para seguir adelante con el negocio y limitar el ejercicio del "derecho de preferencia" de CATAY, sin consentimiento de ÍTACA, era abusando de sus facultades como representante legal de STO. Y esto fue lo que hizo.

Y así, coincidiendo con lo dicho en el párrafo anterior, ALBERTO MARULANDA POSADA faltó a sus deberes como representante legal de STO, al emplear pretextos legales para promover la limitación al ejercicio del "derecho de preferencia" de CATAY, negándose a transmitir a esta sociedad la oferta completa de cesión de cuotas sociales que había hecho ÍTACA, e invocando como motivo la revelación que se hacía en esa oferta del negocio acordado con INGETEC I&D.

ÍTACA ofreció asumir la responsabilidad legal por el trámite que pedía, precisamente porque tenía la seguridad de que éste era legal (Anexo 50, hecho 5.3.46). Es preciso observar, en conclusión, que, con su conducta, ALBERTO

MARULANDA POSADA aprovechó en forma indebida su posición de representante legal de STO, para buscar un interés ajeno al de STO, en vez de limitarse a transmitir la oferta, y actuar a través del ejercicio legítimo de su capacidad de decisión sobre CATAY o INGETEC I&D.

El hecho de que ÍTACA quisiera cumplir con su interpretación de la ley y revelar a la Junta de CATAY la existencia y características del negocio acordado con INGETEC I&D, hubiese coincidido con la negativa a "seguir adelante", expresada por ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, vocero de ALBERTO MARULANDA POSADA en la negociación y representante legal de INGETEC I&D, revela el ilegal alcance que tenían sobre el acuerdo logrado la posición y el extraño interés de ocultamiento de ALBERTO MARULANDA POSADA, representante legal de STO.

Sobra advertir que si, en algún momento, la negociación hubiese estado condicionada a un acuerdo con los bancos, el deber de obrar "de buena fe", a que se refiere el artículo 863 del Código de Comercio, habría obligado a ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, vocero de ALBERTO MARULANDA POSADA y representante legal de INGETEC I&D, a incluir esa condición, en forma clara y expresa, en los documentos que las partes intercambiaron en marzo y julio de 2020, identificados en la pretensión **sexta**.

El artículo 363 del Código de Comercio establece que "salvo estipulación en contrario, el socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a los demás socios por conducto del representante legal de la compañía, quien les dará traslado inmediatamente, a fin de que dentro de los quince días siguientes manifiesten si tienen interés en adquirirlas. (…)" (El subrayado es mío)

Los estatutos sociales de STO no contienen ninguna estipulación respecto al ejercicio del derecho de preferencia, por lo que la cesión de cuotas de esta sociedad se rige por los artículos 362, 363, 364, 365 y 366 y 367 del Código de Comercio.

El señor ALBERTO MARULANDA POSADA de manera reiterada se negó a dar traslado a la oferta de cesión de derechos de ÍTACA a CATAY, presentada a través de la comunicación del 23 de julio de 2020. Primero, se negó al traslado de oferta a través de carta del 29 de julio de 2020, presentando argumentos falsos y por fuera de la ley (Hecho 5.3.41 y Anexo 49). Luego, se negó nuevamente al traslado de la oferta mediante comunicación del 11 de agosto de 2020, a pesar de que la representante de ÍTACA le solicitara expresamente transmitir inmediatamente la oferta (Hechos 5.3.44 y 5.3.45, y Anexos 50 y 55)

El señor MARULANDA POSADA se negó a dar traslado inmediato a la oferta justificando su decisión en argumentos falsos, sin sustento legal y adjudicándose facultades que no tiene. Mediante la carta del 29 de julio de 2020 (Anexo 49), afirmó que como en la comunicación se evidencia que ya se había dado una intención de

adquisición de las cuotas ofertadas por parte de un tercero, no se había agotado lo establecido por el artículo 363 del Código de Comercio, y que por ello se estaba desconociendo el derecho de preferencia. Además, afirmó que al representante legal le corresponde verificar que la comunicación y el procedimiento de cesión de cuotas se ajuste a la ley.

En la carta del 11 de agosto de 2020 (Anexo 55), el señor ALBERTO MARULANDA POSADA afirmó nuevamente que, porque ÍTACA había iniciado ya negociaciones con un tercero sobre las cuotas sociales que posee en STO, él no podía dar traslado de la oferta a CATAY pues la oferta no cumplía con el artículo 363 del Código de Comercio. Esto, a pesar de que se le había explicado que, precisamente, lo que ÍTACA intentaba era cumplir con dicho artículo, ofreciendo su participación a CATAY para que ejerciera su "derecho de preferencia".

El artículo 363 del Código de Comercio establece un deber al representante legal de "**dar traslado inmediatamente**" de la oferta, y no condiciona dicha obligación a nada distinto que la recepción del mensaje que le dirija el socio que pretenda ceder las ofertas. La ley no le otorga al representante legal de la sociedad la facultad de abstenerse de hacer el traslado. Tampoco la ley le impone un deber de cuidar y responder por la legalidad del negocio: éste es un asunto que se debe resolver entre las partes del negocio, que son el cedente y el cesionario de las cuotas sociales. Por eso MARULANDA POSADA no podía negarse a dar traslado a la oferta presentada por ÍTACA, y al hacerlo violó el artículo 363 del Código de Comercio.

Además, no existe norma que prohíba a los socios negociar su participación en la sociedad. Lo que sí exige el Código de Comercio es que el socio que tenga la intención de vender su participación cumpla con el artículo 363 para garantizar a los demás socios el "derecho de preferencia". Esto no implica, de ninguna manera, que el socio no pueda iniciar negociaciones condicionadas con terceros para vender su participación en la sociedad, si quienes pueden ejercer el "derecho de preferencia" renuncian a él.

Por lo anterior, es claro que el señor MARULANDA POSADA violó el artículo 363 del Código de Comercio ya que no dio traslado a la oferta de cesión de cuotas presentada por ÍTACA.

Quería, pues, MARULANDA POSADA burlar el derecho que la Ley confiere a los socios de CATAY de conocer las condiciones completas en las cuales se hacía a CATAY la oferta de cuotas de interés social en STO. Ya sea que ellos tuvieran o no la capacidad de determinar las decisiones de CATAY en un sentido o en otro, el hecho es que la ley les daba la facultad de conocer con transparencia el negocio que se estaba haciendo. El solo hecho de obstaculizarles el conocimiento completo del negocio era una violación de MARULANDA POSADA a sus deberes de obrar de buena fe y con lealtad, y sin abuso del derecho propio.

Pero ALBERTO MARULANDA POSADA, como los hechos demuestran, quería mantener a los socios minoritarios de CATAY sin información para una eventual negociación posterior de sus cuotas en CATAY, influida por la negociación de las cuotas de ÍTACA en STO. Es decir, **prefirió su interés propio en una negociación futura** con tales socios, antes que el interés de STO en facilitar a sus socios el ejercicio de sus derechos.

No hubo "buena fe" ni "lealtad" de ALBERTO MARULANDA POSADA, al frustrar a un socio -ÍTACA- su derecho a ceder las cuotas de interés social en STO, solo para proteger su interés en adquirir ventajas de la ignorancia de los socios minoritarios de CATAY en una eventual negociación posterior.

El negocio nunca estuvo condicionado a una financiación bancaria, como se observa, en forma clara, en los documentos en los cuales ambas partes estuvieron de acuerdo antes de que ÍTACA formulara su oferta a CATAY. Si tal condición hubiese existido habría sido deber de buena fe de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, como representante legal de INGETEC I&D, hacerla constar en los documentos con los que participó en el acuerdo negocial. Y no hubo "buena fe" de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, vocero de ALBERTO MARULANDA POSADA y representante legal de INGETEC I&D, al invocar este pretexto para afirmar que "mal haría en seguir adelante en estas circunstancias" con las negociaciones.

La conducta de ALBERTO MARULANDA POSADA violó, pues, los deberes de "buena fe" y "lealtad" que le imponían, entre otros, el artículo 23 de la Ley 222; y la prohibición de obrar en condiciones de conflicto de interés, que contiene la misma norma.

6.6.-PRETENSIÓN OCTAVA. -LA CONDUCTA DE ALBERTO MARULANDA POSADA Y LA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE INGETEC I&D CAUSARON DAÑOS Y PERJUICIOS A ÍTACA.

La **pretensión OCTAVA** se funda en los artículos 95, numeral 1, de la Constitución Política; 200, 260, 261, 362, 363, 364, 365, 366, 830, 861 y 863 del Código de Comercio; 23, 24 y 25 de la Ley 222, 42 y 43 de la Ley 1258 de 2008 y concordantes; 252 de la ley 1450 de 2011; 1746 del Código Civil; y 20 del CGP, numeral 4.

Los sustentos de hecho de esta pretensión se encuentran en el Capítulo 5 de esta demanda, HECHOS, y principalmente a partir del hecho 5.3.2, pero, sobre todo, en el numeral 5.3.53.

En la pretensión **octava** la demanda identifica, primero, la naturaleza de los daños que ocasionó a ÍTACA el interés de ALBERTO MARULANDA POSADA de ocultar

la negociación a los socios minoritarios de CATAY, limitando el alcance del "derecho de preferencia" de esta sociedad, negándose a transferir la oferta hecha por ÍTACA, y concluyendo con un pretexto sin fundamento las negociaciones entre ÍTACA e INGETEC I&D, a través de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, su vocero y representante legal de INGETEC I&D

En general, tales daños consisten en poner de relieve la arbitrariedad con la cual ALBERTO MARULANDA POSADA, representante legal de STO, y el socio CATAY, disponen de los derechos de otros socios. La manifestación de esa arbitrariedad impide que cualquier tercero, ajeno al control de MARULANDA POSADA, quiera vincularse a STO y, de hecho, implica que la única manera de que ÍTACA pueda ejercer su derecho a negociar sus cuotas en STO sea plegándose a la voluntad de MARULANDA POSADA. E implica que, si no hay un oportuno remedio judicial, una suerte parecida espera a los socios minoritarios de CATAY.

El daño patrimonial a ÍTACA se manifiesta, sobre todo, en cuanto le impide terminar de ejecutar el negocio acordado, recibir el precio, y recibir los rendimientos de los recursos respectivos. ÍTACA tenía derecho a recibir este precio porque, habiendo llegado a un acuerdo previo con INGETEC I&D, el precio se recibiría al cerrar el negocio con CATAY, o con INGETEC I&D. Se estima en la demanda que los perjuicios de ÍTACA ascienden, por estos conceptos, a no menos de $7.375 millones, actualizados desde el 14 de agosto de 2020 hasta el día que se haga el pago, más intereses.

El hecho 5.3.53 enumera, en forma precisa, los daños y perjuicios que sufrió ÍTACA por las conductas de ALBERTO MARULANDA a las que se refiere la pretensión séptima: conductas éstas que, en una etapa posterior, fueron acolitadas por ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, representante legal de INGETEC I&D.

En el funcionamiento, y en el valor económico de los aportes sociales a una sociedad de responsabilidad limitada, influyen en forma sustancial dos normas del Código de Comercio, a saber, los artículos 362 y 363 del mismo. Ambas normas fueron violadas por MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, por lo que sus socios, fueron víctimas de daños y perjuicios, que MARULANDA POSADA debe indemnizarles.

El artículo 362 del Código de Comercio establece que "los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas. Cualquier estipulación que impida este derecho, se tendrá por no escrita."

La posibilidad de ceder las cuotas de un socio en la sociedad es una parte sustancial del valor de dichas cuotas, puesto que permite a cada socio permanecer en la sociedad mientras ésta dé unas utilidades satisfactorias, o ceder sus cuotas y retirarse de ella si considera que su inversión puede ser más rentable en otra parte.

Cuando un inversionista queda atado a una inversión en una sociedad, el valor de su inversión se congela alrededor de los rendimientos de la sociedad, de modo que si estos son inferiores a los del mercado habrá una desvalorización inevitable de la inversión. Y, por supuesto, el derecho a ceder las cuotas vale, también, en la medida en que haya compradores eventuales para ellas en el mercado.

Cuando ALBERTO MARULANDA POSADA comenzó a usar los bienes de STO para arrendarlos a sociedades controladas con él, sin contar con la autorización de su Junta y, más aún, contra la voluntad expresa de ÍTACA, ésta advirtió que la rentabilidad de su inversión estaba condicionada a la voluntad del administrador, y tomó la mejor decisión posible: vender sus cuotas para llevarse su inversión a otra parte. La cesión de las cuotas de interés social de ÍTACA fue, pues, una consecuencia lógica de los abusos de ALBERTO MARULANDA POSADA en STO, al obrar en condiciones de conflicto de interés.

En este caso está probado que el señor ALBERTO MARULANDA POSADA le negó a ÍTACA su derecho a la libre negociación de sus cuotas sociales en STO. La única forma que tiene ÍTACA para ceder su participación es cumpliendo el artículo 363 del Código de Comercio, el cual establece que para comercializar su participación en STO, debe primero ofertar dicha participación a través del representante legal de la sociedad. Si el representante legal se niega a dar traslado de la oferta presentada al único otro socio de STO, no existe otra forma que ÍTACA pueda comercializar sus cuotas cumpliendo con el procedimiento establecido por la ley.

Los daños y perjuicios que se causaron a ÍTACA tienen una expresión monetaria fácil de determinar, pues llevaron a que esta sociedad no pudiera realizar la venta pactada en $7.375 millones de pesos, no pudiera aprovechar el dinero acordado para invertirlo en forma lucrativa y, sobre todo, a que se hiciera mucho más difícil hacia adelante hacer una negociación con cualquier persona distinta de ALBERTO MARULANDA POSADA o las sociedades que él controla.

Las condiciones en las cuales ALBERTO MARULANDA POSADA y su hijo ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, representante legal de INGETEC I&D, manejaron y frustraron la negociación con ÍTACA, hacen que los derechos de ÍTACA en STO perdieran virtualmente todo su valor para una negociación con terceros.

La causa **directa e inmediata** de los perjuicios derivados de la negativa a dar traslado a CATAY de la oferta de ÍTACA, es la voluntad de ALBERTO MARULANDA POSADA, cuando dificulta que los socios minoritarios de CATAY conozcan los detalles del negocio que se haría con INGETEC I&D si CATAY no aceptara la oferta; y, sobre todo, cuando niega el traslado de la oferta de ÍTACA a CATAY para la cesión de cuotas sociales en STO.

La causa **directa e inmediata** de los perjuicios derivados de la negativa de INGETEC I&D **en continuar** con el negocio corresponde a INGETEC I&D, en cuanto ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR inventó un pretexto falso para hacerlo, en lugar de atribuir la decisión, como debía, a la conducta de ALBERTO MARULANDA POSADA.

ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR puso de presente, con su conducta, que el negocio con INGETEC I&D no podría continuar sin la voluntad de ALBERTO MARULANDA POSADA. Pero en vez de reconocerlo, agravó la situación al atribuir su decisión a una condición inexistente de financiamiento bancario. Fue así como ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, representante legal de INGETEC I&D, escribió a ÍTACA inventando el pretexto de la financiación bancaria para afirmar que "mal haría en seguir adelante" con el negocio acordado.

6.7.-PRETENSIÓN NOVENA. AL HACER IMPOSIBLE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS QUE DEPENDÍA EL NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE INGETEC I&D, ALBERTO MARULANDA POSADA ESTÁ OBLIGADO A CONSEGUIR QUE ESTA OBLIGACIÓN SE CUMPLA E INGETEC I&D ESTÁ OBLIGADA A COLABORAR.

La **pretensión novena** se funda, de nuevo, en los artículos 22, 23 y 24 de la Ley 222 de 1995; en los artículos 1507, 1537, 1538, 1542 y 1602 del Código Civil, y en los artículos 362, 363, 845, 861, 863 y 871 del Código de Comercio y concordantes.

Los sustentos de hecho de esta pretensión se encuentran en el Capítulo 5 de esta demanda, HECHOS, y principalmente a partir del hecho 5.3.2, pero, sobre todo, en el numeral 5.3.53.

La pretensión **novena** se funda, en especial, en los artículos 1537, 1538 y 1542 del Código Civil, que son del siguiente tenor:

> ARTÍCULO 1537. Si la condición suspensiva es o se hace imposible, se tendrá por fallida. A la misma regla se sujetan las condiciones cuyo sentido y el modo de cumplirlas son enteramente ininteligibles.
>
> Y las condiciones inductivas a hechos ilegales o inmorales.
>
> La condición resolutoria que es imposible por su naturaleza, o ininteligible, o inductiva a un hecho ilegal o inmoral, se tendrá por no escrita.
>
> ARTÍCULO 1538. La regla del artículo precedente, inciso 1o, se aplica aún a las disposiciones testamentarias.

> Así, cuando la condición es un hecho que depende de la voluntad del asignatario y de la voluntad de otra persona, y deja de cumplirse por algún accidente que la hace imposible, o porque la otra persona de cuya voluntad depende no puede o no quiere cumplirla, se tendrá por fallida, sin embargo, de que el asignatario haya estado, por su parte, dispuesto a cumplirla.
>
> Con todo, si la persona que debe prestar la asignación, se vale de medios ilícitos para que la condición no pueda cumplirse, o para que la otra persona, de cuya voluntad depende en parte su cumplimiento, no coopere a él, se tendrá por cumplida.
>
> ARTÍCULO 1542. No puede exigirse el cumplimiento de la obligación condicional sino verificada la condición totalmente.
>
> Todo lo que se hubiere pagado antes de efectuarse la condición suspensiva, podrá repetirse mientras no se hubiere cumplido.

Los artículos 1538 y 1542 del Código Civil, enuncian un principio según el cual, si la persona que puede resultar obligada al cumplirse una condición se vale de medios ilícitos para que la condición no pueda cumplirse, o para que la otra persona, de cuya voluntad depende en parte su cumplimiento, no coopere a él, la condición se tendrá por cumplida.

Cuando ALBERTO MARULANDA POSADA impidió que la sociedad CATAY, que él controla, se manifestara sobre la oferta de ÍTACA, hizo imposible el cumplimiento de la condición de que pendía la celebración del contrato entre ÍTACA e INGETEC I&D, esto es, la condición de que ÍTACA hubiese cumplido previamente con presentar una oferta a CATAY, y que ésta la rechazara. Por lo tanto, de acuerdo con la regla que contienen los artículos 1537, 1548, y 1542 del Código Civil, y el artículo 863 del Código de Comercio, la condición de la que pendía la celebración del contrato entre INGETEC I&D e ÍTACA se cumplió, y el contrato debe celebrarse, como parte de la reparación debida a ÍTACA, según el artículo 863 del Código de Comercio y las normas concordantes.

La pretensión novena se limita, pues, a pedir la aplicación de tales normas al caso concreto, con una declaración de que, como ALBERTO MARULANDA POSADA, al negarse a dar traslado a CATAY de la oferta de cesión de cuotas sociales, violó la ley e hizo imposible las condiciones de las cuales dependía el negocio, tal condición se entiende cumplida y es obligatorio celebrar el negocio como parte de la indemnización de perjuicios.

ALBERTO MARULANDA POSADA no puede cumplir, por sí mismo, la obligación que se hizo exigible -celebrar el acuerdo de cesión-, esto es, ha hecho una estipulación por otro, en los términos del artículo 1507 del Código Civil. Pero, como controla a INGETEC I&D, tiene la obligación de usar su control sobre esta sociedad para que ratifique la obligación que ALBERTO MARULANDA POSADA le ha creado; y para que, en consecuencia, INGETEC I&D , con la colaboración de CATAY, celebre el contrato que estaba planeado para ella.

De la misma manera, corresponde a INGETEC I&D , por razón del artículo 861 del Código de Comercio colaborar con ALBERTO MARULANDA POSADA para que el acuerdo de cesión culmine en la Junta de socios de STO en la forma prevista en la Ley.

6.8.- PRETENSIÓN DÉCIMA. -SUBSIDIARIA DE LA NOVENA. CONDENA AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE HACER, E INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS.

La **pretensión DÉCIMA, subsidiaria de la NOVENA,** se funda en los artículos 95, numeral 1, de la Constitución Política; 200, 260, 261, 362, 363, 364, 365, 366, 830, 861 y 863 del Código de Comercio; 1610 del Código Civil; 23 y 24 de la Ley 222, 42 y 43 de la Ley 1258 de 2008 y concordantes; 252 de la ley 1450 de 2011; 1746 del Código Civil; y 20 del CGP, numeral 4. También en el principio de "reparación integral y equidad" (artículo 283 del CGP), así como en los artículos 1613 y 1614, y concordantes del Código Civil.

Los sustentos de hecho de esta pretensión se encuentran en el Capítulo 5 de esta demanda, HECHOS, y principalmente a partir del hecho 5.3.2, pero, sobre todo, en el numeral 5.3.53.

La referencia al 14 de agosto del 2020, que aparece en esta pretensión, se explica por ser la fecha en la que ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, por escrito, indica que "mal haría en seguir adelante" con el negocio convenido (hecho 5.3.52), y consuma, de ese modo, el incumplimiento de lo acordado, no solo con la autorización de su padre ALBERTO MARULANDA POSADA, sino como representante legal de INGETEC I&D.

Es preciso tener en cuenta que los daños y perjuicios ocasionados a ÍTACA, no consisten solo en los que pueden observarse *prima facie*, como son, haber dejado de recibir el precio y los rendimientos que este podría producir. Porque, además, se relacionan, en buena parte, con la dificultad que las conductas de ALBERTO MARULANDA POSADA crean a ÍTACA para conseguir cesionarios ajenos por completo a las sociedades que MARULANDA POSADA controla. Algunos de esos daños no pueden estimarse en términos económicos, lo que no implica que no sean ciertos.

Ha habido una desvalorización sustancial de las cuotas sociales de ÍTACA en STO, pues la conducta de ALBERTO MARULANDA POSADA implica que ITACA no pueda ceder sus cuotas sociales sino cuando MARULANDA POSADA, atribuyéndose una facultad que la ley no le ha dado, resuelva que puede transmitir la oferta respectiva a los otros socios de STO

De modo que las conductas de ALBERTO MARULANDA POSADA implican que el derecho de negociar libremente sus cuotas de interés social en STO, que otorga a ÍTACA el artículo 362 del Código de Comercio, **ha sido dañado en una forma radical,** hasta el punto de que la reparación integral, en cuanto los daños y perjuicios pueden estimarse en términos económicos, debe consistir, **por lo menos**, en que los causantes del daño celebren las operaciones que estaban previstas cuando se violaron los derechos de ÍTACA, y que ésta encontraría ahora muy difíciles de celebrar con terceros.

A lo anterior, debe añadirse el hecho de que, dada la forma en la que están físicamente integrados los bienes sobre los cuales recaen los derechos de ÍTACA, resultaría muy difícil encontrar un comprador distinto de quienes ocupan esos bienes, empresas controladas por MARULANDA POSADA, si fueran a venderse en el mercado.

Por todas estas razones, la indemnización que se pide consiste, ante todo, en que se ordene a ALBERTO MARULANDA POSADA usar su capacidad de decisión sobre INGETEC I&D para que se celebre el negocio de cesión de cuotas de interés social en STO que había sido acordado con ella; y que, si ello no es posible, se entregue el valor acordado a ÍTACA. Todo con actualización de valor e intereses, y sin perjuicio de que ÍTACA haga cuanto esté a su alcance, y se le pida, para lograr el traslado a INGETEC I&D de sus cuotas en STO.

ALBERTO MARULANDA POSADA, como administrador de STO, está obligado, según el artículo 200 del Código de Comercio y las normas concordantes, a responder por los perjuicios que por dolo o culpa ocasionó a ÍTACA. Puesto que, como se ha explicado, ALBERTO MARULANDA POSADA incumplió su deber legal de dar traslado inmediato de la oferta de ÍTACA a CATAY, y extralimitó sus funciones legales y estatutarias asumiendo la facultad de controlar la legalidad de la oferta de ÍTACA, **su culpa se presume**.

A su vez, el artículo 861 del C.Co. obliga a INGETEC I&D a celebrar el contrato prometido bajo condición.

El artículo 1610 del Código Civil, permite exigir tanto a ALBERTO MARULANDA POSADA, como a INGETEC I&D, el cumplimiento de la obligación de hacer que la ley o los acuerdos precontractuales les imponían, esto es, que se ejecute el hecho

prometido (la celebración del contrato) o que se le indemnicen los perjuicios, en particular, el pago en dinero.

El artículo 1610 del Código Civil, permite, igualmente, pedir la indemnización por la mora.

6.9.-PRETENSIÓN UNDÉCIMA. CONFLICTO DE INTERÉS EN LOS ARRENDAMIENTOS.

La **pretensión UNDÉCIMA**, se funda en los artículos 22, 23, 24 (200 del C.Co.) y 25 de la Ley 222 de 1995 y, en particular, en el inciso final del artículo 25; y en el artículo 863 del Código de Comercio.

Los hechos que dan sustento a esta pretensión se relatan en el Capítulo 5, HECHOS, con los numerales 5.2.1 a 5.2.22, ambos inclusive.

Esta pretensión se refiere a la contravención al régimen de conflictos de interés en los que incurrió ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, al celebrar y renovar contratos de arrendamiento con sociedades en las que él era representante legal o sobre las cuales tenía capacidad de decisión derivada de su participación en el capital social, o de ser su representante legal. Esos contratos, y la forma en la que se ejecutaron, tolerando atrasos y dando financiamientos concesionales a las subordinadas de ALBERTO MARULANDA POSADA, dañaron, en primer lugar, a STO; pero, en forma indirecta, a los accionistas de STO, como ÍTACA.

MARULANDA POSADA, de acuerdo con la ley, estaba en la obligación de poner de presente, en forma explícita y directa, ante la Junta de STO, su conflicto de interés en la celebración de los contratos aludidos, para que la Junta, en la misma forma explícita, los allanara o los sostuviera. Pero no procedió así.

No puede usar MARULANDA POSADA, como disculpa, el que la señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER hubiera hecho unas críticas a las tasas de interés que se obtenían de los arrendatarios incumplidos, o a asuntos semejantes, y que tales críticas hubieran sido atendidas total o parcialmente. La señora MARÍA ISABEL O. de WIESNER no es abogada, y aunque siempre insistió en sus críticas al conflicto de intereses con el que actuaba MARULANDA POSADA, su referencia a una de las manifestaciones del conflicto, y su posterior subsanación eventual, no pueden tomarse como una dispensa a los deberes específicos de MARULANDA POSADA, que le debieron ser advertidos por la persona que fungía como abogada de la empresa.

Por lo demás, el Sr. Juez, al analizar la conducta dolosa o culposa de MARULANDA POSADA, debe tener en cuenta su oposición, tanto en CATAY como en STO, a la obtención de avalúos comerciales del edificio, contrariando, de esa

manera, la solicitud de accionistas en STO y CATAY (Hechos 5.3.5, 5.3.7, 5.3.8, 5.3.9, 5.4.7).

La doctrina colombiana ha sido pacífica al señalar cómo, en principio, existe un conflicto de interés cuando una persona a la cual se ha confiado la capacidad de administrar bienes de terceros, usa esa capacidad para celebrar contratos consigo mismo o con personas naturales o jurídicas a las que él tiene un deber de cuidado o promoción.

El artículo 23 de la ley 222 de 1995 establece que "los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados."

La Superintendencia de Sociedades, en su publicación "Guía Práctica para Administradores" define el deber de lealtad como: "el actuar recto y positivo que le permite al administrador realizar cabal y satisfactoriamente el objeto social de la empresa, evitando que en situaciones en las que se presenta un conflicto de sus intereses se beneficie injustamente a expensas de la compañía o de sus socios".

Además, el numeral 7 del citado artículo 23 de la Ley 222 establece que los administradores deberán: "abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas" (El subrayado es mío)

La ley colombiana no define qué se entiende como conflicto de interés. Por ello, la Superintendencia de Sociedades ha establecido que le corresponde a cada juez determinar cuándo existen circunstancias que puedan activar la regla del numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995.[5]

Como criterio general, la Superintendencia ha establecido que el análisis que haga el juez deberá establecer si el administrador "cuenta con un interés que pueda nublar su juicio objetivo en el curso de una operación determinada. Para el efecto, deben acreditarse circunstancias que representen un verdadero riesgo de que el discernimiento del administrador se vea comprometido".[6]

[5] Superintendencia de Sociedades. Superintendencia Delegada para Procedimientos Mercantiles. Sentencia N° 800-26 de 13 de abril del 2016. Rad: 2016-01-117407

[6] Superintendencia de Sociedades. Superintendencia Delegada para Procedimientos Mercantiles. Sentencia No. 800-85 de 8 de julio del 2015.

En esta demanda he acreditado múltiples circunstancias que demuestran que el señor MARULANDA POSADA realizó operaciones como administrador de STO con un claro interés personal, sin tener en cuenta que, al paso que las sociedades arrendatarias estaban todas bajo su control y el de su familia, en STO hay intereses de otras personas -ITACA y los socios minoritarios de CATAY, cuyo consentimiento ha debido conseguirse, pues ellas, mejor que él, pueden apreciar qué es lo que les conviene.

Los hechos más claros son (i) la firma del contrato de arrendamiento del 30 de septiembre de 2016 (Anexo 21); (ii) la forma en la que se evadió el cumplimiento de las normas sobre procedimiento para superar conflicto de interés, en la Junta del 21 de marzo de 2017, aprovechando que la representante de ÍTACA en la reunión no es abogada, y (iii) la suscripción, aprobada de esa manera en tal Junta, del Otrosí No. 1 del 21 de marzo de 2017, sobre el mismo contrato de arrendamiento (Anexo 23), en los que el señor MARULANDA POSADA actuó como representante tanto del arrendatario como del arrendador; y (iv) la reticencia a obtener un avalúo profesional e independiente del inmueble.

El simple hecho de representar a las dos partes en un contrato, cuando una de las partes puede tener intereses y apreciaciones distintas a las de la parte que controla MARULANDA POSADA, hace que el señor MARULANDA POSADA haya estado incurso en un conflicto de intereses. El señor MARULANDA POSADA al contratar en nombre de ambas partes al mismo tiempo, no podía conocer y valorar de la misma manera los intereses de STO y de INGETEC S.A. ya que la naturaleza de cualquier negocio bilateral y conmutativo entre personas independientes implica intereses contrapuestos. El interés para cada empresa era obtener los mayores beneficios del contrato, especialmente en el canon de arrendamiento. El interés de STO era acordar el mayor canon de arrendamiento posible en el mercado y el de INGETEC S.A., como el de las otras arrendatarias, era conseguir arrendado el uso del inmueble pagando lo menos posible, dentro de los estándares comerciales. Este tipo de situaciones, según ha explicado la Superintendencia, ocasionan que, en este caso concreto, se haya comprometido el juicio del señor MARULANDA POSADA, ya que él debía actuar protegiendo el interés de cada sociedad.

La Superintendencia de Sociedades ya se ha pronunciado acerca del conflicto de interés que surge cuando una misma persona es administradora de dos empresas independientes que contratan entre sí. Al resolver las medidas cautelares de un proceso de la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P., mediante auto no. 801-7259 del 19 de mayo de 2014, la Superintendencia afirmó que confluían intereses contrapuestos en una persona que actuó en calidad de director de la Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. y que además ocupó la junta directiva de la empresa que era contraparte de la primera en un contrato de asistencia técnica; además, su voto era determinante para la celebración del contrato entre las dos empresas.

En este caso es mucho más evidente el conflicto ya que el señor MARULANDA POSADA actuaba directamente como representante legal de las dos sociedades partes del contrato, y, además, no quiso colaborar en obtener un avalúo comercial que habría podido revelar si las condiciones de los contratos correspondían o no a los precios del mercado.

Ahora, el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 establece, como excepción a la prohibición del administrador participar en actividades en conflicto de intereses, contar con autorización expresa de la junta de socios para participar en dicha actividad.

En este caso el señor MARULANDA POSADA no solo no contaba con autorización de la Junta Directiva, sino que sus actuaciones fueron reprochadas y prohibidas expresamente y en repetidas ocasiones por el socio ÍTACA LTDA.

En la Junta Ordinaria de Socios del 21 de marzo de 2017, registrada en el Acta No. 76, ÍTACA manifestó expresamente la existencia de un conflicto de interés del representante legal (Anexo 22), pero, no siendo abogada su representante, y no habiendo MARULANDA POSADA manifestado el conflicto, ella procedió sin exigir la aplicación de las normas que regulan la forma de proceder en esos casos. En la Junta del 23 de marzo de 2018, registrada en el Acta No. 77, la representante de ÍTACA expresó su desacuerdo con la gestión del señor MARULANDA POSADA, y afirmó que él no defiende los intereses de la sociedad y que toma decisiones que reflejaban conflictos de interés. Además, en esta Junta se pusieron de presente los graves incumplimiento por parte del arrendatario en el pago de los cánones, que el señor MARULANDA POSADA no había cobrado, y que si hubieran entrado oportunamente a las cuentas bancarias de STO habrían producido, seguramente, algún rendimiento (Anexo 23)

En la Junta Ordinaria de Socios del 19 de marzo de 2019, registrada en el Acta No. 78, se informó de la renovación "automática" del contrato de arrendamiento suscrito por el señor MARULANDA POSADA, con conflicto de interés. Ante lo cual, la representante de ÍTACA objetó por ilegal dicha renovación, por la existencia del conflicto de interés. En la misma Junta Ordinaria de Socios del 19 de marzo de 2019, la representante de ÍTACA señaló que la voluntad del socio ÍTACA era no prorrogar el contrato de arrendamiento en el mes de mayo de 2019. (Anexo 25). Es claro, pues, que la conducta de MARULANDA POSADA no fue solo hecha sin conseguir autorización previa, sino contra la expresa voluntad de uno de los socios.

Por lo anterior, el señor MARULANDA POSADA no representó los intereses de STO o de sus socios en la firma de esos contratos, sino que se aprovechó de su posición como representante legal de STO para favorecer a sociedades sujetas a su control, sin hacer siquiera un avalúo que permitiera establecer la razonabilidad de

los arriendos pactados. Esto fue un claro acto de violación a los deberes de lealtad y de buena fe que debe cumplir el representante legal con la sociedad.

En materia societaria el tratamiento que debe darse a tales situaciones es claro: el administrador de bienes ajenos debe poner en conocimiento de los interesados en tales bienes el conflicto eventual que existe, para que ellos le permitan seguir adelante con el negocio o para que, ante su falta de aprobación, él deba evitarlo.

En la demanda existen abundantes pruebas de la vinculación de ALBERTO MARULANDA con sociedades tales como INGETEC SAS, en cuyo capital él tiene participación indirecta, pero decisoria. De tal manera que, en principio, existía para él un conflicto de interés en la celebración de contratos de arrendamiento entre STO, sociedad que representaba legalmente, e INGETEC SAS, en cuyo capital participa y cuya representación legal tenía. Por lo tanto, era claro su deber de poner en conocimiento de la Junta de STO el conflicto de interés, y de conseguir el pronunciamiento respectivo.

MARULANDA POSADA no hizo una u otra cosa. No informó a la Junta de STO sobre el conflicto de interés, y no obtuvo tampoco una autorización para contratar. Se negó a hacer un avaluó comercial e independiente del inmueble. Fue más bien la señora MARÍA ISABEL O. DE WIESNER, representante de ÍTACA, quien se refirió a tales conflictos en las Juntas de STO y censuró los contratos, sin que ello impidiera a MARULANDA POSADA seguir adelante. CATAY, en las mismas juntas, o guardó silencio o procuró defender a MARULANDA POSADA. Las censuras de ÍTACA se refirieron al monto de los cánones y a los retrasos tolerados al arrendatario INGETEC S.A.en el pago de los cánones. Por eso tales censuras tienen relación con los daños que se reclaman en la demanda, y que serán probados y cuantificados en el proceso.

En la Junta del 2 de septiembre de 2020 el apoderado de ÍTACA se refirió de nuevo a esta situación irregular. ALBERTO MARULANDA POSADA manifestó que una parte de su informe a esta Junta se refería al asunto, que las condiciones de los contratos son conocidas por los socios, y que estos han influido en los pactos relativos a los cánones y a las tasas de interés. CATAY, en vez de abstenerse de participar, dada la situación de dependencia que tiene con MARULANDA POSADA, salió en su defensa, con argumentos ajenos también por completo a la naturaleza legal de la controversia. No pudiendo negar los hechos que dan lugar a la responsabilidad de MARULANDA POSADA, el vocero de CATAY se limitó a indicar que el inmueble ha estado bien administrado, que ha sido objeto de mejoras, que ÍTACA se ha beneficiado, que ha recibido los cánones, que ha participado en las decisiones y que ha tenido acceso a la información.

La demanda insiste en que, antes de celebrar o renovar cualquier contrato, ha debido haber una manifestación expresa y especial de ALBERTO MARULANDA

POSADA ante las Juntas sobre la existencia del conflicto, y en que ha debido haber una autorización expresa para contratar; y en que ninguno de esos actos, exigidos por la ley, tuvo lugar. La demanda insiste, además, en mostrar cómo ÍTACA, aunque no estuvo representada por abogados antes de la Junta del año 2020, dejó manifestaciones expresas en las Juntas anteriores contra estos contratos y la conducta de MARULANDA POSADA.

6.10.-PRETENSIÓN DUODÉCIMA. – PERJUICIOS INDIRECTOS OCASIONADOS POR LOS ARRENDAMIENTO DE BIENES DE STO QUE ALBERTO MARULANDA POSADA CELEBRÓ CON SOCIEDADES BAJO SU CONTROL, EN CONDICIONES DE CONFLICTO DE INTERÉS.

La **pretensión DUODÉCIMA**, se funda en los artículos 22, 23, 24 (200 del CdC), 25 de la Ley 222 de 1995 y, en particular, en el inciso final del artículo 25; y en el artículo 863 del Código de Comercio. También en el principio de "reparación integral y equidad" (artículo 283 del CGP), así como en los artículos 1613 y 1614, y concordantes del Código Civil.

Los hechos que dan sustento a esta pretensión se relatan en el Capítulo 5, HECHOS, con los numerales 5.2.1 a 5.2.22, ambos inclusive.

ÍTACA afirma que ALBERTO MARULANDA POSADA causó, directamente perjuicios económicos a STO, al celebrar y administrar contratos de arrendamiento sobre bienes de STO, en favor de sociedades controladas por él.

Afirma también ÍTACA que, como CATAY, en la Junta de socios de STO del 2 de septiembre de 2020, frustró la posibilidad de que STO reclamara esos perjuicios a MARULANDA POSADA, ella reclama ahora los perjuicios sufridos en forma indirecta por la celebración y administración de esos contratos, esto es, por el 50% de los perjuicios que MARULANDA POSADA ocasionó a STO. ÍTACA se funda, entre otras normas, en el inciso final del artículo 25 de la Ley 222.

ÍTACA afirma, además, que, como se puede observar en los hechos de la demanda, no hubo otra voluntad o causa alguna de hecho o de derecho, distinta de la voluntad de ALBERTO MARULANDA POSADA, a la que se pueda tener como causa de estos perjuicios.

Los perjuicios que MARULANDA POSADA ocasionó a STO con los contratos aludidos provienen de dos fuentes, a saber:

b.-Que tales perjuicios a ÍTACA corresponden al 50% de:

b1.-La diferencia entre los cánones pagados a STO y los que se habrían causado si los cánones hubiesen sido acordados con base en un avalúo independiente comercial de los inmuebles, y si los

cánones hubiesen sido iguales o similares a los que se pagaban en el mercado por oficinas del mismo valor;

b2.-Los intereses de mora que STO debió recibir, y no recibió, por razón de las demoras de los arrendatarios en el pago.

Los perjuicios a los que se refiere el literal b1. se causaron por la maliciosa reticencia de ALBERTO MARULANDA POSADA en obtener avalúos comerciales e independientes de los bienes de STO que le habían sido encomendados.

Los perjuicios a los que se refiere el literal b2. de esta pretensión se deben a la maliciosa tolerancia de ALBERTO MARULANDA POSADA con los atrasos de las empresas bajo su control, a las que había arrendado los bienes de STO.

Puesto que ÍTACA es dueña del 50% del capital de STO, el 50% de los perjuicios ocasionados a STO por los contratos celebrados por MARULANDA POSADA en condiciones de conflicto de interés, son perjuicios indirectos a ÍTACA.

6.12.- PRETENSIÓN DÉCIMA TERCERA. SANCIONES A MARULANDA POSADA.

La **pretensión DÉCIMA TERCERA** se funda en los artículos 22, 23, 24 (200 del CdC), 25 de la Ley 222 de 1995 y, en particular, en el inciso final del artículo 25; y en el artículo 863 del Código de Comercio. También en el principio de "reparación integral y equidad" (artículo 283 del CGP), así como en los artículos 1613 y 1614, y concordantes del Código Civil.

En la pretensión DUODÉCIMA, y en los hechos correspondientes de la demanda, ÍTACA identificó los daños que ALBERTO MARULANDA POSADA causó a STO al celebrar contratos con compañías controladas por él, en condiciones de conflicto de interés.

Y, como arriba se explicó, el 50% de esos daños afecta en forma indirecta a ÍTACA, pues es dueña del 50% del capital de STO.

ÍTACA trató, en la reunión del 2 de septiembre de 2020, que se iniciara una acción de responsabilidad contra ALBERTO MARULANDA POSADA, por los hechos que sirven de base a esta pretensión, para que STO fuera indemnizada por los perjuicios derivados de ellos. Sin embargo, CATAY, controlada por ALBERTO MARULANDA POSADA, hizo imposible que se adoptara esa decisión.

Por lo tanto, en términos del inciso final del artículo 25 de la Ley 222, y del artículo 24 de la misma Ley (200 del C.Co.), ÍTACA busca ahora, en esta pretensión décima tercera, que se le indemnicen a ella los perjuicios indirectos que sufrió como

consecuencia de los contratos celebrados por ALBERTO MARULANDA POSADA sobre bienes de STO, en condiciones de conflicto de interés.

6.13.-PRETENSIÓN DÉCIMA CUARTA. REMOCIÓN DE ALBERTO MARULANDA POSADA.

Esta pretensión se funda en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 222 de 1995 y en el artículo 5 del Decreto 1925 de 2009, incorporado hoy en el Decreto 1074 del 2015.

Se funda también en las declaraciones que, se espera, el Juez haya hecho contra ALBERTO MARULANDA POSADA, por razón del incumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias que le corresponden, como representante legal de STO según las normas enumeradas en las pretensiones anteriores, y en el párrafo anterior.

Es natural que, una vez comprobada la infracción del administrador a los deberes que le imponen la ley y los estatutos, se prescinda de sus servicios.

6.14.-PRETENSIÓN DÉCIMA QUINTA. ALBERTO MARULANDA POSADA NO DEBE SEGUIR HABILITADO PARA EJERCER EL COMERCIO.

Esta pretensión se funda en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 222 de 1995 y en el artículo 5 del Decreto 1925 de 2009, incorporado hoy en el Decreto 1074 del 2015.

En esta demanda se han identificado varias conductas de ALBERTO MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, que afectan en forma gravísima la cultura comercial del país, y la confianza en las instituciones societarias que son vitales para el desarrollo de la economía colombiana. Tales conductas han sido:

> a.-Violar el derecho de ÍTACA a que MARULANDA POSADA, como representante legal de STO, dé traslado inmediato de la oferta de cesión de cuotas sociales que ÍTACA hace a la sociedad CATAY, y que ésta, por virtud del "derecho de preferencia", tiene derecho a recibir;
>
> b.-Evitar que los socios minoritarios de CATAY, socia de STO en el 50% del capital, conozcan en forma íntegra y transparente las circunstancias que han llevado a que ÍTACA, socia también de STO en el 50%, haga a CATAY una oferta de cesión de cuotas de interés social en STO;

c.-Celebrar en forma repetida, sin aprobación de su Junta de socios, contratos sobre bienes de la sociedad STO que él administra, con sociedades controladas por él, hasta el punto de que ÍTACA, uno de los socios de STO se sienta obligada a buscar desprenderse de sus cuotas de interés social en STO.

d.-Permitir que CATAY, una sociedad controlada por él, socia de STO, la sociedad que él administra, y propietaria, como ÍTACA, del 50% del capital social de STO, vote en las juntas de socios para impedir por bloqueo que se ejercite contra él la acción de responsabilidad social, o que se lo remueva del cargo de administrador.

Estas conductas son tan lesivas de las buenas costumbres comerciales, que ameritan que se prohíba, en adelante, a ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA ejercer el comercio.

5. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD; OPORTUNIDAD

En virtud del artículo 590 del Código General del Proceso, la solicitud de medidas cautelares que formulo atrás en esta demanda hace innecesario agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.

Según el artículo 235 de la Ley 222 de 1995, las acciones que se ejercitan en esta demanda -responsabilidad de administradores y socios, nulidad de decisiones sociales por abuso del derecho de voto en paridad- tienen una prescripción de cinco años, pues se derivan todas del incumplimiento de las obligaciones de los administradores y socios, a las que se refieren los artículos 23 a 25 de esa ley, o de la violación a lo previsto en el Libro Segundo del Código de Comercio y en la ley 222.

Los hechos que en esta demanda se censuran ocurrieron a partir del 30 de septiembre de 2016 y en los años posteriores, de modo que estas acciones se ejercitan en tiempo.

8. JURAMENTO ESTIMATORIO Y CUANTÍA

Para efectos de los artículos 82 y 206 del Código General del Proceso y normas concordantes, ITACA estima bajo juramento el valor de la indemnizaciones patrimoniales que reclama, así:

7.1 -Pretensiones octava, novena y décima: la frustrada cesión de intereses sociales de ÍTACA a INGETEC I&D.

Las pretensiones octava, novena y décima se refieren a las violaciones a la ley y a los daños y perjuicios causados por ALBERTO MARULANDA POSADA y/o INGETEC I&D a ÍTACA, con ocasión de la frustrada cesión de cuotas de interés social de ÍTACA en STO a INGETEC I&D; y buscan que ellos reparen a ÍTACA tales daños y perjuicios.

Para calcular el valor de las indemnizaciones necesarias se debe tener en cuenta el valor del negocio que había sido acordado, **siete mil trecientos setenta y cinco millones de pesos ($7.375´000.000)**, más la actualización de ese valor y los intereses correspondientes. Estos se estiman en **mil treinta y ocho millones ciento cuarenta y dos pesos ($1.038'142.000).**

El cálculo del interés moratorio se hizo desde el 14 de agosto de 2020 hasta el 22 de febrero de 2021, a una tasa efectiva anual del 26,76%, que corresponde al 1.5 del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia de Financiera.

A continuación, se explica el cálculo de dicho valor:

Desde	Hasta	Tasa interés anual	Días	Base	Intereses moratorios	Total
15-08-20	31-08-20	26,76%	17	$7.375.000.000	$91.918.767,12	$7.466.918.767,12
1-09-20	30-09-20	26,76%	30	$7.375.000.000	$162.209.589,04	$7.629.128.356,16
1-10-20	31-10-20	26,76%	31	$7.375.000.000	$167.616.575,34	$7.796.744.931,50
1-11-20	30-11-20	26,76%	30	$7.375.000.000	$162.209.589,04	$7.958.954.520,54
1-12-20	31-12-20	26,76%	31	$7.375.000.000	$167.616.575,34	$8.126.571.095,88
1-01-21	31-01-21	26,76%	31	$7.375.000.000	$167.616.575,34	$8.294.187.671,22
1-02-21	22-02-21	26,76%	22	$7.375.000.000	$118.953.698,63	$8.413.141.369,85
				TOTAL	**$1.038.142.000**	**$8.413.141.369,85**

7.2.-Pretensiones undécima, duodécima y décima tercera: celebración y administración de contratos de arriendo, en condiciones de conflictos de intereses.

La pretensión undécima alude a la violación de deberes de ALBERTO MARULANDA POSADA, como administrador de STO, al celebrar contratos de arrendamiento con sociedades que él controla, sin haber declarado el conflicto de intereses ante la Junta de STO ni haber obtenido la dispensa necesaria.

La pretensión duodécima señala los perjuicios ocasionados a STO, e, indirectamente a ÍTACA, por la celebración y administración de contratos de arrendamiento sobre bienes de STO que hizo MARULANDA POSADA en favor de sociedades controladas por él, y en condiciones de conflicto de interés.

La pretensión décima tercera busca que se condene a MARULANDA POSADA a indemnizar a ÍTACA los perjuicios ocasionados indirectamente a ella, por las razones a las que se refiere la pretensión duodécima, entre otras.

Los perjuicios causados a ÍTACA, según la pretensión duodécima, son el 50% de los causados a STO. Estos últimos provienen de dos fuentes distintas, así:

> b1.-La diferencia entre los cánones pagados a STO y los que se habrían causado si los cánones hubiesen sido acordados con base en un avalúo independiente comercial de los inmuebles; y si los cánones hubiesen sido iguales o similares a los que se pagaban en el mercado por oficinas del mismo valor;

Esos perjuicios se estiman así:

AÑO	CANON MENSUAL PACTADO	CANON ANUAL PACTADO	IPC ANUAL	6% DEL VALOR DEL AVALÚO AJUSTADO IPC	DIFERENCIA
2016 - 2017	$60.974.000	$731.668.000	5,75%	$949.736.686	$218.068.686
2017 - 2018	$63.467.837	$761.614.044	4,09%	$1.007.678.182	$246.064.138
2018 – 2019	$65.486.114	$785.833.368	3,18%	$1.050.649.757	$264.816.389
2019 - 2020	$67.568.572	$810.822.864	3,8%	$1.085.157.774*	$274.334.910
2020 - 2021	$68.399.665	$820.795.980	1,23%	$1.071.810.333	$251.014.353
				TOTAL	**$1.499.393.636**

> *Este valor corresponde al 6% del avalúo realizado por Avalúos Nacionales S.A. en el año 2019, el cual se utiliza como referente para calcular el 6% del valor del avalúo ajustado al IPC de los años 2016, 2017, 2018 y 2020.
>
> En el cuadro se comparó el canon anual pactado en los contratos el 6% del valor del inmueble según el avalúo del 2019. Para los demás años se aumentó o disminuyó según IPC.

Por lo anterior, el mayor valor de las utilidades a favor de ITACA, que STO debió declarar bajo el supuesto de esta pretensión, corresponde al 50% del valor del total de la diferencia del canon anual pactado y el que se debió ajustar, es un valor de **setecientos cuarenta y nueve millones seiscientos sesenta y nueve mil ochocientos dieciocho pesos ($749.696.818).**

> b2.-Los intereses de mora que STO debió recibir, y no recibió, por razón de las demoras de los arrendatarios en el pago.

Como MARULANDA POSADA nunca informó las fechas en las cuales finalmente pagaron los arriendos las sociedades controladas por él, para establecer el monto del perjuicio a STO por los atrasos tolerados por el administrador, tomamos en los estados financieros las cuentas por cobrar que aparecen allí cada año, que corresponden a los cánones de arrendamiento en mora, puesto que STO no tenía otra fuente de ingresos, y calculamos el valor de los intereses moratorios por el retraso de un año, así:

Año	**Cuentas por cobrar***	**Tasa interés anual**	**Interés moratorio anual**
2015	$423.628.158	29,11%	$ 123.318.157
2016	$667.627.839	31,33%	$ 209.167.802
2017	$884.644.999	32,35%	$ 286.182.657
		TOTAL	**$ 618.668.616**

Por lo anterior, el mayor valor de las utilidades que STO debió obtener desde 2016, si hubiera cobrado intereses de mora a los arrendatarios controlados por MARULANDA POSADA, habría sido de seiscientos dieciocho millones, seiscientos sesenta y ocho mil seiscientos diez y seis mil pesos ($ 618´668.616). De esa suma, el 50% de los perjuicios recayeron sobre ÍTACA, es decir **trescientos nueve millones trescientos treinta y cuatro mil trescientos ocho pesos ($309’334.308).**

9. PRUEBAS

Solicito que de decreten las que enumero en seguida, y que se practiquen aquellas que no son documentales.

8.1. Documentales

1. Certificado de existencia y representación legal de ÍTACA LIMITADA
2. Poder especial otorgado por ÍTACA al doctor HUGO PALACIOS MEJIA y correo remisorio en cumplimiento del Decreto 806 del 2020.
3. Copia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del doctor HUGO PALACIOS MEJIA.
4. Certificado de existencia y representación legal de CATAY LIMITADA
5. Certificado de existencia y representación legal de STO
6. Certificado de existencia y representación legal de INGETEC SAS
7. Certificado de existencia y representación legal de INGETEC I&D SAS
8. Certificado histórico de nombramientos de representantes legales de CATAY LIMITADA.
9. Certificado de existencia y representación legal de MARULESCO SAS.
10. Copia del Acta No. 17 de la Asamblea de Accionistas celebrada el 6 de diciembre de 2019 de MARULESCO SAS.

11. Copia ESTATUTOS MARULESCO SAS
12. Copia del Acta No. 51 MARULANDA ESCOBAR SAS
12.1 Certificado MARULANDA ESCOBAR SAS
13. Copia del Acta No. Acta No. 256 de la Asamblea de Accionistas celebrada el 12 de diciembre de 2019 de INGETEC SAS
14. Copia Acta No. 45 de la Asamblea de Accionistas celebrada el 23 de enero de 2020 de INGETEC I&D SAS
15. Certificado histórico de nombramientos de representantes legales de INGETEC I&D SAS
16. Certificado de existencia y representación legal de INGETEC G&S SAS
17. Acta No. 45 de la Asamblea de Accionistas celebrada el 21 de enero de 2020 de INGETEC G&S SAS
18. Folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1236643
19. Folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-255233
20. Folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-255232
21. Copia contrato de arrendamiento suscrito 30 de septiembre de 2016.
22. Acta 76 de la Junta de Socios de STO.
23. Copia Otrosi suscrito el 21 de marzo de 2017 del contrato de arrendamiento.
24. Copia del Acta 77 de la Junta de Socios de STO.
25. Copia del Acta 78 de la Junta de Socios de STO.
26. Copia del Acta 59 de la Junta de Socios de CATAY.
27. Copia del Acta 58 de a Junta de Socios de CATAY.
28. Copia del Carta del 19 de junio de 2020 de STO a ÍTACA
29. Copia del Carta Citación Junta de Socios STO del 4 de agosto de 2020
30. Copia del Carta del 29 de marzo de 2019 de AMP a ÍTACA
31. Avalúo del edificio de propiedad de STO e INGETEC I&D S.A
32. Correo del 10 de octubre de 2019 de MIOW a AME.
33. Transcripción de conversación de WhatsApp del 25 de octubre de 2019.
34. Correo del 17 de noviembre de 2019 de MIOW a AME.
35. Correo del 4 de diciembre de 2019 de AME a MIOW.
36. Correo del 22 de enero de 2020 de AME a MIOW.
37. Correo del 3 de febrero de 2020 de MIOW a AME.
38. Correo del 7 de febrero de 2020 de AME a MIOW.
39. Correo del 3 de marzo del 2020 de AME a MIOW.
39.1. Borrador de la oferta o carta de ofrecimiento de las cuotas parte de ÍTACA con destino al representante legal de STO.
39.2. Borrador de la carta a través de la cual el representante legal de STO remite únicamente a GUSTAVO CARRASCO MERINO, representante legal de CATAY LIMITADA, la oferta de cesión de ÍTACA LIMITADA.
39.3. Borrador de la carta a través de la cual GUSTAVO CARRASCO MERINO, como representante legal de CATAY LIMITADA, informa que esa sociedad no ejercerá su derecho de preferencia sobre las cuotas partes ofrecidas.
39.4. Borrador del proyecto de acta de junta de socios de STO en la cual se formaliza la cesión, se aprueba la reforma estatutaria derivada de dicha

cesión, y se nombra representante legal suplente pues, hecha la cesión, no había razón para que MARIA ISABEL O. DE WIESNER conservara dicho cargo en STO.

39.5. Borrador de la carta, para ser suscrita por GUSTAVO CARRASCO MERINO, en la que se ratifica que CATAY LTDA no ejercerá su derecho de preferencia para adquirir las cuotas que ofrezca ÍTACA.

39.6. Borrador del acuerdo de cesión de cuotas que se celebraría entre ÍTACA LIMITADA e INGETEC I&D S.A.S

40. Correo de 9 de marzo de 2020 de EAWA a AME

41. Correo del 26 de marzo del 2020 de AME a MIOW

41.1. Borrador del acuerdo de cesión de cuotas que se celebraría entre ÍTACA LIMITADA e INGETEC I&D S.A.S

42. Memorando del doctor Hugo Palacios Mejía del 3 de abril del 2020.

43. Correo del 6 de abril del 2020 de MIOW a AME.

44. Correo del 14 de mayo de 2020 de MIOW a AME.

45. Correo del 14 de mayo de 2020 de HPM a EAWA.

46. Carta del 19 de junio de 2020 de AME a MIOW.

47. Comunicación del 17 de junio de 2020 de MIOW a AMP.

48. Correo del 24 de julio de 2020 de MIOW a AMP.

49. Carta del 29 de julio de 2020 de AMP de MIOW

50. Carta del 5 de agosto de 2020 MIOW a AMP.

51. Carta del 6 de agosto de 2020 de AME a MIOW

52. Copia de los estados financieros de INGETEC I&D del 2019.

53. Copia de los estados financieros de INGETEC SAS del 2019.

54. Carta del 11 de agosto de 2020 de MIOW a AME

55. Carta del 11 de agosto de 2020 de AMP a MIOW

56. Carta del 14 de agosto de 2020 de AME a MIOW

57. Grabación en video de la Junta de Socios de STO celebrada el 2 de septiembre de 2020 de manera virtual.

58. Transcripción de la grabación de la Junta de Socios de STO celebrada el 2 de septiembre de 2020 realizada por la empresa ATmedios.

59. Copia de la carta solicitando copia del acta No. 79

60. Copia del Acta No. 79 de la Junta de Socios de STO.

61. Copia del Laudo del 4 de abril de 2017, en proceso de Nelly Daza de Solarte Vs. CSS Constructores y Carlos Alberto Solarte.

62. Copia de la sentencia de Corte Constitucional C-621 de 2003.

63. Copia de la comunicación enviada por MIOW a AME el 8 de marzo de 2018.

64. Copia de la comunicación enviada por AME por MIOW el 22 de marzo de 2018.

65. Copia Estatutos sociales de STO:

65.1. Copia Escritura No. 3765 de 26 de noviembre de 1976.

65.2. Copia Escritura No. 1687 del 30 julio de 1980

65.3. Copia Escritura No. 1344 del 13 de octubre de 1982

65.4. Copia Escritura No. 4890 del 19 de octubre de 1998

65.5. Copia Escritura No. 5378 del 28 de noviembre de 2005

65.6. Copia Escritura No. 1906 del 28 de mayo de 2008
66. Correos entre AME y MIOW del 5, 11 y 24 de julio de 2019. Avalúo y oferta concreta de AME.
67. Copia de la carta del 28 de marzo de MIOW a AMP pidiendo oferta, informando contratación de avaluador y pidiendo informaciones para éste.
68. Correos entre AME y MIOW del 30 de abril, 4 y 7 de mayo de 2020

8.2. Interrogatorios a las partes con exhibición de documentos:

Solicito se ordene el interrogatorio de parte del señor ALBERTO MARULANDA POSADA identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.063.997, con el fin de interrogarlo sobre los hechos que se le atribuyen en esta demanda.

Además, en virtud de los artículos 265 y 266 del Código General del Proceso, solicito se decrete, junto a la declaración de parte del representante legal de STO, la exhibición de los siguientes documentos que se encuentran en poder de STO: 1) los documentos de soporte de pago de todo los cánones de arrendamiento de los inmuebles de STO, en donde se determine la fecha y el valor de cada pago, de las anualidades 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020; 2) los libros de contabilidad de la sociedad STO durante los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Esto con el fin de probar los hechos que se relacionan con las pretensiones undécima, duodécima y décima tercera.

Finalmente, informo que la señora de MARÍA ISABEL O. de WIESNER, como representante legal de ITACA LIMITADA, está dispuesta, si se le ordena, a responder un interrogatorio sobre todos los hechos mencionados en la demanda, especialmente respecto a las reuniones que sostuvo con los señores ALBERTO MARULANDA POSADA y ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR.

8.3. Testimonios:

8.3.1. ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.779.202 para que declare sobre los hechos materia de esta demanda, y, en particular, acerca de los que se atribuyen a él respecto a la negociación de la participación de cuotas sociales de ITACA en STO con INGETEC I&D y su padre ALBERTO MARULANDA POSADA. El testigo podrá ser citado al correo andresmarulandae@gmail.com y andres@ingetec.com.co.

8.3.2. ANA MILENA LOPERA ROZO, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.501.243 para que, en su condición de directora legal de las sociedades INGETEC, declare sobre los hechos materia de esta demanda, y en particular, a los que se refieren a la negociación de la participación de cuotas sociales de ITACA en STO con INGETEC I&D, y sobre las

actuaciones del señor MARULANDA POSADA. La testigo podrá ser citada al correo analopera@ingetec.com.co.

8.4. Dictamen pericial:

De acuerdo con el artículo 227 del Código General del Proceso, anuncio que ÍTACA desea aportar un dictamen pericial, pero no ha tenido tiempo de hacer las diligencias necesarias para que el perito lo complete, por lo que solicito al señor Juez que nos otorgue un plazo para presentarlo. El dictamen deberá servir para cuantificar los daños y perjuicios patrimoniales que ha padecido ÍTACA, y para probar los de naturaleza inmaterial, así:

(i) el *quantum* del impacto dañino de la celebración y administración de los contratos de arrendamiento que se censuran en la demanda,; y

(ii) el *quantum* del impacto dañino de frustración del negocio por la negativa de ALBERTO MARULANDA a transferir a CATAY la oferta de ÍTACA para la cesión de sus cuotas de interés social en STO, y

(iii) el *quantum* del impacto dañino sobre el valor de las cuotas de interés social de ÍTACA por efecto del manejo de MARULANDA POSADA sobre los contratos de arrendamiento; y por efecto de su forma de aplicar sus facultades de administrador sobre la solicitud de dar traslado a CATAY de la oferta de ÍTACA.

El perito cumplirá con los requisitos del artículo 226 del citado Código.

Por lo anterior, solicito respetuosamente se decrete como prueba el dictamen pericial que se allegará y que se fije un término para ello.

10. ANEXOS

Los enunciados en el acápite de pruebas documentales que se allegan con el correo electrónico con el cual se radica la presente demanda.

El correo electrónico que contiene la presente demanda y sus anexos se envía en copia a los correos electrónicos de las demás partes, junto con la demanda, cumpliendo con el Decreto 806 de 2020

11. NOTIFICACIONES

10.1. El suscrito recibirá notificaciones en la oficina de la Carrera 11 No. 82 - 01 Ofic. 1002 de Bogotá. Teléfono 6291828. Correos electrónicos: estudios@palacioslleras.com y hpalacios@palacioslleras.com.

10.2. ÍTACA puede ser notificada en la Carrera 9 No. 80-15, Oficina 602, Bogotá, D.C., correo electrónico: jgarcia@wiesnerasociados.com

10.3. SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA, puede ser notificada en la carrera 6 No. 30A-30 en Bogotá D.C., y en el correo electrónico registrado: conta@ingetec.com.co

10.4. ALBERTO MARULANDA POSADA puede ser notificado en la calle 30 A No. 6-22 Of 1301 en Bogotá D.C. y su correo electrónico es amarulapos@ingetec.com.com

10.5. CATAY LIMITADA puede ser notificada en la carrera 6 No. 30A-30 en Bogotá D.C., correo electrónico registrado: conta@ingetec.com.co

10.6. INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. – INGETEC SAS puede ser notificada en la carrera 6 No. 30A – 3 en Bogotá D.C. correo electrónico registrado: conta-ing@ingetec.com.co

10.7. INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS -INGETEC I&D SAS puede ser notificada en la carrera 30 No. 6-22 Of 601 en Bogotá D.C. correo electrónico registrado: conta-iyd@ingetec.com.co

10.8. ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR puede ser notificado en carrera 30 No. 6-22 Of 601 en Bogotá D.C. y en los correos electrónicos andresmarulandae@gmail.com y andres@ingetec.com.co

En atención al auto del 6 de octubre de 2022 que el Despacho expidió para solicitar una subsanación de la demanda, previa a su admisión, **ACREDITO** que las direcciones de notificación se obtuvieron de la siguiente manera:

1. Las direcciones de notificación de SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA, las cuales corresponden a la carrera 6 No. 30A-30 en Bogotá D.C., y al correo electrónico registrado: conta@ingetec.com.co, las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA, aportado como anexo 5 de la demanda.

2. Las direcciones de notificación de ALBERTO MARULANDA POSADA, las cuales corresponden a la calle 30A No. 6-22 Of 1301 en Bogotá D.C. y sus correos electrónicos son amarulapos@ingetec.com.co, las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de MARULESCO SAS, sociedad en de la que el señor Marulanda es representante legal, aportado como anexo 9 de la demanda.

3. Las direcciones de notificación de CATAY LIMITADA las cuales corresponden a la carrera 6 No. 30A-30 en Bogotá D.C., y el correo electrónico registrado: conta@ingetec.com.co, las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de CATAY LIMITADA, aportado como anexo 4 de la demanda.

4. Las direcciones de notificación de INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. – INGETEC SAS las cuales corresponden a la carrera 6 No. 30A – 3 en Bogotá D.C. y el correo electrónico registrado: conta-ing@ingetec.com.co, las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de INGETEC SAS, aportado como anexo 6 de la demanda.

5. Las direcciones de notificación de INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS -INGETEC I&D SAS las cuales corresponden a la carrera 30 No. 6-22 Of 601 en Bogotá D.C. y el correo electrónico registrado: conta-iyd@ingetec.com.co, las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de INGETEC I&D SAS, aportado como anexo 7 de la demanda.

6. Las direcciones de notificación de ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR las cuales corresponden a la carrera 30 No. 6-22 Of 601 en Bogotá D.C. y los correos electrónicos andresmarulandae@gmail.com y andres@ingetec.com.co, las obtuve del Certificado de Existencia y Representación Legal de INGETEC I&D SAS, aportado como anexo 7 de la demanda, sociedad de la que el señor Marulanda ostenta la calidad de representante legal para asunto laborales.

   Asimismo, estas direcciones de correo electrónico constan en las comunicaciones habituales del señor Marulanda con ÍTACA, tal y como consta de los anexos 34 a 39 de la demanda.

Del señor Juez, con todo respeto,



HUGO PALACIOS MEJÍA
C.C. 17.064.471 de Bogotá D.C.
T.P. 4.003 del C.S.J.

Palacios Lleras

Sergio Alejandro Gallego Morales <sgallego@palacioslleras.com>

ITACA

1 mensaje

Ingrid Perez - Wiesner & Asociados <jgarcia@wiesnerasociados.com> 24 de febrero de 2021, 9:27
Para: hpalacios@palacioslleras.com
Cc: sgallego@palacioslleras.com

Doctor

Hugo Palacios Mejía

hpalacios@palacioslleras.com

Apreciado doctor:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 806 de 2020, como representante legal Ítaca Ltda en liquidación, anexo a este correo poder especial otorgado a usted por la sociedad que represento, para que, según su criterio profesional, presente demanda contra una o varias de las personas que en el poder se relacionan y con el objeto que allí se describe.

Atentamente,

MARÍA ISABEL O. DE WIESNER

* *
This message is being sent from a law firm and may contain information which is confidential and/or privileged.
If you are not the intended recipient, please advise the sender immediately by reply email and delete this message and any attachments without retaining a copy. Thank you.
Nota Confidencial:
La información contenida en este email es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o por la compañía a la cual esta dirigido.
Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley.
Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

Please consider the environment before printing this e-mail. Thank you.

Poder de MIOW-Itaca Ltda a HPM Feb.24-21.pdf
114K

Señores
JUECES CIVILES DEL CIRCUITO DE BOGOTA
(REPARTO)

ASUNTO: PODER ESPECIAL

Yo, MARÍA ISABEL JUANA OSPINA DE WIESNER, mayor de edad y domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con cédula de ciudadanía No. 51.713.072, actuando como representante legal de **ÍTACA LIMITADA** en liquidación, sociedad comercial constituida por escritura pública No. 2346 del 16 de agosto de 1976, otorgada en la Notaría 2 de Bogotá, con NIT 860.048.865-1, por medio del presente escrito manifiesto que otorgo poder especial, amplio y suficiente al Dr. **HUGO PALACIOS MEJÍA**, también mayor de edad y vecino de la ciudad de Bogotá, D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 17.064.471 de Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional de abogado No. 4.003 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en nombre y representación de ÍTACA LIMITADA, según su criterio profesional, presente demanda contra una o varias de las siguientes personas: el señor **ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.063.997; el señor **ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.779.202; la sociedad **CATAY LIMITADA** con Nit 860.048.866-9; la sociedad **SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA** con NIT 860.009.936-1; la sociedad **INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. - INGETEC SAS** con NIT 860.001.986-1; la sociedad **INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS -INGETEC I&D S.A.S** con NIT 900206480-2, para que pida, según su discreción profesional, que se hagan declaraciones sobre los siguientes o similares asuntos:

(i) el control de **ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA** sobre esas sociedades, y sobre MARULESCO SAS y MARULANDA ESCOBAR SAS como subordinadas, y las consecuencias de ello;

(ii) la nulidad absoluta de los votos de la sociedad CATAY LTDA. en la Junta de Socios de la sociedad STO que se reunió virtualmente el 2 de septiembre de 2020 y las determinaciones que se tomaron ese día por la Junta de Socios;

(iii) la responsabilidad de **ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA** como administrador de **SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA**. por violación de sus deberes legales y estatutarios, y en particular por violación de las reglas sobre conflicto de interés;

(iv) que **ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA** creó una representación aparente en **ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR** para un negocio de cesión de cuotas de interés social en **SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA**;

(v) que **ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA** violó directamente, y a través de sociedades subordinadas y de su representante aparente, sus deberes como representante legal y el deber de negociar de buena fe en una negociación de cuotas de interés social en **SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA.**;

(vi) que **ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA** hizo imposible, directamente y/o por la acción de su representante aparente y de sus sociedades subordinadas, el cumplimiento de las condiciones de que pendía una negociación de cuotas de interés social en **SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA.** y que, por lo tanto, la condición debe entenderse cumplida;

(vii) que **ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA**, directamente o por medio **CATAY LIMITADA** impidió, ilegalmente, que la Junta de Socios de **SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA** que tuvo lugar el 2 de septiembre de 2020 ejerciera la acción de responsabilidad social contra él, y eligiera otro representante legal;

(viii) que se declare la elección de un representante legal de **SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA**.

Y que, el Dr. PALACIOS MEJIA, en consecuencia de una o varias de las anteriores o similares declaraciones, pida que **se condene** a **ALBERTO MARIA MARULANDA POSADA**, o a una o varias de las sociedades subordinadas, o a aquel con éstas o por medio de éstas y/o con **ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR**, a que indemnicen en forma íntegra a **ÍTACA LTDA**, los daños y perjuicios causados, bien en dinero o en natura, esto es, también celebrando los actos y contratos que **ALBERTO MARULANDA POSADA y/o ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR**, y una o más de las las sociedades subordinadas frustraron con sus conductas ilegales o abusivas.

La enumeración anterior no limita de ninguna manera las facultades que, según el artículo 77 del Código General del Proceso corresponden a todos los apoderados en todo proceso judicial. Pero el Dr. PALACIOS queda autorizado también para sustituir este poder, para conciliar y para pactar cláusulas arbitrales.

Aclaro que si bien ÍTACA LIMITADA se encuentra en liquidación por haberse cumplido la causal de disolución por vencimiento del plazo de la vigencia de la sociedad, tengo facultades para otorgar este poder en calidad de liquidadora en virtud del artículo 227 del Código de Comercio, toda vez que la sociedad no ha nombrado liquidador a la fecha y me encuentro inscrita como representante legal de la sociedad.

Informo que el correo electrónico del Dr. Palacios Mejia, que coincide con el inscrito en el Registro Nacional de Abogados, es: hpalacios@palaciosilleras.com.

Solicito se le reconozca personería al apoderado para actuar en los términos aquí señalados.

Cordialmente,

MARÍA ISABEL JUANA OSPINA DE WIESNER
C.C. 51.713.072
Representante legal
ÍTACA LIMITADA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
100

ACTA DE REUNION ORDINARIA DE JUNTA DE SOCIOS DE SERVICIOS TECNICOS OMICRON LTDA.

ACTA No. 79

De forma virtual, el día dos (02) del mes de septiembre de dos mil veinte (2020) siendo las 11:30 a.m. se reunieron en reunión ordinaria, a través de la plataforma tecnológica google meet, lo cual consta en grabación de dicha sesión, las personas que a continuación se relacionan, previa citación escrita enviada el 4 de agosto de 2020 a través de correo electrónico, por el Representante Legal de la Sociedad a cada uno de los socios de la sociedad Servicios Tecnicos Omicron Ltda (en adelante "STO"), de acuerdo con los estatutos de la sociedad:

SOCIOS	Representado por	CUOTA PARTE	VALOR APORTE
Itaca Ltda.	José Miguel Mendoza Daza, Apoderado	3.200	320.000
Catay Ltda.	Daniel Garcia Piñeros, Apoderado	3.200	320.000
TOTAL		6.400	640.000

Asisten a la reunión el señor Alberto Marulanda Posada, en calidad de representante Legal de la Sociedad, el Señor Yivher Andres González Velandia, en calidad de Revisor Fiscal, y la señora Ana Milena Lopera Rozo, en calidad de invitada.

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

El señor Alberto Marulanda manifestó que en horas de la mañana recibió*...un e-mail en el María Isabel Ospina había nombrado al Dr. Mendoza como representante en esta reunión e igualmente un e-mail de Gustavo Carrasco como representante de Catay nombrando a Daniel García como representante de la sociedad en esta reunión...*

El Dr. Marulanda indica que verificó los poderes y los certificados de existencia y representación legal de las sociedades y evidencia que ambos socios se encuentran debidamente representados para participar en la reunión.

Verificada la asistencia de todos los socios a la reunión se constata que se encuentran representadas la totalidad de cuotas de interés social que conforman el capital de la compañía, y que en consecuencia estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de 6.400 cuotas sociales.

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

El Dr. Mendoza, apoderado de Itaca Ltda., propone dar el mismo trato que se ha venido ejerciendo en estas reuniones por la sociedad, y en consecuencia, propone que el Dr. García se designe como Presidente y el Dr. Mendoza como Secretario.

NOTARIA 02 REPUBLICA DE COLOMBIA
ANA DIAZ GRANADOS BONIVENTO
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

El Dr. García, apoderado de Catay Ltda., manifiesta que lo que se ha hecho en años anteriores es que Ana Milena Lopera, quien está presente, es quien ha elaborado las actas, y lo que se propone que en el punto 10 del orden del día que dice que se hará la elaboración y aprobación del acta, y que en últimas los apoderados de los socios son los que van a tener que aprobar el texto del acta, se tomen el tiempo para compartir la pantalla para que ambos apoderados de los socios puedan enfocarse en los temas y sea Ana Milena quien tome notas tema de practicidad.

El Dr. Mendoza propone nombrar una comisión para aprobar el acta, lo cual facilita el trámite de su redacción. La comisión estaría integrada por los apoderados de los dos socios.

El Dr. García acepta la propuesta pero solicita que Ana Milena la vaya redactando, de esa forma al final solo queda el ejercicio de leerla y estar de acuerdo con el Acta.

De acuerdo con lo anterior, se elige como Presidente de la sesión al Dr. García, Ana Milena Lopera Rozo como secretaria, se compone una comisión con el Dr. García y con el Dr. Mendoza para la aprobación del acta, y se advierte que el Dr. Marulanda debe firmar el acta, de acuerdo con lo indicado por la Ley 222 de 1995. Por unanimidad de los asistentes, que conforman el 100% del capital social, se aprueba lo anterior con el voto favorable de las 6400 cuotas en las que se encuentra dividido el capital social.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El orden del día propuesto en la convocatoria es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Elección de Presidente y secretario de la reunión
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura del Informe de Gestión 2019 del Representante Legal.
5. Lectura del Informe del Revisor Fiscal.
6. Examen, aprobación o improbación de los estados financieros a 31 de diciembre De 2019
7. Lectura y aprobación del proyecto de distribución de Utilidades.
8. Elección o ratificación del Representante Legal
9. Elección o ratificación del Revisor Fiscal.
10. Elaboración y aprobación del Acta

El Dr. Mendoza propone modificar el orden del día para incluir un punto de proposiciones y varios. Aun cuando considera que no es estrictamente necesario incluirlo, en la medida en que el artículo 182 del Código de Comercio establece que en cualquier momento se pueden proponer temas no incluidos en este tipo de reuniones, para efectos de orden propone que se adicione en este momento en el punto 11 del orden del día el asunto relativo a proposiciones y varios.

NOTARIA 072 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
ANA DIAZ GRANADOS BONIVENTO
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

El Dr. García no ve inconveniente en la propuesta e indica que se puede revisar en su momento, inclusive que quede como punto 10 para que el punto 11 corresponda a elaboración y aprobación del acta.

Se propone aprobar la modificación del orden del día, el cual quedará de la siguiente forma:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Elección de Presidente y secretario de la reunión
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura del Informe de Gestión 2019 del Representante Legal.
5. Lectura del Informe del Revisor Fiscal.
6. Examen, aprobación o improbación de los estados financieros a 31 de diciembre De 2019
7. Lectura y aprobación del proyecto de distribución de Utilidades.
8. Elección o ratificación del Representante Legal
9. Elección o ratificación del Revisor Fiscal.
10. Proposiciones y varios.
11. Elaboración y aprobación del Acta

Por unanimidad de los asistentes que conforman el 100% del capital social, esto es, el voto favorable de las 6400 cuotas en las que se encuentra dividido el capital social, se aprobó el orden del día ya indicado.

4. LECTURA DEL INFORME DE GESTIÓN 2019 DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Dr. García manifiesta que teniendo en cuenta que el documento fue conocido por todos con la debida antelación, y se tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de inspección, y si no se tiene ningún comentario para efectos de dejar en el acta se podría proceder con la aprobación.

El Dr. Mendoza pregunta si se va a someter a aprobación el informe de gestión, a lo cual el Dr. García manifiesta que efectivamente se someterá a aprobación.

En esa medida, el Dr. Mendoza estaría de acuerdo con omitir la lectura del informe y proceder a la votación para la aprobación del informe de gestión.

El Dr. García emite su aprobación con voto a favor del informe de gestión.

El Dr. Mendoza vota en contra de la aprobación del informe, y procede a dejar una constancia en ese sentido, e informa que remitirá a través de correo electrónico la constancia para que quede incluida textualmente en el acta. Acto seguido procede a su lectura.

NOTARIA 65 DE BOGOTÁ D.C.
ANA DIAZ GRANADOS BONIVENTO
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

A través de correo electrónico dirigido a la secretaria de la reunión, en la dirección analopera@ingetec.com.co, el Dr. Mendoza remite la constancia que deja la sociedad Itaca Ltda. sobre el informe de gestión:

CONSTANCIA – INFORME DE GESTION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Desde hace ya varios años, el representante legal principal de STO Ltda., Alberto Marulanda Posada, ha venido participando en actos y operaciones que le han representado claríssimos conflictos de interés. Tales conflictos se han presentado respecto de los contratos por cuya virtud STO Ltda. le ha arrendado su único activo a Ingetec S.A., una compañía con la cual el señor Marulanda y sus familiares mantienen vínculos de diversa índole.

A pesar de haber estado incurso en los referidos conflictos de interés, el señor Marulanda no surtió el procedimiento de autorización regulado en el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995. Esta omisión le representó al señor Marulanda una violación manifiesta de sus deberes como administrador de STO Ltda., a la luz de los pronunciamientos que sobre el particular han emitido las autoridades colombianas, incluida la Superintendencia de Sociedades. Lo anterior es tanto más grave cuanto que, en los contratos de arrendamiento suscritos por el señor Marulanda, se pactaron condiciones económicas beneficiosas para Ingetec S.A., en detrimento de los intereses de STO Ltda.

Así las cosas, además de que la omisión en comento acarrea la nulidad absoluta de los contratos de arrendamiento, el señor Marulanda deberá responder por los perjuicios que el incumplimiento de sus deberes legales le ha causado a STO Ltda. y a sus socios. En este sentido, según lo previsto en el artículo 2.2.2.3.1 del Decreto 1074 del 2015, "el administrador que incurra por sí o por interpuesta persona, en interés personal o de terceros, en conductas que impliquen conflicto de interés [...] en violación de la ley y sin la debida autorización de la asamblea general de accionistas o junta de socios, responderá solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasione a los asociados, a la sociedad o a terceros perjudicados".

A pesar de la gravedad de las actuaciones descritas en esta constancia, en el informe de gestión sometido a consideración de la junta de socios no se ha hecho referencia alguna a los conflictos de interés en cuestión, ni a los perjuicios que ha sufrido STO Ltda. por virtud de los arrendamientos antes mencionados. En esta medida, Itaca Ltda. vota en contra de la aprobación del informe de gestión sometido a consideración de la junta de socios de STO Ltda. No está de más advertir que el informe referido sí debe presentarse para su aprobación o improbación por parte de los asociados, tal y como lo ordena expresamente el artículo 46 de la Ley 222 de 1995.

Como consecuencia de lo anterior, debe advertirse que el señor Alberto Marulanda Posada no podrá ejercer el cargo de liquidador de STO Ltda., en caso de que la compañía se disuelva el 31 de diciembre del 2020. Ello obedece que, de conformidad con lo previsto en el artículo 230 del Código de Comercio, "quien administre bienes de la sociedad y sea designado liquidador, no podrá ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las cuentas de su gestión por la asamblea o por la junta de socios" (se resalta). En este sentido, como el informe de gestión del señor Marulanda no fue aprobado por la junta de socios de STO Ltda., es claro que no se cumple con el requisito exigido por el citado artículo 230 para que el representante legal pueda ocupar el cargo de liquidador.

Dado a los 2 días del mes de septiembre del 2020, durante la reunion ordinaria de la junta de socios de STO Ltda.

José Miguel Mendoza
Apoderado – Itaca Limitada

NOTARIA 23 REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOGOTA D.C.
ANA DIAZ GRANADOS BONIVENTO
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

El Dr. García manifiesta que como representante de la sociedad Catay en la reunión, y que previamente ha aprobado el informe de gestión, deja una constancia en el sentido de aclarar que la postura de Itaca a través de su apoderado es lejana de la realidad. Indica que la señora María Isabel en todas las juntas de socios en las que ha participado, ha tenido conocimiento absoluto de los estados financieros, de los informes de gestión rendidos por el Dr. Alberto Marulanda como representante legal de la sociedad STO, donde cuyo único activo de STO es el inmueble que es arrendado, ha tenido absolutamente todo el detalle de todos los movimientos, y que si bien ha hecho una mención en relación con un conflicto de interés, nunca ha hecho una mención en relación con la terminación del contrato de arrendamiento y nunca ha pedido una revisión detallada como consecuencia de la terminación. Por el contrario, lo que siempre ha hecho, es recibir las utilidades y beneficiarse del arriendo del inmueble que tiene STO. Continua su intervención indicando que Catay se aparta rotundamente de esa posición y de esa interpretación porque este contrato de arrendamiento se ha venido desarrollado durante muchos años, se ha venido obteniendo el pago de forma cumplida, a pesar de esta situación de Covid, se ha mantenido el canon, se ha mantenido una posición neutra en este sentido, y no entiende por qué solo cuando hay una discrepancia en relación con el manejo se alega un posible conflicto de interés. Entiende que se esté dejando una constancia pero considera que no es el foro para hacerlo.

El Dr. Mendoza manifiesta que lo que realmente les preocupa es que no se haya obtenido la autorización especial que exige la ley 222 de 1995 para que el Dr. Marulanda pueda participar de una relación comercial entre STO e INGETEC. Al no cumplirse ese trámite, se generan unos efectos jurídicos sobre los contratos y sobre los deberes que le corresponde al Sr. Marulanda en su calidad de represente legal de la compañía.

El presidente le concede el uso de la palabra al representante legal de STO, Dr. Alberto Marulanda, quien manifiesta que en el punto 4 de su informe se indica lo siguiente, procedimiento a leer texto a continuación:

> Es de resaltar que el señor Alberto Marulanda Posada es el representante legal de INGETEC S.A.S., empresa con la cual Servicios Técnicos Omicron Ltda. tiene relación comercial por cuenta del contrato de arrendamiento sobre el edificio, relación que data de hace más de diez (10) años. Las condiciones del arriendo han sido pactadas entre las Partes y conocidas por los socios de Servicios Técnicos Omicron Ltda., inclusive, logrando acuerdos sobre canon de arrendamiento, tasas de interés, y las reparaciones necesarias del inmueble.

El Dr. Mendoza agradece al Dr. Marulanda su aclaración e indica que efectivamente vieron el numeral 4 del informe de gestión en el que se habla de estas operaciones, pero insiste en que la simple afirmación en un informe de gestión no puede suplir la autorización que exige la ley para casos de conflicto de interés y sobre esto la Superintendencia de Sociedades por vía judicial se ha pronunciado, e insiste en que para que el Dr. Marulanda pueda actuar en cualquier relación de cualquier naturaleza con INGETEC, en donde el Dr. Marulanda reviste también la calidad de representante legal, se requiere que la junta de socios lo autorice, lo cual no ha ocurrido en el pasado ni durante esta junta de socios.

NOTARIA 69
ANA DIAZ GRANADOS BONIVENTO
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

El Dr. García, como Presidente de la reunión toma la palabra y menciona que para cerrar el punto y dejar constancia en el acta que como representante de Catay discrepa y tiene una posición radicalmente opuesta, en el sentido en que la información y el conocimiento al único socio adicional a Catay que es Itaca, en los últimos 7 y 8 años ha estado presente y si Itaca a través de su apoderado está haciendo esta mención resulta válido que quede en el acta pero no es lo que Catay considera ni es lo que cree que deba ser el orden de las cosas. Continua diciendo que el Dr. Marulanda, a través de este contrato de arrendamiento ha hecho una gestión que Catay considera válida y la ha reconocido como importante, el inmueble está, es un inmueble que tiene unas condiciones únicas para este estilo de compañías y para este estilo de negocios, se ha mantenido en perfectas condiciones, se han hecho más obras y más mejoras a las específicamente requeridas por ley, y la poderdante del Dr. Mendoza ha expresado en varias oportunidades que no considera que deba asumir esas mejoras sino que las ha debido asumir el arrendatario y no se entiende cuál es el fondo de esto, cuando se han beneficiado, han recibido los cánones, han participado de las decisiones y nunca se les ha negado el acceso a la información, las decisiones o la participación, e insiste que nunca en ninguna de las actas que se tiene ha habido una manifestación expresa de haya una terminación del contrato.

Se le concede la palabra al Dr. Mendoza, quien manifiesta que se ha tocado un punto importante y es el fondo de la constancia, lo cual es muy sencillo, la ley colombiana exige que se cumpla un trámite, y ese trámite no es cualquier cosa, está diseñado para que se proteja a la compañía. Manifiesta que está seguro que el Sr. Marulanda en la gestión de sus negocios ha actuado de buena fe pero hay un trámite que busca que los socios de la compañía tengan acceso a una información adicional a la que se presenta en el informe de gestión, y que los socios se puedan pronunciar sobre la posibilidad de que el Sr. Marulanda sea el que lleve la rienda de los negocios que se celebran con INGETEC, y eso no ha ocurrido, y debería ocurrir por una razón principal y es que si no ocurre, si la Junta de Socios no autoriza al Sr. Marulanda para que el participe en esas operaciones, el Sr. Marulanda estaría violando una disposición imperativa de la Ley 222 con las consecuencias que eso acarrea, por eso se quiso poner de presente en este punto sobre el informe de gestión, además que sirve de justificación para tener que votar en contra de la aprobación del informe de gestión.

Se deja constancia expresa en el acta que al no contar con una votación mayoritaria a favor para la aprobación del informe de gestión el mismo no queda aprobado por la Junta de Socios de STO.

El informe se anexa como parte integrante del protocolo de los documentos de esta reunión y que el representante legal ha presentado él mismo a la Junta de Socios, así como la constancia remitida por el apoderado de Itaca Ltda. vía correo electrónico en la misma reunión.

5. INFORME DEL REVISOR FISCAL

Se da la palabra al Revisor Fiscal, quien procede a dar lectura a su informe, el cual fue previamente compartido con los socios.

NOTARIA 23 REPUBLICA DE COLOMBIA
BOGOTA D.C.
ANA DIAZ GRANADOS BONIVENTO
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

El informe se anexa como parte integrante del protocolo de los documentos de esta reunión.

El presidente de la reunión somete a aprobación el informe del revisor.

Se le concede el uso de la palabra al Dr. Mendoza, quien manifiesta que el informe no se somete a aprobación, pero que sí tiene un par de preguntas para el sr. Revisor Fiscal. A continuación procede a interrogar al Revisor Fiscal así:

1) El apoderado de Itaca menciona que uno de sus deberes como Revisor Fiscal, según el numeral 1 del artículo 207 del Código de Comercio, es cerciorarse que los actos y contratos celebrados por la compañía se ajusten a los estatutos, a las decisiones de la Junta de Socios y a la Ley, en esa medida se le pregunta si ha revisado el problema del conflicto de interés que ha sido mencionado. Acto seguido, el apoderado procede a reiterarlo en los siguientes términos, por si no se ha oído adecuadamente: Ítaca Ltda. considera que el Sr. Alberto Marulanda tiene un conflicto de interés en cualquier operación, acto, omisión o cualquier decisión que tenga que ver con todas las compañías del grupo INGETEC, especialmente de INGETEC S.A., en la medida en que no solamente ocupa el cargo de representante legal tanto en STO como en INGETEC S.A. sino que también, según la información que se ha presentado en las juntas de socios anteriores, el Sr. Marulanda tiene un interés económico en esas compañías. Bajo la jurisprudencia reiterada de la Superintendencia de Sociedades, esos vínculos dan lugar a un conflicto de interés que hacen necesario surtir un procedimiento especialísimo contemplado en el numeral 7 del artículo 23 de la ley 222. Haciendo una revisión de las actas de junta de socios de la compañía, hemos encontrado que esa autorización nunca se impartió y en esta reunión de hoy por supuesto tampoco se ha impartido. Quisiera entonces conocer la opinión del revisor fiscal acerca de si estos contratos de arrendamiento se han ajustado a la ley, los estatutos y las decisiones de la junta de socios, en la medida en que a nuestro criterio nunca se impartió esta autorización a la que se hace referencia.

El Revisor Fiscal manifiesta que en su opinión en sus pruebas no ha visto conflicto de interés, se ha venido cumplimiento con el contrato de arrendamiento que fue firmado en un periodo de hace 4, 5 u 8 años, se ha venido subiendo su canon, se ha venido pagando mensualmente, entonces en su concepto no considera que haya un conflicto de interés.

Toma la palabra el Presidente de la reunión, el Dr. Garcia, quien manifiesta su intención de comentar que ha notado que el Dr. Mendoza reiteradamente habla de un grupo empresarial y aquí no hay ningún grupo. No ha habido ni un registro de grupo empresarial ni ha habido un pronunciamiento de la Superintendencia de Sociedades en este sentido. Considera que el Dr. Mendoza también omite que el Dr. Marulanda actúa como representante legal de STO en donde hay solo dos socios, luego al final del día las decisiones las han tomados esos dos socios; y con la sociedad con la cual se tiene el contrato de arrendamiento tampoco es el accionista mayoritario, por Itaca siempre ha habido una interpretación equivocada en función de historia de vieja data de la forma como se manejaban las cosas en INGETEC, pero indica que en los últimos 20 años en los

NOTARIA 23 REPÚBLICA DE COLOMBIA BOGOTÁ D.C.
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

cuales hay otros socios activos en INGETEC y que en virtud del modelo de negocio que tiene INGETEC de prestación de servicios el Dr. Marulanda es un representante legal que sigue las órdenes de todos los socios. Además, el Revisor Fiscal es el de esta sociedad y se desconoce si tiene conocimiento de otras sociedades en las cuales tenga el Dr. Marulanda pero considera que no viene al caso. Hay es un informe del revisor fiscal y le solicita al Dr. Mendoza formular todas las preguntas para que el Revisor Fiscal las responda, pero considera que el espíritu de socios no sea que después de que se ha trabajado, recibido todos estos cánones, vistas las cosas así, buscando ahora una formalidad que claramente no se entiende cual es el punto, buscando declarar algo que en su concepto no es susceptible de ser declarado o que por lo menos se dejan constancias pero no es el foro como ya lo ha mencionado. Invita al Dr. Mendoza a que mire el escenario, la forma como se han venido desarrollando los negocios en esta sociedad.

Se le concede la palabra al Dr. Mendoza, quien tiene varias cosas por decir. Primero manifiesta que el hecho de que INGETEC sea o no un grupo empresarial es irrelevante para los efectos de lo que está diciendo en la reunión; si se dijo tal vez fue coloquialmente refiriéndose al grupo INGETEC, pero intentará ser más preciso para que no haya confusiones porque el hecho de que sean o no un grupo inscrito es irrelevante para efectos del conflicto de interés. En segundo lugar, el señor Mendoza explicó que, en su criterio, el conflicto no necesariamente surge del hecho de que el Sr. Marulanda sea o no accionista controlante de INGETEC; la simple circunstancia de que el sea accionista ya daría pie a un conflicto de interés en STO, Además, el apoderado manifestó que el Sr. Marulanda sí aparece inscrito en el registro mercantil como representante legal principal de INGETEC SA y como representante legal principal de Itaca (Sic). Esa es una circunstancia que, por el hecho de ser pública, debería de ser de conocimiento del señor revisor fiscal. Incluso, el revisor fiscal habla de contratos antiquísimos pero hay unos más recientes sobre todo unos otrosíes en los cuales aparece el Sr. Marulanda firmando de lado y lado. En relación con que el Sr. Presidente hablaba de las intenciones de fondo y del espíritu de los socios, sobre eso le gustaría proponer más adelante una serie de ideas para que sean discutidas en el punto de proposiciones y varios. En palabras del señor Mendoza, no se están proponiendo formalismos inanes y tratando de que se cumplan unos trámites que no llevan a nada. La preocupación real es la administración del único activo de la compañía y por eso existe ese procedimiento de conflicto de interés, [por lo cual propondré más adelante] que se ordene la contratación de un avalúo para saber cuánto vale el inmueble y revisar con un asesor experto si los cánones que se están cobrando están en línea con lo que debería estar cobrando STO por el arrendamiento del inmueble. Con eso se podría empezar a zanjar diferencias. También añadió que, lo que busca el procedimiento de conflicto de interés al que se ha referido en varias oportunidades es evitar que se celebren contratos en perjuicio de la compañía. En esa medida, si se cuenta con el dictamen en el que se diga lo que se debe cobrar por el arrendamiento o los rangos entre los que deberían estar el canon, ahí se podría solventar una de las múltiples dudas que se tienen. Así mismo, menciona que tampoco se quiere molestar al Revisor Fiscal; simplemente se le está haciendo una pregunta sobre el contenido de su informe, y es que el señor Revisor Fiscal dijo que las operaciones celebradas por la compañía se han ajustado a la Ley y a los Estatutos. Por eso se le preguntó al revisor fiscal, con base en el artículo que se citó del Código de Comercio, si

NOTARIA 72 BOGOTÁ D.C.
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA CORRESPONDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

eso seguía siendo cierto a pesar de que ha venido explicando desde que comenzó la junta de socios.

En cuanto a la segunda inquietud, el apoderado de Itaca menciona:

2) Tiene que ver con la primera, ya que el Revisor Fiscal dijo que él consideraba que no había ningún conflicto de interés, y quisiera saber si el Revisor Fiscal ha revisado esto que se acaba de decir, que en algunas de esas operaciones aparece el Sr. Marulanda firmando en nombre de STO y de otro lado firmado en nombre de INGETEC.

   El Revisor Fiscal considera que no se ha presenta ningún conflicto de interés porque se ha mantenido el contrato, se han venido pagando mensualmente cumplidamente, se ha subido de acuerdo a lo determinado por la administración. Considera que si el contrato sigue vigente y no se ha dado una terminación o directriz por parte de algún socio es porque no se ha detectado ese conflicto de interés al que se hace mención, igual si lo firma la misma persona en las dos empresas no implica que se presente un conflicto porque no se ha cambiado ninguna condición favorable que se pudiera evidenciar

6. EXAMEN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019.

El presidente de la reunión manifiesta que ambos socios tuvieron acceso a los estados financieros, y le concede la palabra al apoderado de Itaca para que manifieste si los aprueba o no los aprueba o si tiene algún comentario en relación con los mimos.

El Dr. Mendoza manifiesta que votará a favor de la aprobación de los estados financieros con una salvedad: Considera que la compañía ha venido sufriendo unos perjuicios por cuenta de unos conflictos de interés que no han recibido el tratamiento que la ley exige, por eso votan en contra de la aprobación de las cuentas que ha presentado el señor Marulanda, pero creen que los estados financieros son muy sencillos y reflejan los números contables de la compañía y no ven ninguna falsedad o inexactitud, razón por la cual se ha decidido votar a favor de la aprobación de tales estados financieros. Pero el voto va con la salvedad de que en ningún caso puede entenderse que se están aprobando las cuentas de la gestión del señor Marulanda, ni refrendando o ratificando los conflictos de interés en los que se ha incurrido en el caso de los arrendamientos del único activo de propiedad de la compañía.

El Dr. García como apoderado de Catay aprueba los estados financieros y deja una constancia de felicitación y agradecimiento con el Dr. Marulanda por su gestión, considera que a pesar de las circunstancias se ha logrado mantener el contrato de arrendamiento, se ha buscado que el contrato de arrendamiento no se haya ajustado ni reducido en su canon desde los meses de marzo en que se decretó la emergencia económica, y se aprovecha para que quede constancia en el acta, que a diferencia de las otras reuniones, en esta reunión el Dr. Mendoza si está dejando una clara constancia de Itaca sobre su posición sobre el contrato lo cual no ocurría en las reuniones pasadas y considera que el Dr. Mendoza hablará en proposiciones y varios en relación con el inmueble.

NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA
03 NOV 2020

Por unanimidad de los asistentes que conforman el 100% del capital social, el voto favorable con las 6400 cuotas en las que se encuentra dividido el capital social la aprobación a los Estados Financieros presentados. Los estados financieros puestos a consideración de la Junta fueron elaborados de acuerdo con la normativa NIIF, contiene además las notas explicativas de los mismos, y se anexa como parte integrante del protocolo de documentos de esta reunión.

7. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

El Presidente pone de presente que los socios tuvieron acceso al proyecto de distribución de utilidades, y pregunta si están de acuerdo con dicho proyecto.

El Dr. Mendoza manifiesta que ha entendido que la propuesta es que se reparta el 100% de las utilidades que ha generado la compañía durante el ejercicio 2019, y en esa medida están a favor de dicha propuesta.

El Dr. García manifiesta que Catay tampoco tiene observaciones sobre el proyecto, y que en la medida en que se aprobaron los estados financieros también procerá a la aprobación del proyecto de distribución de utilidades.

La Junta aprobó por unanimidad de los asistentes que conforman el 100% del capital social, esto es, con el voto favorable de las 6400 cuotas en las que se encuentra dividido el capital social, el proyecto de distribución de utilidades.

El Proyecto de Distribución de Utilidades presentado por el Representante Legal se anexa como parte integrante del protocolo de documentos de esta reunión.

8. RATIFICACIÓN O ELECCIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL

El apoderado de Itaca Ltda. manifiesta que se opone a la ratificación del señor Alberto Marulanda como representante legal de STO, con base en que la compañía tiene un único activo que es el edificio arrendado a Ingetec, y se necesita que la compañía pueda proteger ese único activo que tiene, recibir los máximos cánones posibles, asegurar que el arrendatario se esté comportando de la mejor manera posible, y asegurar que STO tenga las mejores condiciones contractuales disponibles en el mercado. En esa media, teniendo en cuenta que el señor Marulanda es el representante legal de INGETEC SA, que la Junta de Socios no lo ha autorizado a tener negociaciones con INGETEC SA en cuanto a la explotación del único activo de STO, que al no haberse obtenido esa autorización el señor Marulanda debe abstenerse de participar en cualquier negociación con INGETEC o trato o discusiones que tengan que ver con los intereses de STO, y por eso la propuesta es que la señora María Isabel Ospina de Wiesner asuma la representación legal principal y el señor Marulanda la representación legal suplente, estando inclusive de acuerdo en considerar modificaciones a lo que se acaba de proponer, pero para comenzar se quiere someter esa propuesta a la Junta de Socios.

NOTARIA 69 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
DESPACHO
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

El Dr. García manifiesta que Catay no acepta la propuesta de Itaca y emite voto en contra. El Dr. García propone que se mantenga la representación legal tal y como está, en cabeza del Dr. Alberto Marulanda y se mantenga al suplente. Teniendo en cuenta que el Dr. Marulanda fue nombrado conforme a los estatutos debe mantener hasta que finalice su periodo.

El Dr. Mendoza manifiesta que no está de acuerdo con la propuesta y vota en contra de la ratificación y permanencia del Dr. Marulanda como representante legal principal.

Se deja constancia que no hubo acuerdo y no hay aprobación de la propuesta sobre la representación legal.

9. RATIFICACIÓN O ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE

ITACA manifiesta que está preocupada por la manifestación que hizo el Sr. González, en el sentido de que a su criterio no hay un conflicto de interés cuando una misma persona representa dos compañías en la celebración de un contrato. Sin embargo, no tiene una propuesta para que se reemplace al señor revisor fiscal en este momento, le gustaría poder hacerla en el futuro pero hoy no trajo ninguna propuesta así que no tiene nada que decir ahí, más allá de reiterar su preocupación por lo que se ha manifestado en esta junta de socios.

El presidente manifiesta que para efectos de la elección o ratificación se tiene que dejar en el acta si se ratifica o no.

El apoderado de Itaca indica que vota en contra de cualquier ratificación. No sabe que efectos tenga eso en vista de que tampoco se le ha removido. No sabe si el seguirá inscrito en la Cámara de Comercio hasta que se produzca la nueva elección. Lo que pide, y se lo pide respetuosamente al representante legal, es que la compañía consiga unas cotizaciones para saber si hay otros candidatos que puedan cumplir con esa función de revisoría fiscal por unas sumas iguales o inferiores a las que se están cobrando en la actualidad.

Sobre las manifestaciones de Itaca, el Dr. García deja la siguiente constancia: La sociedad para efectos de la presentación de sus impuestos tiene que tener un representante legal (SIC). El Sr. Mendoza en representación de Itaca está negándole a la sociedad esta obligación y está probablemente generando que de llegar a hacer alguna confusión sobre si la sociedad cumple o no con el requisito de la firma del revisor fiscal para la presentación de los impuestos los socios pueden llegar a ser responsables por tratarse de una sociedad de responsabilidad limitada. Se deja la constancia en el sentido de la no aprobación y el posible daño y perjuicio que se va a causar a los socios. En los muchos años de vigencia que ha tenido la sociedad nunca ha dejado de presentar los impuestos desde el momento en que tuvo la obligación de tener revisor fiscal siempre ha tenido revisor fiscal y es la primera vez en la que se siente y se ve que se está impidiendo a la sociedad cumplir con sus obligaciones fiscales.

NOTARIA 23 REPUBLICA DE COLOMBIA
BOGOTA D.C.
ANA DIAZ GRANADOS BONIVENTO
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

El Dr. Mendoza afirmó categóricamente que él no está proponiendo que STO incumpla obligaciones ante la DIAN; lo que está diciendo es que el revisor fiscal ha manifestado que no hay un conflicto de interés en una situación en la que claramente, a la luz de todo lo dicho por las autoridades colombianas, si hay un conflicto de interés, entonces no se puede esperar que se vote por la ratificación de un revisor fiscal que ha cometido semejante error. Por eso se pidió a la administración que trajera a la siguiente junta de socios, que podría ser la siguiente semana, o cuando se estime conveniente, propuestas para la elección de un nuevo revisor fiscal. El señor Mendoza aclaró que su voto no quiere decir que se haya destituido, implica la remoción del actual revisor fiscal, razón por la cual nada impide que la compañía pueda seguir presentando sus declaraciones tributarias y cumpliendo sus responsabilidades con el fisco. En ese sentido, el señor Mendoza consideró que el presidente estaba tergiversando lo que quiso decir la propuesta de Ítaca y eso no se puede aceptar. Por ello, el referido apoderado dejó constancia de que votar en contra de la ratificación de un revisor fiscal que ha dicho cosas contrarias a la ley no puede entenderse como una intención de Itaca de inducir un incumplimiento de obligaciones tributarias; si se aceptara esa teoría del señor presidente, sería entonces imposible remover revisores fiscales y la compañía quedaría condenada a nunca poder cambiar un revisor fiscal, en la medida en que eso acarrearía incumplir obligaciones tributarias.

El Dr. García toma la palabra y manifiesta que el Dr. Mendoza acomoda lo que dice, ya que indica que las autoridades ya han declarado un conflicto de interés, y hasta donde se tiene conocimiento no se ha declarado ningún conflicto de interés, y solo se trata de una posición que ha tenido un socio que la ha venido mencionado y que en ningún momento se les ha impedido que mencionen o expongan ese conflicto. Continua diciendo que el Dr. Mendoza es reiterativo en decir que no quiere causar perjuicios; que no puede ratificar, pero no trae ninguna propuesta, entonces se pregunta si una propuesta constructiva sería traer 3 propuestas de revisores fiscal con valores, pero simplemente lo que se está diciendo es salir a oponerse a decir que no vota pero resulta que la decisión es que se debe ratificar o decir que se hace con el revisor fiscal, porque el revisor fiscal esta nombrado pero Itaca no lo está ratificando, entonces se quiere entender cuál es la posición de Itaca en ese sentido.

Luego, el Dr. Mendoza manifiesta que al parecer se está teniendo un dialogo diálogo de sordos en donde él manifiesta una cosa y el Presidente entiende otra. Aclara que el no dijo que las autoridades del estado se hayan pronunciado a cerca del conflicto de interés del señor Marulanda; lo que se dijo fue que la situación en la fáctica que está incurso el señor Marulanda ha sido objeto de múltiples pronunciamientos de todas las autoridades del estado, es decir, cuando un representante legal esta de un lado y de otro.... Pide que se revise la grabación y que queden sus palabras expresa porque ha sido absolutamente preciso en lo que ha dicho.

Continua el Dr. Mendoza, manifestando que en segundo lugar, considera que el señor presidente tampoco entendió la propuesta que está haciendo; no se está diciendo que la compañía quede sin revisor fiscal y que se incumpla nada; se trajo como propuesta que la administración pida unas cotizaciones y las presente a la mayor brevedad ante la junta de socios, pues el revisor fiscal actual no genera confianza en lo absoluto. Su voto es por no ratificarlo y por cambiarlo a la mayor brevedad posible siempre que la administración

NOTARIA 72 BOGOTÁ COLOMBIA
ANA DIAZ GRANADOS BUNCH
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA DE ESTA COPIA CONFORME EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

ayude con la consecución de las cotizaciones, y si la administración se rehúsa a hacerlo, entonces Itaca podría traer las propuestas. Se consideró que, si lo hacia el administrador, se podría conseguir un revisor fiscal que se pudiera engranar en mejor manera con la administración y que genere confianza, pero si se quiere que Itaca las traiga, entonces así será y se cambiaría la propuesta de que el señor Marulanda las pida e Itaca procederá a pedirlas. Luego, podría citarse a una junta de socios para la próxima semana y se presentarán las 3 propuestas de revisoría fiscal.

Toma la palabra el Dr. Garcia solicitando que no se den ataques y que lo único que se está haciendo es procurando que la sociedad no quede en un limbo en relación con el revisor fiscal. Según los estatutos, Itaca tiene el derecho a convocar o pedir que se convoque una junta de socios, presentar las propuestas y como se ha hecho todos los años, se analizarán y revisarán. Se pide continuar con el orden del día, teniendo presente que el revisor fiscal se mantendrá y seguirá revisando las declaraciones impuestos para efectos de que no haya incumplimientos.

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

El Presidente le concede el uso de la palabra al Dr. Mendoza, teniendo en cuenta que manifestó al inicio de la reunión tener un punto a tratar en este espacio.

El Dr. Mendoza manifiesta que son dos los puntos a tratar. La primera propuesta es una acción de social de responsabilidad, y será remitida al correo electrónico de la secretaria para que su escrito haga parte del Acta.

Una vez fue leída la propuesta, a continuación se procede a insertar el texto de la misma:

NOTARIA 23 REPUBLICA DE COLOMBIA
BOGOTA D.C.
ANA DIAZ GRANADOS BONIVENTO
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

PROPUESTA – APROBACIÓN DE UNA ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD

El suscrito, actuando como apoderado especial de Itaca Ltda., se permite someter a consideración de la junta de socios la aprobación de una acción social de responsabilidad en contra del representante legal principal, el señor Alberto Marulanda, por la violación de sus deberes como administrador.

La referida acción social encuentra como fundamento, en primer lugar, la violación de las reglas que rigen el derecho de preferencia en las sociedades de responsabilidad limitada. En verdad, el representante legal se rehusó injustificadamente a transmitirle a la sociedad Catay Ltda. la oferta que Itaca Ltda. envió en cumplimiento del trámite del derecho de preferencia en la negociación de cuotas.

En segundo lugar, la acción social propuesta tiene como fundamento la violación, por parte del señor Marulanda, del régimen de conflictos de interés previsto en el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995. En verdad, durante su gestión como representante legal de STO Ltda., el señor Alberto Marulanda Posada ha celebrado operaciones viciadas por conflictos de interés con Ingetec S.A., una compañía con la cual tanto él como sus familiares tienen vínculos de diversa índole. Las operaciones antes mencionadas fueron celebradas sin contar con la autorización de la junta de socios de STO Ltda., en los términos que exige el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 222 de 1995. Además, como queda claro tras una simple revisión de las condiciones económicas aceptadas por el representante legal de STO Ltda., los contratos en cuestión le han causado importantes perjuicios a la compañía.

Las anteriores circunstancias constituyen una violación patente de los deberes legales que el ordenamiento societario colombiano les atribuye a los administradores de sociedades en Colombia. En consecuencia, le propongo a la junta de socios que, a la luz de lo previsto en el artículo 25 de la Ley 222 de 1995, apruebe una acción social de responsabilidad en contra del señor Marulanda, para que STO Ltda. pueda reclamar judicialmente los perjuicios que ha sufrido con ocasión de las conductas desplegadas por su actual representante legal. En este sentido, según lo dispuesto en el artículo 200 del Código de Comercio, "los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros".

Dado a los 2 días del mes de septiembre del 2020.

José Miguel Mendoza
Apoderado – Itaca Limitada

Toma la palabra el presidente, quien manifiesta que dicha propuesta, de acuerdo con la ley, debe ser sometida a votación para su aprobación.

Se le da el uso de la palabra al apoderado de Itaca para que manifieste el sentido de su voto.

El Dr. Mendoza manifiesta que vota a favor de la acción social de responsabilidad.

Acto seguido, el Dr. García en su condición de apoderado de Catay, manifiesta que vota en contra, y al contrario, reitera la gestión que ha hecho el señor Marulanda, agradece la gestión que ha tenido con STO, considera que su remuneración para efectos de lo que ha venido siendo el desarrollo y velar por la forma como se ha venido desarrollando el

NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA CONCUERDA
EXACTAMENTE CON EL
ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

contrato ha sido más que satisfactoria, no hay sino agradecimiento por lo que ha hecho, y en ese sentido vota en contra de esta proposición.

El Dr. Mendoza toma la palabra y manifiesta que en vista que no se ha aprobado la acción social quiere entonces dejar una constancia, la última escrita que será remitida por correo electrónico a la secretaria, en vista del bloqueo de parte de Catay en relación con la acción social de responsabilidad.

A continuación se inserta en el acta el documento leído por el apoderado y remitido al correo de la secretaria.

CONSTANCIA – BLOQUEO ABUSIVO DE LA ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD

La decisión de Catay Ltda. de bloquear injustificadamente la aprobación de una acción social de responsabilidad, fue una determinación abusiva, en los términos del artículo 43 de la Ley 1258 del 2008, a cuyo tenor "quien abuse de sus derechos de accionista en las determinaciones adoptadas en la asamblea, responderá por los daños que ocasione". Ello se debe a que el veto ejercido por Catay Ltda. perjudicará gravemente los intereses de STO Ltda., en la medida en que hará imposible recobrar los perjuicios que, con su conducta, el señor Marulanda le ha causado a la compañía. En este sentido, la Superintendencia de Sociedades ha expresado, por vía de jurisprudencia, que "cuando se hubiere negado la posibilidad de iniciar una acción social de responsabilidad para encubrir las actuaciones irregulares de un administrador o proteger la desviación de recursos sociales [...] la decisión de rechazar la acción social correspondería a una finalidad que no es tolerada por el ordenamiento colombiano". En cuanto a las consecuencias derivadas de ese bloqueo abusivo, la misma Superintendencia ha manifestado que una de ellas "puede ser la indemnización de los perjuicios sufridos por el demandante". Esta alternativa encuentra consagración expresa en el artículo 43 de la Ley 1258 de 2008, a cuyo tenor, 'quien abuse de sus derechos de accionista en las determinaciones adoptadas en la asamblea, responderá por los daños que ocasione".

Así las cosas, se deja expresa constancia de que el bloqueo injustificado que ha hecho Catay Ltda. de la acción social de responsabilidad le ha causado importantes perjuicios a Itaca Ltda.

Dado a los 2 días del mes de septiembre del 2020.

José Miguel Mendoza
Apoderado – Itaca Ltda.

Continúa el Dr. Mendoza, manifestando que no se referirá a los perjuicios que se le han causado a Catay por el hecho de que no le fue transferida la oferta que oportunamente se le hizo llegar al Dr. Marulanda, porque eso no es del resorte de la competencia de Itaca.

Toma la palabra el Dr. García, quien manifiesta que para cerrar el punto quiere dejar una constancia en el sentido de la indignación y la sorpresa que causa después de tantos años de tener una relación de socios de recibir estas afirmaciones, donde pareciera que

NOTARÍA 73 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
JANA DIAZ GRANADOS BONIVENTO
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

estuviera tratando con un representante legal que a pesar de su gestión durante muchos años de tener un inmueble que es visible en el estado tan bueno y adecuado que esta, que no cobra por su gestión, que hace su gestión para permitir que el canon de arrendamiento llegue directamente.

En este punto de la reunión, se suspende por unos minutos por problemas técnicos de parte del Dr. Daniel García y del Dr. Marulanda.

Se reanuda la sesión y continua la intervención del Dr. García, quien manifiesta que celebra y aplaude la gestión del Dr. Marulanda, sin recibir remuneración alguna, no comprende como a nivel de socios se presentan estas acusaciones y estas insinuaciones, no comparte la acusación, no la respalda, y manifiesta su sentimiento sobre el agradecimiento se debe tener frente a la labor al Dr. Marulanda. Se deja la constancia por instrucciones de María Isabel y de Itaca pero se aparta radicalmente de lo que se ha dicho. Menciona que nunca se le ha violado o vulnerado o impedido la posibilidad a Itaca de ejercer las acciones legales de expresar su inconformidad pero considera que se ha llegado a un punto en donde se encuentra sorprendido, no se aceptan y no se comparten.

El presidente pide que se deje la constancia en el acta, ya que el Dr. Mendoza ha dejado una serie de constancias muy elaboradas y estructuradas. Propone que se proceda a compartir las grabaciones y se circule el acta para que el Dr. Mendoza y el Dr. García la aprueben, y se proceda a la firma de la secretaria y del Dr. Marulanda.

Toma la palabra el Dr. Mendoza, quien manifiesta que le hace falta una propuesta como lo había anunciado y procederá a hacerla para poder terminar. Previo a su propuesta, manifiesta que le sorprende mucho que Catay esté felicitando a un representante legal que no les trasmitió una propuesta de venta de cuotas sociales que podría haber beneficiado a Catay y ese fue uno de los fundamentos de la propuesta de la acción social, y no sabe si el Dr. García tenga conocimiento de esto, pero Itaca hizo una propuesta de venta de sus cuotas sociales, y en cumplimiento del derecho de preferencia esa oferta debió habérsele entregado a Catay; si no ocurrió, Catay pudo haber perdido la oportunidad de comprar las cuotas sociales de Itaca, pero solo es una aclaración en respuesta a lo manifestado por el Dr. García.

Indica el Dr. Mendoza, que para empezar a zanjar los debates sobre la administración de un único activo de la compañía STO se propone contratar a un experto independiente para que haga un avalúo del edificio y para que también indique si los cánones que se cobran resultan congruentes y ajustados a los valores del mercado y en caso que no lo estén se proceda con el ajuste de los cánones hasta donde debieran estar.

El Dr. García manifiesta que no está de acuerdo y vota en contra de esta propuesta. Indica que Itaca está en todo el derecho de hacerlo, inclusive se tiene entendido que ya Itaca hizo un avalúo y no se ve el caso que en esta reunión se mire este tema, y reitera que no comparte y no considera que sea del caso estas afirmaciones, y que se deba constreñir como debe ser el voto o la mención que se haga sobre la gestión del Dr Marulanda, por eso se ha nombrado y ratificado. Se insiste en que cada socio puede hacer el avalúo que corresponda, la información siempre ha estado ahí, la posibilidad

NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE
EXACTAMENTE CON EL
ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA
03 NOV 2020

entrar siempre ha estado ahí, nunca se ha negado la posibilidad que se haga pero en esta oportunidad consideramos que esta propuesta no se debe aprobar.

El Dr. Mendoza manifiesta que ya para cerrar, quiere reiterar cuál es el fondo de estas propuestas que es precisamente la protección del patrimonio de STO. Itaca tiene unas dudas absolutamente legítimas sobre el valor de los cánones que se están cobrando, el avalúo real de ese inmueble, en vista de que el término de duración de la compañía expirará próximamente y que el Dr. Marulanda no va a poder ejercer el cargo de liquidador, y que van a venir ahora ciertas circunstancias que van a obligar a los socios a tomar decisiones importantes. Por eso, para zanjar discrepancias y diferencias, se propuso traer un experto que diga cuánto vale el lote y cuánto en realidad debería estar cobrándose por concepto de cánones de arrendamiento. Se entiende que la propuesta nos sea aprobada y por supuesto, ni más faltaba, que no se le está diciendo a Catay cómo votar. El comentario sobre el derecho de preferencia es porque no se tenía claro si Catay estuvo enterado que no le habían transmitido una oferta que debió haber conocido.

Acto seguido, el Dr. Mendoza agradece a los asistentes su presencia, al señor representante legal a pesar de todos los reparos formulados, a la señor secretaria y por supuesto al revisor fiscal, y al presidente de la reunión por haber abierto el espacio para que los socios manifestarán sus opiniones y ejercieran sus derechos políticos y económicos.

El Dr. García, manifiesta que ya para cerrar le llama la atención que el apoderado de Itaca haya traído el tema de la liquidación cuando en varias oportunidades ha sido Catay quien en varias oportunidades han propuesto la prórroga de la vigencia y ha sido Itaca quien se ha negado a una ampliación. Entiende que la sociedad va a surtir su trámite de liquidación por vencimiento del término y será ese el caso, y que entiende que Itaca no está indicando como votar pero también se quiere que el derecho y posición de Catay sea mantenida, sobre todo para que el apoderado de Itada tenga una visión más amplia de lo ha venido pasando. Considera que la información que le ha trasmitido la poderdante ha omitido una serie de consideraciones para efectos de que la argumentación sea más contúndete pero es del caso recordar que el inmueble, que es un área supremamente grande, ha sido mantenido en su totalidad por el arrendatario, nunca la arrendadora ha tenido que invertir un peso sobre las mejoras necesarias y esenciales, entonces no se considera que el tema sea como se pone en la reunión. Se pregunta por el espíritu de las manifestaciones, ya que no se está en una instancia o una audiencia o un foro donde hay un tema legal sino es una junta de socios, donde debe haber una búsqueda de que la sociedad gane, y se reitera, no era del caso venir a lanzar afirmaciones cuando la forma como se ha operado ha sido muy distinta.

El Dr. Mendoza toma la palabra y manifiesta su más enérgico rechazo a la afirmación del Dr. García sobre que le fue suministrada información incompleta, ya que por supuesto antes de asistir a la reunión todas las actas y todos los documentos que consideró relevantes para entender bien el contexto, y a partir de esa labor exhaustiva es que ha manifestado sus reparos de lo que ha venido ocurriendo. Menciona que se ha dicho que se cuenta con un arrendatario maravilloso, pero le llama la atención que el mismo arrendatario no quiere exponerse a que un tercero independiente diga si los cánones están a valor de mercado o no. Insiste en que no quiere abrir nuevamente esa compuerta

NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

porque ya se votó la propuesta, pero sí insiste en la importancia de dejar claro ese punto. En cuanto a la liquidación, entiende que Catay tampoco propuso nada respecto de la prórroga o el rechazo de la propuesta de prórroga de la duración, y entiende que el Dr. García tiene una propuesta que le gustaría considerarla y estudiarla conjuntamente con su poderdante.

El Dr. García manifiesta que no tiene ninguna propuesta sobre la prórroga de la vigencia de la sociedad, ya que ese tema en otras reuniones fue considerado y no fue objeto de aprobación.

11. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No siendo otro el objeto de la reunión, el Presidente levantó la sesión siendo la 1 p.m.

Se procede a la elaboración del Acta y se remite a los miembros de la comisión para su lectura y aprobación.

Una vez leía el acta por la comisión integrada por Daniel García Piñeros y José Miguel Mendoza daza se procede a su aprobación.

En constancia de lo anterior la firman,

Daniel García Piñeros
Presidente

Ana Milena Lopera Rozo
Secretaria

Alberto Marulanda Posada
Representante Legal

Firmada por la comisión revisora del acta:

Daniel García Piñeros

Jose Miguel Mendoza

NOTARIA 23 REPUBLICA DE COLOMBIA
BOGOTA D.C.
ANA DIAZ GRANADOS BONIVENTO
03 NOV 2020
NOTARIA ENCARGADA
ESTA COPIA COINCIDE EXACTAMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO TERCERO (3°) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
Carrera 9 No. 11-45 piso 6° Edificio Virrey – Torre Central.
j03cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co – Teléfono 2820261

Bogotá, D.C., Veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

PROCESO VERBAL NULIDAD ACTOS SOCIETARIOS Y ABUSO DEL DERECHO RAD. **2021-00091**00

Por reunir los requisitos exigidos por el artículo 82 del Código General del Proceso, y teniendo en cuenta que fue subsanada en tiempo la demanda, el Juzgado **ADMITE** la presente demanda **VERBAL DE NULIDAD DE ACTOS SOCIETARIOS Y ABUSO DEL DERECHO** que promueve **Ítaca Ltda.**, contra **Alberto María Marulanda Posada**, **Catay Ltda.**, **Servicios Técnicos Omicron Ltda. En Liquidación** y Contra **INGETEC Ingeniería & Diseño S.A.S. – INGETEC I&D S.A.S.**

Cítese como litisconsortes cuasinecesarios a la sociedad **Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos INGETEC S.A.S.**, y al señor **Andrés Marulanda Escobar**.

Tramítese este asunto por el procedimiento verbal previsto en el Libro Tercero, Título I, Capítulo I, artículos 368 y s.s. del Código General del Proceso.

De la demanda y sus anexos córrase traslado a la parte demandada por el término de veinte (20) días de conformidad con el artículo 369 del Código General del Proceso, notifíquese la presente providencia según lo preceptuado en el artículo 291 y 292, en armonía con los dispuesto en el artículo 08 de la Ley 2213 del 2022.

Se reconoce personería al **Dr. Hugo Palacios Mejía** como mandatario judicial de la parte actora, en los términos y condiciones del poder conferido.

NOTIFÍQUESE (3),

LILIANA CORREDOR MARTÍNEZ
JUEZ

Yapn

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
La anterior providencia se notifica por anotación en Estado No. 030 hoy 24 de marzo de 2023.

ALEJANDRO GEOVANNY SALINAS
Secretario

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Carrera 10 No. 19-65 Edificio Camacol - Piso 11.
j52ccto@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D. C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

EXP. Verbal - Nulidad actos societarios y abuso del derecho
No. 11001-31-03-003-2021-00091-00.

Se avoca el conocimiento del proceso de la referencia, remitido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esta ciudad, en virtud de lo dispuesto en los Acuerdos PCSJA22-12028 de 2022 del Consejo Superior de la Judicatura y CSJBTA23-42 de 2023 proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.

Notifíquese.

MAYRA CASTILLA HERRERA
Juez
(2)

MABR

JUZGADO CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

ESTA PROVIDENCIA FUE NOTIFICADA POR ANOTACIÓN EN ESTADO DE 16 DE JUNIO DE 2023.

_____

ANYELA KATERINE BALLESTEROS BARRANTES
SECRETARIA

Firmado Por:
Mayra Castilla Herrera
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 052
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d5d3353f24c2bc7dbaf6e74f2c006bf183e6640b4052d3f945292bb85107232a**
Documento generado en 15/06/2023 10:35:31 AM

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Carrera 10 No. 19-65 Edificio Camacol - Piso 11.
j52ccto@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D. C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

EXP. Verbal - Nulidad actos societarios y abuso del derecho
No. 11001-31-03-003-2021-00091-00

En atención al informe secretarial que antecede, encuentra el juzgado que la parte actora no ha cumplido con la carga procesal correspondiente a notificar a los demandados ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA, CATAY LTDA., SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA EN LIQUIDACIÓN E INGETEC INGENIERÍA & DISEÑO S.A.S INGETEC I&D S.A.S., ni a los litisconsortes convocados al juicio, en los términos del auto que admitió la demanda, datado del 23 de marzo de 2023 (023AutoAdmiteDemanda).

En consecuencia, se **REQUIERE** para que, en un término no mayor a 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación de este auto por estado, adelante y agote **en su integridad** las actuaciones conducentes a la notificación de la parte demandada, so pena de dar por terminado el asunto por desistimiento tácito, de conformidad con el artículo 317 del C.G.P.

Notifíquese.

MAYRA CASTILLA HERRERA
Juez
(2)

MAER

JUZGADO CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

ESTA PROVIDENCIA FUE NOTIFICADA POR ANOTACIÓN EN ESTADO DE 16 DE JUNIO DE 2023.

_____

ANYELA KATERINE BALLESTEROS BARRANTES
SECRETARIA

Firmado Por:

Mayra Castilla Herrera

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 052

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ad64e3b959ee3c6f006584ff627d299b096738f7e1fc13fbb488b428d3098cc6**
Documento generado en 15/06/2023 10:35:30 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Carrera 10 No. 19-65 Edificio Camacol - Piso 11.
j52cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D. C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

EXP. Verbal – Nulidad actos societarios y abuso del derecho
No. 11001-31-03-003-2021-00091-00.

En aras de continuar con el trámite del presente asunto, el Juzgado DISPONE:

1.- Reconocer personería al abogado OSCAR ROSALES NIETO como apoderado judicial de la sociedad demandante ÍTACA LIMITADA EN LIQUIDACIÓN en los términos y para los efectos del mandato conferido (030MemorialOrogamientoPoderÍtaca).

2.- Téngase en cuenta que los DEMANDADOS ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA y ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, se notificaron del auto admisorio de la demanda de forma personal, conforme lo prevé el artículo 8° de la Ley 2213 de 2022, mediante comunicación enviada como mensaje de datos desde 24 de julio de 2023[1] y, dentro de la oportunidad procesal, por intermedio de apoderado judicial, formularon recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda.

3.- Reconocer personería al abogado DANIEL PIÑEROS GARCÍA, como apoderado judicial de los demandados ALBERTO MARÍA MARULANDA POSADA Y ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR en los términos y para los efectos del mandato conferido.

4.- No se tienen como legalmente efectuadas las notificaciones de los demandados CATAY LTDA., SERVICIOS TÉCNICOS OMICRON LTDA. EN LIQUIDACIÓN, INGENIERÍA & DISEÑO S.A.S. –INGETEC I&D S.A.S**.** y la sociedad INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS INGETEC S.A.S., realizadas por la parte actora, de conformidad con el artículo 8° de la Ley 2213 de 2022, toda vez que no se informó a los convocados la fecha desde la cual se entendían notificados, los términos con los que contaban para contestar la demanda, así como tampoco la dirección física o electrónica del juzgado.

En consecuencia, **deberán rehacerse las diligencias respecto de los demandados Catay Ltda., Servicios Técnicos Omicron Ltda. En Liquidación, Ingeniería & Diseño S.A.S. –Ingetec I&D S.A.S.** y la sociedad **Ingenieros Consultores Civiles y Eléctricos Ingetec S.A.S.**

[1] Pág.6, 032Notificación.

5.- Una vez integrado el contradictorio, se resolverán los recursos de reposición formulados por los demandados Alberto María Marulanda Posada y Andrés Marulanda Escobar.

Notifíquese.

MAYRA CASTILLA HERRERA
Juez

MAER

JUZGADO CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

ESTA PROVIDENCIA FUE NOTIFICADA POR ANOTACIÓN EN ESTADO DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2023.

YADY MILENA SANTAMARÍA CEPEDA
SECRETARIA

Firmado Por:
Mayra Castilla Herrera
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 052
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **05f813849d2675fb7d34e8a83c18f5667001fb70e9353751b21f758f99bfa2ff**
Documento generado en 27/11/2023 03:30:32 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

DLA PIPER MARTINEZ BELTRAN

DLA Piper Martínez Beltran
Carrera 7 No. 71-21 Torre B Of. 602
Bogotá, Colombia
www.dlapipermb.com

Bogotá D.C., 16 de junio de 2023

Señores
JUZGADO CINCUENTA DOS (52) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Ciudad

Exp. 11001-31-03-003-2021-00091-00

Ref. Poder especial

MARÍA ISABEL JUANA OSPINA DE WIESNER, identificada como aparece en el pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de **ÍTACA LIMITADA EN LIQUIDACIÓN,** identificada con el N.I.T. 860.048.865-1, por medio de este escrito le confiero poder especial, amplio y suficiente al señor **OSCAR ROSALES NIETO**, identificado con la cédula de ciudadanía n.° 1.020.790.862, con domicilio en Bogotá, D.C., abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional n.° 309.966 del Consejo Superior de la Judicatura, con correos electrónicos orosales@dlapipermb.com y o.rosales10@uniandes.edu.co, con el fin de que adelante todas las actuaciones necesarias para la defensa de los intereses de Ítaca Limitada en Liquidación en el proceso verbal de la referencia iniciado en contra de Alberto María Marulanda Posada, Catay Limitada, Servicios Técnicos Ómicron Limitada en Liquidación e Ingetec Ingeniería & Diseño S.A.S.

El apoderado queda investido de las más amplias facultades inherentes al correcto desempeño de sus funciones, incluidas las de notificarse, presentar escritos, recursos y solicitudes de cualquier naturaleza, participar en audiencias, conciliar, recibir, solicitar copias, sustituir y reasumir en cualquier momento el presente poder y, en general, todas las gestiones que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de este mandato. En constancia de lo anterior, suscriben las siguientes personas:

El poderdante,

María Isabel O. de Wiesner
C.C. 51.713.072
Representante Legal – Ítaca Limitada en Liquidación

El apoderado,

Oscar Rosales Nieto
C.C. 1.020.790.862 de Bogotá, D.C.
T.P. 309.966 del C.S.J

DLA Piper Martínez Beltran
Carrera 7 No. 71-21 Torre B Of. 602
Bogotá, Colombia
www.dlapipermb.com

Bogotá, D.C., 30 de noviembre de 2023

Doctora
Mayra Castilla Herrera
Juzgado Cincuenta y Dos Civil del Circuito de Bogotá
Ciudad

Ref.:	Sustitución poder especial
Demandante:	Ítaca Limitada en Liquidación.
Demandados:	Alberto Maria Marulanda Posada, Catay Limitada, Servicios Técnicos Ómicron Limitada, Ingetec Ingeniería & Diseño Sas -Ingetec I&D S.A.S.
Litisconsortes:	Ingenieros Consultores Civiles Y Eléctricos S.A.S. Ingetec S.A.S., Andrés Marulanda Escobar.
Número del proceso:	11001-31-03-003-2021-00091-00

Respetados señores:

OSCAR ROSALES NIETO, identificado bajo mi firma, en calidad de apoderado judicial reconocido de Ítaca Limitada en Liquidación, por medio de este escrito sustituyo el poder especial, amplio y suficiente a mi conferido a **JUAN PABLO AMAYA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía n.° 1.136.883.125 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional número 256.510 del Consejo Superior de la Judicatura, para que a partir de la fecha funja como apoderado judicial de la demandante Ítaca Limitada en Liquidación en el proceso judicial de la referencia con las mismas facultades a mí otorgadas.

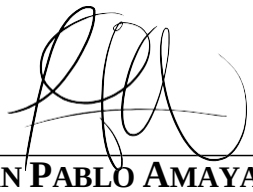
De acuerdo con lo exigido por el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, se informa que el correo del apoderado es jpamaya@dlapipermb.com. Se deja constancia de que el correo señalado figura en el Registro Nacional de Abogados.

DLA Piper Martínez Beltran
Carrera 7 No. 71-21 Torre B Of. 602
Bogotá, Colombia
www.dlapipermb.com

En constancia de lo anterior, suscriben las siguientes personas:



OSCAR ROSALES NIETO
C.C. 1.020.790.862 de Bogotá, D.C.
T.P. 309.966 del C.S. de la J.



JUAN PABLO AMAYA
C.C. 1.136.883.125 de Bogotá, D.C.
T.P. 256.510 del C.S. de la J.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de enero de 2024 Hora: 13:28:14
Recibo No. AA24104894
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2410489448298

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS SAS
Sigla: INGETEC SAS
Nit: 860.001.986-1
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00023592
Fecha de matrícula: 22 de junio de 1972
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 7 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cra 6 No. 30A-30
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: info@ingetec.com.co
Teléfono comercial 1: 3238050
Teléfono comercial 2: 3238050
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cra 6 No. 30A-30
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: conta-ing@ingetec.com.co
Teléfono para notificación 1: 3238050
Teléfono para notificación 2: 3238050
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de enero de 2024 Hora: 13:28:14
Recibo No. AA24104894
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2410489448298

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 311 de la Notaría 1 Bogotá del 7 de febrero de 1957, inscrita el 18 de febrero de 1957, bajo el No. 39493 del libro respectivo, se constituyó la Sociedad Limitada denominada: OLARTE OSPINAS ARIAS Y PAYAN INGENIERIA LIMITADA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública número 4352 otorgada en la Notaría 1 de Bogotá el 1 de diciembre de 1961, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de diciembre de 1961, bajo el número 52040 del libro respectivo la sociedad cambió su nombre de: OLARTE OSPINAS ARIAS Y PAYAN INGENIERIA LIMITADA por el de: INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS LTDA INGETEC LTDA.

Por Escritura Pública numero 1718 otorgada en la Notaría 31 de Bogotá el 24 de diciembre de 1982, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de abril de 1983, bajo el número 130850 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS LTDA INGETEC LTDA por el de: INGETEC S.A.

Por Escritura Pública némero 1718 otorgada en la Notaría 31 de Bogotá el 24 de diciembre de 1982, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de abril de 1983, bajo el número 130850 del libro IX, se transformó de Limitada en Anónima bajo el nombre de: INGETEC S.A.

Por Escritura Pública numero 296 otorgada en la Notaría 31 de Bogotá el 17 de marzo de 1983, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de abril de 1983; bajo el número 130851 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: INGETEC S.A., por el de: INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A. INGETEC S.A

Por Acta No. 246 de la Asamblea de Accionistas, del 26 de diciembre de 2018, inscrita el 28 de diciembre de 2018 bajo el número 02410352 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS S.A., sigla INGETEC S.A., por el de: INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS SAS sigla: INGETEC SAS.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de enero de 2024 Hora: 13:28:14
Recibo No. AA24104894
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2410489448298

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 246 de la Asamblea de Accionistas, del 26 de diciembre de 2018 inscrita el 28 de diciembre de 2018 bajo el número 02410352 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOS SAS.

ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

Por Resolución No. 08092 del 13 de diciembre de 1982, inscrita el 20 de diciembre de 1982 bajo el número 126043 del libro IX, la superintendencia de sociedades otorgo permiso definitivo de funcionamiento a esta sociedad.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto social prestar, tanto en el país como en el exterior: (i) servicios relacionados con los estudios preliminares, diseños, interventorías, asesorías, auditorías, supervisiones, gerenciamiento, debidas diligencias, experticias, peritajes, control, para toda clase de obras de ingeniería en sus distintas especialidades, dentro de los cuales se podrán adelantar actividades tales como, pero sin limitarse a: hidrología, geología, geomorfología, geografía, topografía, Geomática. tránsito, tráfico vehicular, catastro, redes, predios, ambientales, sociales, arqueológicas, económicas financieras/contables, jurídicas, administrativas, gestión de calidad, gestión en salud en el trabajo, riesgos, seguros. etc. (ii) La prestación de servicios de laboratorio de materiales (ensayos de suelos, rocas, pavimentos y concretos). (iii) Actividades de consultoría informática, de administración, de instalaciones informáticas, fabricación de equipos de medición, prueba, navegación y control. (iv) La sociedad podrá llevar a cabo dentro de su objeto social cualquier otra actividad lícita. La sociedad podrá ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios o

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de enero de 2024 Hora: 13:28:14
Recibo No. AA24104894
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2410489448298

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

convenientes para el desarrollo del objeto social, tales como, pero sin, limitarse a: 1) Adquirir, gravar, enajenar, recibir y dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles o inmuebles o administrarlos; 2) Girar, aceptar, negociar, descontar y dar en garantía toda clase de instrumentos negociables y documentos civiles o comerciales; 3) Avalar, respaldar, garantizar y/o fiar operaciones de terceros; 4) Contratar servicios específicos de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; 5) Gestionar el financiamiento de proyectos con cualquier tipo de entidades o personas; 6) Tomar interés como socia o accionistas en otras compañías. fusionarse con ellas e incorporarse a ellas y absorberlas; 7) Formar parte de consorcios y uniones temporales; 8) Actuar como intermediario en operaciones de compraventa de bienes y prestación de servicios; 9) Celebrar todo tipo de contratos comerciales o civiles, incluyendo contratos de mandato, y 10) En general, teniendo en cuenta que la enumeración anterior no es taxativa, llevar a cabo todo acto o contrato que se relacione directa o indirectamente con el objeto social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $6.000.000.000,00
No. de acciones : 600.000,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $4.000.020.000,00
No. de acciones : 400.002,00
Valor nominal : $10.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $4.000.020.000,00
No. de acciones : 400.002,00
Valor nominal : $10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un (1) gerente principal y cinco(5) gerentes suplentes, quienes serán de libre nombramiento y remoción por parte de la asamblea general de accionistas y ostentarán la representación legal de la sociedad.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

En desarrollo del objeto social, son funciones y facultades del gerente principal y de los suplentes del gerente de la sociedad las siguientes: 1) Hacer uso de la denominación social ante los socios, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo; 2) Ejecutar o hacer que se ejecuten y cumplan todas las decisiones que se adopten por la asamblea general de accionistas; 3) Velar por el cumplimiento de la ley y de los estatutos 4) Designar y remover libremente los empleados de la sociedad cuyo nombramiento no esté atribuido a la asamblea general de accionistas y escoger, también libremente, al personal de trabajadores, determinar su número, fijar el género de labores, remuneraciones, etc., y hacer los despidos del caso; 5) Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad; 6) Firmar todos los documentos públicos o privados, actos o contratos comprendidos dentro del objeto social. También podrán celebrar y ejecutar créditos; 7) Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales y vigilar las actividades de la administración de la sociedad; 8) Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente como persona jurídica, con facultades para transigir, comprometer y desistir; 9) Convocar a la asamblea general de accionistas de la sociedad a reuniones ordinarias y extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario o cuando se lo solicite un número plural de accionistas que represente, por lo menos, la quinta parte (20%) de las acciones suscritas de la sociedad; 10) Presentar a la asamblea general de accionistas, en sus sesiones ordinarias, un inventario y el balance de cada ejercicio, estados financieros de propósito general individuales y consolidados cuando sea del caso con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio junto con un proyecto de distribución de las utilidades obtenidas y los documentos a que se refiere el artículo 446 del código de comercio y un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión, de la situación de la sociedad y las medidas cuya adopción recomiende a la asamblea además de aquellos

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de enero de 2024 Hora: 13:28:14
Recibo No. AA24104894
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2410489448298

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

informes que sean solicitados por la asamblea general de accionistas; 11) Presentar oportunamente a consideración de la asamblea general de accionistas el presupuesto de inversiones, ingresos y gastos que requiera la sociedad; 12) Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la asamblea general de accionistas las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular; 13) Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad 14) Rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio y dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto, se presentarán los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión; y 15) Ejercer todas las facultades que directamente deleguen en ellos la asamblea general de accionistas y con las limitaciones previstas en los presentes estatutos. Parágrafo: El representante legal para asuntos laborales tendrá todas las facultades inherentes a representación legal en asuntos laborales, incluyendo, pero sin limitarse a las siguientes: 1) Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad, facultad de recibir, pagar, desistir, sustituir, conciliar, oponerse, presentar excepciones y transigir en toda clase de juicios o acciones laborales que por ella o contra ella hayan de tramitarse ante cualesquiera cortes o tribunales, juzgados, dependencias, funciones o empleados de cualquiera de las ramas jurisdiccionales o administrativas del trabajo en la república de Colombia o de cualquiera de sus divisiones políticas, siguiendo al respecto la tramitación ordenada por la ley y para otorgar, para tales fines los poderes que estime convenientes. 2) Para la representación de que trata la presente delegación, se entiende que el representante legal para asuntos laborales tiene todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, tales como las de recibir, pagar, desistir, transigir, confesar, presentar excepciones, conciliar litigios pendientes y sustituir y reasumir conforme a la legislación colombiana. 3) En consecuencia el representante legal para asuntos laborales queda plenamente facultado para notificarse de todas las providencias judiciales y administrativas en que sea parte interesada, demandante o demandada la sociedad o cualquiera de sus representantes legales o apoderados generales y contesta y formular interrogatorios en juicio o fuera de él, comprometiendo válidamente a la sociedad.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de enero de 2024 Hora: 13:28:14
Recibo No. AA24104894
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2410489448298

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 256 del 12 de diciembre de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de diciembre de 2019 con el No. 02535929 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente Principal	Alberto Maria Marulanda Posada	C.C. No. 19063997
Representante Legal Para Asuntos Laborales	Mario Rodriguez Parra	C.C. No. 17071856

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Gerente	Fabio Anibal Amaya Rey	C.C. No. 17164405

Por Acta No. 262 del 1 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de mayo de 2021 con el No. 02702334 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del Gerente	Daniel Rebolledo Delgado	C.C. No. 79144238
Tercer Suplente Del Gerente	Hortensio Castro Orozco	C.C. No. 19365916

Por Acta No. 256 del 12 de diciembre de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de diciembre de 2019 con el No. 02535929 del Libro IX, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de enero de 2024 Hora: 13:28:14
Recibo No. AA24104894
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2410489448298

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Cuarto Suplente Del Gerente	Ana Milena Lopera Rozo	C.C. No. 52501243

Por Acta No. 266 del 31 de marzo de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de abril de 2022 con el No. 02812343 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Quinto Suplente Del Gerente	Andres Marulanda Escobar	C.C. No. 79779202

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 255 del 20 de agosto de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de septiembre de 2019 con el No. 02502636 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Luis Alberto Vallejo Leon	C.C. No. 80372308 T.P. No. 73608-T
Revisor Fiscal Suplente	Olga Cortes Benavides	C.C. No. 51874672 T.P. No. 52086-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
4670	17-X-1960	2 BTA	25-X-1960 - 47878
1352	24-IV-1961	1 BTA	12-V-1961 - 49722
2281	27-IV-1961	5 BTA	12-V-1961 - 49723
5590	19-XII-1961	3 BTA	27-XII-1961 - 52179
3815	21-XII-1961	6 BTA	3-I-1962 - 52248
4728	28-XII-1961	1 BTA	5-I-1962 - 52278

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de enero de 2024 Hora: 13:28:14
Recibo No. AA24104894
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2410489448298

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

6536	18-XII-1963	7 BTA	9-I-1964 - 59634
7008	29-XII-1966	5 BTA	16-I-1967 - 70955
4637	2-IX-1968	5 BTA	27-IX-1969 - 77639
7386	24-XII-1968	5 BTA	1-I-1969 - 78896
5230	20-VIII-1970	7 BTA	3-IX-1970 - 86404
1023	5-III-1971	7 BTA	16-III-1971 - 89250
7709	21-XII-1971	7 BTA	29-XII-1971 - 93412
652	22-II-1972	7 BTA	7-III-1972 - 1051
4519	24-VIII-1973	2 BTA	13-IX-1973 - 11934
7351	13-XII-1974	2 BTA	23-XII-1974 - 23317
551	26-II-1975	2 BTA	7-III-1975 - 25128
3123	28-VIII-1975	2 BTA	17-IX-1975 - 29857
1230	24-VI-1977	20 BTA	21-VII-1977 - 47910
374	9-III-1978	20 BTA	11-IV-1978 - 56248
3041	13-XII-1979	20 BTA	2-I-1980 - 79521
1689	30-VII-1980	20 BTA	30-VII-1981 - 103535
225	23-III-1982	31 BTA	14-IV-1982 - 114361
1317	6-X-1982	31 BTA	26-X-1982 - 123528
5173	13-XI-1.987	31 BTA	20-XI-1.987- 223.278
3467	4-VI-1.993	31 STFE BTA	15-VI-1.993- 409.242

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0001761 del 15 de junio de 1999 de la Notaría 31 de Bogotá D.C.	00684583 del 17 de junio de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0001865 del 23 de junio de 1999 de la Notaría 31 de Bogotá D.C.	00685906 del 28 de junio de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0003332 del 9 de agosto de 2001 de la Notaría 31 de Bogotá D.C.	00789283 del 10 de agosto de 2001 del Libro IX
E. P. No. 0003087 del 19 de julio de 2002 de la Notaría 31 de Bogotá D.C.	00837013 del 24 de julio de 2002 del Libro IX
E. P. No. 0000678 del 25 de febrero de 2004 de la Notaría 31 de Bogotá D.C.	00921839 del 25 de febrero de 2004 del Libro IX
E. P. No. 0001970 del 10 de mayo de 2004 de la Notaría 31 de Bogotá	00934656 del 18 de mayo de 2004 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de enero de 2024 Hora: 13:28:14
Recibo No. AA24104894
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2410489448298

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

D.C.	
E. P. No. 2866 del 8 de septiembre de 2010 de la Notaría 23 de Bogotá D.C.	01415414 del 21 de septiembre de 2010 del Libro IX
E. P. No. 248 del 12 de febrero de 2013 de la Notaría 23 de Bogotá D.C.	01708379 del 22 de febrero de 2013 del Libro IX
E. P. No. 311 del 18 de febrero de 2015 de la Notaría 23 de Bogotá D.C.	01913371 del 20 de febrero de 2015 del Libro IX
E. P. No. 1721 del 27 de julio de 2015 de la Notaría 23 de Bogotá D.C.	02008846 del 6 de agosto de 2015 del Libro IX
Acta No. 246 del 26 de diciembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02410352 del 28 de diciembre de 2018 del Libro IX
Acta No. 248 del 15 de enero de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02414842 del 18 de enero de 2019 del Libro IX
Acta No. 256 del 12 de diciembre de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02535928 del 23 de diciembre de 2019 del Libro IX
Acta No. 258 del 22 de enero de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02545783 del 27 de enero de 2020 del Libro IX
Acta No. 266 del 31 de marzo de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02812342 del 5 de abril de 2022 del Libro IX
Acta No. 269 del 31 de mayo de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02845823 del 3 de junio de 2022 del Libro IX
Acta No. 280 del 21 de abril de 2023 de la Asamblea de Accionistas	02976842 del 15 de mayo de 2023 del Libro IX
Acta No. 281 del 9 de agosto de 2023 de la Asamblea de Accionistas	03013393 del 1 de septiembre de 2023 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de enero de 2024 Hora: 13:28:14
Recibo No. AA24104894
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2410489448298

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 7111
Otras actividades Código CIIU: 7120, 7210

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 125.367.279.933
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 21 de noviembre de 2016. Fecha de envío de información a Planeación : 1 de septiembre de 2023. \n \n

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de enero de 2024 Hora: 13:28:14
Recibo No. AA24104894
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2410489448298

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de enero de 2024 Hora: 13:28:14
Recibo No. AA24104894
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2410489425EF2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS
Sigla: INGETEC I&D SAS
Nit: 900.206.480-2, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01784158
Fecha de matrícula: 13 de marzo de 2008
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 6 de marzo de 2023

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 13 93 35 Ov-668
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: info@ingetec.com.co
Teléfono comercial 1: 3238050
Teléfono comercial 2: 2875196
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 13 93 35 Ov-668
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: conta-iyd@ingetec.com.co
Teléfono para notificación 1: 3238050
Teléfono para notificación 2: 2875196
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de enero de 2024 Hora: 13:28:14
Recibo No. AA24104894
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2410489425EF2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0000755 del 6 de marzo de 2008 de Notaría 31 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de marzo de 2008, con el No. 01198550 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada INGETEC INGENIERIA & DISEÑO S A.

REFORMAS ESPECIALES

Se aclara que por Acta No. 39 de la Asamblea de Accionistas, del 26 de diciembre de 2018, inscrita el 28 de diciembre de 2018 bajo el Número 02410241 del Libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: INGETEC INGENIERIA & DISEÑO S A sigla: INGETEC I & D S A, por el de: INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS sigla: INGETEC I&D SAS.

Por Acta No. 39 de la Asamblea de Accionistas, del 26 de diciembre de 2018, inscrita el 28 de diciembre de 2018 bajo el Número 02410241 del Libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS.

Por Acta No. 39 del 26 de diciembre de 2018 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de diciembre de 2018, con el No. 02410241 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de INGETEC INGENIERIA & DISEÑO S A a INGETEC INGENIERIA & DISEÑO SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tendrá como objeto social prestar, tanto en el país como en el exterior: (i) servicios relacionados con los estudios

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de enero de 2024 Hora: 13:28:14
Recibo No. AA24104894
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2410489425EF2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

preliminares, diseños, interventorías, asesorías, auditorías, supervisiones, gerenciamiento, debidas diligencias, experticias, peritajes, control, para toda clase de obras de ingeniería en sus distintas especialidades, dentro de los cuales se podrán adelantar actividades tales como, pero sin limitarse a: Hidrología, geología, geomorfología, geografía, topografía, geomática, tránsito, tráfico vehicular, catastro, redes, predios, ambientales, sociales, arqueológicas, económicas /financieras /contables, jurídicas, administrativas, gestión de calidad, gestión en salud en el trabajo, riesgos, seguros, etc. (ii) Actividades de consultoría informática, de administración de instalaciones informáticas, fabricación de equipos de medición, prueba, navegación y control. (iii) La sociedad podrá llevar a cabo dentro de su objeto social cualquier otra actividad lícita. La sociedad podrá ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto social, tales como, pero sin limitarse a: 1) Adquirir, gravar, enajenar, recibir y dar en arrendamiento toda clase de bienes muebles o inmuebles o administrarlos; 2) Girar, aceptar, negociar, descontar y dar en garantía toda clase de instrumentos negociables y documentos civiles o comerciales; 3,) Avalar, respaldar, garantizar y/o fiar operaciones de terceros; 4) Contratar servicios específicos de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; 5) Gestionar el financiamiento de proyectos con cualquier tipo de entidades o personas; 6) Tomar interés como socia o accionistas en otras compañías, fusionarse con ellas e incorporarse a ellas y absorberlas; 7) Formar parte de consorcios y uniones temporales; 8) Actuar como intermediario en operaciones de compraventa de bienes y prestación de servicios; 9) Celebrar todo tipo de contratos comerciales o civiles, incluyendo contratos de mandato, y 10) En general, teniendo en cuenta que la enumeración anterior no es taxativa, llevar a cabo todo acto o contrato que se relacione directa o indirectamente con el objeto social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $100.009.970,00
No. de acciones : 9.995,00
Valor nominal : $10.006,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de enero de 2024 Hora: 13:28:14
Recibo No. AA24104894
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2410489425EF2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $79.997.970,00
No. de acciones : 7.995,00
Valor nominal : $10.006,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $79.997.970,00
No. de acciones : 7.995,00
Valor nominal : $10.006,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La Sociedad tendrá un (1) Gerente principal y cuatro (4) suplentes del Gerente, quienes serán de libre nombramiento y remoción por parte de la Asamblea General de Accionistas y ostentarán la representación legal de la sociedad con los requisitos legales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

En desarrollo del objeto social, son funciones y facultades del Gerente principal y de los suplentes del Gerente de la sociedad las siguientes: 1) Hacer uso de la denominación social ante los socios, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo; 2) Ejecutar o hacer que se ejecuten y cumplan todas las decisiones que se adopten por la Asamblea General de Accionistas; 3) Velar por el cumplimiento de la ley y de los estatutos. 4) Designar y remover libremente los empleados de la sociedad cuyo nombramiento no esté atribuido a la Asamblea General de Accionistas y escoger, también libremente, al personal de trabajadores, determinar su número, fijar el género de labores, remuneraciones, etc., y hacer los despidos del caso; 5) Constituir apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representación de la sociedad; 6) Firmar todos los documentos públicos o privados, actos o contratos comprendidos dentro del objeto social. También podrán celebrar y ejecutar créditos; 7) Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales y vigilar las actividades de la administración de la sociedad; 8) Representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente como persona jurídica, con

facultades para transigir, comprometer y desistir; 9) Convocar a la Asamblea General de Accionistas de la sociedad a reuniones ordinarias y extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario o cuando se lo solicite un número plural de accionistas que represente, por lo menos, la quinta parte (20%) de las acciones suscritas de la sociedad; 10) Presentar a la Asamblea General de Accionistas, en sus sesiones ordinarias, un inventario y el balance de cada ejercicio, estados financieros de propósito general individuales y consolidados cuando sea del caso con sus notas, cortados al fin del respectivo ejercicio junto con un proyecto de distribución de las utilidades obtenidas y los documentos a que se refiere el artículo 446 del Código de Comercio y un informe escrito sobre la forma como hubiere llevado a cabo su gestión, de la situación de la sociedad y las medidas cuya adopción recomiende a la asamblea además de aquellos informes que sean solicitados por la Asamblea General de Accionistas; 11) Presentar oportunamente a consideración de la Asamblea General de Accionistas el presupuesto de inversiones, ingresos y gastos que requiera la sociedad; 12) Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea General de Accionistas las irregularidades o faltas graves que ocurran sobre este particular; 13) Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad; 14) Rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio y dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea competente para ellos. Para tal efecto se presentarán los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe de gestión; y 15) Ejercer todas las facultades que directamente deleguen en ellos la Asamblea General de Accionistas y con las limitaciones previstas en los presentes estatutos. Parágrafo: El Representante Legal para asuntos laborales tendrá todas las facultades inherentes a representación legal en asuntos laborales, incluyendo pero sin limitarse a las siguientes: 1) Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad; facultad de recibir, pagar, desistir, sustituir, conciliar, oponerse, presentar excepciones y transigir en toda clase de juicios o acciones laborales que por ella o contra ella hayan de tramitarse ante cualesquiera cortes o tribunales, juzgados, dependencias, funciones o empleados de cualquiera de las ramas jurisdiccionales o administrativas del trabajo en la república de Colombia o de cualquiera de sus divisiones políticas, siguiendo al respecto la tramitación ordenada por la ley y para otorgar, para tales fines los poderes que estime convenientes. 2) Para la representación de que trata la presente delegación, se

entiende que el Representante Legal para asuntos laborales, tiene todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial, tales como las de recibir, pagar, desistir, transigir, confesar, presentar excepciones, conciliar litigios pendientes y sustituir y reasumir conforme a la legislación colombiana. 3) En consecuencia el Representante Legal para asuntos laborales queda plenamente facultado para notificarse de todas las providencias judiciales y administrativas en que sea parte interesada, demandante o demandada la sociedad o cualquiera de sus representantes legales o apoderados generales y contesta y formular interrogatorios en juicio o fuera de él comprometiendo válidamente a la sociedad.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 44 del 12 de diciembre de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de diciembre de 2019 con el No. 02535326 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente Principal	Andres Marulanda Escobar	C.C. No. 79779202
Representante Legal Para Asuntos Laborales	Mario Rodriguez Parra	C.C. No. 17071856

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Gerente	Daniel Rebolledo Delgado	C.C. No. 79144238

Por Acta No. 45 del 23 de enero de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 27 de enero de 2020 con el No. 02545706 del Libro IX, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de enero de 2024 Hora: 13:28:14
Recibo No. AA24104894
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2410489425EF2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Cuarto Suplente Del Gerente	Fabio Anibal Amaya Rey	C.C. No. 17164405

Por Acta No. 44 del 12 de diciembre de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de diciembre de 2019 con el No. 02535326 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del Gerente	Hortensio Castro Orozco	C.C. No. 19365916
Tercer Suplente Del Gerente	Ana Milena Lopera Rozo	C.C. No. 52501243

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 043 del 20 de agosto de 2019, de Asamblea General, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de septiembre de 2019 con el No. 02502618 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Luis Alberto Vallejo Leon	C.C. No. 80372308 T.P. No. 73608-T

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente	Olga Cortes Benavides	C.C. No. 51874672 T.P. No. 52086-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de enero de 2024 Hora: 13:28:14
Recibo No. AA24104894
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2410489425EF2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 674 del 27 de febrero de 2009 de la Notaría 23 de Bogotá D.C.	01280338 del 5 de marzo de 2009 del Libro IX
E. P. No. 2447 del 5 de agosto de 2010 de la Notaría 23 de Bogotá D.C.	01404266 del 6 de agosto de 2010 del Libro IX
E. P. No. 2865 del 8 de septiembre de 2010 de la Notaría 23 de Bogotá D.C.	01421007 del 12 de octubre de 2010 del Libro IX
E. P. No. 312 del 18 de febrero de 2015 de la Notaría 23 de Bogotá D.C.	01913394 del 20 de febrero de 2015 del Libro IX
E. P. No. 2401 del 21 de diciembre de 2016 de la Notaría 23 de Bogotá D.C.	02183901 del 8 de febrero de 2017 del Libro IX
Acta No. 39 del 26 de diciembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02410241 del 28 de diciembre de 2018 del Libro IX
Acta No. 041 del 15 de enero de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02416218 del 23 de enero de 2019 del Libro IX
Acta No. 44 del 12 de diciembre de 2019 de la Asamblea de Accionistas	02534865 del 19 de diciembre de 2019 del Libro IX
Acta No. 45 del 23 de enero de 2020 de la Asamblea de Accionistas	02545705 del 27 de enero de 2020 del Libro IX
Acta No. 057 del 21 de abril de 2023 de la Asamblea de Accionistas	02976951 del 16 de mayo de 2023 del Libro IX
Acta No. 058 del 9 de agosto de 2023 de la Asamblea de Accionistas	03013381 del 1 de septiembre de 2023 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 7111
Otras actividades Código CIIU: 7120, 7710

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 95.146.145.094
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 6 de marzo de 2008. Fecha de envío de información a Planeación : 1 de septiembre de 2023. SE HA NOTIFICADO A PLANEACION DISTRITAL LA CREACION DE LA PERSONA O

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 26 de enero de 2024 Hora: 13:28:14
Recibo No. AA24104894
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2410489425EF2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SOCIEDAD. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

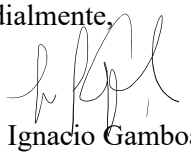
Señores
JUZGADO (52) CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. E. S. D.
Ref. Proceso verbal de nulidad de actos societarios y abuso del derecho de Ítaca Limitada en contra de Servicios Técnicos Ómicron Limitada (en adelante "STO") y otros.

Rad. 110013103003-2021-00091-00.

Asunto: Sustitución Poder Especial de INGETEC S.A.S.

JUAN IGNACIO GAMBOA URIBE, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con C.C. No. 80.418.981, abogado en ejercicio con T.P No. 81.400 del C.S. de la J., con correo electrónico: jigamboa@gclegal.co actuando en mi calidad de apoderado especial de INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S**.** sociedad comercial identificada con NIT 860.001.986-1, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por el Sr. Daniel Rebolledo Delgado identificado con la C.C. No. 79.144.238, por medio del presente escrito en los términos del artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, confiero poder especial amplio y suficiente SUSTITUYO el poder especial a mi conferido a favor de FELIPE ANDRÉS DÍAZ ALARCÓN, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con C.C. No. 1.020.777.058 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio con T.P. No. 277.796 del C.S. de la J., con correo electrónico: fadiaz@gclegal.co. En los mismos términos del poder a mi conferido,

Cordialmente,



Juan Ignacio Gamboa Uribe.
C.C. No. 80.418.981.
T.P. No. 81.400 del C.S. de la J.
Acepto,



Felipe Andrés Díaz Alarcón.

C.C. No. 1.020.777.058 de Bogotá D.C.
T.P. No. 277.796 del C.S. de la J.

Asunto:	Poder Especial INGETEC S.A.S. - Rad. 110013103003-2021-00091-00.
Fecha:	viernes, 26 de enero de 2024, 1:15:28 p.m. hora estándar de Colombia
De:	Felipe Andrés Díaz
Datos adjuntos:	14 PODER INGETEC.pdf

De: Contabilidad ING <conta-ing@ingetec.com.co>
Fecha: viernes, 26 de enero de 2024, 12:02 p.m.
Para: Daniel García <dgarcia@gclegal.co>, Juan Ignacio Gamboa <jigamboa@gclegal.co>
CC: Daniel Rebolledo Delgado <dreboll@ingetec.com.co>
Asunto: Poder Especial INGETEC S.A.S. - Rad. 110013103003-2021-00091-00.

Señores
JUZGADO (52) CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
E. S. D.

Ref. Proceso verbal de nulidad de actos societarios y abuso del derecho de Ítaca Limitada en contra de Servicios Técnicos Ómicron Limitada – En Liquidación (en adelante "STO") y otros.
Rad. 110013103003-2021-00091-00.

Asunto: Poder Especial INGETEC S.A.S.

Señores
JUZGADO (52) CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

E. S. D.

Ref. Proceso de nulidad de actos societarios y abuso del derecho de Ítaca Limitada en contra de Servicios Técnicos Ómicron Limitada (en adelante "STO") y otros.

Rad. 110013103003-2021-00091-00.

Asunto: Poder Especial de INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S

INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S**.** sociedad comercial identificada con NIT 860.001.986-1, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por el Sr. Daniel Rebolledo Delgado identificado con la C.C. No. 79.144.238, por medio del presente escrito en los términos del artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, confiero poder especial amplio y suficiente a:

1. DANIEL GARCÍA PIÑEROS, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con C.C. No. 79.781.110. abogado en ejercicio portador de la T.P. No. 93.651 del C.S. de la J. y correo electrónico dgarcia@gclegal.co; y/o

2. JUAN IGNACIO GAMBOA URIBE, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con C.C. No. 80.418.981, abogado en ejercicio con T.P No. 81.400 del C.S. de la J., con correo electrónico: jigamboa@gclegal.co.

Para que individual y/o conjuntamente me representen en el proceso judicial de la referencia. El Apoderado queda ampliamente facultados para realizar, individual y/o separadamente cualquier actuación necesaria para la representación de que trata este poder y quedan especialmente facultados, pero sin limitarse, a presentar nulidades procesales, presentar cualquier memorial, presentar cualquier solicitud, contestar la demanda, desistir, transar, allanarse, sustituir el poder, reasumir, recibir, y en general para realizar todas las gestiones del presente mandato.

Cordialmente,

INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S
NIT 860.001.986-1
Daniel Rebolledo Delgado

Representante legal.

Señores
JUZGADO (52) CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
E. S. D.

Ref. Proceso de nulidad de actos societarios y abuso del derecho de Ítaca Limitada en contra de Servicios Técnicos Ómicron Limitada (en adelante "STO") y otros.

Rad. 110013103003-2021-00091-00.

Asunto: Poder Especial de INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S

INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S. sociedad comercial identificada con NIT 860.001.986-1, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por el Sr. Daniel Rebolledo Delgado identificado con la C.C. No. 79.144.238, por medio del presente escrito en los términos del artículo 5 de la Ley 2213 de 2022, confiero poder especial amplio y suficiente a:

1. DANIEL GARCÍA PIÑEROS, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con C.C. No. 79.781.110. abogado en ejercicio portador de la T.P. No. 93.651 del C.S. de la J. y correo electrónico dgarcia@gclegal.co; y/o

2. JUAN IGNACIO GAMBOA URIBE, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con C.C. No. 80.418.981, abogado en ejercicio con T.P No. 81.400 del C.S. de la J., con correo electrónico: jigamboa@gclegal.co.

Para que individual y/o conjuntamente me representen en el proceso judicial de la referencia. El Apoderado queda ampliamente facultados para realizar, individual y/o separadamente cualquier actuación necesaria para la representación de que trata este poder y quedan especialmente facultados, pero sin limitarse, a presentar nulidades procesales, presentar cualquier memorial, presentar cualquier solicitud, contestar la demanda, desistir, transar, allanarse, sustituir el poder, reasumir, recibir, y en general para realizar todas las gestiones del presente mandato.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por Daniel REBOLLEDO DELGADO
Fecha: 2024.01.26 09:43:54 -05'00'

INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S
NIT 860.001.986-1
Daniel Rebolledo Delgado
Representante legal.

Acepto,

Daniel García Piñeros.
C.C. No. 79.781.110
T.P. No. 93.651 del C.S. de la J.

Acepto,

Juan Ignacio Gamboa Uribe.
C.C. No. 80.418.981.
T.P. No. 81.400 del C.S. de la J.

Nicolás Mauricio Varela

De: Contabilidad IyD <conta-iyd@ingetec.com.co>
Enviado el: lunes, 31 de julio de 2023 9:00 a. m.
Para: dgarcia@gclegal.co; jigamboa@gclegal.co
Asunto: <URG> PODER
Datos adjuntos: 4. Poder INGETEC I&D.pdf; CCB I&D SAS 04-07-2023 (1).pdf

Señores
JUZGADO (52) CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
E. S. D.

Ref. Proceso verbal de nulidad de actos societarios y abuso del derecho de Ítaca Limitada en contra de Servicios Técnicos Ómicron Limitada (en adelante "STO") y otros.

Rad. 110013103003-2021-00091-00.

Asunto: Poder Especial de INGETEC Ingeniería y Diseño S.A.S.

INGETEC Ingeniería y Diseño S.A.S., sociedad comercial, domiciliada en Bogotá D.C., identificada con NIT 900.206.480-2, representada legalmente por ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C. identificado con cédula de ciudadanía No. 79.779.202, manifiesto que en los términos del artículo 5 de la Ley 2213 de 2022 y el artículo 74 del Código General del Proceso, confiero poder especial amplio y suficiente a

1. *DANIEL GARCÍA PIÑEROS, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con C.C. No. 79.781.110. abogado en ejercicio portador de la T.P. No. 93.651 del C.S. de la J. y correo electrónico dgarcia@gclegal.co; y/o*

2. *JUAN IGNACIO GAMBOA URIBE, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con C.C. No. 80.418.981, abogado en ejercicio con T.P No. 81.400 del C.S. de la J., con correo electrónico: jigamboa@gclegal.co.*

Para que individual y/o conjuntamente me representen en el proceso judicial de la referencia. El Apoderado queda ampliamente facultados para realizar, individual y/o separadamente cualquier actuación necesaria para la representación de que trata este poder y quedan especialmente facultados, pero sin limitarse, a presentar nulidades procesales, presentar cualquier memorial, presentar cualquier solicitud, contestar la demanda, desistir, transar, allanarse, sustituir el poder, reasumir, recibir, y en general para realizar todas las gestiones encaminadas al cabal cumplimiento del presente mandato.

Adjunto el documento anunciado.

INGETEC Ingeniería y Diseño S.A.S.
NIT 900.206.480-2
Andrés Marulanda Escobar. Representante legal.

Señores
JUZGADO (52) CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
E. S. D.

Ref. Proceso verbal de nulidad de actos societarios y abuso del derecho de Ítaca Limitada en contra de Servicios Técnicos Ómicron Limitada (en adelante "STO") y otros.

Rad. 110013103003-2021-00091-00.

Asunto: Poder Especial de INGETEC Ingeniería y Diseño S.A.S.

INGETEC Ingeniería y Diseño S.A.S., sociedad comercial, domiciliada en Bogotá D.C., identificada con NIT 900.206.480-2, representada legalmente por ANDRES MARULANDA ESCOBAR, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C. identificado con cédula de ciudadanía No. 79.779.202, manifiesto que en los términos del artículo 5 de la Ley 2213 de 2022 y el artículo 74 del Código General del Proceso, confiero poder especial amplio y suficiente a:

1. DANIEL GARCÍA PIÑEROS, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con C.C. No. 79.781.110. abogado en ejercicio portador de la T.P. No. 93.651 del C.S. de la J. y correo electrónico dgarcia@gclegal.co; y/o

2. JUAN IGNACIO GAMBOA URIBE, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con C.C. No. 80.418.981, abogado en ejercicio con T.P No. 81.400 del C.S. de la J., con correo electrónico: jigamboa@gclegal.co.

Para que individual y/o conjuntamente me representen en el proceso judicial de la referencia. El Apoderado queda ampliamente facultados para realizar, individual y/o separadamente cualquier actuación necesaria para la representación de que trata este poder y quedan especialmente facultados, pero sin limitarse, a presentar nulidades procesales, presentar cualquier memorial, presentar cualquier solicitud, contestar la demanda, desistir, transar, allanarse, sustituir el poder, reasumir, recibir, y en general para realizar todas las gestiones encaminadas al cabal cumplimiento del presente mandato.

Cordialmente,



INGETEC Ingeniería y Diseño S.A.S. .
NIT 900.206.480-2
Andrés Marulanda Escobar. Representante legal.

Acepto,

Daniel García Piñeros.
C.C. No. 79.781.110
T.P. No. 93.651 del C.S. de la J.

Acepto,

Juan Ignacio Gamboa Uribe.
C.C. No. 80.418.981.
T.P. No. 81.400 del C.S. de la J.

Señores
JUZGADO (52) CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
E. S. D.

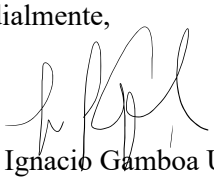
Ref. Proceso verbal de nulidad de actos societarios y abuso del derecho de Ítaca Limitada en contra de Servicios Técnicos Ómicron Limitada (en adelante "STO") y otros.

Rad. 110013103003-2021-00091-00.

Asunto: Poder Especial de INGETEC Ingeniería y Diseño S.A.S.

JUAN IGNACIO GAMBOA URIBE, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con C.C. No. 80.418.981, abogado en ejercicio con T.P No. 81.400 del C.S. de la J., con correo electrónico: jigamboa@gclegal.co actuando en mi calidad de apoderado especial de INGETEC INGENIERÍA Y DISEÑO S.A.S., sociedad comercial, domiciliada en Bogotá D.C., identificada con NIT 900.206.480-2, representada legalmente por ANDRES MARULANDA ESCOBAR, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C. identificado con cédula de ciudadanía No. 79.779.202, sustituyo el poder a mi conferido a favor de FELIPE ANDRÉS DÍAZ ALARCÓN, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con C.C. No. 1.020.777.058 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio con T.P. No. 277.796 del C.S. de la J., con correo electrónico: fadiaz@gclegal.co. En los mismos términos del poder a mi conferido,

Cordialmente,



Juan Ignacio Gamboa Uribe.
C.C. No. 80.418.981.
T.P. No. 81.400 del C.S. de la J.

Acepto,



Felipe Andrés Díaz Alarcón.
C.C. No. 1.020.777.058 de Bogotá D.C.
T.P. No. 277.796 del C.S. de la J.

<URG> PODER

Contabilidad IyD <conta-iyd@ingetec.com.co>

Lun 31/07/2023 9:00

Para:Daniel García <dgarcia@gclegal.co>;jigamboa@gclegal.co <jigamboa@gclegal.co>

2 archivos adjuntos (224 KB)

4. Poder INGETEC I&D.pdf; CCB I&D SAS 04-07-2023 (1).pdf;

Señores
JUZGADO (52) CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
E. S. D.

Ref. Proceso verbal de nulidad de actos societarios y abuso del derecho de Ítaca Limitada en contra de Servicios Técnicos Ómicron Limitada (en adelante "STO") y otros.

Rad. 110013103003-2021-00091-00.

Asunto: Poder Especial de INGETEC Ingeniería y Diseño S.A.S.

INGETEC Ingeniería y Diseño S.A.S., sociedad comercial, domiciliada en Bogotá D.C., identificada con NIT 900.206.480-2, representada legalmente por ANDRÉS MARULANDA ESCOBAR, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C. identificado con cédula de ciudadanía No. 79.779.202, manifiesto que en los términos del artículo 5 de la Ley 2213 de 2022 y el artículo 74 del Código General del Proceso, confiero poder especial amplio y suficiente a

1. *DANIEL GARCÍA PIÑEROS, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con C.C. No. 79.781.110. abogado en ejercicio portador de la T.P. No. 93.651 del C.S. de la J. y correo electrónico dgarcia@gclegal.co; y/o*

2. *JUAN IGNACIO GAMBOA URIBE, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con C.C. No. 80.418.981, abogado en ejercicio con T.P No. 81.400 del C.S. de la J., con correo electrónico: jigamboa@gclegal.co.*

Para que individual y/o conjuntamente me representen en el proceso judicial de la referencia. El Apoderado queda ampliamente facultados para realizar, individual y/o separadamente cualquier actuación necesaria para la representación de que trata este poder y quedan especialmente facultados, pero sin limitarse, a presentar nulidades procesales, presentar cualquier memorial, presentar cualquier solicitud, contestar la demanda, desistir, transar, allanarse, sustituir el poder, reasumir, recibir, y en general para realizar todas las gestiones encaminadas al cabal cumplimiento del presente mandato.

Adjunto el documento anunciado.

INGETEC Ingeniería y Diseño S.A.S.
NIT 900.206.480-2
Andrés Marulanda Escobar. Representante legal.

2021-0091-00. NULIDAD PROCESAL POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN INGETEC e INGETEC I&D.

Felipe Andrés Díaz <fadiaz@gclegal.co>

Vie 26/01/2024 13:34

Para:Juzgado 52 Civil Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <j52cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC:Daniel García <dgarcia@gclegal.co>;Juan Ignacio Gamboa <jigamboa@gclegal.co>;Pedro Hernán Montaño <pmontano@gclegal.co>;David Esteban Arce Pinto <darce@gclegal.co>;Oscar Rosales Nieto <orosales@dlapipermb.com>

8 archivos adjuntos (2 MB)

2021-0091-00 Nulidad Procesal INGETEC e INGETEC I&D.pdf; -URG- PODER[92][100].eml; Sustitución INGETEC I&D[24].pdf; Poder Ingetec.pdf; PODER Ingetec.pdf; SUSTITUCION INGETEC SAS.pdf; SA2410489425EF2.pdf; SA2410489448298.pdf;

Señores
JUZGADO (52) CINCUENTA Y DOS CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
E. S. D.

Referencia: Proceso de nulidad de actos societarios y abuso del derecho de voto iniciado por Ítaca Ltda. – en liquidación (en adelante "Ítaca") en contra de Servicios Técnicos Ómicron Ltda. – en liquidación (en adelante "STO") y otros.

Radicado: 110013103003-2021-00091-00.

Asunto: Incidente de nulidad procesal por indebida notificación. – Art. 133 del CGP.

FELIPE ANDRÉS DÍAZ ALARCÓN, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mí firma, obrando en mi condición de apoderado especial sustituto de: (i) **INGETEC INGENIERÍA Y DISEÑO S.A.S.**, sociedad comercial, domiciliada en Bogotá D.C., identificada con NIT 900.206.480-2, representada legalmente por el Sr. Andrés Marulanda Escobar, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C. identificado con C.C. No. 79.779.202, y (ii) **INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELÉCTRICOS S.A.S.** sociedad comercial identificada con NIT 860.001.986-1, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por el Sr. Alberto María Marulanda Posada, identificado con la C.C. No. 19.063.997, conforme al poder especial a mi otorgado y el certificado de existencia y representación legal que aporto me dirijo respetuosamente a su Despacho, para elevar **SOLICITUD DE NULIDAD PROCESAL** en los términos del artículo 133 del Código General del Proceso, ante la indebida notificación por parte del apoderado de la sociedad actora, conforme memorial adjunto.

Copiamos al apoderado reconocido de la contraparte.

Saludos,

Felipe Andrés Díaz Alarcón
Asociado Senior – Senior Associate
fadiaz@gclegal.co

+57 (601) 390 2217
Carrera 9 No. 80-45 Piso 4
Bogotá, D.C. - Colombia
www.gclegal.co

Este mensaje o sus anexos pueden contener información confidencial.
This message and any attachments may contain confidential information.

GAMBOA, GARCÍA & CARDONA
—ABOGADOS—

Ranked Firm:

IFLR1000 LEADERS LEAGUE The LEGAL 500